



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.**

FACULTAD DE DERECHO  
DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL  
DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS (DEA).

**“Contratos de entretenimiento y tiempo libre: El  
contrato de viaje combinado con actividades  
deportivas y de riesgo”.**

**D. VÍCTOR PÉREZ ABELLA.**

**DIRECTORA:  
DRA. ALICIA REAL PÉREZ.  
Profa. Titular de Derecho Civil.**

**Madrid.**

**Septiembre 2012.**



## **INDICE.**

### **Páginas.**

<b>INTRODUCCIÓN.</b>	9.
<b>PARTE GENERAL.</b>	15.
<b><u>I. El turismo como objeto de regulación jurídica.</u></b>	15.
<b><i>1. La noción del turismo como primera cuestión.</i></b>	15.
1.1. Elementos de la actividad turística.....	17.
1.1.1. El desplazamiento y la estancia de las personas fuera de su entorno habitual.....	18.
1.1.2. La motivación lúdica o vacacional.....	20.
1.2. Concepto de Derecho turístico.....	21.
1.3. Contenido del Derecho turístico.....	22.
1.4. El Derecho privado en el Derecho turístico.....	23.
<b><i>2. Marco normativo del turismo.</i></b>	24.
2.1. Normativa comunitaria.....	24.
2.1.1. Política comunitaria sobre el turismo.....	25.
2.1.2. Reglamentos y Directivas aplicables al turismo.....	27.
2.1.2.1. Notas sobre la eficacia de Reglamentos y Directivas.....	27.
2.1.2.2. Reglamentos.....	27.
2.1.2.3. Directivas.....	29.
2.1.2.4. El Derecho internacional privado en la contratación turística.....	30.
2.2. Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.....	33.
2.2.1. Competencia estatal sobre el turismo.....	33.
2.2.1.1. Normativa turística estatal.....	35.
2.2.1.2. La competencia exclusiva del Estado en el Derecho civil y “las bases de las obligaciones	

contractuales”.....	38.
2.2.2. Competencia autonómica sobre el turismo y su normativa....	41.
<b>II. Nociones generales sobre la contratación turística.</b> .....	<b>43.</b>
<b>1. Contratos turísticos.</b> .....	<b>43.</b>
1.1. Concepto y notas características. ....	43.
1.2. Clasificación de los contratos turísticos. ....	45.
1.3. Las condiciones generales de la contratación en el sector turístico. ...	46.
<b>2. Sujetos, objeto y causa (vid. Infra. I. y I.5 de la parte especial).</b> .....	<b>48.</b>
2.1. Empresas turísticas. ....	49.
2.2. Los consumidores o usuarios turísticos, “el turista”. ....	51.
<b>3. La protección del turista en los contratos turísticos dentro del     ámbito jurídico privado.</b> .....	<b>51.</b>
<b>4. La contratación electrónica de servicios turísticos.</b> .....	<b>57.</b>
<b>PARTE ESPECIAL.</b> .....	<b>61.</b>
<b>I. El contrato de viaje combinado.</b> .....	<b>61.</b>
<b>1. Acepciones y concepto del contrato de viaje combinado.</b> .....	<b>61.</b>
<b>2. Normativa reguladora del viaje combinado.</b> .....	<b>64.</b>
<b>3. Naturaleza jurídica y características del contrato de viaje combinado.</b> ....	<b>65.</b>
3.1. La causa dentro del contrato de viaje combinado. ....	69.
3.2. Características del contrato de viaje combinado. ....	73.
<b>4. Clases de viaje combinado.</b> .....	<b>77.</b>
<b>5. Elementos del contrato de viaje combinado.</b> .....	<b>78.</b>
5.1. Elementos personales del contrato de viaje combinado. ....	78.
5.1.1. Las agencias de viajes. ....	78.
5.1.2. El consumidor o turista como contratante principal, el “beneficiario” y “cesionario”. ....	81.
5.2. Elementos objetivos del contrato de viaje combinado. ....	84.
5.2.1. Las diversas prestaciones del viaje combinado. ....	84.
5.2.2. El precio. ....	87.

5.3. Causa (Vid. Supra. I.3.1). ....	88.
5.4. El perfeccionamiento y la forma del contrato de viaje combinado. ...	88.
5.4.1. El programa o folleto informativo del viaje combinado. ...	88.
5.4.2. La forma del contrato de viaje combinado. ....	93.
<b>6. Los derechos y obligaciones de las partes dentro del contrato de viaje combinado. ....</b>	<b>95.</b>
6.1. Obligaciones de las agencias de viaje. ....	95.
6.2. Derechos y obligaciones del consumidor o turista. ....	97.
<b>7. Modificación del contrato de viaje combinado. ....</b>	<b>101.</b>
7.1. Modificación de los elementos esenciales del contrato de viaje combinado. ....	101.
7.2. La revisión de precios en el contrato de viaje combinado. ....	103.
<b>8. Extinción y resolución del contrato de viaje combinado. ....</b>	<b>105.</b>
8.1. La resolución del contrato de viaje combinado por causa imputable al organizador o la cancelación del viaje. ....	105.
8.2. Resolución del contrato de viaje combinado por el consumidor o turista. ....	108.
8.3. El Incumplimiento de las prestaciones en el contrato de viaje combinado. ....	112.
<b>9. La responsabilidad en el contrato de viaje combinado. ....</b>	<b>116.</b>
9.1. La responsabilidad contractual de los organizadores y detallistas en el viaje combinado. ....	117.
9.2. La responsabilidad solidaria del organizador y detallista en el contrato de viaje combinado. ....	119.
9.3. Exoneración de responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado y la prohibición de insertar cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad. ....	120.
9.4. Los daños que sufre el consumidor o turista por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado. ....	124.
9.5. La garantía de responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado. ....	126.
9.6. La prescripción de acciones en el contrato de viaje combinado. ....	127.
<b><u>II. Contrato de viaje combinado con actividades deportivas y de riesgo. ...</u></b>	<b>130.</b>

<b>1. Consideraciones previas.</b>	130.
<b>2. Actividades deportivas en el sector turístico.</b>	131.
<b>3. El turismo activo.</b>	132.
3.1. Concepto de “turismo activo” y su regulación en la legislación autonómica.	132.
3.2. Actividades deportivas que integran el turismo activo.	135.
3.3. Las empresas de turismo activo.	136.
<b>4. La relación jurídica de actividades deportivas y de riesgo.</b>	137.
4.1. Ideas y concepto.	138.
4.2. Características del contrato.	139.
4.3. Elementos del contrato.	142.
4.3.1. El objeto del contrato.	142.
4.3.2. La causa del contrato.	145.
4.3.3 La forma del contrato.	148.
4.4. Elementos personales.	149.
4.5. Los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.	151.
4.6. La extinción del contrato. En especial, la resolución de la relación contractual por la existencia de un incumplimiento grave por cualquiera de las dos partes.	152.
4.7. La protección del deportista por la contratación de un servicio deportivo conforme al TRLGDCU.	156.
4.8. La prestación de servicios deportivos dentro de un viaje combinado.	159.
<b>5. La responsabilidad civil en la práctica de los deportes.</b>	159.
5.1. Responsabilidad civil contractual y extracontractual en las actividades deportivas.	160.
5.2. El riesgo en las actividades deportivas. La teoría de la asunción del riesgo como régimen general en la práctica libre del deporte.	164.
5.3. La responsabilidad civil del prestador de servicios o actividades deportivas.	171.
5.3.1. El aumento del riesgo asumido por el deportista.	172.
5.3.2. Criterios de imputación de responsabilidad civil a los prestadores de servicios deportivos.	174.
5.3.3. El nexo de causalidad del daño.	178.
A) La causa del daño.	178.

B) La aplicación de la responsabilidad objetiva. ....	179.
5.3.4. Supuestos de no imputación de responsabilidad civil al prestador de servicios deportivos. ....	182.
<b>6. Responsabilidad civil en los viajes combinados en los que se incluye una actividad deportiva y de riesgo. ....</b>	<b>184.</b>
<b>CONCLUSIONES. ....</b>	<b>197.</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. ....</b>	<b>207.</b>
<b>1. Libros. ....</b>	<b>207.</b>
<b>2. Artículos de revistas. ....</b>	<b>214.</b>
<b>JURISPRUDENCIA CONSULTADA. ....</b>	<b>219.</b>
<b>1. Tribunal Constitucional. ....</b>	<b>219.</b>
<b>2. Tribunal Supremo. ....</b>	<b>220.</b>
<b>3. Audiencias Provinciales. ....</b>	<b>221.</b>





## **INTRODUCCIÓN.**

El turismo como una actividad de esparcimiento de tiempo libre y de ocio, tiene una importante relevancia en la vida normal y cotidiana de las personas, por lo que un estudio y análisis jurídico de las relaciones contractuales en el ámbito del sector turístico es trascendental. Las personas que dedican su tiempo libre a disfrutar de unas vacaciones, ya no solo buscan destinos turísticos de sol y playa, sino que además buscan la manera de dedicarlo con otras actividades de ocio, como son la entrada a un espectáculo o concierto, un partido de fútbol, la práctica de algunos deportes, excursiones en la naturaleza y demás actividades.

Partiendo de la idea de que hacer turismo es realizar una actividad de ocio y entretenimiento, en el cual intervienen personas físicas y jurídicas para su desarrollo y práctica. El Derecho regula mediante reglamentaciones, preceptos y principios todo lo relacionado con el turismo, dando así a una rama llamada Derecho turístico, que comprende áreas de Derecho Privado y Público.

En la presente investigación, se estudiará el turismo desde una perspectiva del Derecho Privado, dado a las relaciones jurídico-privadas por la que los particulares celebran contratos con los empresarios que promueven y ofertan los viajes o actividades turísticas. Dentro de ellas presentamos especial atención a la regulación de la situación jurídica del viajero turista que realiza actividades deportivas o de riesgo

En la Unión Europea, el turismo es un área muy importante a desarrollar y regular, dado a que representa un gran impacto económico en los diferentes países que la componen, por lo que la creación y aplicación de Reglamentos y Directivas a nivel europeo, tienen una relevancia significativa para las personas o turistas que decidan realizar actividades turísticas dentro de sus fronteras, o incluso fuera de ellas, para así contar con una protección jurídica eficiente y de manera casi uniforme en todos los países miembros de la Unión Europea.

Para España el turismo es un área de importante relevancia económica, dado a que reciben al año miles de turistas de todas las partes del mundo. En consecuencia, es necesaria una adecuada regulación jurídica para la protección de los turistas. Por ello en la investigación, se mencionarán y desarrollarán las distintas normativas estatales y autonómicas vigentes, relacionadas con la práctica de actividades con fines turísticos,

centrándonos más en las que “el turista” como persona física o consumidor, contrata los que se conoce como “viaje combinado”.

Regularmente el consumidor o turista acude a las agencias de viajes para contratar transporte, también para realizar alguna reserva de hotel u hospedaje o para que le elaboren un programa turístico a medida, etc. El contrato de viaje combinado es un tipo de contrato turístico en el que se contratan varios servicios o elementos (alojamiento, transporte y otros servicios) para combinarlos como un todo, por el que el turista se obliga a pagarlo a un precio global. Esta modalidad de contrato turístico es muy atractiva para los turistas, porque pueden existir diferentes tipos de viajes combinados, tal es el caso de los viajes combinados con actividades deportivas y de riesgo, el cual va dirigido a personas que buscan una experiencia diferente en sus vacaciones pudiendo disfrutar de diversas actividades deportivas afines a sus intereses personales.

El turismo al ser considerado como una actividad de desplazamiento de personas fuera de su entorno habitual, se concretan nuevas relaciones jurídico-privadas para la realización de diferentes actividades turísticas, dando así existencia a los contratos turísticos. Durante el proceso de la investigación, se especificará el concepto, clasificación, elementos y características, que tienen este tipo de contratos.

De los diferentes tipos o clases de contratos turísticos existentes en el tráfico jurídico, se expone y desarrolla en la investigación el contrato de viaje combinado con actividades deportivas y de riesgo. Porque actualmente se ofertan atractivos y novedosos viajes combinados que atraen al turista para experimentar diferentes experiencias y emociones de adrenalina o de riesgo en sus vacaciones, por ello es de gran relevancia un estudio jurídico de la contratación de dichos servicios dentro del propio viaje combinado, para que se pueda obtener un amplio análisis sobre las consecuencias contractuales que conlleva practicar de actividades deportivas. Sin embargo, antes del estudio y análisis de las actividades deportivas contratadas como un elemento más que compone el viaje combinado, se abordará de forma amplia y detallada en el contrato de viaje combinado.

Es importante señalar que en la mayoría de los contratos turísticos y en muchas ocasiones el contrato de viaje combinado, se consideran como contratos de adhesión, a lo que el turista no le queda otro remedio que la aceptación o no de las distintas cláusulas y características de los contratos, dado que los contratos son redactados los

contratos unilateralmente por las “empresas turísticas”. Al ser considerados como contratos de adhesión contienen unas “condiciones generales”, por lo que se especificará qué características, elementos y derechos tienen los turistas, en el momento de la celebración del contrato turístico en general.

Ante la nueva era de servicios electrónicos, es muy común o habitual que los distintos tipos de contratos turísticos sean ofertados, promocionados y contratados vía Internet. Por lo que se hablará de una manera muy general y objetiva de la regulación vigente, de los elementos, características, así como también de los derechos y obligaciones de los sujetos que intervienen en la celebración de la contratación electrónica de servicios turísticos, es decir, aquellos que se celebren y/o formalicen a través del Internet. Ello evidentemente, en cuanto afecten a servicios turísticos en los que se presten servicios deportivos o de riesgo.

La regulación del contrato de viaje combinado, se inició a nivel de la Unión Europea con la aprobación de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados. En España en un principio se adapta dicha Directiva al ordenamiento español en la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados, actualmente se encuentra derogada. Ante nuevas Directivas y recomendaciones por parte de la Unión Europea en materia de consumidores y con la derogación de la Ley de viajes combinados, se aprobó el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que es el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la cual incluye un capítulo específico sobre la regulación del contrato de viaje combinado, otorgando al turista una mayor protección turística al momento de celebrar este tipo de contratos..

Con el soporte de la normativa, doctrina y jurisprudencia que existe sobre el contrato de viaje combinado, se obtendrá un estudio del contrato de viaje combinado en toda su esfera jurídica. Por eso en la investigación se intenta detallar de manera clara y puntual la naturaleza jurídica del contrato con sus características, los diversos tipos de viajes combinados, los elementos del contrato, los derechos y obligaciones de las partes, la modificación, extinción y resolución del contrato, y por último, el tema sobre la responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado. Todo ello en cuanto la prestación de actividades deportivas o de riesgo, tiene lugar, principalmente, dentro del viaje combinado.

Dentro del análisis del contrato de viaje combinado, se profundiza en uno de los elementos esenciales de todo contrato “la causa”. De la definición del contrato de viaje combinado que nos establece la normativa vigente encontramos la “causa objetiva”, pero será de gran importancia para la presente investigación la consideración y estudio de las “causas subjetivas” que influyan de manera directa y específica en el momento de contratar un viaje combinado y más aún cuando se quieran realizar o practicar actividades deportivas y de riesgo por parte del turista, siendo eso la motivación para la celebración del contrato de viaje combinado, siempre que ambas partes estén conforme.

Durante la investigación del contrato de viaje combinado con actividades deportivas y de riesgo, será fundamental abordar y desarrollar el tema sobre el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios contratados, en especial los de actividades deportivas. Es por ello que dentro de este trabajo se incluye un estudio sobre la responsabilidad civil en la práctica de las actividades deportivas e incluso las consideradas como de riesgo. Con ello se explicará de forma concreta la motivación o la búsqueda de un riesgo en el deporte, que tipo de responsabilidad civil es de aplicación (contractual o extracontractual), las diversas doctrinas sobre los riesgos de las actividades deportivas, la responsabilidad de los prestadores de servicios, los criterios de imputación de responsabilidad, etc.

Dentro del abanico de los llamados “otros servicios” se puede solicitar y contratar la realización de una actividad deportiva o de riesgo dentro del contrato de viaje combinado. Por ello es de gran importancia el estudio y desarrollo de la naturaleza jurídica de la contratación de los servicios deportivos y de riesgo. En la presente investigación se elabora y aborda un análisis jurídico independiente de los elementos, derechos, obligaciones y legislación aplicable que regulan esta clase de relaciones contractuales no reguladas, aunque posteriormente se integren o formen parte como elemento esencial de un viaje combinado.

Por último, en la investigación se realiza un estudio, análisis y comentarios a la jurisprudencia existente sobre responsabilidad civil en los viajes combinados que tengan como un elemento integrante la práctica y desarrollo de una actividad deportiva y de riesgo, en el que se presenten daños a consecuencia del cumplimiento o incumplimiento defectuoso de las obligaciones asumidas en el contrato. Para que así, se pueda construir mediante la lectura de la presente investigación, un análisis y juicio jurídico sobre todos los elementos, derechos, obligaciones, legislación y tipo de

responsabilidad civil que componen a esta modalidad atípica del contrato de viaje combinado que contengan como elemento la contratación de actividades deportivas o de riesgo.



## **PARTE GENERAL.**

### **I. EL TURISMO COMO OBJETO DE REGULACIÓN JURÍDICA.**

#### **1. LA NOCIÓN DEL TURISMO COMO PRIMERA CUESTIÓN.**

En España, el turismo es calificado de gran importancia, dado al fuerte impacto económico que recibe, es por ello que se debe proporcionar un servicio de calidad, excelencia y protección. La palabra “turismo”, según el Diccionario de la Real Academia Española proviene del vocablo sajón *tourism*, que significa “afición a viajar por placer” así como la “organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes”.<sup>1</sup>

El turismo es un fenómeno social que afecta a amplios estratos de la población, que deciden hacer un viaje a un lugar distinto de su residencia habitual, a lo que ha dado como resultado una nueva actividad económica que necesita de una regulación adecuada.

Es de destacar una definición dada en 1942, por los investigadores suizos HUNZIKER Y KRAPP, que tuvo mucha aceptación y es considerada como clásica, para quienes el turismo “es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa”. Esta definición contiene tres elementos: a) las motivaciones del desplazamiento; b) la distancia recorrida y; c) la duración del desplazamiento.<sup>2</sup>

El legislador español ofreció una definición de turismo en el Preámbulo de la Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre competencia en materia turística, al entenderlo como “el movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual de trabajo o residencia

---

<sup>1</sup> Diccionario de la Real Academia Española, 21ª. Ed., Madrid, p. 2041. Además, el Diccionario Jurídico Espasa, Madrid, 2007, p. 1401, define al turismo como: “El movimiento y estancia de personas fuera de su lugar habitual de trabajo o residencia por motivos diferentes de los profesionales habituales.”.

<sup>2</sup> PÉREZ FERNANDEZ, José Manuel (Dir.): *Derecho público del turismo*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, p. 24.; Así también, ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PÉREZ GUERRA, Raúl: *La regulación jurídica del turismo en España*, Universidad de Almería, Almería, 1998, p. 27. Es importante señalar que la definición a la que llegaron los investigadores suizos, se precisó por los avances realizados por la Escuela Berlinesa, los cuales dieron un primer pasó en el concepto del turismo, así FERNANDEZ RODRIGUEZ, Carmen: *Derecho administrativo del turismo*, Marcial Pons, 4ª Ed., Madrid, 2007, p. 31.

por motivos diferentes de los profesionales habituales en quien los realiza”.<sup>3</sup> Sin embargo, el concepto de turismo establecido por el legislador era considerado muy amplio, dado a que no se pone un límite por razón del tiempo o duración del viaje o estancia, con la única exigencia de que se realice un desplazamiento respecto del lugar habitual de trabajo o residencia.<sup>4</sup>

En la normativa posterior, el legislador español renuncia a ofrecer un concepto general y abstracto de turismo, así como sucede en el Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprobó el Estatuto ordenador de las empresas y actividades turísticas privadas, por el que se limita a proporcionar una regulación y definición específica sobre las modalidades de empresas o actividades turísticas privadas, pero sin dar una definición general del turismo.<sup>5</sup>

Con estas ideas, se puede decir que el turismo son las actividades relacionadas con el desplazamiento y la estancia de personas, en lugares diferentes a los en los que habitualmente trabajen o residan, siempre que la motivación de ese desplazamiento y estancia temporal no sea de índole profesional o laboral.

Cuando hablamos de turismo no solo nos referimos al hecho de vacacionar fuera de nuestro domicilio o residencia habitual, sino que se puede presentar otro tipo de turismo como es el de negocios, de congresos, cultural, de masas, deportivo o actividades de riesgo, etc. Así, la finalidad de las personas de vacacionar, no es el único elemento definitorio de la actividad turística, ya que el turismo tiene un abanico de actividades que pueden realizar las personas que viajan fuera de su entorno habitual, independientemente de cuáles sean sus motivaciones (ocio, trabajo, etc.).

---

<sup>3</sup> PÉREZ FERNANDEZ, José Manuel (Dir.): *Op. cit.*, p. 25, expone que conforme a la definición formulada en el Preámbulo de la Ley 48/1963, de 8 de julio, “se distinguen tres elementos constitutivos de la esencia del fenómeno turístico: a) un elemento de movilidad, por cuanto el turismo supone el movimiento o desplazamiento de personas por lugares diferentes al de su residencia habitual; b) un elemento de temporalidad, al implicar la estancia de las personas fuera del lugar de trabajo o residencia habitual y; c) un elemento de intencionalidad, en la medida en que dicho desplazamiento y estancia ha de obedecer a motivos diferentes de los profesionales habituales, esto es, ha de responder a motivos lúdicos, culturales, etc.”.

<sup>4</sup> Así, ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PEREZ GUERRA, Raúl: *Op. cit.*, p. 29, señala que sobre las motivaciones del viaje: “se excluyen los desplazamientos por motivos profesionales habituales.”; también, FERNANDEZ RODRIGUEZ, Carmen: *Op. cit.*, p. 32.

<sup>5</sup> Del mismo modo PÉREZ FERNANDEZ, José Manuel (Dir.): *Op. cit.*, p. 26.



En el turismo encontramos dos elementos subjetivos principales. En primer lugar y de manera muy general el turista, es la persona que hace turismo, es decir la que viaja para tomar unas vacaciones y realizar actividades de recreo o de ocio. En segundo lugar las empresas turísticas, se puede decir que son aquellas empresas concebidas y orientadas esencialmente hacia el turismo.<sup>6</sup>

Los turistas demandan a las empresas una serie de servicios turísticos para satisfacer sus necesidades de hacer turismo. Dentro del sector turístico, existen una serie de actividades básicas como son el alojamiento, el transporte, la intermediación o la restauración, en la medida en que los servicios característicos de cada uno de ellos (hospedaje, organización y venta de viajes y estancias, reservas de plazas de alojamiento o de transporte, contrato de viaje combinado, etc.). Y por otro lado tenemos la “oferta turística complementaria” o “actividad turística complementaria”, por ejemplo los conocidos como “servicios sueltos”, lo cuales al no tener una normativa especial, serán reguladas por los preceptos generales en materia de obligaciones y contratos, y en su caso, por la de defensa de consumidores y usuarios.<sup>7</sup>

Por último, de las diversas reuniones internacionales se han originado distintas concepciones de turismo, entre las que se destacan, el Convenio de la ONU, New York, 1954; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre turismo y los viajes internacionales, Roma, 1963; la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, 1968; la Declaración de la Haya, 1989; la Conferencia Internacional sobre Estadísticas de los Viajes y del Turismo, Canadá, 1991.<sup>8</sup>

## **1.1 Elementos de la actividad turística.**

---

<sup>6</sup> Generalmente los sujetos que intervienen en la contratación turística, son el “turista” y las “empresas turísticas”, más adelante se explicara las partes que intervienen en la contratación turística, véase en la Parte General, capítulo II. 2 “Sujetos, objeto y causa”.

<sup>7</sup> AURIOLES MARTÍN, Adolfo: *Introducción al Derecho turístico: Derecho Privado del Turismo*, Tecnos, 2ª. Ed., Madrid, 2005, pp.26-27.

<sup>8</sup> Sobre la última Conferencia Internacional de Ottawa, Canadá, 1991, se estableció una definición de turismo que supera la noción tradicional limitada al mercado de vacaciones. Y sobre las bases sentadas por la conferencia anterior, la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas, de marzo de 1993, se adoptaron una series de “Recomendaciones sobre Estadística de Turismo”, en las que se recoge el concepto y los distintos tipos de turismo, de este modo, se concluye que el turismo comprende: “el conjunto de actividades desplegadas por las personas durante su viaje y su estancia en un lugar situado fuera de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos.”, PÉREZ FERNANDEZ, José Manuel (Dir.): *Op. cit.*, p. 27.

### 1.1.1. El desplazamiento y la estancia de las personas fuera de su entorno habitual.

El turismo es una actividad integrada por servicios turísticos prestados a las personas en sus desplazamientos y estancias fuera de los lugares en los que habitualmente residen. En consecuencia, el desplazamiento de las personas debe de ser fuera de su domicilio real, para que así se considere que la persona está realizando una actividad turística.<sup>9</sup> En el ordenamiento jurídico no se ofrece una definición única de domicilio, sino que puede hablarse de domicilio civil, fiscal, etc.<sup>10</sup>

Debemos entender que la residencia es la existencia o permanencia, más o menos continuada, de una persona en un punto del espacio, y en sentido jurídico, la existencia del sujeto del derecho en un lugar determinado. La idea de residencia está íntimamente ligada con la de domicilio, dado que es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones, constituyendo la sede jurídica y legal de la persona, por lo que recibe la denominación de domicilio o domicilio civil. Por lo tanto la residencia tiene un sentido genérico y el domicilio un sentido más concreto y específico de residencia fija o estable, es por ello que el artículo 40 del Código Civil habla del domicilio como la residencia habitual de la persona.<sup>11</sup>

ALBALADEJO establece que la ley puede considerar sede de la persona un sitio a unos efectos o para unos asuntos, y otro para otros, de lo cual se puede distinguir: a) el domicilio general, que es el lugar que la ley estima sede de la persona para la generalidad de las cosas; y b) Los domicilios especiales, que son los diversos lugares que la ley estima sedes de la persona para ciertos asuntos solamente (p. Ej., domicilio fiscal, que rige el pago de impuestos; domicilio procesal, que rige a efectos de competencia de los Tribunales; domicilio mercantil, que es el de los comerciantes, en

---

<sup>9</sup> El domicilio real se entiende o comprende como la residencia habitual, así CASTAN TOBEÑAS, José: *Derecho civil común y foral, Tomo I, introducción y parte general, Vol. 2*, Reus, 15ª Ed., Madrid, 2007, p. 141; DIEZ PICAZO, Luis: *Sistema de Derecho civil, Vol. I*, Tecnos, D.L., 11ª Ed., 4ª reimp., Madrid, 2010, p. 271.; LACRUZ BERDEJO, José Luis: *Elementos de Derecho civil, parte general, Vol. II*, Dykinson, 6ª Ed., Madrid, 2010, pp. 217-218; ALBALADEJO, Manuel: *Derecho Civil I, Introducción y Parte General*, Edisofer, 18ª Ed., Madrid, 2009, p. 316.

<sup>10</sup> En el Código Civil el artículo 40 dice: “Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil...”; y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el artículo 48 establece lo que es el “domicilio fiscal”.

<sup>11</sup> Así, CASTAN TOBEÑAS, José: *Op. cit.*, p. 138.

lo que concierne a los actos y contratos mercantiles; domicilio administrativo, que es el que rige a tales efectos; etc.).<sup>12</sup>

Al entender que el domicilio real es la residencia habitual de las persona, es importante señalar que el domicilio contiene dos elementos constitutivos que son: a) El hecho de residir en el lugar (elemento material, *corpus*; y b) El propósito o intención de la persona de hacerlo de modo permanente (elemento espiritual, *animus*).<sup>13</sup> Con estos elementos se construye el concepto general del domicilio, pero puede ser modificado por una necesidad jurídica o por la voluntad de las personas en determinados actos, por lo que da como consecuencia diversas clases de domicilio, como el domicilio de las personas casadas, el domicilio del sometido a patria potestad, domicilio de los diplomáticos, de los comerciantes, de sociedad, etc.

También en la constitución en el artículo 18.2 se ocupa del domicilio, en cuanto a su inviolabilidad, en el que el Tribunal Constitucional ha extendido la inviolabilidad del domicilio a las habitaciones de los establecimientos turísticos de alojamiento hotelero, pues el Tribunal Constitucional caracteriza el domicilio de la persona física como un lugar apto para ser destinado específicamente al desarrollo de la vida privada de aquélla, por tratarse del espacio donde el individuo vive, sin estar sujeto necesariamente a los usos y conexiones sociales y ejerce su libertad mas íntima.<sup>14</sup>

En el turismo el desplazamiento de las personas de su domicilio real es un elemento constitutivo de las actividades turísticas, aunque no se indica una distancia mínima sobre el desplazamiento para considerar que estamos ante un servicio turístico, bien podría resultar indicativo que los seguros de asistencia en viaje (seguros turísticos) suelen incluir una franquicia por la cual no quedan cubiertos los daños producidos en menos de treinta kilómetros del domicilio real del turista.<sup>15</sup> Además, que las personas

---

<sup>12</sup> ALBALADEJO, Manuel: *Op. cit.*, pp. 315-316. En la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el artículo 48 establece lo que es el “domicilio fiscal”.

<sup>13</sup> CASTAN TOBEÑAS, José: *Op. cit.*, p. 139-141; ALBALADEJO, Manuel: *Op. cit.*, pp. 316-320; DIEZ PICAZO, Luis: *Op. cit.*, p. 271.

<sup>14</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 10/2002, de 17 de enero (westlaw, RTC 2002\10), “Derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio... F.D. 8., las habitaciones de hoteles pueden constituir domicilio de los huéspedes...”; Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 209/2007, de 24 de septiembre (westlaw RTC 2007\209), F.D. 2.; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 719/2009, de 16 de noviembre (westlaw RJ 2010\660), F.D. 5.

<sup>15</sup> MARTÍNEZ SANZ, Fernando: “El seguro de asistencia en viaje”, en GARCIA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dirs.), *Lecciones de Derecho de Turismo* de, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 360.

que realicen actividades turísticas, su habitación de hotel donde se encuentren hospedados tendrán las características de un domicilio, por lo que tendrán la protección de la inviolabilidad conforme a la constitución.

### **1.1.2. La motivación lúdica o vacacional.**

Como antes hemos indicado, en el ámbito turístico se encuentra una extendida clasificación de turismo: de sol y playa, rural, de salud, religioso, cultural, deportivo, activo, etc. Todos ellos, en definitiva son diversas modalidades que van surgiendo de manera novedosa y mientras tanto otras se desarrollan con características nuevas para no perderlas. Además, la idea de que una persona que realiza una actividad turística (ya sea en cualquier rama de las antes mencionadas), siempre busca la calidad, la comodidad, el confort e incluso el lujo en las prestaciones de servicios.

En la actualidad, tomar vacaciones o realizar un viaje por puro placer o para descansar es una práctica muy valorada socialmente. Solo así puede explicarse que el sector del ordenamiento jurídico encargado de regular este fenómeno tenga que proveerse de una normativa específicamente destinada a satisfacer los intereses específicos de quienes demandan determinados servicios por motivaciones vacacionales, lo que se traduce en unos controles especiales que garantice la prestación de unos servicios turísticos de calidad.

En el Derecho Privado la motivación vacacional del usuario de servicios turísticos se elevaría a causa o finalidad de los contratos de esta naturaleza, hasta el punto de modular las obligaciones que asumen los prestadores de aquellos servicios. Por lo que es de considerar el carácter de esparcimiento con que el turista celebra el contrato turístico, independientemente si se tratase de un contrato de transporte o hospedaje, o como del contrato viaje combinado, o como la asistencia a un espectáculo o la visita a un museo, etc., el ingrediente lúdico como elemento de una actividad turística, incidirá sobre la propia causa del contrato.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Así, PERÉZ DE LA CRUZ, Antonio: “Los contratos turísticos”, en URÍA, Rodrigo (Est. Col.), *Curso de Derecho Mercantil, Vol. II*, de Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 276-277. En el cual pone como ejemplo la celebración de un contrato de crucero de placer, en el que las obligaciones y derechos principales de las partes, “... resulta imprescindible que el buque en el que se realiza el viaje cuente con una serie de servicios complementarios a disposición del cliente (lavanderías, tintorerías, peluquerías, cafeterías, tiendas abordo, servicios bancarios, etc.) que si bien su utilización efectiva dé lugar a la celebración de otros contratos, su mera puesta a disposición representa la natural prestación a que está obligado el organizador del crucero por efecto del contrato principal. La trasgresión de estos deberes, aparentemente secundarios, pueden interpretarse como incumplimiento del contrato principal por

Regularmente, en los contratos turísticos se incorporan junto a las prestaciones principales del contrato, otras de carácter accesorias, como la asistencia personal del turista, para que durante su viaje disfrute de unos niveles de confort considerados tan importantes como las prestaciones básicas que integran el contrato.<sup>17</sup>

## 1.2. Concepto de Derecho turístico.

Se entiende por “Derecho del turismo” o “Derecho turístico” la regulación del sector turístico, es decir “el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las instituciones y relaciones nacidas del turismo, así como el Derecho que disciplina las personas, los bienes materiales e inmateriales, las actividades, los lugares y los contratos, en tanto se dedican o refieren al turismo”.<sup>18</sup>

La causa de una regulación jurídica del turismo nace de las siguientes circunstancias: a) de la imprecisión del concepto de turismo; b) por la diversidad en las competencias sobre el turismo; c) por la celeridad del fenómeno turístico; d) la falta de doctrina; y e) la existencia de diversos factores ajenos al turismo pero que inciden directamente en él.<sup>19</sup>

---

frustración de su finalidad, aunque el crucerista haya cubierto indemne el entero periplo en que consistía el viaje.”.

<sup>17</sup> Se entiende que esas prestaciones accesorias, son una causa subjetivista en el negocio jurídico. En principio los fines subjetivistas son jurídicamente irrelevantes y solo adquieren importancia para el Derecho cuando se incorporan al negocio, por ejemplo un contrato de viaje combinado que se contempla la playa, sol y spa, persiguiendo una comodidad, confort y relajamiento del turista. El usuario turístico efectúa el pago como obligación principal del viaje y sucede que durante su viaje no se alcanza los elementos de relajación, comodidad, etc., a lo que existe un incumplimiento sobre la causa subjetiva del turista y tiene una consecuencia jurídica, así ALBALADEJO, Manuel: *Op. cit.*, pp. 634-636, “Si los otorgantes del negocio, en uso de su autonomía de la voluntad, han querido como fin del mismo, una determinada (que, presupuesto el fin suyo objetivo, es decir, sin cambiar éste sino partiendo de conseguirlo, *le agregue algo*), se suele decir que es causa en sentido subjetivo EL FIN QUE, DENTRO DE LA CONSECUENCIA DE LA CAUSA OBJETIVA Y ADEMÁS DE ÉSTA...la causa subjetivista no es una causa *distinta* de la objetiva, sino como un plus sobre ésta, o bien como un *plus* que suprime la virtud causal de la causa objetiva en cuanto no sirve para satisfacer ese *plus*, teniendo la ventaja de armonizar ambas causas...por supuesto que la existencia de la causa subjetivista ha de estimarse sin necesidad de que los otorgantes del negocio lo hayan establecido específicamente, por ejemplo, en el documento que recoja aquél, sino que basta que efectivamente esté en la voluntad de las partes, puesto de relieve por la conducta de las mismas, o que se deduzca del planteamiento del negocio que persigue (sobre el suyo objetivo) es fin especial concreto y que sin él no se habría celebrado. Sin embargo, que el no haberla establecido explícita y documentalmente, puede dar lugar a dificultad probatoria.”.

<sup>18</sup> PÉREZ MORIONES, Aránzazu: *El contrato de gestión hotelera*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 48-49.

<sup>19</sup> Así, ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PEREZ GUERRA, Raúl: *Op. cit.*, p. 25.

Por lo tanto, cuando hablamos de Derecho del Turismo no se limita a un cierto contenido de normas y problemas jurídicos que se suscitan dentro de la actividad turística. Sino que para la comprensión y resolución de cuestionamientos jurídicos, es necesario acudir a principios y técnicas del Derecho Privado (Civil, Mercantil, Laboral) como del Derecho Público (Administrativo, Financiero).<sup>20</sup>

De ahí que el objeto de este estudio se centre exclusivamente en el área jurídico-privada del fenómeno turístico. Porque el turismo es una actividad compuesta por servicios, que se prestan a las personas para sus traslados y estancias fuera del lugar en el que usualmente residen. Por lo tanto, nos encontramos ante un fenómeno de naturaleza privada, pero que exige a los poderes públicos la protección con medidas suficientes para regular la actividad que tiene un importante impacto económico, social y cultural.<sup>21</sup>

### **1.3. Contenido del Derecho turístico.**

El estudio del contenido del Derecho turístico es muy amplio, ya que en primer lugar encontramos a los elementos subjetivos del turismo que son: las Administraciones públicas competentes, las empresas turísticas y el turista y en segundo lugar los bienes y los servicios turísticos.<sup>22</sup>

En el Derecho del turismo se encuentra de manera específica a los sujetos, actividades y bienes turísticos. Sobre los sujetos, el Derecho del turismo se refiere al turista, el empresario y la Administración Pública, quienes desarrollan diversas actividades turísticas. Dentro de éstas, se encuentran todas aquellas prestaciones de servicios como el transporte, alojamientos, restauración, ocio, entretenimiento, etc., (que es la parte que nos interesa y la cual se desarrollará en los contratos turísticos). Finalmente, los lugares donde se desarrollan las actividades, son los destinos turísticos, que pueden ser de titularidad pública (playas, parques naturales, el Museo

---

<sup>20</sup> Se niega una autonomía del Derecho turístico, al considerar que carece de principios inspiradores o criterios de ordenación propios que justifiquen una rama independiente del ordenamiento jurídico, y que por tanto el Derecho del turismo no es más que una parte del Derecho administrativo especial, así PEREZ FERNANDEZ, José Manuel (Dir.), *Op. cit.*, p. 35; BLANQUER CRIADO, David: *Derecho del turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 20-21; ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PEREZ GUERRA, Raúl: *Op. cit.*, p. 25.

<sup>21</sup> AMAT LLOMBART, Pablo: *La contratación en el sector turístico, a partir de las nociones del Derecho civil, personal y patrimonial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 30.

<sup>22</sup> En este sentido, BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, p. 22.

Reina Sofía) o privada (hoteles, restaurantes, parques temáticos, campos de golf, pistas de esquiar).

Es de gran importancia especificar que el turista o consumidor y las empresas turísticas se explicarán detalladamente más adelante, por ser sujetos principales de la contratación turística. Pero no se debe olvidar que la Administración Pública desarrolla una labor importante dentro del Derecho del turismo, con una ordenación de la iniciativa privada y en la promoción de los destinos turísticos. Además, debe efectuar una protección al usuario turístico mediante un régimen jurídico determinado, para que así, ejerza su potestad sancionadora a aquellos empresarios u operadores turísticos que incurran en irregularidades.

Por último, dentro del Derecho turístico y de las disposiciones establecidas para las exigencias y necesidades que plantea el fenómeno turístico, no debemos olvidar las disposiciones que forman parte del Derecho comunitario y Derecho internacional.

#### **1.4. El Derecho privado en el Derecho turístico.**

El Derecho Privado tiene una gran relevancia e importancia jurídica dentro del sector turístico, derivado de las relaciones jurídico-privadas (contratos turísticos) que celebran los particulares con empresarios privados que promueven la realización de actividades turísticas.

En este sentido, el Derecho privado en el turismo se ocupará de desarrollar y emplear los instrumentos jurídicos necesarios para regular las actividades turísticas que realicen los turistas mediante los contratos. Como se ha mencionado anteriormente, la figura del turista es de gran importancia dentro de la regulación del Derecho del turismo, porque es el sujeto que va a realizar la actividad turística deseada (viajes de placer, culturales, deportivos, de aventura, etc.) y necesita una adecuada protección jurídica, derivado de los contratos turísticos celebrados tradicionalmente con las agencias de viajes. El turista como destinatario final de un viaje (contrato de viaje combinado), es un consumidor o usuario, el cual tiene la tutela del Texto Refundido para la defensa de consumidores y usuarios, además del Código Civil y otras Leyes.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Así, PÉREZ MORIONES, Aránzazu: *Op. cit.*, p. 43, “Con la aparición y la posterior consolidación del turismo no sólo da origen a esta nueva rama del ordenamiento jurídico que es el Derecho turístico, sino que, además, conduce a una ampliación del Derecho de los consumidores, debido a la consideración del turista como consumidor especialmente necesitado de protección...”; AMAT LLOMBART, Pablo: *Op. cit.*, p. 31, “Si atendemos al punto de vista de las empresas y actividades turísticas, en cuanto a sujetos

En el Derecho privado la autonomía de la voluntad es un principio tradicional y general, en el que los particulares deciden en la celebración o no celebración de un contrato, así como la determinación de su contenido, la de incluir ciertas condiciones y estipulaciones, convenir libremente la forma del contrato, etc. En el sector turístico, la autonomía de la voluntad está delimitada por la ordenación pública, en protección de los consumidores y usuarios al establecer el contenido de los contratos (o una parte importante de ese contenido), la obligatoriedad de celebración de otros (pólizas de seguros), los requisitos de formalización y documentación necesaria, etc.<sup>24</sup>

Ante una ordenación administrativa del contenido de algunas relaciones privadas entre las empresas turísticas y los turistas, derivado de los servicios contratados entre ellos, no altera ni modifica la naturaleza jurídica del contrato (por ser de naturaleza privada), de ahí que los problemas o conflictos jurídicos contractuales se plantean y resuelven ante la Jurisdicción Civil.

## **2. MARCO NORMATIVO DEL TURISMO.**

### **2.1 Normativa comunitaria.**

En la actualidad existe una única normativa de la Unión Europea. Para la obtención de una normativa comunitaria, se ha producido un proceso progresivo en el tiempo, tanto organizativo como normativo, para llegar a la denominación de “Unión Europea” actualmente en vigor. La evolución que ha tenido la Unión Europea ha sido en sus tratados constitutivos, así como modificaciones en su estructura jurídica, para lograr la integración de una Europa.

---

intervinientes (junto con los usuarios turísticos) en aquellas relaciones comerciales cuyo objeto es la promoción y contratación de productos turísticos, la normativa reguladora del turismo en este ámbito deja de ser naturaleza pública, para derivar hacia el Derecho privado. En este sentido, entran en juego disposiciones de Derecho civil o de Derecho mercantil al ocuparse de los instrumentos de que se sirven las empresas en su actividad: obligaciones y contratos turísticos, sistemas de organización empresarial, etc.”.

<sup>24</sup> Véase, BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, pp. 27-30, se refiere al fenómeno de la “publicación del Derecho privado.”.



Antes de mencionar la política implementada por la Unión Europea en el sector turístico, es importante señalar los orígenes y desarrollo de los tratados que regulo a la Unión Europea:<sup>25</sup>

1.- CEEA Tratado sobre el carbón y el acero, que fue el inicio de un proceso global de construcción política europea. La declaración asumía como fin inmediato la solidaridad en la producción del carbón y el acero. En un principio el acuerdo era entre Francia y Alemania, pero la oferta quedaba abierta a otros países europeos, recibiendo el inmediato respaldo de Italia y de los Estados de Benelux (Bélgica, Países Bajos, y Luxemburgo).

2.- En abril de 1956 se presento un informe, recomendando la creación e integración de una Comunidad Económica Europea (CEE) y una Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA), el cual se firmo el 27 de marzo de 1957.

3.- En 1983 con la declaración solemne de Stuttgart, se inicio una nueva etapa e idea de la Unión Europea, de una forma más global que los tratados anteriores, dado a que implementaba una cooperación intergubernamental entre los Estados miembros.

4.- Se presenta el Acta Única Europea en 1986, la cual consistió en formalizar jurídicamente por la vía de un tratado, la cooperación intergubernamental de la política exterior e intensificación de la integración supranacional en el ámbito comunitario.

5.- Con el Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992, se da el nacimiento de la Unión Europea, en el cual se crea una nueva organización y sigue con una evolución marcada por el Acta Única en términos de más competencias y formalización de cooperación intergubernamental en asuntos jurídicos.

6.- Después del Tratado de Maastricht, se presenta la reforma de Ámsterdam, de 20 de octubre de 1997.

7.- Ante cuestiones que quedaron pendientes en el tratado de Ámsterdam, se realizo el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001.

8.- Por último, se presenta el Trato de Lisboa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, por el que se establece una constitución para Europa, que es la actualmente vigente.

### **2.1.1. Política comunitaria sobre el turismo.**

---

<sup>25</sup> Véase, ALONSO GARCÍA, Ricardo: *Sistema jurídico de la Unión Europea*, Thomson-Civitas, 2ª Ed., Madrid, 2010, pp. 16-54; DÍEZ MORENO, Fernando: *Manual de Derecho de la unión europea*, Thomson-Civitas, 5ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 96-156.

El turismo ocupa un lugar importante dentro de la economía de los estados miembros de la Unión Europea, dado a que las actividades turísticas representan un gran potencial de puestos de trabajos y permite promover los distintos destinos turísticos.<sup>26</sup>

En un principio, dentro del Tratado de la Unión Europea no se reconocía al turismo como una categoría de política. En consecuencia, el turismo al no tener una política comunitaria, se considero que no estaba dentro del sector económico a desarrollar, lo cual conlleva a la falta de una normativa específica dentro del Derecho comunitario.

El turismo no se menciona en los tratados anteriores, fue hasta el Tratado de la Unión Europea de *Maastricht*, que estableció una acción de la comunidad sobre los ámbitos de energía, la protección civil y el turismo. Posteriormente en el Tratado de *Lisboa* Constitutivo de la Unión Europea, el turismo es objeto de expresa referencia dentro de las competencias de Europa, como uno de los puntos sobre los que se proyectara las acciones pertinentes para alcanzar sus fines,<sup>27</sup> en los que incluye proporcionar una competencia entre los estados miembros, para realizar acciones de apoyo, coordinación o complemento.

La política del turismo se recoge como una acción de apoyo con una base jurídica específica en el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los objetivos de esta política son promover la competitividad en las empresas de este sector, de fomentar un entorno empresarial favorable y propiciar el intercambio de buenas prácticas entre estados miembros.<sup>28</sup>

Las normas comunitarias aplicables al turismo han tenido que ser relacionadas o construidas sobre la base de otras políticas, como es el caso de los transportes, o bien en la protección de los consumidores.<sup>29</sup> Con sustento en ellas, se han aprobado diferentes Reglamentos y Directivas relacionadas con las relaciones jurídico-privadas referentes al turismo.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 1051.

<sup>27</sup> En el artículo 2 del Título I sobre las categorías y ámbitos de competencias de la unión, y en el artículo 2 E, del tratado de Lisboa por que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

<sup>28</sup> ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco: *La Europa que viene: El Tratado de Lisboa*, Marcial Pons, 2ª Ed., Madrid, 2010, p. 139.

<sup>29</sup> De los artículos 90 al 100 en materia de transporte; y el artículo 196 en materia de consumidores, por el Tratado de la versión consolidada del Funcionamiento de la Unión Europea, introducidas por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007.

## **2.1.2. Reglamentos y Directivas aplicables al turismo.**

### **2.1.2.1. Notas sobre la eficacia de reglamentos y directivas.**

El Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea prevé en su artículo 288 diversos actos jurídicos de la Unión. Estas normas se originan de las diversas Instituciones comunitarias, por lo que no se trata de normas “convenidas” entre los países miembros, sino que son la manifestación más clara del carácter de la Comunidad de Derecho que ostenta la Unión Europea y que la distingue de otros Organismos Internacionales.<sup>30</sup>

El artículo 288 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea dispone que: “para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, recomendaciones y dictámenes”, siendo éstos los actos jurídicos válidos que la Unión Europea puede realizar.

### **2.1.2.2. Reglamentos.**

En el artículo 288, párrafo segundo del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, se señala que el reglamento “tendrá un alcance general” y “será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”.<sup>31</sup>

El reglamento es el instrumento unificador por excelencia del ordenamiento jurídico europeo, de lo que se trata es de mantener la uniformidad en su aplicación en todos los Estados miembros.<sup>32</sup>

El carácter normativo del reglamento es de un alcance general, porque contiene disposiciones generales e impersonales, no dirigidas aun destinatario concreto, sino a todos los que se encuentran en su ámbito de aplicación del Derecho comunitario

---

<sup>30</sup> DÍEZ MORENO, Fernando: *Op. cit.*, p. 307.

<sup>31</sup> El reglamento se integra en los ordenamientos jurídicos nacionales a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, desplegando su eficacia a partir de la fecha que él mismo fije, o a falta de ella, a los veinte días de su publicación, por lo que son exigibles o ejercitables los derechos y obligaciones que en él se contengan, así ALONSO GARCÍA, Ricardo: *Op. cit.*, p. 122.; también DÍEZ MORENO, Fernando: *Op. cit.*, p. 309.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 126.; en el mismo sentido VINAIXA HUESCA, Rosario (Coord.): *Instituciones de Derecho comunitario*, Tirant Lo Blanch, 2ª Ed., Valencia, 2000, p. 147, “desde el punto de vista material, el reglamento es la verdadera Ley comunitaria...”.

(instituciones, Estados miembros, personas físicas y jurídicas).<sup>33</sup> Además, contiene un poder normativo completo en manos de la Unión Europea para obligar en todo el contenido de la norma, esto es, la obligación de imponer todos los elementos del reglamento en el Derecho interno del Estado.<sup>34</sup>

El Consejo Europeo ha aprobado algunos Reglamentos en relación con el turismo, por mencionar algunos, son:

- Reglamento (CE) n° 2027/97 del Consejo relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidentes, modificado por el Reglamento (CE) n° 889/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de mayo de 2002, del Consejo.
- Reglamento (CE) n° 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
- Reglamento (CE) n° 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos, modificado por el Reglamento (UE) n° 285/2010 de la Comisión, de 6 de abril de 2010.
- Reglamento (CE) n° 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea.
- Reglamento (CE) n° 474/2006, por el que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad, modificado por el Reglamento de ejecución (UE) n° 295/2012 de la Comisión, de 3 de abril de 2012.
- Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad.

---

<sup>33</sup> Véase, DÍEZ MORENO, Fernando: *Op. cit.*, p. 308; VINAIXA HUESCA, Rosario (Coord.), *Op. cit.*, p. 148. Además, ALONSO GARCÍA, Ricardo: *Op. cit.*, p. 122, expone que el reglamento: “Presenta una clara vocación unificadora de los Derechos nacionales, tendente a excluir cualquier particularidad o diversidad interna en la materia por él regulada, limitada la intervención de los Estados al plano de mera administración o gestión, esto es, de aplicación material de la norma...”.

<sup>34</sup> Los Estados miembros tienen la prohibición de aplicar medidas nacionales de recepción o reproducción sobre los reglamentos, véase, ALONSO GARCÍA, Ricardo: *Op. cit.*, pp. 122-124.

### 2.1.2.3. Directivas.

El artículo 288 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea establece que la “Directiva obligara al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. A diferencia de los reglamentos, las directivas carecen como regla general del carácter completo, tanto formal como material, propio de aquéllos.<sup>35</sup>

La directiva no tiene un alcance general, porque sus destinatarios finales son los Estados miembros, que tienen la obligación de incorporar la directiva en el respectivo ordenamiento nacional, en el plazo que se prevea, y a través de la norma del rango que proceda. Una directiva obliga en cuanto a su resultado, no impone directamente obligaciones o reconoce derechos, sino que tendrá que hacerse a través de la norma nacional de recepción, para que una vez cumplido el plazo previsto, en todos los ordenamientos nacionales estén regulados de manera análoga aquellos derechos y obligaciones. No contiene un efecto directo para el ejercicio de los derechos o sobre el cumplimiento de las obligaciones que puedan contenerse en una directiva, sino que se tendrá que esperar a que la misma sea incorporada en cada ordenamiento nacional.<sup>36</sup>

Las Directivas comunitarias que refieren al turismo en particular sobre la protección jurídica del turista-consumidor, han servido como modelo a las normas de transportación adoptadas por el legislador turístico español, pueden destacarse las siguientes:

- Directiva 90/314/CEE, de 13 de junio de 1990, del Consejo, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y circuitos combinados.
- Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior.
- Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009 , relativa a la protección de los consumidores con respecto a

---

<sup>35</sup> ALONSO GARCÍA, Ricardo: *Op. cit.*, p. 126, menciona: “...formal por cuanto, aun publicadas obligatoriamente en el Diario Oficial Europeo (artículo 297 TFUE), requieren su integración en disposiciones internas objeto de una publicación adecuada en los respectivos Estados miembros. Y material por cuanto como normas de base o finalistas, limitadas a fijar el resultado a alcanzar, requieren proposiciones jurídicas de concreción con relación a los medios para hacer aquél efectivo.”.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pp. 126-127, señala que: “...es una norma de contenido flexible a concretar por cada Estado...converge hacia una normativa básica común, lo que implica un Derecho igual para todos los Estados miembros...necesitado de complemento nacional para afectar a los ciudadanos.”.

determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.

También existen otras Directivas con referencia a la contratación turística, de las cuales son las siguientes:

- La Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del consejo y la Directiva 1999/44/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta Directiva influye sobre contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, siendo de gran importancia los contratos celebrados a distancia y en el caso de turismo los relacionados con excursiones.
- La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.
- La Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo. La cual puede ser vinculado para resolver un contrato de crédito solicitado por un consumidor para pagar el precio de un viaje combinado.

#### **2.1.2.4. El Derecho internacional privado en la contratación turística.**

El Derecho internacional privado es quien regula las relaciones personales entre los sujetos y los intercambios comerciales a través de las fronteras, es de aplicación en el ámbito de la contratación turística, para establecer las reglas a determinadas cuestiones legales sobre la competencia jurídica internacional, Derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones.

El sistema español de competencia judicial internacional relativo a las obligaciones contractuales se fundamenta en el Reglamento 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial internacional, el reconocimiento y

la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Bruselas I”), sustituto del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968.<sup>37</sup>

El régimen de competencia judicial internacional y territorial contemplado en el Reglamento “Bruselas I”, designa directamente el concreto Tribunal territorialmente competente. Por otra parte, cuando el demandado no tiene su domicilio en un Estado parte del Reglamento o, mediando cláusula de elección de fuero, ninguna de las partes contratantes tiene su domicilio en un Estado miembro, serán de aplicación las reglas de competencia judicial internacional previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en particular los foros especiales en los apartados 3.º Y 4.º de su artículo 22.<sup>38</sup>

El Derecho aplicable sobre obligaciones contractuales, en la esfera del Derecho internacional privado, es el Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (“Roma I”) que ha venido a sustituir al Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, constituyendo ambos el régimen general de Derecho aplicable a las obligaciones contractuales en el sistema español.<sup>39</sup>

El Reglamento “Roma I”, unifica las reglas de Derecho aplicable a las obligaciones contractuales, excluyendo cualquier aspecto material; asimismo, tiene un ámbito de aplicación universal, resultando aplicable con independencia de que la ley designada sea o no la de un Estado parte y cualquiera que sean los elementos objetivos y subjetivos de la relación jurídica; además, el régimen general de Derecho aplicable a

---

<sup>37</sup> FERNÁNDEZ ROZAS, José / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: *Derecho internacional privado*, Thomson-Civitas, 5ª Ed., Madrid, 2009, p. 477. Sobre las normas de los reglamentos y convenios mencionan que: “...tienen un ámbito de aplicación especialmente extenso, por cuanto el foro general de la sumisión expresa encuentra su ámbito de actuación natural en este sector... las cláusulas atributivas de jurisdicción o acuerdos de elección de fuero se regulan en el artículo 23 del Reglamento, cuya aplicación procede cuando demandante o demandado tiene su domicilio en un Estado parte...”; En el mismo sentido, CALVO ARAVACA, Alfonso L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier (Dirs.): *Derecho internacional privado*, Comares, Granada, 2010, p. 461.

<sup>38</sup> CALVO ARAVACA, Alfonso L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier (Dirs.): *Op. cit.*, p. 463, el artículo 5.1 del R.44/2001 es el que: “Contiene un foro de competencia judicial internacional y competencia territorial...”; y que el reglamento: “solo es aplicable cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro y cuando se le demanda ante un tribunal de un Estado miembro distinto a aquél en el que está domiciliado.”.

<sup>39</sup> FERNÁNDEZ ROZAS, José C. / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: *Op. cit.*, p. 484, “El reglamento será de aplicación a los contratos celebrados a partir del 17 de diciembre de 2009 (art. 28), por lo que el Convenio de Roma tendrá una aplicación transitoria prolongada respecto en los litigios referidos a contratos celebrados antes de dicha fecha.”.

las obligaciones contractuales no solo viene dado por su ámbito de aplicación material y el juego de las cláusulas de compatibilidad, el reglamento se aplica a las obligaciones contractuales o contrato, excluyendo las obligaciones nacidas de una fuente distintas (extracontractual).<sup>40</sup>

Así como el “Reglamento Roma I” regula las obligaciones contractuales, se encuentra el Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de junio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales “Roma II”. Este reglamento caracteriza las obligaciones extracontractuales a partir de un concepto amplio, tanto del hecho dañoso y del daño, como de sus consecuencias, y se aplica con carácter general a materias civiles y mercantiles.<sup>41</sup>

La mayoría de los contratos turísticos se encuentra dentro de los contratos de consumo, por lo que están regulados en el ámbito de la protección de los consumidores. Es por ello, que los artículos 15 a 17 del Reglamento de “Bruselas I” incorporan foros de protección del consumidor, entendiendo por éste aquella persona que contrata para un uso que puede considerarse ajena a su actividad profesional.<sup>42</sup>

Sin embargo, no todos los contratos de consumo están bajo el ámbito de aplicación de las reglas especiales de protección contenidas en los artículos 15 a 17 del Reglamento de “Bruselas I”. El artículo 15 excluye los contratos de transporte (excepto los contratos de alojamiento y viajes combinados, que si es de aplicación y que es sobre el contrato turístico que en capítulos posteriores expondremos), así como aquellos en los que el contratante (el consumidor) no tenga su domicilio en un Estado miembro, o

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, pp. 484-485.

<sup>41</sup> FERNÁNDEZ ROZAS, José C. / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: *Op. cit.*, p. 540; el reglamento Roma II: “... constituye el régimen general sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, aplicable a partir de su fecha entrada en vigor el 11 de enero de 2009 (art. 32.) a los daños originados desde esa fecha (art. 31), se trata asimismo de un reglamento de aplicación universal... prevé una eventual compatibilidad con disposiciones de Derecho comunitario que pueden establecer soluciones conflictuales en sectores específicos de responsabilidad por daños y cede frente a la aplicación de convenios internacionales de semejante carácter, a no ser que vinculen exclusivamente a Estados miembros (art. 28).”.

<sup>42</sup> CALVO ARAVACA, Alfonso L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier (Dirs.): *Op. cit.*, p. 663, “Para determinar la competencia judicial internacional en materia de contratos internacionales celebrados por consumidores, deben considerarse distintos instrumentos legales: 1) Reglamento 44/2001 y Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y Lugano de 16 de septiembre 1988; 2) artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo aplicable si ningún instrumento internacional rige la cuestión... El Reglamento 44/2002 protege al consumidor la hora de fijar la competencia judicial internacional.”.



carezca de sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento a cuya explotación se refiera el litigio.<sup>43</sup>

El Derecho aplicable en el Derecho internacional privado en el ámbito de contratos de consumo, son tanto el reglamento de “Bruselas I” como también el reglamento “Roma I” que en su artículo 6 contiene un régimen especial para determinados contratos de consumo que modifica notablemente el artículo 5 del Convenio de Roma, ampliando la protección del consumidor sobre la base de la aplicación de la ley de su residencia habitual.<sup>44</sup>

## **2.2. Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.**

### **2.2.1. Competencia estatal sobre el turismo.**

La competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo se reconoce en el artículo 148.1.8 de la Constitución, que dispone que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. Además, porque en el conjunto de los treinta y dos títulos sobre competencia que se atribuyen en exclusiva al Estado en el artículo 149.1 de la Constitución, no se hace ninguna mención sobre turismo.

Sin embargo, el turismo es una materia que incide en múltiples áreas de regulación por parte del Estado, como sucede en la ordenación del territorio, la vivienda, aguas y costas, aduanas y comercio exterior, medio ambiente, deporte y ocio, caza y pesca, la regulación de las relaciones jurídico-privadas, etc.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> FERNÁNDEZ ROZAS, José C. / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: *Op. cit.*, p. 519.

<sup>44</sup> FERNÁNDEZ ROZAS, José C. / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: *Op. cit.*, p. 524, “El marco de protección que brinda el Reglamento <<Roma I>> es similar al que contempla el Reglamento <<Bruselas I>> en materia de competencia judicial internacional. Para que proceda la aplicación del régimen específico del artículo 6 del Reglamento “Roma I”, y en consecuencia, la ley de la residencia habitual del consumidor, basta con que el profesional ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde el consumidor tenga su residencia habitual, o simplemente, por cualquier medio dirija estas actividades a ese país, o a distintos países, pero incluido también el de la residencia habitual del consumidor...”. Así también CALVO ARAVACA, Alfonso L. / CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier (Dirs.): *Op. cit.*, p. 674, “El Reglamento Roma I contiene una norma de conflicto especialmente diseñada para determinar la Ley aplicable a los contratos concluidos por consumidores...”.

<sup>45</sup> Véase, ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PEREZ GUERRA, Raúl: *Op. cit.*, p. 58, “Existen otros títulos competenciales que también inciden indirectamente en el turismo, como el patrimonio histórico artístico, nacionalidad, inmigración, extranjería, divisas y cambio de monedas, transportes, comunicaciones, ferias, juegos y apuestas, etc.”.

Por lo tanto, el Estado conforme a una interpretación del artículo 149.1 de la Constitución, tiene competencia sobre las actividades turísticas,<sup>46</sup> entre las que se destacan:

1.- El artículo 149.3 de la Constitución, otorga competencia exclusiva al Estado en materia de relaciones internacionales. La promoción turística de España se realiza a través de la Secretaria de Estado de Turismo, bajo la superior dirección del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Sin olvidar, que las Comunidades Autónomas serán informadas de la elaboración de los convenios internacionales referentes al turismo y adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los mismos.

2.- La competencia atribuida por el artículo 149.1.13 de la Constitución al Estado en materia de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, por lo que al Estado le corresponde la coordinación general de la actividad turística, por incurrir en la política económica nacional.<sup>47</sup>

3.- La normativa del Estado afecta a la competencia turística de las Comunidades Autónomas en materia de comercio exterior, acorde con el artículo 149.1.10 de la Constitución.<sup>48</sup>

4.- La competencia exclusiva sobre la legislación mercantil, civil (en específico sobre las bases de las obligaciones contractuales), conforme a los artículo 149.1.8 y 6 de la Constitución, que son la base de la regulación de los contratos turísticos celebrados por los turistas, como son los viajes combinados o los derechos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y de normas tributarias.

---

<sup>46</sup> Así, GARCÍA MACHO, Ricardo: “La legislación turística: naturaleza jurídica; relaciones entre Derecho estatal, autonómico y local”, en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dirs.), *Lecciones de Derecho de turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 26, “el artículo 149.1 CE no reserva al Estado ninguna competencia sobre el turismo de forma directa, pero a través de otras competencias como relaciones internacionales (art. 149.1.3), comercio exterior (art. 149.1.10), o bien las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13) el Estado puede dictar normas sobre turismo.”; BENZO SAINZ, Isabel: *Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo*, Ministerio para las administraciones públicas, Madrid, 1992, pp. 14 y 15.

<sup>47</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 175/1995, de 5 de diciembre (westlaw RTC 1995\175), F.J. 1 y 2; también la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 125/1984, de 20 de diciembre (westlaw RTC 1984\125), F.J. 1; Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 75/1989, de 24 de abril (westlaw RTC 1989\75), F.J. 2., determina que el hecho de que la materia relativa al turismo haya sido asumida como competencia exclusiva en los Estatutos de Autonomía, no constituye una barrera infranqueable a toda intervención estatal.

<sup>48</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 125/1984, de 20 de diciembre (westlaw RTC 1984\125), F.J. 1., en la que atribuye de manera indirecta una competencia exclusiva al Estado en materia de promoción del turismo en el exterior; así mismo la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 206/2001, de 22 de octubre (westlaw RTC2001\126), F.J. 10.

La competencia en materia de turismo se encuentra atribuida a las Comunidades Autónomas conforme a la Constitución. Sin embargo el Estado debe garantizar la igualdad de los derechos de los usuarios turísticos en todo territorio nacional.

#### **2.2.1.1. Normativa turística estatal.**

En España las primeras normas turísticas que se aprobaron tenían como objetivo conformar una estructura administrativa que beneficie la promoción de España como país turístico.<sup>49</sup> Los primeros pasos que a principios del siglo XX dio la Administración del Estado en el sector turístico se centraron en la prestación de servicios (la organización de excursiones, el alojamiento en Paradores), y en un desarrollo en el fomento de la promoción del turismo en el exterior. Más reducida era todavía la actividad de ordenación o limitación de la iniciativa empresarial privada (fundamentalmente la inspección sanitaria y policial de hoteles y la exigencia de autorización previa a la apertura).<sup>50</sup>

El primer texto normativo de carácter turístico fue la Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre la competencia en la materia de turismo. Dentro de su exposición de motivos se establece una definición material del fenómeno turístico de gran relevancia para la doctrina del turismo. El contenido es muy pequeño, pues solo contiene seis artículos y aunque no ha sido formalmente derogada, ha sido cuestionada su vigencia, después de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por el que se atribuye a éstas la posibilidad de asumir legalmente la competencia exclusivas sobre ordenación turística.<sup>51</sup> En el texto normativo de la Ley 48/1963 se delimita de manera genérica la figura de las empresas turísticas y de concretar su objeto (de hostelería, alojamiento, etc.), sometiéndolas a la competencia del Ministerio de Información y Turismo, relativo a su ordenación y vigilancia. Sin embargo, en su último artículo se especifica que las relaciones jurídico-privadas que se establezcan por razón de las actividades turísticas se regirán por la legislación común correspondiente.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> MORENO QUESADA, Bernardo: *Derecho y legislación civil para estudios de turismo*, Comares, 2ª Ed., Granada, 2006, p. 72.

<sup>50</sup> BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, p. 13.

<sup>51</sup> Conforme al artículo 148.1.18 de la Constitución española.

<sup>52</sup> GARCIA MACHO, Ricardo: “La legislación turística: naturaleza jurídica; relaciones entre Derecho estatal, autonómico y local”, *Op. cit.*, p. 36.

Posteriormente, por medio del Decreto 231/1965, de 14 de enero se creó el Estatuto ordenador de las Empresas Turísticas y de las Actividades Turísticas Privadas, el ámbito de aplicación del estatuto era amplio y por lo mismo se ajustaba a cualquier actividad que tuviera relación con el turismo.<sup>53</sup> A consecuencia del Estatuto Ordenador de las Empresas y de las Actividades Turísticas, se aprobaron diferentes disposiciones reglamentarias unas preconstitucionales y otras posteriores, destinadas a ordenar los diversos sectores de la actividad turística.<sup>54</sup>

No se habían derogado formalmente los reglamentos turísticos estatales aprobados con anterioridad a la Constitución española de 1978. Sin embargo, se aprueba el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan la mayoría de las normas estatales sobre accesos a actividades, turísticas y su ejercicio, en el cual incluyen decretos, reales decretos y órdenes ministeriales (en muchos de los casos preconstitucionales), todo ello en cumplimiento de la obligación de incorporar la Directiva 2006/123/CE al ordenamiento jurídico español, derivado de lo dispuesto en el artículo 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y así mismo con el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, donde los Estados miembros adoptarán las medidas generales o particulares para el cumplimiento de las obligaciones del presente Tratado.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, p. 44, “como actividades turísticas se encontraban todas aquellas que directa o indirectamente pudieran influir sobre el turismo, como eran los casos de transportes, ventas de productos típicos y de artesanía, deportivas y recreativas, y por último y especialmente las profesiones turísticas.”.

<sup>54</sup> El Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, sobre medidas de ordenación de la oferta turística; el Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales; el Real Decreto 1634/1982, de 15 de junio, sobre ordenación de establecimiento hoteleros; el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes. Asimismo se aprobaron Órdenes Ministeriales relacionadas con el ámbito turístico estatal como la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 20 de noviembre de 1964, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Empresas y Actividades Turísticas; la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes, la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de cafeterías; la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 26 de julio de 1966, por la que se aprueba la ordenación turística de los campamentos de turismo; la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 17 de enero de 1967, por la que se aprueba la ordenación de apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico; la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 11 de agosto de 1972, por la que se aprueba el Estatuto de los directores de establecimiento de empresas turísticas; y la Ordenación del Ministerio de Información y Turismo de 14 de abril de 1988, por la que se aprueban normas reguladoras de las agencias de viajes.

<sup>55</sup> Real Decreto, 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio, dice “Dentro de nuestro marco constitucional y, en concreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 148.1.18ª de la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía, las Comunidades Autónomas han venido asumiendo las competencias exclusivas en materia respectivas normas sectoriales reguladoras de los diferentes servicios turísticos, mientras que las normas del Estado, mantenían un carácter supletorio... lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento

Conforme lo establecido en el artículo 148.1.8 de la Constitución sobre la competencia de la Comunidades Autónomas en el área del turismo, serán éstas las que realicen normas jurídicas aplicables a la actividad turística, ya que la Constitución no reserva al Estado ninguna competencia directa en materia de turismo. Es importante señalar, que en las Comunidades Autónomas que aún no hubieran aprobado normas propias sobre materia turística, la normativa reglamentaria estatal se aplicaría de forma supletoria, siempre y cuando no se opongan a las normas autonómicas vigentes de rango jerárquico superior respecto a las de origen estatal. Sin embargo, con el nuevo Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan la normativa estatal en materia de turismo, las Comunidades Autónomas por medio de orden constitucional tienen la competencia exclusiva sobre normas sectoriales reguladoras de diversas actividades turísticas conforme a la competencia que se le otorgan en la propia constitución.

En materia de legislación mercantil y civil el Estado tiene la competencia exclusiva, dado a que la constitución se la atribuye.<sup>56</sup> De lo cual se han regulado contratos en materia de turismo dentro del ámbito de una legislación estatal, como lo fue la Ley de viajes combinados (actualmente en el *Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*), o bien la Ley 4/2012, de 6 de julio, *de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias*. Es importante reforzar la regulación legal apropiada en la

---

Europea y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada al ordenamiento interno mediante Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a la que ha seguido la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y su ejercicio, ha llevado a la revisión de esa normativa turística estatal, concluyéndose en que resulta precisa su derogación, para que, en el ejercicio de sus competencias, sean las propias Comunidades Autónomas las que adapten las correspondientes normas de ordenación conformes con la citada Directiva 2006/123/CE. En el proceso de modificación, mediante este real decreto se derogan diversas normas reglamentarias estatales que todavía regulan, por lo menos con carácter supletoria, el acceso a algunas actividades turísticas y su ejercicio...es necesario derogar expresa y formalmente para que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus competencias...En su virtud, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio... Artículo Único. Derogación de disposiciones. 1. Quedan derogados los decretos y reales decretos que se relacionan a continuación: a) Decreto 231/1965... b) Decreto 2484/1974.... C) Real Decreto 2877/1982... d) Real Decreto 271/1988... d) Real Decreto 271/1988... 2. Asimismo quedan derogadas las órdenes ministeriales...” las órdenes ministeriales derogadas véanse en el capítulo de la normativa preconstitucional.

<sup>56</sup> Los artículos 149.1.6 y 149.1.8 de la Constitución española.

celebración de contratos turísticos dentro del Derecho español, sabiendo de la gran importancia económica que resulta ser la actividad turística.

### **2.2.1.2. La competencia exclusiva del Estado en el Derecho civil y “las bases de las obligaciones contractuales”.**

El artículo 149.1.8 de la Constitución establece la distribución de competencias legislativas en materia de Derecho civil entre el Estado y las Comunidades Autónomas.<sup>57</sup>

La Constitución menciona que el Derecho civil es una materia que corresponde al Estado y por ello le atribuye una competencia genérica para regular lo relativo a la legislación civil. Asimismo, se comprende que ciertas materias deben contar con una regulación general y uniforme en toda España, lo que concede una competencia específica sobre una lista de materias que, “en todo caso”, se reservan al Estado, por lo que se configuran como exclusivas.<sup>58</sup>

Le corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre el ordenamiento jurídico de carácter civil. Sin embargo, esta competencia estatal se atribuye sin perjuicio de la competencia que las Comunidades Autónomas puedan llegar asumir para la “conservación, modificación y desarrollo” de sus respectivos Derechos civiles forales o especiales, “allí donde existan”.

De este modo, la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de Derecho civil propio se concibe, como una excepción a la competencia del Estado en materia de legislación civil, y por otro, como un límite a esta competencia estatal. Esta

---

<sup>57</sup> El artículo 149.1.8 de la Constitución dice: “Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de Derecho foral o especia.”. Así, GIL CREMADES, Rafael: *Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de legislación civil*, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1992, p.7; SANCHEZ GONZÁLEZ, María Paz: *Bases de las obligaciones contractuales en la Constitución, artículo 149.1.8*, Trivium, Madrid, 1991, p. 7.

<sup>58</sup> Sin embargo, tras atribuirse directamente al Estado las competencias referidas, en atención a la entrada en vigor en España de la Constitución de ciertos Derechos civiles particulares, los constituyentes consideraron oportuno permitir a las Comunidades Autónomas, en función de los que dispusieran sus respectivos Estatutos (arts. 147.2. d y 149.3 de la Constitución), pudieran asumir una competencia específica para la “conservación modificación y desarrollo... de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.”, así SANCHEZ GONZÁLEZ, María Paz: *Op. cit.*, pp. 17-19.

limitación no impide al Estado legislar sobre materia reguladas en los Derechos civiles particulares, ya que el Estado es competente de regular toda la materia que sea de legislación civil, por lo que actúa en el momento de la aplicación de la norma estatal, pues cuando las Comunidades Autónomas ejercen su competencia en materia de Derecho Civil particular o propio, la regulación autonómica, al ser de aplicación preferente, excluye la aplicación de la legislación civil estatal, que solo tendría aplicación supletoria.<sup>59</sup>

Es importante señalar, que el artículo 149.1.8 de la Constitución atribuye una competencia exclusiva al Estado para legislar, “en todo caso”, sobre unas materias específicas. Se trata de cinco materias inaccesibles para las Comunidades Autónomas con las que se garantiza una regulación unitaria y uniforme en todo el territorio español, en el presente trabajo es de destacar la competencia exclusiva del estado sobre “las bases de las obligaciones contractuales”.

La expresión “bases” de las obligaciones contractuales tiene un significado distinto al del utilizado en otros apartados del artículo 149.1 de la Constitución.<sup>60</sup> Las “bases de las obligaciones contractuales” se le atribuyen al Estado mediante competencia completa e integral, que no deja a las Comunidades Autónomas ninguna competencia para el desarrollo normativo de lo establecido por el legislador estatal.<sup>61</sup>

Con la atribución al Estado de la competencia exclusiva de las “bases de las obligaciones contractuales”, se constituyen los fundamentos generales o las reglas comunes aplicables a todas las obligaciones y figuras contractuales, para tener así

---

<sup>59</sup> Sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, la jurisprudencia delimita esta competencia, en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 341/2005, de 21 de diciembre (westlaw RTC 2005\341); Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 157/2004, de 21 de septiembre (westlaw RTC 2004\157); Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda), núm. 207/1999, de 11 de noviembre (westlaw RTC 1999\207).

<sup>60</sup> La expresión “bases de las obligaciones contractuales” empleada en el artículo 149.1.8 de la Constitución, encuentra su más inmediato antecedente en el artículo 15.1. de la Constitución republicana de 1931, pero en la Constitución de 1978 tiene otra interpretación. En principio se debe fijar un concepto sobre la expresión “bases”, el cual se puede definir como “base aquella norma que, por afectar al interés general, implanta, con una cierta estabilidad, las directrices de la respectiva materia, a través de la regulación de los aspectos estructurales de la misma con objeto de conseguir igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, debiendo considerarse también base todo aquello que sea preciso para la preservación de la normativa de tal institución”, véase, SANCHEZ GONZÁLEZ, María Paz: *Op. cit.* pp. 27-37.

<sup>61</sup> La reserva a favor del Estado, sobre la competencia sobre las bases de las obligaciones contractuales ha de versar sobre principios verdaderamente esenciales, cuya contraposición entre un territorio y otro, de lugar a desigualdades básicas, así LACRUZ BERDEJO, José Luis: *Op. cit.*, p. 104.

una regulación única y uniforme en toda España.<sup>62</sup> Por lo tanto, el Estado regula sobre las “bases de las obligaciones contractuales”, que trata sobre una regulación general de las obligaciones (fuentes de las obligaciones, efectos generales de la obligación, clases de obligaciones, etc.) y de la regulación general del contrato (elementos esenciales del contrato, forma de la voluntad contractual, eficacia general del contrato, supuesto tipo de la ineficacia contractual, responsabilidad contractual, etc.).<sup>63</sup>

Es importante señalar, que los contratos turísticos celebrados por los particulares, en este caso turistas, consumidores o usuarios, están protegidos por el TRLGDCU, con una protección en la contratación con condiciones generales y en materia especial sobre el contrato de viaje combinado. Por lo tanto, son consideradas como “bases de las obligaciones contractuales”, las cuales no podrán ser alteradas por las Comunidades Autónomas, aun y cuando éstas hagan uso de sus facultades que en materia de protección de consumidores y usuarios les confieren los respectivos estatutos.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 1/1982, de 28 de enero (westlaw RTC 1982\1) F.J. 1., entiende que: “lo que la Constitución persigue al conferir a los órganos generales del Estado la competencia para fijar las bases de una determinada materia es que tales bases tengan una regulación normativa uniforme y vigencia en toda la nación, porque con ellas se proporciona al sistema normativo... un denominador común...”.

<sup>63</sup> La competencia exclusiva del Estado para la normativa o el establecimiento de aquellas reglas que deben regular uniformemente, en todo territorio español la relaciones *inter privatos*. A lo que la jurisprudencia ha considerado la competencia estatal de la regulación de “cláusulas abusivas” y sus efectos, al decir requieren una regulación uniforme, Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 157/2004, de 21 de septiembre (westlaw RTC 2004\157), F.J. 11; sobre la regulación de las condiciones generales de contratación o de las modalidades contractuales corresponde al legislador estatal, las Sentencia de Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 71/1982, de 30 de noviembre (westlaw RTC 1982\71), Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 88/1986, de 1 de julio (westlaw RTC 1986\88); sobre el régimen de responsabilidad civil debe ser uno y el mismo para todo territorio del Estado, la Sentencia del Tribunal Supremo (Pleno), núm. 264/1993, de 22 de julio (westlaw RTC 1993\264); la determinación de los contratos y de las acciones por incumplimiento, saneamiento o resolución se insertan dentro de la competencia exclusiva estatal, la Sentencia del Tribunal Supremo (Pleno), núm. 62/1991, de 22 de marzo (westlaw RTC 1991\62); la regulación de las indemnizaciones por daños y perjuicios causados en el dominio público hidráulico “constituye un supuesto específico de responsabilidad civil por daños”, materia que forma parte de la legislación civil, la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 227/1988, de 9 de noviembre (westlaw RTC 1988\227); al Estado le compete la regulación del régimen de perfección de los contratos, que son materias que aparecen reguladas en el Código civil y lo referente a la responsabilidad, la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 284/1993, de 30 de septiembre (westlaw RTC 1993\284).

<sup>64</sup> Así, SANCHEZ GONZÁLEZ, María Paz: *Op. cit.*, pp. 88-99; una hipotética ley sobre consumidores y usuarios de Andalucía no puede alterar esta materia porque, es una legislación civil o mercantil y más importante aun porque estamos ante una “base”. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 71/1982, de 30 de noviembre (westlaw RTC 1982\71) F.J. 2., “La garantía de la uniformidad de las condiciones básicas en el ejercicio de los derechos, la unidad de mercado y la afectación de intereses que excedan del ámbito autonómico, son límites que deben tenerse en cuenta para determinar la competencia sobre la legislación en materia de protección del consumidor.”, F.J. 16., “Una posición de dominio en el mercado puede generar prácticas abusivas para los intereses de los consumidores, mediante la incorporación al contenido contractual de técnicas de imposición de una



### 2.2.2. Competencia autonómica en materia de turismo y su normativa.

Por lo que respecta a la competencia autonómica en materia de turismo, el artículo 148.1.8 de la Constitución atribuye expresamente la totalidad competencial en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, conforme lo asumido dentro de sus Estatutos.<sup>65</sup> Todas las disposiciones autonómicas aprobadas dentro de su legítimo ejercicio de sus competencias exclusivas son de aplicación en su territorio y es el caso del sector turístico. El título competencial abarca tanto la promoción turística como la disciplina y la potestad sancionadora en materia turística.

Las Comunidades Autónomas asumen la competencia en materia de turismo conforme a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Así sucede, en casi todas las Comunidades Autónomas que han asumido la competencia exclusiva en materia de turismo, salvo las ciudades de Ceuta y Melilla, en las que sus Estatutos de Autonomía establecen que su competencia en materia turística comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, en los términos que establezca la legislación general de Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.<sup>66</sup>

El Tribunal Constitucional ha establecido la tesis de que las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva sobre la materia turismo, como sucede con la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/1984, de 20 de diciembre, que mantiene que “el artículo 149 de la Constitución no contiene ninguna reserva competencial a favor del Estado sobre turismo”.<sup>67</sup> Así mismo, la Sentencia del Tribunal Supremo 75/1989, de 21

---

contratación tipo, o de otra, a través de las cuales se restrinja la libertad de contratar, más la previsión frente a tales conductas... es materia de una regulación general, como comprendido en lo que dispone el artículo 149.1.8 de la Constitución.”; F.J. 18., “En cuanto al deber de información al consumidor, la introducción en el Derecho obligacional de una obligación de tal extensión tendrá que hacerse mediante normas civiles, de la competencia estatal (artículo 149.1.8 de la Constitución).”; F.J. 19., “El régimen de la responsabilidad debe ser uno y el mismo para todo el territorio del Estado...”.

<sup>65</sup> Así, BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, pp. 31-33; CORCHERO, Miguel: *Derecho del turismo, conceptos fundamentales*, Iustel, Madrid, 2008, p. 232; ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PÉREZ GUERRA, Raúl: *Op. cit.*, p. 58; GARCÍA MACHO, Ricardo: “La legislación turística: naturaleza jurídica; relaciones entre Derecho estatal, autonómico y local”, *Op., cit.*, p. 25.

<sup>66</sup> Por mencionar algunos Estatutos de Autonomía de Comunidades Autónomas: El Estatuto de Autonomía de Cataluña, de 2006, Ley Orgánica 2/2006, de 19 de julio RCL\2006\1450; El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo RCL\2007\548; El Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, Ley Orgánica 141/2007, de 30 de noviembre RCL 2007\2179; La Reforma al Estatuto de Autonomía Valenciana 2006, Ley Orgánica 1/2006, a 10 de abril RCL 2006\756; El Estatuto de Autonomía de Extremadura 2011, Ley Orgánica 1/2001, de 28 de enero RCL 2011\135.

<sup>67</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 125/1984, de 20 de diciembre (westlaw RTC 1984\125) F.J. 1.

de abril, que añade que no contiene ninguna reserva competencial a favor del Estado en lo que se refiere al turismo interior, por lo tanto, al turismo dentro de la Comunidad Autónoma, “En efecto, de acuerdo al artículo 148.1 de la Constitución y en virtud del artículo 27.21 de su Estatuto, Galicia ha asumido competencias exclusivas para la promoción y la ordenación del turismo dentro de la Comunidad sin que el artículo 149 de la Constitución contenga reserva competencial alguna sobre turismo interior a favor del Estado, ni tenga que entrar aquí en juego la cláusula de reserva residual del artículo 149.3 de la Constitución”.<sup>68</sup>

La primer Ley de carácter turístico de una Comunidad Autónoma se presenta en 1994, sobre la ordenación del turismo del país vasco<sup>69</sup> y es la que sirve de modelo a los legisladores de las Comunidades Autónomas para la aprobación de sus respectivas legislaciones autonómicas sobre el turismo.

La Legislación turística dentro de las Comunidades Autónomas suele tener un esquema normativo parecido entre ellas mismas. Se presentan Leyes turísticas posteriores a la del País Vasco, las cuales se reproducen casi de manera sistemática, con un contenido de manera muy similar a la primera ley aprobada por otras Comunidades Autónomas.

En la mayoría de la normativas autonómicas sobre el turismo, se encuentra una ordenación sistemática sobre la regulación y clasificación de las empresas, establecimientos y servicios turísticos; los derechos y las obligaciones de las empresas y usuarios turísticos; la determinación de medidas e instrumentos de promoción y fomento del turismo; y por último, el régimen de disciplina turística que son la inspección, infracciones y sanciones en materia de turismo.

Las Comunidades Autónomas son las que tienen plena capacidad para ordenar todo lo relativo a fomentar la actividad turística sobre su territorio, pero el Estado puede subvencionar actividades concretas dentro del ámbito autonómico.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno), núm. 75/1989, de 24 de abril (westlaw RTC 1989\75) F.J. 1.

<sup>69</sup> Véase, la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo del País Vasco, con la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, sobre la Modificación a la Ley de Ordenación del Turismo.

<sup>70</sup> Véase, en la Parte General, capítulo I.2.2.1 “Competencia estatal sobre el turismo”.

Es importante volver a señalar, la importancia que tiene el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre actividades turísticas y su ejercicio. En el que por atribución competencial de las Comunidades Autónomas en materia de ordenación y promoción del turismo, conforme a lo asumido dentro de sus Estatutos de Autonomía, deben reformar su legislación en el marco de la actividad de las agencias de viajes.<sup>71</sup> De modo, que la ordenación de estos empresarios se regirá específicamente por la normativa dictada por las distintas Comunidades Autónomas en desarrollo de la regulación contenida en sus respectivas leyes de ordenación turística.

## **II. NOCIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN TURÍSTICA.**

### **1. CONTRATOS TURÍSTICOS.**

#### **1.1. Concepto y notas características.**

El turismo al ser una actividad cotidiana en el desplazamiento de personas para frecuentar lugares de interés con fines esparcimiento, a logrado la creación de algunas figuras contractuales turísticas.

Partiendo de la idea básica del Derecho privado, el contrato se entiende como el acuerdo de voluntades entre dos o más partes del cual nacen obligaciones de dar, hacer o no hacer y que tienen que cumplir los contratantes. La principal función del contrato en la actualidad es la de servir de instrumento jurídico para el intercambio de bienes y servicios en el mercado.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Se da por la adaptación en el Derecho interno de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios de mercado interior, donde se ha producido un profundo cambio sobre la tradicional regulación de las agencias de viajes, que estaba regulado por el Estado y ahora las Comunidades Autónomas tienen que adoptar su normativa en materia turística conforme a la Directiva 2006/123/CE, sobre el establecimiento y ejercicio de las actividades de las agencias de viaje en territorio español, es importante señalar que no todas las Comunidades Autónomas no han adaptado su normativa. Véase, GONZALEZ CABRERA, Inmaculada: “La liberalización de los servicios en el mercado interior y su incidencia en la actividad de las agencias de viajes”, *Aranzadi Civil*, núm. 4, Año 2010.

<sup>72</sup> En este sentido, el artículo 1.254 del Código civil: “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio”. La legislación de carácter general aplicable a los contratos se encuentra establecida principalmente en el Código civil en su Libro IV De las obligaciones y contratos, artículos 1.088 y subsecuentes, de manera similar se encuentran regulados los contratos en el Código de Comercio en su Título IV del Libro I sobre las disposiciones generales sobre los contratos de comercio, artículos 50 al 63. Ambos Códigos de Derecho Privado regulan modalidades contractuales establecidas como son la compraventa, el arrendamiento, la

El contrato turístico es aquel mediante el cual una empresa turística, se compromete a favor del cliente, turista o consumidor, con el previo pago respectivo, para la prestación de una serie de servicios turísticos, además de otras prestaciones tendentes al efectivo goce de la estancia en uno o varios destinos previstos.<sup>73</sup>

Los contratos turísticos poseen entre ellos algunas características comunes: 1) Que las prestaciones objeto de los contratos turísticos son realizadas fuera del lugar de residencia habitual del turista; 2) Que la motivación vacacional o de esparcimiento que anima al turista a contratar servicios de esa naturaleza comienza a adquirir un significado especial, presente en los Tribunales que otorgan indemnizaciones al turista por unas “vacaciones arruinadas”, y 3) Que los contratos turísticos pueden establecer todos los pactos, cláusulas, modalidades y condiciones que establezcan las partes, siempre que estas no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público como lo establece el artículo 1.255 del Código Civil.<sup>74</sup>

Existen normas jurídicas que son de aplicación preferente a las de carácter general, por ejemplo cuando un turista participe en una determinada relación contractual (un contrato de transporte o de viaje combinado).

En principio, los contratos que tengan por objeto la prestación de algún servicio, le son de aplicación las normas que regulan la contratación privada, sean de carácter general

---

donación, etc. Sin embargo, en los últimos años se aprecia una nueva tendencia de contratos no regulados o establecidos en leyes especiales.

<sup>73</sup> MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *El contrato de viaje combinado (antecedentes, derecho comparado, estudio normativo y jurisprudencial)*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 21, los define como: “Aquellos por medio de los cuales el operador turístico sea organizador o detallista, se compromete a favor del cliente, y previo pago, a prestar una serie de servicios turísticos, pudiendo incluir o no el viaje, además de otras prestaciones tendentes al efectivo goce de la estancia en uno o varios destinos previstos.”. Igualmente, BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María: “Contratos turísticos, de alojamiento de personas y avituallamiento”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.), *Tratado de contratos, Tomo IV* de Tirant lo blanch, Valencia, 2009, p. 4753; BARBA DE VEGA, José, / CALZADA CONDE, María de los Ángeles: *Introducción al Derecho privado del turismo*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, p. 329, define a los contratos turísticos como: “...todos los contratos celebrados con empresas turísticas y que tengan por objeto servicios turísticos.”.

<sup>74</sup> AURIOLES MARTÍN, Adolfo: *Op. cit.*, p. 47. En el mismo sentido PEREZ DE LA CRUZ, Antonio: “Los contratos turísticos”, *Op. cit.*, pp. 275-276, las características que poseen los contratos turísticos son: a) Se trata, en primer lugar, de que se consustancial a todas las figuras el que uno de los contratantes (el particular), recibe la prestación o prestación a que contractualmente tiene derecho fuera del lugar de su habitual residencia y, por consiguiente, imposibilitado, o cuanto menos, en dificultades para cuidar de la defensa de sus derechos en circunstancias equiparables a cómo podría hacerlo en el lugar de su domicilio habitual...; b) El segundo elemento a considerar es el carácter de esparcimiento, con que, por regla general (hasta podría decirse, que de manera esencial), el turista celebra el contrato de esta naturaleza...”.

(el código civil y el código de comercio) o especial (el TRLGDCU y la Ley de condiciones generales de la contratación).

La contratación turística se puede hacer sin la presencia física simultánea de usuarios y de prestadores directos de los servicios demandados (contratación a distancia y medios electrónicos). Las prestaciones de los servicios turísticos contratados, se reciben o desarrollan en un lugar alejado del entorno individual, por lo que habrá que evitar los abusos, protegiendo especialmente a los usuarios de servicios turísticos o turistas, que habrá contratado el servicio con antelación al momento en que espera recibirlo, con entrega de cantidades a cuenta del precio.<sup>75</sup>

## **1.2. Clasificación de los contratos turísticos.**

Los contratos turísticos se pueden clasificar de la siguiente manera:<sup>76</sup>

1.- Contratos preparatorios de actividad turística, contratos celebrados entre empresarios relacionados con el sector y que tienen por objeto, organizar la infraestructura adecuada para proporcionar los correspondientes servicios, encontramos en esta categoría el contrato de gestión hotelera y reserva de un cupo de plazas de alojamiento.

2.- Contratos relativos al alojamiento: hospedaje y aprovechamiento por turno de inmuebles turísticos.

3.- Contratos relativos al transporte: El contrato de pasaje y los transportes de personas.

4.- Contratos relativos al avituallamiento: el contrato de catering.

5.- El contrato de servicios combinados: el crucero turístico, viaje combinado o á forfait.

Algunos de estos contratos turísticos están dotados de un régimen jurídico propio como es el contrato de viaje combinado y el de transmisión de derechos de aprovechamiento por turno o el de transporte. Sin embargo, otros carecen de regulación individual específica, como el contrato de hospedaje o el de gestión

---

<sup>75</sup> BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María: “Contratos turísticos, de alojamiento...”, *Op. cit.*, p. 4753.

<sup>76</sup> PERÉZ DE LA CRUZ, Antonio: “Los contratos turísticos”, *Op. cit.*, pp. 279-280. Los contratos turísticos han tenido diversas clasificaciones por diferentes autores, como AURIOLES MARTÍN, Adolfo: *Op. cit.*, p. 52-53, pueden ser de “a) alojamiento...; b) viajes combinados; c) transporte...”; véase también MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *Op. cit.*, pp. 131-132.

hotelera. Por lo que éstos son sometidos a las reglas legales previstas para otras figuras contractuales con las que presentan alguna similitud y, en último caso, con las reglas generales de las obligaciones y contratos contenidas en los códigos de Derecho privado.

De toda la clasificación de los contratos turísticos anteriormente mencionados, se distinguen en dos bloques:<sup>77</sup>

1.- Los contratos turísticos de consumo, que son aquellos en los cuales interviene el turista como destinatario final de la prestación de servicios turísticos. Los contratos de consumo pueden ser directos o de mediación. Son directos, en cuanto a la celebración directa entre el turista y el prestador de los servicios turísticos. Los de mediación son contratos celebrados entre el turista y una agencia de viajes que ejerciendo funciones de intermediación, ofrece servicios ajenos (como son los contratos de alojamiento y de viaje combinado).

2.- Los contratos turísticos inter-empresariales, que son aquellos que vinculan entre sí a las distintas empresas prestadoras de servicios turísticos y que tienen por finalidad la coordinación inter-empresarial a fin de poder estructurar en las mejores condiciones posibles, la oferta de contratos turísticos de consumo y en especial la oferta de viajes combinados.

### **1.3. Las condiciones generales de la contratación en el sector turístico.**

La mayoría de los contratos turísticos celebrados con los usuarios o turistas tienen una característica con los contratos denominados “de adhesión”. Esto significa, que se tratan de contratos con un contenido establecido unilateralmente por una empresa turística, y que ostenta una posición de mayor fuerza frente a los usuarios o turistas más débiles.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> En este sentido, CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PÉREZ GUERRA, Raúl: *El contrato turístico de alojamiento hotelero*, Comares S.L., Granada, 2001, pp. 36-37; AURIOLÉS MARTÍN, Adolfo: *Op. cit.*, p. 53.

<sup>78</sup> El ordenamiento jurídico español regula la utilización de las condiciones generales de la contratación y el desequilibrio contractual en la Ley 7/1998, de 13 de diciembre, de Condiciones Generales de la Contratación, RCL\1998\960, y sobre todo en el Texto Refundido para la defensa de los consumidores y usuarios en los artículos 80 al 91. Estas dos normativas son de gran importancia para el tráfico jurídico porque regulan las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación. La justificación de establecer condiciones generales dentro de los contratos turísticos es la de “simplificar las relaciones económicas entre agencias de viajes y consumidores ha determinado el desarrollo de nuevos modelos negociales que suponen una

Los contratos turísticos son considerados como de “tipo o en masa”, porque constituyen modelos con idéntico contenido que se ofrecen por las empresas a una pluralidad de posibles contratantes. Se llaman de “adhesión”, porque el clausulado contenido en el contrato no ha sido negociado individualmente, de tal forma que la otra parte no puede hacer otra cosa más que aceptar las condiciones que se le ofrecen o rechazar el contrato.<sup>79</sup>

En los contratos denominados de “condiciones generales”, el artículo 1.1 de la LCGC, puntualiza que “son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.

La contratación no negociada puede estar regulada desde dos perspectivas distintas, por la Ley de condiciones generales de la contratación (LCGC) y por la de la protección al consumidor (TRLGDCU). La parte que acepta o se adhiere en los contratos con condiciones generales puede ser un consumidor o una empresa. En consecuencia, es la condición del adherente la que determine la aplicación de las normas sobre condiciones generales de la contratación, ya que se establecen distintos niveles de protección.

De manera que en el ordenamiento jurídico español, encontramos una regulación general sobre las condiciones generales de la contratación y una reglamentación especial sólo para los contratos con consumidores. En el caso de los consumidores se regula el control de las cláusulas abusivas contenida actualmente en el Título II del

---

reducción del tiempo de contratación y una regulación uniforme y detallada del contenido del contrato de viaje.”, MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *Op. cit.*, p. 133; así también, JAIMEZ TRASIERRA, María del Carmen: “La protección de los consumidores y usuarios y su aplicación en materia turística”, en *Derecho y legislación civil para estudios de turismo*, Cit., p. 299, las condiciones generales: “Permiten que se lleve a cabo una contratación en masa con una consiguiente reducción de los costes, de forma que económicamente, es necesario mantener este tipo de contratación, pero obliga a que el legislador adopte una serie de medidas tendentes a proteger a la parte más débil, que es aquella que se ve privada de intervenir en la redacción de estas condiciones y por tanto a quien se imponen las mismas.”.

<sup>79</sup> Para un mayor estudio sobre los contratos de adhesión y las condiciones generales de la contratación, véase ALBALADEJO, Manuel: *Derecho civil II, Derecho de Obligaciones*, 18ª Ed., Edisofer, Madrid, 2009, pp. 431 y ss.; Díez-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Tomo I, Introducción, Teoría del contrato*, Thomson-Civitas, 6ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2007, los contratos de adhesión pp. 415-421, las condiciones generales de la contratación pp. 437-461; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “Los contratos de adhesión y la contratación electrónica”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.) *Tratado de Contratos, Tomo II*, de Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 1585 y ss.

Libro II del TRLGDCU, cuyo ámbito de aplicación no es sólo el de las condiciones generales, sino también sobre las cláusulas no negociadas individualmente.<sup>80</sup>

Sobre los contratos turísticos normalmente el adherente es un consumidor, es decir, un turista (pero, además también existen contratos turísticos con condiciones generales que intervienen solo empresas, como es el caso de un contrato entre una agencia mayorista y una detallista). A lo que el régimen aplicable sobre una cláusula no negociada individualmente que no sea una condición general porque no se haya redactado para incorporarse a una pluralidad de contratos sino a uno sólo, será tutelado exclusivamente por el TRLGDC.<sup>81</sup> Pero en los casos en los que una cláusula sea una condición general y el adherente sea un consumidor se aplicara tanto la LCGC como el TRLGDCU.<sup>82</sup>

## **2. SUJETOS, OBJETO Y CAUSA (VID. INFRA. I Y I.5 DE LA PARTE ESPECIAL).**

Los contratos turísticos por lo general son bilaterales, por lo que existe la presencia de dos partes que son: el consumidor o usuario (turista) que es el destinatario final de las prestaciones de que se trate, y el suministrador, generador o productor de las prestaciones turísticas, en este caso el empresario turístico.

### **2.1. Empresas turísticas.**

Las empresas turísticas son personas físicas o jurídicas que adquieren, combinan y organizan factores de producción para acudir al mercado ofreciendo bienes y servicios (en nuestro estudio, servicios turísticos) lucrándose con la diferencia entre el coste de los factores y el precio o remuneración obtenida por su colaboración en el mercado.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Sobre las cláusulas no negociadas individualmente el TRLGDCU en su artículo 82 considera como cláusulas abusivas, al establecer que: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”; además que de los artículos 85 a 90 del TRLGDC, se establecen diferentes tipos o casos cláusulas abusivas que se regulan y protegen al consumidor.

<sup>81</sup> PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “Los contratos de adhesión y la contratación electrónica”, *Op. cit.*, p. 1589.

<sup>82</sup> Así lo dispone el artículo 59.3 del TRLGDCU, “Los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones generales, serán sometidos además a la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación.”.

<sup>83</sup> Así, PERÉZ DE LA CRUZ, Antonio: “Los contratos turístico”, *Op. cit.*, p. 277. Existen diversos autores que dan una interpretación de lo que son las empresas turísticas, como es AURIOLES MARTÍN, Adolfo: *Op. cit.*, p. 53, a las empresas turísticas se les “identifica como el sujeto (persona física o jurídica) que, con carácter habitual y de manera profesional, se dedica a la prestación de servicios turísticos.”.



Como se menciona en el párrafo anterior, las empresas turísticas pueden ser bien como persona física (empresario individual) o como personas jurídicas (empresa societaria). En el caso del empresario individual, éste ejerce su actividad comprometiendo en ella todo su patrimonio, y para realizar legamente su actividad debe cumplir con ciertos requisitos (capacidad legal, de ejercicio habitual de la profesión y ejercicio en nombre propio). Es más frecuente que se presente una empresa turística como una sociedad mercantil, la cual nace con un contrato en el que concurren 4 elementos esenciales (consentimiento, forma, objeto y causa), y a través del contrato societario el empresario turístico puede optar por un tipo de sociedad mercantil colectiva, comanditaria, anónima o de responsabilidad limitada.<sup>84</sup>

La Ley 48/1963, de 8 de julio, sobre competencia en materia turística, supuso los principios básicos que han servido para regulaciones posteriores sobre esta materia, ya que dicho estatuto no prevé un concepto genérico de empresa turística, sino solo una pequeña clasificación de éstas.<sup>85</sup>

Es importante señalar, que mediante el Decreto 231/1965, de 14 de enero, actualmente derogada, se regulaba el estatuto de empresas y actividades turísticas, en donde no solo se establecía un concepto de carácter amplio y abierto de ellas, sino que también mencionaba los diferentes tipos de empresas que existían en el sector turístico.<sup>86</sup>

Sin embargo, mediante el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero<sup>87</sup>, se derogaron diversas disposiciones estatales (entre ellas el Decreto 231/1965) sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio, otorgando la ordenación de estos empresarios a

---

<sup>84</sup> Véase, BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, pp. 245-252.

<sup>85</sup> Ley 48/1963, de 8 de julio, (westlaw RCL\1963\1336), en su artículo tercero señala que: "...será igualmente función propia del Ministerio de Información y Turismo la ordenación y vigilancia de las empresas de hostelería o de cualesquiera otras de carácter turístico, así como de los alojamientos o instalaciones de igual naturaleza y de las profesiones turísticas...". AMAT LLOMBART, Pablo: *Op. cit.*, p. 266, menciona que: "A pesar de los años que está en vigor y de tratarse de una norma preconstitucional, sin embargo gran parte del contenido del Estatuto tiene aplicabilidad directa, y en última instancia se considera como derecho supletoria en la mayor parte de las Comunidades Autónomas."

<sup>86</sup> Decreto 231/1965, de 14 de enero (westlaw RCL\1965\364), en el artículo 1.2: "Se entiende por Empresa Turística: a) Las de hostelería; b) Las de alojamiento turísticos de carácter no hotelero; c) Las agencias de viajes; d) Los restaurantes; e) Las agencias de información turística; e) Cualesquiera otras que presten servicios directamente relacionados con el turismo y reglamentariamente se determinen como tales..."

<sup>87</sup> Real Decreto 39/2010, de 15 de enero (westlaw RCL 2010\227).

los Decretos dictados por las distintas Comunidades Autónomas, conforme al desarrollo de la regulación contenida en sus respectivas leyes de ordenación turística.

En consecuencia, para precisar un concepto sobre las empresas turísticas, hay que acudir a la legislación autonómica, que establecen una regulación sobre las empresas que intervienen y las actividades que éstas desarrollan en el sector turístico. En la Ley de turismo de la comunidad de Valencia en su artículo 4 considera como empresas turísticas “las personas físicas o jurídicas que realicen una actividad cuyo objeto sea la prestación de cualquiera de los servicios turísticos”.<sup>88</sup>

Por lo tanto, se puede definir que las “empresas turísticas” son personas físicas o jurídicas, que con carácter habitual y de manera profesional, se dedican a la prestación de servicios turísticos.

Es importante señalar, que previo al comienzo de cualquier actividad de una empresa turística, deberá obtener la autorización proveniente del órgano administrativo correspondiente, tener una la licencia otorgada para la actividad turística, y la empresa debe estar correctamente registrada en el correspondiente Registro Administrativo al territorio de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio o donde desarrollen su actividad.<sup>89</sup>

## **2.2. Los consumidores o usuarios turísticos, “el turista”.**

La Unión Europea persigue como principales objetivos, una política de protección a los consumidores y la adopción de medidas encaminadas a la promoción del turismo,

---

<sup>88</sup> Ley 3/1998, de 21 de mayo, de turismo de la Comunidad Valenciana (westlaw LCV\1998\156), además especifica que: “Se consideran establecimientos turísticos, los locales o instalaciones abiertos al público y acondicionados de conformidad con la normativa en su caso aplicable, en los que las empresas turísticas presten alguno o algunos de sus servicios.”. Los servicios turísticos los enumera en el artículo 3. En otras regulaciones autonómicas también se definen a las empresas turísticas, tal es el caso de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de turismo de Madrid (westlaw LCM\1999\146), en su artículo 10 “Son empresas turísticas a los efectos de la presente Ley, todas aquellas que, mediante precio y de forma profesional y habitual, bien sea de modo permanente o temporal, prestan servicios en el ámbito de la actividad turística.”; o el caso de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de turismo de Andalucía (westlaw LAN\1999\431), en su artículo 2 e) “Empresas turísticas: Las personas físicas y jurídicas que, en nombre propio y de manera habitual y con ánimo de lucro, se dedican a la prestación de algún servicio turístico.”; también la de Islas Baleares, Galicia y otras más.

<sup>89</sup> El incumplimiento de estas obligaciones determinará dicha empresa como clandestina y dará lugar a la atribución de las correspondientes sanciones. Sin embargo, desde la visión del derecho de obligaciones y contratos, las relaciones jurídicas que se realicen carecerán de efectos jurídicos, porque tales contratos no tendrán la validez y la exigibilidad de las prestaciones turísticas derivadas de los mismos, véase, BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, pp. 252-254.

conforme lo establecido en los Tratados. El apoyo y fomento de la Unión Europea hacia el turismo, se ha proyectado en dos estrategias distintas: 1) la perspectiva del turismo como apoyo institucional y financiero y; 2) la protección del sujeto activo de dicha actividad, esto es, el turista.<sup>90</sup>

El turista es esencialmente un consumidor de productos y servicios turísticos, lo cual ha llevado a la Unión Europea, a diseñar una serie de medidas legales dirigidas a la protección del turista por encontrarse lejos de su lugar de origen, teniendo así una posición frágil como consumidor.<sup>91</sup>

### **3. LA PROTECCIÓN DEL TURISTA EN LOS CONTRATOS TURÍSTICOS DENTRO DEL ÁMBITO JURÍDICO PRIVADO.**

Referida la política comunitaria del turismo y del turista en el apartado anterior, es importante señalar la protección en el sistema jurídico privado que recibe el consumidor o usuario de servicios turísticos, “el turista”.<sup>92</sup> Como sabemos, el Derecho privado regula las relaciones y procura resolver los conflictos suscitados entre particulares. En relación con el objeto del estudio turístico, se regulan los distintos tipos de contratación derivados de las actividades turísticas y dar protección al turista de los posibles problemas, reclamaciones o litigios que pueda presentarse, por ser parte implicada en el contrato.

Las relaciones entre el turista y la empresa prestadora de servicios turísticos, se articulan y configuran a través del esquema típico que el Derecho privado ha preestablecido para propiciar el intercambio de bienes y servicios, que es el contrato.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Conforme a lo establecido en el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007.

<sup>91</sup> De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el turista es: “la persona que hace turismo”. Así, JANER TORRENS, Joan David: “La protección del turista como consumidor en el marco del Derecho de la Unión Europea”, en TORRES LANA, José Antonio / TUR FAÚNDEZ, María Nélida / JANER TORRENS, Joan David, *La protección del turista como consumidor* de Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 30, “el hecho de que el turista celebre contratos turísticos de distinta naturaleza ha determinado la adopción de un conjunto de disposiciones comunitarias dirigidas a evitar irregularidades en la celebración de contratos y a dotar de la máxima protección al turista”. Las diversas directivas y reglamentos emitidos por la Unión Europea en materia de turismo fueron señaladas en capítulos anteriores.

<sup>92</sup> TORRES LANA, José Antonio: “La protección del turista en el ámbito jurídico privado”, *Op. cit.*, p. 56, “la figura del turista en el ámbito del derecho privado, es la persona que adquiere los llamados servicios turísticos”.

<sup>93</sup> Existe un desequilibrio en los contratos turísticos sobre la autonomía privada, porque regularmente el turista se encuentra en una situación inferior frente al que presta el servicio, con el que se pierde una libertad de negociación. Además en la celebración del contrato no existe una igualdad de forma, porque la

Por lo que el Derecho privado debe tomar en consideración los derechos de los turistas, ante cualquier vulneración de sus legítimos intereses económicos y sociales, conforme a las relaciones contractuales adquiridas con las empresas turísticas, con un nivel de protección en las condiciones generales de la contratación y de las cláusulas abusivas.

Desde la perspectiva del Derecho privado español, el turista como consumidor recibe una protección general y una especial. La protección general, es aquella regulada para todo consumidor, es decir, lo establecido en el Texto Refundido para la Defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.<sup>94</sup> Por otra lado, la protección especial que es aquella aplicable al ámbito o sector en el que se contrate.<sup>95</sup> El Código civil será la primera Ley supletoria ante la ausencia de normas protectoras al turista, aplicando los principios generales del Derecho, además de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.

La defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito turístico, se plasma en una pluralidad de leyes y disposiciones, alguna de las cuales contemplan específicamente

---

parte más poderosa es la que realiza la estructura del contrato. Por lo que con los reglamentos y directivas de protección a los consumidores o usuarios del Derecho comunitario, se deben aplicar en el Derecho interno para la protección de los derechos del turista. En este sentido, *Ibid.*, pp. 56 y 57.

<sup>94</sup> Conforme con la aplicación del mandato constitucional establecido en el artículo 51.1: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismo,”; el artículo 51.2: “Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuario, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.”; y de acuerdo con el artículo 53.3: “El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen.”. Es importante señalar que existe una nueva Directiva a nivel Europeo sobre un mejor protección de los derechos de los consumidores, la cual es: Nueva Directiva Del Parlamento Europeo y Del Consejo 2011/83/UE de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores. Los Estados miembros de la Unión Europea, en el caso específico España, tiene como plazo límite hasta el 13 de diciembre de 2013 para transponer en su normativa de consumidores las nuevas medidas que tutela la Directiva antes mencionada.

<sup>95</sup> Así, BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, pp. 224 y 225, distingue entre el *estatuto básico del turista* y el *estatuto del turista de calidad*, que dice: “...en el *estatuto básico del turista*, se limita a beneficiarse de las técnicas de protección de que disfrutaban con carácter general los consumidores y usuarios. Lo singular de la legislación autonómica en esta materia es la introducción de nuevos derechos cuyo común denominados es la aspiración a que exista un turismo de calidad. Las manifestaciones más avanzadas del *estatuto del turista de calidad* las encontramos en la legislación canaria. Hay quienes buscan descanso y relajación; en ese caso no basta con que el empresario observe las correspondientes reglas de cortesía y hospitalidad; se requiere algo mas, y por ello se reconoce al turista el derecho a la tranquilidad a la paz y al sosiego...”.

la protección de los turistas en la contratación de servicios turísticos.<sup>96</sup> Sin embargo, en el TRLGDCU se expone de forma sistemática los mecanismos jurídicos para la defensa de los sujetos que utilizan los llamados servicios turísticos, incluyendo de manera específica en su Libro IV sobre los contratos de viajes combinados, conocidos comúnmente como paquetes turísticos. Además, por medio de la normativa autonómica vigente, los turistas tienen una protección sobre la contratación de servicios turísticos que se formalicen y ejecuten dentro de la comunidad autónoma.<sup>97</sup>

La protección jurídica que recibe el turista, se puede comprender en 5 derechos generales, al ser usuarios o consumidores de servicios turísticos:

1.- El usuario turístico tiene el derecho de obtener con anticipación a la celebración del contrato, la información correcta sobre los bienes o servicios turísticos que quiera contratar, la cual deberá ser exacta y completa respecto a las modalidades, condiciones y precios pactados.<sup>98</sup>

La existencia del derecho a la información se fundamenta en la desigualdad de conocimientos que los contratantes presentan en las relaciones jurídico-privadas, es por tanto que el derecho a la información es uno de los elementos fundamentales de toda política de defensa de los consumidores, porque si el consumidor está bien informado, éste elige mejor.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Tal es el caso de la Ley 4/2012, de 6 de julio (westlaw RCL\2012\946), de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias.

<sup>97</sup> En este sentido, la protección que tiene el turista es un derecho de información sobre actividades turísticas de aventura como son el montañismo, esquí, rafting, etc., como es la intensidad de peligro que asumen, conforme al artículo 18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: “2. Las empresas deberán informar inequívocamente al usuario turístico de las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de seguridad adoptadas; 3. Igualmente, informara de la edad mínima para la práctica de actividades con riesgo, quedando prohibida la oferta a menores de entretenimientos que supongan algún peligro para su integridad física o salud mental; 4...; 5...”.

<sup>98</sup> El Derecho a la información constituye uno de los derechos básicos que el artículo 8 d) del TRLGDCU reconoce al consumidor o usuario de bienes y servicios, tan es así que el propio TRLGDCU le dedica el Capítulo IV (arts. 17 y 18), para que los consumidores puedan asegurarse de la identidad de los bienes y servicios que van a adquirir.

<sup>99</sup> Así, GARCÍA VICENTE, José Ramón: “La contratación con consumidores”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.), *Tratado de Contratos, Tomo II, Op. cit.*, p. 1474, señala que: “los deberes de información persiguen asegurar la libertad y racionalidad de la decisión de contratar, esto es, se trata de asegurar el correcto juicio de conveniencia económica u oportunidad del contrato. Conciérne, por tanto, a la decisión misma de contratar, para ello se informa antes de la celebración del contrato (son deberes precontractuales) sobre las distintas circunstancias económicas y jurídicas a las que se someterá el contrato, sobre la aptitud del empresario o profesional para satisfacer el fin del contrato, e incluso sobre los derechos legales de los que disfrutará el consumidor, en particular el derecho a separarse, en su caso, del contrato celebrado...”; también DE LEÓN ARCE, Alicia / GARCÍA GARCÍA, Luz María (Dirs.):

La información previa a la contratación de servicios turísticos, normalmente es recibida por el turista mediante la publicidad, la cual debe contener los mismos elementos que una información precontractual (información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales).<sup>100</sup> Normalmente, las agencias de viajes emiten folletos informativos para la contratación de servicios turísticos, como es el caso del viaje combinado, en el cual conforme al TRLGDCU en los artículos 152 y 153 se regula el folleto informativo como una información precontractual, exigiendo una clara, comprensible y precisa información de los folletos y programas vinculantes al viaje combinado.

Por lo tanto, el turista tiene una protección antes de la celebración de contratos turísticos, que es de recibir una información veraz, completa y previa a la contratación sobre bienes y servicios que se le oferten, considerando como infracción grave la utilización de información o publicidad que induzca a engaño en la prestación de los servicios, así como el uso de sistemas agresivos de promoción de ventas.

2.- Exactitud de los servicios contratados. El turista tiene el derecho a recibir la correcta ejecución de las obligaciones contractualmente establecidas, previo pago del precio pactado.<sup>101</sup> Salvo pacto en contrario, cualquier cambio que se produzca con

---

*Derecho de los consumidores y usuarios, (doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios), Tomo I, Tirant lo Blanch, 2ª Ed., Valencia, 2007, p. 196, “La razón de la existencia del derecho a la información, que se reconoce al consumidor, tiene su origen en el desequilibrio y desigualdad de conocimientos de aquél sobre los bienes y servicios en relación con los que los fabrican y los distribuyen; y viene justificada, entre otras causas, por la complejidad técnica de muchos productos, la existencia de una gran variedad de bienes y servicios ofrecidos que tienden a satisfacer idénticas necesidades haciendo difícil la elección por parte del consumidor, que duda sobre cuál es el más aconsejable para obtener los mejores resultados...”.*

<sup>100</sup> En este sentido, GARCÍA VICENTE, José Ramón: “La contratación con consumidores”, *Op., cit.*, p. 1474, “...en ocasiones se regula la publicidad (que si tiene contenido informativo será exigible contractualmente, arts. 61.2 TRLGDCU y 13 LVPBM) o las denominadas ofertas vinculantes (arts. 16 y 17 LCC), e incluso, los denominados folletos o documentos informativos que tienen el mismo valor que la oferta (así, los arts. 152 TRLGDCU y 8.2 LATBI)... El legislador de consumo maneja denominaciones diferentes para el fenómeno de la información previa, estas diferencias responden probablemente a la práctica comercial en ciertos sectores, así el bancario con las ofertas vinculantes, o los folletos, programas-oferta o documentos informativos, en el aprovechamiento por turno o los viajes combinados.”.

<sup>101</sup> El Código Civil en su artículo 1.156 regula la forma en que se extinguen las obligaciones, siendo la principal “por el pago o cumplimiento”. De igual forma, en el artículo 1.157 del Código Civil establece que: “No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o *hecho la prestación en que la obligación consistía.*”, los servicios turísticos son prestaciones que el empresario debe cumplir. Desde el punto de vista objetivo el cumplimiento tiene que realizarse exactamente en la forma establecida en el acto constitutivo de la obligación, la prestación a cumplir a de ser la pactada y no otra distinta, así en el “Código Civil, comentarios y jurisprudencias”, (Obra Col.), Colex, 16ª Ed., 2007, Madrid, p. 794.

posterioridad a la celebración del contrato debe ser acordado previamente entre las partes.

En el caso del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios contratados en el sector turístico, se puede exigir la responsabilidad civil a la empresa turística responsable, como sucede en el contrato de viaje combinado regulado en el TRLGDCU en su capítulo II sobre el incumplimiento, responsabilidad y garantías, el cual se analizara más adelante.

El derecho del cumplimiento de la prestación debida, en algunas legislaciones autonómicas se le reconoce al turista como el derecho a recibir los servicios turísticos “en las condiciones contratadas”, por ejemplo en Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana.<sup>102</sup>

3.- El derecho a la formalización del contrato, con la obligación del empresario de entregar copia del mismo, ya sea un recibo, factura o algún documento análogo. El turista al ser un consumidor o usuario de servicios turístico, tiene la protección del Derecho contractual de consumo, de haber optado por exigir imperativamente que el contrato se incorpore a una forma determinada (de forma escrita), para satisfacer los deberes de información que pesan sobre el empresario. Con la intención de que el consumidor disponga de un medio de prueba, para que haya alguna constancia de su celebración o ejecución, lo cual constituye uno de los mecanismos de protección contractual del consumidor y a la vez del turista.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> El artículo 34.b de la Ley 8/199, de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha, establece que “El usuario turístico tendrá los derechos que le otorga la normativa en materia de defensa del consumidor y usuario, y en particular los siguientes: a)... b) Recibir los servicios turísticos en las condiciones contratadas...”; El artículo 8 b) de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de ordenación del turismo de la Comunidad de Madrid, regula que: “Los usuarios turísticos... tendrán los siguientes derechos: a)...; b) A que se le faciliten los bienes y servicios turísticos en las condiciones contratadas...”; el artículo 43 b) de la Ley 6/1994, de 16 de marzo de ordenación del turismo en el País Vasco, menciona que los usuarios de servicios turísticos tendrá el derecho a: “...b) Recibir los servicios turísticos en las condiciones contratadas...”; el artículo 17.1.2 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo de turismo de la Comunidad Valenciana, establece que los turistas tienen derecho a: “...2. Recibir los servicios turísticos en las condiciones contratadas y obtener cuantos documentos acrediten los términos de su contratación y, en cualquier caso, facturas legalmente emitidas. 3...”.

<sup>103</sup> GARCÍA VICENTE, José Ramón: “La contratación con consumidores”, *Op. cit.*, pp. 1532-1537, en el artículo 63 del TRLGDCU se exige la entrega a los consumidores o usuarios de la “confirmación documental de la contratación,” que es la obligación de entregar recibo, copia o documento acreditativo del contrato celebrado, además de las posibles condiciones generales establecidas conforme al artículo 80.1 b) de TRLGDCU.

En el caso de los contratos turísticos, la formalidad escrita se presenta en el contrato de viaje combinado, por lo que se exige una forma predeterminada del contrato con un contenido obligatorio, independientemente de la “confirmación documental” que requiere el artículo 63 del TRLGDCU.<sup>104</sup>

4.- Los turistas tienen derecho a la protección sobre prácticas comerciales desleales y la no inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Como se menciono anteriormente, este derecho versa sobre un control de las condiciones generales establecidas dentro de los contratos turísticos, en los que el turista acepta y adhiere. Por lo tanto esas condiciones o cláusulas preestablecidas unilateralmente deben reunir criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez para que no sean consideradas como abusivas y consecuentemente tengan validez. Así, el consumidor o turista no se verá perjudicado en un desequilibrio contractual frente al empresario turístico.<sup>105</sup>

5.- Por último, tener una seguridad en su persona y bienes, así como la protección de sus derechos en calidad de consumidores, pudiendo formular reclamaciones y ejercitar procedimientos administrativos y judiciales para el mantenimiento y reposición de sus derechos previstos en la Ley.

Es un derecho básico del consumidor o turista, el cual se encuentra protegido frente a riesgos que afecten su salud y su integridad física, es por ello que el TRLGDCU otorga a los consumidores y usuarios una protección mínima.<sup>106</sup> Algunas de las leyes autonómicas, hacen referencia que los usuarios de servicios turísticos tengan un derecho a su seguridad personal y sobre sus bienes.<sup>107</sup>

Como se menciono en párrafos anteriores, ante un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de algún servicio turístico contratado, el turista tiene la facultad de reclamación de sus derechos ante los Tribunales competentes, o podrán

---

<sup>104</sup> En el contrato de viaje combinado conforme al TRLGDCU en su artículo 154 se exige una “forma y contenido”.

<sup>105</sup> Véase, la parte general, capítulo II.1.3. “Las Condiciones Generales de la Contratación en el sector turístico”.

<sup>106</sup> Se encuentra regulado en el Capítulo III del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otros Reglamentos.

<sup>107</sup> Artículos 23.1 d) de la Ley 12/1998, de 15 de diciembre, de turismo de Andalucía; 15: c) y 18 de la Ley 7/1995, de 6 de febrero, de ordenación del turismo en Canarias; 23 d) de la Ley 5/1999, de 24 de marzo, de ordenación del turismo de Cantabria; 18.2 a) de la Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promoción del turismo de las Islas Baleares; y otras más.



ejercitar acciones en las entidades legitimadas, como son las llamadas “acciones de cesación”. Además, cualquier conflicto derivado de un contrato turístico, por ser el turista un consumidor, se puede resolver ante el Sistema Arbitral de consumo, sometiéndose voluntariamente a laudo arbitral, y por último, la posibilidad de que las partes acuerden otro tipo de solución apegada a derecho.<sup>108</sup>

#### **4. LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS TURÍSTICOS.**

Mediante el comercio electrónico se presentan nuevas formas de contratación. Una buena parte de los productos que se vende vía Internet (*on line*) son productos y servicios relacionados con el turismo.

En los contratos electrónicos de carácter turísticos, existen unos deberes de información, formalización y documentación, que son similares a los celebrados entre dos partes presentes físicamente, por lo que deben tener una regulación rigurosa, al ser una contratación electrónica practicada sin papel y a distancia.

La legislación aplicable en la celebración de contratos electrónicos de servicios turísticos es:

1.- La Ley 34/2002, de 11 de julio, de *Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*, que tiene su precedente en la Directiva 2000/31CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior.

2.- El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el *Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, en específico en la regulación sobre la contratación de viajes combinados, y por otro lado la Ley 4/2012, de 6 de julio, de *contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias*, al ser las únicas dos legislaciones estatales existentes en materia de turismo, tras la modificación realizada por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que las

---

<sup>108</sup> En el Libro I, del Título V, artículos 53 al 58 del TRLGDCU se regulan los procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios, así como también las “acciones de cesación” y el “Sistema Arbitral de Consumo”.

Comunidades Autónomas serán las que adopten una legislación en materia de agencias de viajes y ordenación del turismo.

3.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de *Protección de Datos de Carácter Personal*, desarrollada por el Real Decreto 170/2007, de 21 de diciembre.

Es importante señalar, la problemática que se presenta en la protección de los derechos del consumidor turístico que contrata por medios electrónicos conforme al artículo 93.2 del TRLGDCU, según el cual: “Lo dispuesto en los artículo 96.1 y 2, sobre comunicaciones comerciales; 97, sobre información precontractual; 98, sobre confirmación escrita de la información; 101, sobre derecho de desistimiento, y 103, sobre ejecución y pago, no será de aplicación a: ...b) los contratos de suministro de servicios de alojamiento, de transporte, de comidas o de esparcimiento, cuando el empresario se comprometa al celebrarse el contrato a suministrar tales prestaciones en una fecha determinada o en un periodo concreto”. Unido a la disposición derogatoria única del TRLGDCU que hace referencia a la disposición adicional primera, segundo apartado, de la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de Reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de *Ordenación del Comercio Minorista*<sup>109</sup> que excluye la aplicación de ciertos derechos que tiene el consumidor sobre ventas a distancia a la prestación de servicios turísticos, expresamente “los contratos de servicios de alojamiento, de transporte...”, apartando la tutela por ejemplo, del derecho de desistimiento del consumidor, los deberes de información del empresario y el deber de información posterior. Sin embargo, no es causa suficiente para excluir los derechos que el turista tiene como consumidor y los deberes de información de las empresas establecidos en el capítulo anterior. Además, la Ley sobre comercio electrónico si tutela los derechos que no se quieren reconocer en las anteriores normativas.<sup>110</sup>

Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de *Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico*, se establecen una protección general a los

---

<sup>109</sup> Actualmente, existe una nueva reforma con la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

<sup>110</sup> Esta cuestión puede estudiarse en CAVANILLAS MÚGICA, Santiago (Obra Col.): *Turismo y comercio electrónico: La promoción y contratación on line de servicios turísticos*, Comares, Granada, 2001, pp. 9-20; YÁÑEZ VIVERO, Fátima: “La contratación electrónica de servicios turísticos tras la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico”, *Instituto de Empresa*, 2003, pp. 1-10; PANIZA-FULLANA, Antonia: “El derecho del turismo en la Unión Europea: regulación actual, novedades normativas y propuestas de futuro”, *Estudios Turísticos*, Ministerio de industria, turismo y comercio, núm. 184, 2010, pp. 99-133.

usuarios que efectúen una contratación electrónica de servicios turísticos, que se asemeja a lo establecido en el TRLGDCU.<sup>111</sup>

En la etapa precontractual existen unos deberes de información. En un primer plano la publicidad que se proporcione en Internet exige que se informe sobre la identidad de quien ofrece el servicio, en los términos del artículo 10 de la Ley 34/2002 “el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan... acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información: a) nombre o denominación social; b) datos de inscripción en el registro mercantil; c) autorización administrativa; d) en el caso en que ejerza una profesión regulada deberá indicar, entre otros extremos, el título académico oficial o profesional; e) información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando los impuestos que incluye, y; f) Los códigos de conducta a los que esté adherido y la forma de acceder a ellos electrónicamente”.<sup>112</sup>

Además, de los deberes de información precontractual mencionados en el párrafo anterior, el artículo 27 de la Ley 34/2002, establece que se debe informar “...de manera clara, comprensible e inequívoca, sobre, entre otros, los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato, si se va a archivar el documento electrónico contractual y si éste va a ser accesible, así como los medios técnicos que pone a disposición del contratante para identificar y corregir errores en la introducción de datos...”.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Con la Nueva Directiva Del Parlamento Europeo y Del Consejo 2011/83/UE de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores. España tendrá que transponer en su normativa vigente la nueva tutela y protección que regulan los derechos de los consumidores al momento de celebrar contratos a distancia, es decir, aquellos que se perfeccionen o realicen por medio del Internet.

<sup>112</sup> De la información sobre la identidad de quien ofrece el servicio solo destaco aquellos que tengan relación con la contratación turística, ya que existen más, TUR FÁUNDEZ, Mará Nélida: “Deberes de Información y documentación”, en CAVANILLAS MÚGICA, Santiago (Obra Col), *Op. cit.*, pp. 39-40, “la publicidad que se emite en las páginas *web* no está exenta de los requisitos de veracidad, eficacia y suficiencia que se exigen para toda la publicidad. Además, aunque no exista una normativa expresa para los casos en que se ofrece publicidad sobre algunos servicios turísticos, no se puede olvidar el derecho que tiene el consumidor a una información mínima sobre las cualidades esenciales del servicio que se le ofrece.”.

<sup>113</sup> Adaptado conforme lo establecido en el artículo 10 “información exigida” de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo, elativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, que trata de la información que debe proporcionar el prestador de servicios sobre la forma de celebrar el contrato y las diferentes modalidades de formación del mismo vía electrónica. TUR FÁUNDEZ, Mará Nélida: “Deberes de Información y documentación”, en CAVANILLAS MÚGICA, Santiago (Obra Col), *Op. cit.*, p. 43, destaca de gran importancia que: “... es muy frecuente que los contratos sobre servicios turísticos se celebren bajo la forma de condiciones generales, añade que el consumidor debe ser debidamente informado de las cláusulas generales aplicables al contrato, conforme lo recogido en el artículo 10.3 de la

En la etapa de celebración del contrato electrónico, la normativa sobre comercio electrónico exige al prestador de servicios deberes de información y de documentación. El artículo 28 de la Ley 34/2002, establece que “el oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios: a) el envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o; b) la confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario”.<sup>114</sup>

Por último, este apartado que hemos desarrollado es de un carácter amplio y general, en el que la contratación de servicios o actividades turísticas se pueden celebrar vía electrónica. Es necesario que en la presente investigación se mencionen las particularidades que tiene los contratos turístico cuando se realizan a través de los medios electrónicos y desde luego el vínculo jurídico que tienen con la teoría general de las obligaciones y contratos y el derecho de consumo, por lo que los contratos turísticos celebrados por medios electrónicos puede ser objeto de estudio en alguna otra investigación.

---

Directiva sobre comercio electrónico, =las condiciones generales de los contratos deben estar disponibles de tal manera que éste pueda almacenarlas y reproducirlas=”.

<sup>114</sup> La obligación de otorgar un acuse de recibo no es requisito de perfección del contrato, por tanto no afecta su validez y eficacia. El requisito de acuse de recibo complementa el proceso contractual y la omisión deriva una correspondiente responsabilidad por infracción leve, conforme al artículo 38.4 de la Ley 34/2002, sobre comercio electrónico. La fase contractual de los contratos electrónicos, véase TUR FÁUNDEZ, Mará Nélida: “Deberes de Información y documentación”, en CAVANILLAS MÚGICA, Santiago (Obra Col), *Op. cit.*, pp. 43-44, que hace referencia a lo establecido al artículo 11 de la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico.

## PARTE ESPECIAL.

### I. EL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.

#### **1. ACEPCIONES Y CONCEPTO DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

Partiendo de la idea de que la celebración de un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes del que nacen derechos y obligaciones. El tipo de contrato turístico que se investiga, es la prestación de servicios destinados a la realización de un viaje turístico de placer fuera de su domicilio habitual, con la combinación de diferentes prestaciones como un todo, lo cual es un atractivo para la sociedad del consumidor en la actualidad.

El turista al momento de contratar un producto turístico, ya no solicita un producto único y concreto, sino que exige la combinación de varios productos englobados en uno solo. Es por eso que al turista le resulta más cómodo, seguro y barato que le ofrezcan y le organicen un viaje, todo esto en busca de la necesidad de “disfrutar del tiempo libre en condiciones óptimas”.

Es de gran importancia jurídica lograr coordinar los diversos aspectos y factores que integran el desplazamiento vacacional o de ocio (el viaje) que realiza el turista, y de que se cumpla con la correcta prestación de todos los servicios turísticos combinados que se contratan. Este tipo de actividad o prestaciones contratados se presentan en los llamados contratos de “viajes combinados”.<sup>115</sup>

En el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras Leyes Complementarias, en su artículo 151.1 se define al contrato de viaje combinado como “la combinación previa de, por lo menos, dos de los siguientes elementos, vendida u ofrecida con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las veinticuatro horas o incluya una noche de estancia: **a) Transporte; b) Alojamiento; c) Otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado**”.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> AMAT LLOMBART, Pablo: *Op. cit.*, p. 281.

<sup>116</sup> Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras Leyes Complementarias, y en lo sucesivo TRLGDCU.

De la definición que da el TRLGDCU, podemos decir que el contrato de viaje combinado es el acuerdo de voluntades que expresan las partes, que mediante la combinación previa de los elementos como “transporte”, “alojamiento” y “otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado”, se generan derechos y obligaciones para ambas partes, sin olvidar que en este tipo de contrato turístico como es el de “viaje combinado”, se exige que la prestación de los servicios sobrepase las veinticuatro horas o como mínimo una noche de estancia y que se venda por un precio global.

Varios autores dan diversas opiniones sobre la definición del contrato de viaje combinado, de lo cual sobresale la importancia de la dirección técnica que el organizador asume durante la totalidad del viaje y que en consecuencia, crea la verdadera motivación para que el consumidor o turista se arriesgue a la realización de un viaje que normalmente no realizaría en otras condiciones. Otra de las finalidades del contrato de viaje combinado, es que el que se encarga de organizar el viaje combinado es quien resuelva y afronte cualquier contingencia que se presente.<sup>117</sup>

Sobre la definición del contrato de viaje combinado, tanto el que nos proporciona el TRLGDCU como el que se expuso en párrafos anteriores, se interpreta que los requisitos que debe reunir un contrato de viaje combinado son:

- a) El conjunto de por lo menos dos elementos de servicios turísticos principales, tales como el transporte y alojamiento, o transporte y otros servicios turísticos significativos, o bien la combinación de los tres. No se considera viaje combinado cuando una de las dos únicas prestaciones sea accesoria de la otra

---

<sup>117</sup> HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Ma. Dolores: “Viajes Combinados”, en *Derecho civil de la Unión Europea*, de DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, María Dolores (Dir.), Colex, 4ª Ed., Madrid, 2010, p. 398, define al contrato de viaje combinado como: “...aquel contrato formalizado por escrito por el cual una parte se obliga a prestar un servicio consistente en el transporte y alojamiento, o en el transporte o alojamiento y un servicio turístico relevante, con una duración de más de veinticuatro horas o incluya una noche de estancia y la otra parte a pagar un precio.”; BOTANA GARCÍA, Gemma Alejandra: “Viajes combinados”, *Actualidad Civil*, núm. 3, Sección Estudios de Jurisprudencia, Tomo 1, Editorial LA LEY 3670/2010, p. 280, menciona que: “Uno de los contratos con mayor incidencia para las consumidores y usuarios es el denominado de viaje combinado... que tiene por objeto la realización de un viaje turístico o vacacional, mediante la prestación de un conjunto de múltiples servicios (transporte, alojamiento, entre otros) que integran un paquete turístico o viaje combinado, retribuido mediante un precio global... la generalización del turismo de masas ha propiciado la aparición en el mercado de las agencias de viajes y los organizadores, intermediarios que facilitan la contratación de los servicios que el usuario precisa para la realización del viaje... servicios cuya contratación individual resultaría, por una parte, difícil por razones obvias de distancia geográfica e información, y por otra, muy costosa. La agencia desarrolla la labor de coordinación y contratación con el resto de proveedores de servicios, para configurar finalmente un “paquete”, que es el que resulta objeto de única contratación con el usuario.”.

principal, a la que se encuentra funcionalmente subordinada (por ejemplo, el servicio de comida dentro del avión, el transporte del aeropuerto a la ciudad, o el desayuno en el hotel, etc.). En cambio, si existirá viaje combinado cuando las diversas prestaciones sean de similar importancia y tenga un valor por sí misma (por ejemplo, si se combina alojamiento y transporte con actividades deportivas o de formación, excursiones, visitas o entradas para un espectáculo en el lugar de destino, servicios de manutención, etc.).

- b) La oferta y demanda previa de los servicios. Las prestaciones han de ofrecerse coordinadas entre sí, integradas en un conjunto organizado. Es decir, el resultado de la organización previa de las diversas prestaciones debe presentarse como un producto unitario. La ausencia de la labor organizativa previa de los servicios determina que no exista contrato de viaje combinado, por ejemplo cuando el viajero es quien elige las concretas prestaciones de entre las ofertas de una agencia de viajes, coordinándolas y organizándolas él solo.<sup>118</sup>
- c) Un precio global de la prestación de servicios. El viaje combinado que se ofrezca al turista o consumidor, deberá contener un precio global, en el cuál se integren todos los elementos que conforman el viaje combinado.<sup>119</sup>
- d) Una duración mínima de estancia. No se puede considerar como viaje combinado a viajes de muy breve duración, es por eso que solo los viajes que duran más de veinticuatro horas o por lo menos integran una noche de estancia.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> GÓMEZ CALLE, Esther: *El contrato de viaje combinado*, Civitas, Madrid, 1998, p. 72. “así por ejemplo, compra un billete de tren a una agencia que actúa como simple intermediaria de la compañía ferroviaria y al propio tiempo reserva por su cuenta unos días de hotel en el lugar de destino... no existe contrato de viaje combinado porque, pese a concurrir varias prestaciones de viaje, la agencia no ha realizado tarea alguna de coordinación u organización previa entre ellas”; GÓMEZ LOZANO, María del Mar: “El contrato de viaje combinado”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), *Contratos mercantiles, Tomo III*, de Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 634, opina que: “Tomando como base el concepto de viaje combinado establecido en la Ley, no parece que se pueda considerar viaje combinado, básicamente porque la organización del viaje corresponde al cliente (no hay combinación previa) y no habrá un precio global, sino que el precio será la suma de los servicios requeridos...”.

<sup>119</sup> DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *El contrato de viaje combinado, la responsabilidad de las agencias de viajes*, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 80-81, “La nota legal y doctrinal que caracteriza la contraprestación del consumidor de viajes combinados ha sido el precio global o a tanto alzado, que éste debe pagar a la agencia por los distintos elementos o servicios que lo componen; en efecto, debido a la consideración como un todo unitario del viaje, con independencia de los distintos servicios que en él van incluidos, el precio a tanto alzado por la totalidad del viaje es considerado como un elemento esencial en este tipo de contrato...”.

<sup>120</sup> SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *El contrato de viaje combinado*, Aranzadi-Thomson, Navarra, 2010, pp. 159-161, menciona que: “Es un requisito más para la existencia de un viaje combinado, que el mismo tenga una duración de al menos veinticuatro horas o que, en su defecto, incluya una noche de

Si el viaje reúne todas las notas anteriores estará dentro del ámbito de protección y aplicación del TRLGDCU, sin que importe cuál sea la finalidad del viaje. Lo mismo es para viajes de negocios, de actividades de ocio, etc. De igual manera es irrelevante donde se desarrolle el viaje y que puede tener lugar fuera de la Unión Europea, lo que importa es que se comercialice dentro de sus fronteras.<sup>121</sup>

Es necesario delimitar que tipos de viajes que realizan los consumidores o turistas encuadran en este tipo de contrato de viajes combinados. Para así aplicar la normativa vigente, para otorgar una protección correcta al consumidor en el cumplimiento de las obligaciones y determinar un sistema de responsabilidad civil sobre posibles daños y perjuicios.

## **2. NORMATIVA REGULADORA DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

Por ser un contrato turístico de gran referencia en el tráfico comercial y aceptado de manera general por la sociedad, el contrato de viaje combinado carecía de una regulación de protección específica. En un principio, se planteó la regulación del contrato de viaje combinado a nivel Europeo con la Directiva 90/314/CEE del consejo, de 13 de junio de 1990, *relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados*, en la cual se destacaba la preocupación por la defensa de los intereses de los consumidores y la ausencia de un cuerpo normativo en los países de la Unión Europea.

En España, en un principio existían algunas disposiciones administrativas.<sup>122</sup> Sin embargo, mediante la aplicación de la Directiva 90/314/CEE, de 13 de junio de 1990, dentro del régimen normativo español se promulgó la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados, que actualmente está derogada.

---

estancia...”, y considera que el legislador lo hace para no confundir el viaje combinado con las nuevas categorías de viaje que son las “excursiones de un día” o “programas de un día”. Además opina que: “debe extenderse analógicamente la aplicación de la normativa del viaje combinado a aquellos viajes combinados cuya duración fuera menor a 24 horas, a lo que habría una mayor protección del viajero.”.

<sup>121</sup> GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 78.

<sup>122</sup> En ese momento histórico, el texto normativo estaba a un nivel general, así lo establecía el RD 271/1988, de 25 de marzo, dedicado al ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viaje, desarrollado por Orden de 14 de abril de 1988. Actualmente hay que tener en cuenta las disposiciones de las distintas Comunidades Autónomas en esta materia.



La Ley 21/1995, de 6 de julio, *de viajes combinados*, presento varias cuestiones muy similares a las planteadas en la Directiva Europea, sobre en los alcances de protección a los consumidores o turistas y la aplicación de la normativa. Además, se plantearon serias dudas sobre la inclusión de diferentes tipos de viajes turísticos (por ejemplo, como los conocidos como “paquetes turísticos”), mencionando varios autores sobre una falta de armonía sobre la distinción o igualdad de diversas expresiones dentro de la misma Ley.<sup>123</sup>

Después de la derogación de la Ley 21/1995, de 6 de julio, *reguladora de los viajes combinados*, se promulgo una regulación especial dentro del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras Leyes Complementarias, en el que se encuentra un capítulo sobre “viajes combinados”. En el cual se comprende que la adecuada realización del plan o proyecto de viaje, con la correcta y adecuada combinación de servicios, es el objetivo principal. Por lo tanto este plan o proyecto es conocido o denominado como “viaje combinado”.<sup>124</sup>

Por ser un contrato dirigido a turistas, es de aplicación a las disposiciones generales que tengan por finalidad la protección del consumidor o usuario. Por eso se encuentra tipificado y regulado dentro de los contratos de consumo, sin olvidar, que al ser un contrato, es generador de derechos y obligaciones, por lo que también es de aplicación el Código Civil como legislación supletoria.

### **3. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

El contrato de viaje combinado tiene una naturaleza jurídica confusa, compleja y discutida en diferentes obras por varios tratadistas. Primero debemos delimitar si el contrato de viaje combinado es de naturaleza civil o mercantil.

Se considera que encuadra dentro de la esfera mercantilista, “porque la organización y ejecución de los viajes combinados responden a unas necesidades típicamente empresariales y, por tanto, encuadran dentro del ámbito del Derecho mercantil, además, que la organización y comercialización de viajes por las agencias de viajes no es posible sin una estructura empresarial que permita al organizador prever todos los

---

<sup>123</sup> SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 144.

<sup>124</sup> En el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su Libro Cuarto, los artículos 150 al 165 se regula el viaje combinado.

contingentes de la actividad turística”<sup>125</sup>, de lo cual considero que efectivamente son las agencias de viajes quienes normalmente promocionan y venden este tipo de servicios.

Pero es cierto que no por ser una persona jurídica o una empresa, que es quien organiza estas actividades, va ser puramente de naturaleza mercantil, ya que, muchísimas de estas operaciones contractuales que se realizan por medio de estas empresas están dirigidas a los turistas considerados como consumidores. Estos son personas físicas que al realizar estos contratos, dan nacimiento a diferentes derechos y obligaciones que son ya regulados y están perfectamente delimitados dentro del ámbito del derecho civil y en su teoría general de obligaciones y contratos.<sup>126</sup> Desde mi punto vista, sería un error decantarnos sobre a qué área del Derecho pertenece este contrato, sino se debe entender que tanto desde la perspectiva del Derecho mercantil como de Derecho civil se puede estudiar y analizar el contrato de viaje combinado, por lo que sería más conveniente decir que pertenece a la esfera jurídica del Derecho privado. Además, diversos autores expresan que dentro de las actividades turísticas existe un “carácter privado del turismo”, al considerarse que el contrato de viaje combinado tiene una naturaleza similar al de un contrato de obra, ya que el objetivo o fin es la ejecución correcta de una obra: “el viaje”.<sup>127</sup>

Inicialmente, ante la ausencia de una ley o normativa específica para el contrato de viaje combinado, se intentaba integrar el contrato de viaje combinado dentro de alguna norma aplicable y similitud con un contrato que ya estuviese regulado, para así poder delimitar la naturaleza y características del contrato de viaje combinado.

En un primer sentido, se hablo de que el contrato de viaje combinado encuadraba dentro del “contrato de compraventa”. Esto por interpretación de algunas expresiones dentro de la propia definición del contrato de viaje combinado, que habla de “vender y comprar”. Sin embargo, no puede ser así ya que el objeto del contrato de viaje combinado no se identifica como una “cosa determinada”, porque “el viaje” como un producto elaborado previamente por el organizador y ofertado al consumidor a cambio

---

<sup>125</sup> GÓMEZ CALERO, Juan: *Régimen jurídico del contrato de viaje combinado*, Dykinson, Madrid, 1997, pp. 33-35, donde explica que el contrato de viaje combinado es de naturaleza mercantil.

<sup>126</sup> En cualquiera de los casos, las lagunas que existan en la regulación específica o especial de este tipo de contratos, se suplirán con reglas del Derecho privado, como sucede con contratos no regulados o atípicos.

<sup>127</sup> Así, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 99-103; DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 92.

de un precio y ante las concretas características del viaje combinado, no parece que su naturaleza sea el de una “compraventa”.<sup>128</sup> Además, tampoco nos podemos encontrar frente a un contrato de transporte de viajeros (aunque su finalidad esencial consista en realizar un viaje), no se centra en un mero desplazamiento de personas fuera de su residencia habitual, si no que se presenta como un conjunto de prestaciones combinadas dentro de un mismo objetivo, el viaje.

Para diferentes autores el contrato de viaje combinado, tiene una correlación con el esquema del “contrato de obra”, dado a que persigue la obtención de un resultado, por la preexistencia de un programa, plan o proyecto de viaje que el organizador se compromete a cumplir. Es por tanto, que la ejecución de “el viaje” se produzca o desarrolle conforme a lo acordado, aunando a la comodidad, orden y armonía que constituirá en un feliz resultado que el contratista, normalmente la agencia de viajes, se comprometió a alcanzar.<sup>129</sup> En España, por medio de jurisprudencia el contrato celebrado entre el consumidor y el organizador de un viaje combinado, se ha considerado próximo al “contrato de obra”.<sup>130</sup>

Es de considerar que antes de intentar asemejar el contrato de viaje combinado con el contrato de obra, debemos entender que una de las obligaciones que se contraen en el momento de la formalización del contrato es la de una obligación de resultado. En

---

<sup>128</sup> GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 36; DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 92, “tampoco se trata de un contrato de compraventa, a pesar de que la Directiva 90/314 como la Ley 21/1995 española utilizan la expresamente la calificación de “venta” para calificar la actividad de la agencia respecto al consumidor de viajes combinados, porque está claro que mediante este contrato de viaje combinado el consumidor no adquiere ni material ni inmaterial, sino sólo el derecho a utilizar unos servicios turísticos determinados; DE LEÓN ARCE, Alicia: *Contratos de consumo intracomunitarios: (adquisición de vivienda y viajes combinado)*, Eurolex, Madrid, 1995, pp. 243 y ss. para quien se trata de un “contrato mixto en el que, además de la presencia de las reglas de otros contratos, como el de obra o empresa, destaca la prevalencia de la venta del “producto turístico”..., por lo que, de acuerdo con la denominada teoría de la absorción puede ser calificado como una variante o especialidad de la misma, con las debidas cautelas” (pp. 249 y 250).

<sup>129</sup> La doctrina entiende que es un contrato que participa de la naturaleza del contrato de obra, GÓMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, pp. 36 y 37; DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 92, “Se trata de un contrato en el cual la agencia de viajes asume una obligación de resultado, lo que le asemeja en cierto sentido al contrato de obra...”; GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, pp. 98 y 99; SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 143 y 144.

<sup>130</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), núm. 294/2007, de 13 de noviembre (westlaw AC 2008\1176) F.D. 2., “Toda esta legislación contempla la posibilidad de...indemnización de daños y perjuicios, por incumplimiento grave del mismo por parte de la agencia, el cual es equiparable al incumplimiento total al ser éste un contrato que participa de las características propias del arrendamiento de obra en el sentido de ser un contrato de resultado en el que no se puede entender cumplido si el resultado del producto ofrecido, constituido por una multitud de prestaciones y servicios (todos los contratados, el buen trato y la razonable satisfacción de los clientes), no se cumplen o se hacen de forma gravemente deficiente en relación a lo contratado, tesis que estima la sentencia de instancia. La naturaleza de contrato de resultado ha sido declarada en numerosas ocasiones...”.

este sentido, la agencia de viajes (deudor) se compromete a satisfacer el interés primario del turista (acreedor), el cual consiste en la combinación de diversos servicios turísticos, lo cuales se deben ejecutar de manera coordinada y correcta conforme a lo establecido en el contrato y folleto informativo o publicitario.<sup>131</sup> Por ello, en el contrato de viaje combinado no se puede decir que contiene obligaciones de actividad, porque cuando una obligación es de actividad el deudor solo está obligado a desarrollar, a favor del acreedor, una determinada conducta que se encamina a satisfacer el resultado esperado por el acreedor, pero el deudor no garantiza el resultado primario del acreedor, debido al carácter aleatorio o incierto del resultado, es el caso de los médicos o abogados.<sup>132</sup>

En este sentido, en el análisis del contrato del viaje combinado, se afirma que contiene obligaciones de resultado. Por ello diversos autores, según hemos dicho se decantan por su semejanza con el contrato de obra. Como se sabe, según la tesis dominante en la doctrina, es que la prestación de obra es una prestación de resultado.<sup>133</sup>

A lo que considero que antes de decidirmos a qué tipo de contrato se parece, es importante estudiar a fondo su naturaleza jurídica. Para ello hemos de identificar en apartados posteriores que tipo de obligaciones y características se estipulan en el contrato de viaje combinado.

---

<sup>131</sup> En este sentido, CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio: *Las obligaciones de actividad y de resultado*, José María Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1993, p. 30, “Cuando la obligación es de resultado, el deudor garantiza la obtención del resultado que constituye el interés primario del acreedor.”.

<sup>132</sup> La naturaleza de este tipo de obligaciones ha sido debatida por la doctrina y la jurisprudencia, así CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio: *Op. cit.*, pp. 29-30, además señala que por el carácter aleatorio o incierto del resultado “el deudor no garantiza su obtención y cumple si actuó con la diligencia debida, aunque no se produzca la satisfacción del interés primario del acreedor.”, p. 42 señala que “cuando la consecuencia del resultado es aleatoria, la obligación asumida es de actividad, porque el deudor normalmente, no se compromete a obtener un resultado que sabe que es incierto. La naturaleza aleatoria o no del resultado permite descubrir la voluntad no expresada de los contratantes. Así, por ejemplo en el contrato de asistencia médica la curación del enfermo es aleatoria...”.

<sup>133</sup> Véase, SALVADOR CODERCH, Pablo: “Artículo 1.588 del Código Civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, 2ª Ed., Madrid, 1993, pp. 1175-1182, “En el contrato de obra (una de las partes se obliga a ejecutar una obra) y a entregársela a la otra, que deberá pagar a cambio un precio cierto... Es un contrato oneroso en el que una parte se obliga a una prestación de hacer y, más concretamente, de resultado... En la esencia del contrato de obra está la asunción de responsabilidad por la obtención de un resultado. El contratista contrae unas obligaciones de hacer, que no es de mera actividad sino de resultado... Lo anterior nos lleva a la cuestión relativa a la distinción entre contrato de obra y de arrendamiento de servicios. Es común a ambos contratos el que el obligado debe llevar a cabo una actividad (obligación de hacer). Entonces, la doctrina dominante los diferencia señalando que en el arrendamiento de servicios se establece una obligación de medios, de esfuerzo, mientras que en el contrato de obra se trata de obtener un resultado...”.

Continuando con el análisis sobre la naturaleza jurídica del contrato de viaje combinado, es discutido si es una figura contractual “múltiple” o “mixta”, ya que el organizador o detallista puede asumir obligaciones puntuales de simple gestión, considerado como el desenvolvimiento de una actividad concreta y determinada. Sin embargo, también contrae una obligación unitaria y global de “resultado”, que como se ha dicho con firmeza, consiste en la efectiva realización del viaje objeto del contrato.<sup>134</sup> Incluso, aunque existe una normativa específica sobre el contrato de viaje combinado, en su naturaleza jurídica o su causa, podríamos decir que es un contrato formado por la unión o fusión de dos o más formas contractuales “causa mixta o compleja”, y los contratos que tengan este tipo de causas, pertenecen a la categoría de los contratos innominados o atípicos, de lo cual considero que es de un preciso análisis.<sup>135</sup>

### **3.1. La causa dentro del contrato de viaje combinado.**

Al mencionar anteriormente que la naturaleza jurídica del contrato de viaje combinado es considerada por una vertiente de tratadistas como un contrato “múltiple” o “mixto”, es necesario examinar en profundidad uno de los elementos esenciales que tiene un negocio jurídico, en esencial la causa.<sup>136</sup>

Dentro del contrato de viaje combinado se pueden dar diversas causas del negocio jurídico con fines subjetivos, de lo cual es importante destacar que los motivos subjetivos, en un principio, llegan a ser jurídicamente irrelevantes, y solo adquieren importancia para el Derecho cuando se incorporan al negocio.<sup>137</sup> Por ejemplo, en el caso del contrato de viaje combinado, cuando se presente una frustración en las expectativas del lugar, el supuesto que fuese un lugar de playa y ya no hubiera playa porque desapareció a consecuencia de un huracán, o que se quiera disfrutar de un

---

<sup>134</sup> GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 37; Cfr. SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 143 y 144, “lejos quedan ya las discusiones doctrinales ante la falta de tipicidad legal de la figura y la existencia de una jurisprudencia contradictoria que creía ver en la actuación de las agencias de viajes ya un contrato de mandato, de comisión, de transporte o mixto... contrato de viaje combinado, cuyo objeto principal es la correcta ejecución de un plan o proyecto prestacional...”. Sin embargo, establece que depende del resultado buscado por el viajero, para así determinar el ámbito objetivo de aplicación de la LVC.

<sup>135</sup> Véase, JORDANO JUAN-BAUTISTA: “Los contratos atípicos”, en la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1953, tomo 195, p. 22.

<sup>136</sup> MARÍN LOPEZ, Manuel Jesús: “Requisitos esenciales del contrato. Elementos accidentales del contrato”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.), *Tratado de contratos, Tomo I*, de Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 598, después de un análisis sobre la concepción objetiva y subjetiva de la causa, la define como “el fin o resultado perseguido por las partes con la celebración del contrato, como la función económico-social concreta querida por los contratantes al celebrar el contrato, es decir, aquello sobre lo que consienten, siendo, por tanto, parte de ella el motivo determinante incorporado”.

<sup>137</sup> En este sentido, ALBALADEJO, Manuel: *Derecho civil I...*, *Op. cit.*, p. 628.

hotel cinco estrellas y no lo es, o bien poder disfrutar de actividades de ocio o deporte y que no se logren realizar o efectuar, entrar o adquirir entradas para disfrutar de algún evento deportivo o concierto como principal motivo o causa de la celebración del contrato a diferencia de la del alojamiento o transporte, etc. Estas sí serían causas subjetivas del contrato de viaje combinado y por lo tanto podrían ser elevadas al concepto de causa verdadera si fuesen conocidas por todas las partes implicadas.

La función o utilidad de la causa puede ser concebida como un elemento de control sobre las regulaciones jurídico-privadas sobre los pactos realizados por los particulares.<sup>138</sup> Por ello dentro del TRGLDCU en su artículo 150 se establece que “el ámbito de aplicación de la normativa será la oferta, contratación y ejecución de las vacaciones, los circuitos y los viajes combinados...”. En consecuencia, se interpreta que la causa dentro de este tipo de contratos recae sobre la realización de unas vacaciones, un circuito o un viaje combinado.

Cuando el Texto Refundido señala a “la oferta, contratación y ejecución de las vacaciones...”, lo indica con carácter general, porque las vacaciones pueden tener una interpretación muy amplia, según el sentido que le quiera dar el particular a sus vacaciones, ya que existen diferentes modalidades de ella. Como se mencionó anteriormente, pueden desarrollarse dentro de un destino turístico como la playa o balnearios, atracciones turísticas, centros de esquí, hoteles, cruceros, turismo de aventura, parque de atracciones, etc.

En si lo que la Ley trata de proteger son en general todo este tipo de modalidades de viaje y se debe especificar o dar entender entre las partes integrantes del contrato la

---

<sup>138</sup> Véase, AMOROS GUARDIOLA, Manuel: “*Artículo 1.274 del Código Civil*”, en *Comentarios del Código Civil, Tomo II*, Ministerios de Justicia, Madrid, 2ª Ed., 1993, pp. 478-485, “En la jurisprudencia se ha señalado que según la doctrina científica que puede estimarse de mayor aceptación, la función que nuestro Derecho atribuye a la causa consiste en la valoración de cada negocio atendiendo al resultado que con él se busca o se hayan propuesto quienes hagan las declaraciones negócias, función que desde el punto de vista subjetivo se traduce en la finalidad que se pretende conseguir como resultado individual o social, en vista del cual se busca o espera amparo jurídico (STS 23-V-80)... Se ha indicado igualmente que para que el propósito pueda ser considerado como causa del mismo, ha de ser común a ambas partes o, por lo menos, si una de ellas ha actuado con un propósito concreto, éste debe ser reconocido como tal y no rechazado por la otra, que quiere celebrar el contrato... Como hemos visto, la jurisprudencia en general considera a la causa en su aspecto objetivo como el fin que se persigue en cada contrato, finalidad genérica o fin de la atribución patrimonial, sin que este elemento pueda ser identificado con los motivos individuales o psicológicos de las partes. Sin embargo, en determinadas ocasiones, dichos motivos, deben ser tenidos en cuenta, sobre todo para apreciar la posible existencia de la causa ilícita. Pues bien, a través de un abundante número de sentencias se ha señalado, como requisito necesario para que esos motivos tengan la consideración de causa, que sean conocidos o queridos por ambas partes y que estén exteriorizados o incorporados al contrato como determinantes de la declaración de voluntad.”.

causa del negocio jurídico y su concreta función. No encuadra la realización o ejecución de una sola actividad vacacional dentro del contrato de viaje combinado, sino que para determinar su función habrá que concretar la combinación de por lo menos dos o más servicios como un todo, que se ofrecen dentro de un viaje combinado. Siendo así que la contratación de una sola de estas actividades no estará protegida por el Libro IV del TRLGDCU, sino que será una relación contractual directa con los prestadores de los servicios deseados, en este caso serían como la contratación de servicios sueltos con las agencias de viajes, o con los establecimientos de actividades de recreación.

Dentro del contrato de viaje combinado se entiende que la causa se desprende de la definición del propio contrato, dando así una causa objetiva, entendiendo que es la realización de un viaje compuesto por lo menos con dos elementos, (ya sea transporte, alojamiento u otros servicios) como un todo y aun precio global. Por otro lado, lo que constituye el verdadero motivo que impulsa a las personas a realizar el viaje combinado, es el no tener que organizar y contratar por su cuenta todas esas clases de servicios, además de no afrontar y resolver cualquier contingencia que se presente durante el viaje, por lo que se trataría de una causa subjetiva conocida ampliamente por las partes implicadas y elevada, en consecuencia, al nivel de verdadera causa y no simples motivos.

No todas las causas generadoras del negocio jurídico dentro del contrato de viaje combinado son consideradas causas típicas, se pueden presentar causas atípicas como las mencionadas anteriormente, además muchas veces no es una sola causa que sobresale del contrato, sino que normalmente son varias, dado a la combinación de prestaciones (alojamiento, transporte y otros servicios), entonces se da una pluralidad de causas sobre una misma, y a la vez una pluralidad de contratos regulado sobre uno mismo, y es por ello que se puede tratar de un contrato “múltiple” o “mixto”, JORDANO BAREA menciona que “allí donde haya pluralidad de causas existirá una pluralidad de contratos, y, por el contrario, cuando se dé una causa mixta o compleja, formada por la unión o fusión de dos o más formas contractuales, será señal cierta de la unidad del contrato”.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> JORDANO JUAN-BAUTISTA: *Op. cit.*, pp. 20-27 menciona que la diferencia de la causa de un contrato típico y un atípico, es “que en el último el reconocimiento es indirecto por la Ley, y que no debe ir más allá de los límites impuestos por la Ley (no contrariar las leyes, la moral y el orden público, según el artículo 1.255 del Código Civil) y a que el contrato este dirigido a realizar intereses digno de tutela según el ordenamiento jurídico, condicionamiento este último que aunque no esté fijado de un modo expreso por el Código se puede inducir de muchas de sus disposiciones...”.

Ahora bien, si el contrato de viaje combinado es la unión de varios contratos en uno, (alojamiento, transporte y otros servicios...), y analizamos cada contrato por separado, nos damos cuenta que el contrato de transporte está regulado por una normativa específica.<sup>140</sup> Sin embargo, el contrato de alojamiento no lo está, además que es considerado dentro de la doctrina como un contrato atípico, y qué decir del contrato de la prestación de los otros servicios... Estos servicios, como se mencionó anteriormente, sobresalen las actividades de entretenimiento, tiempo libre u ocio, que tampoco están reguladas dentro de la normativa y podrían estar consideradas dentro de relaciones de obligatoriedad atípica.

Sin embargo, el contrato de viaje combinado al estar mencionado y regulado como uno solo por la normativa, se considera como un contrato típico, pero desde mi punto de vista, debido a las causas de cada contrato en particular y uniéndolo a las causas del consumidor, pudiera estar catalogado en los supuestos de los contratos PARCIALMENTE ATÍPICOS.<sup>141</sup>

A todo esta coligación de contratos sobre uno solo llamado contrato de viaje combinado, podría estar considerado dentro de los contratos atípicos, me parece, pues, con JORDANO<sup>142</sup>, que: “la conexión o ligamen de contratos pueden estar: a) en relación de mutua dependencia; b) en relación de subordinación; y c) en relación de alternancia. Todos estos contratos coligados son figura *afín* de los contratos atípicos, pero diversa, porque no son más que contratos típicos *autónomos* ligados entre si por un simple nexo económico... dentro de los grupos de contratos atípicos encontramos a los contratos atípicos mixtos: con contenido heterogéneo, fundados en una causa atípica compleja o mixta, pues las diversas prestación que la integran, coordinadas entre sí, constituyen un todo, resultante de partes típicas o atípicas conocidas, dotadas de tipicidad social, las posibles combinaciones son... b) contrato compuesto de

---

<sup>140</sup> La normativa reguladora de los contratos de transporte por carretera y el llamado transporte turístico es la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, el cual ha tenido varias notas de desarrollo, la más reciente es la Orden 23 de abril 2007 (westlaw LG\2007\192). Debemos recordar, que existen también el transporte marítimo, por vía ferroviaria y el aéreo, de lo cual cada una tiene su regulación específica.

<sup>141</sup> En los contratos “unidos “o mixtos”, ALBALADEJO Manuel: *Derecho Civil II, Derecho de obligaciones*, Edisofer, 13ª Ed., Madrid, 2008, p. 420, menciona: “dentro de las inseguridades que la materia ofrece, y de la dificultades que pueda plantear para su aplicación, el único criterio general aceptable es el de la CAUSA: donde haya una pluralidad de causas, existirán varios contratos, donde una (mixta o compleja), habrá un contrato solo”.

<sup>142</sup> JORDANO JUAN-BAUTISTA: *Op. cit.*, pp. 33-35.



elementos típicos y atípicos... se inclina a creer que el contrato mixto no es más que una subespecie del contrato atípico, caracterizada dentro del mismo por la índole propia de su causa”.

### **3.2. Características del contrato de viaje combinado.**

Del análisis sobre el contrato de viaje combinado se puede decir que contiene las siguientes características:

- Contrato parcialmente típico y nominado. Al ser regulado en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras Leyes Complementarias, es considerado como un contrato “típico” o “nominado”. Aunque como se explico en capítulos anteriores, no se puede hacer un lado que conforme al análisis sobre la naturaleza jurídica del contrato, el viaje combinado podría estar considerado dentro de los “contratos parcialmente atípicos”, esto se debe al tener una combinación de contratos como uno solo “contratos mixtos”, y con referencia a la “causa del contrato” como elemento esencial de los negocios jurídicos.<sup>143</sup>
- Contrato de adhesión. Se señala que el contrato de viaje combinado es un contrato de adhesión, porque normalmente las cláusulas que se encuentran dentro del contrato han sido preestablecidas por una de las partes (la agencia de viajes) y el consumidor solo tiene la opción de aceptar o no dichas condiciones o cláusulas que se le ofrecen.<sup>144</sup> Al ser considerado como un contrato de adhesión, se comprende que integra “condiciones generales”. Normalmente, este tipo de contratos como los de adhesión, contienen un modelo contractual preestablecido por una de las partes y que regularmente la otra parte (el adherente) acepta las condiciones generales y particulares con la estampa de su firma. Es de considerarse que estas “condiciones generales” son ofertadas mediante un “programa o folleto informativo del viajes combinado”, el cual describe el viaje ofrecido y las normas por las cuales esta tutelado el consumidor o turista. Este “programa o folleto del viaje”, es un

---

<sup>143</sup> Véase, en la Parte Especial, capítulo I.3.1. “La causa dentro del contrato de viaje combinado”, en donde se menciona que aunque exista una Ley específica del contrato de viaje combinado, puede existir una “causa atípica y mixta” dentro del viaje combinado.

<sup>144</sup> ALBALADEJO, Manuel: *Derecho civil II...*, Op. cit., p. 432, “se llama contrato de *adhesión* al contrato cuyas cláusulas han sido preestablecidas por una de las partes, que no admite que la otra modifique o haga contraofertas, sino sólo que las acepte pura y simplemente, o que no contrate”.

requisito que exige la normativa del contrato de viaje combinado que mas adelante se desarrollara.<sup>145</sup>

- Es un contrato plurilateral. Dentro del contrato de viaje combinado se presentan dos partes que contratan y que asumen ambas sus respectivas obligaciones (usualmente la agencia de viajes y el consumidor o turista). Puede darse el caso de una pluralidad de sujetos, en el caso de que sea un viaje colectivo y con número mínimo de personas para la prestación de los servicios. Las obligaciones que tienen recíprocamente las partes, es por un lado prestar los servicios que conforman el viaje combinado (por parte de la agencia de viajes); el pago total convenido y el disfrute de las prestaciones o las vacaciones pactadas (por parte de o los consumidores o turistas).<sup>146</sup>
- Contrato consensual. El contrato es consensual, dado que basta el simple y llano consentimiento de las partes (principalmente el del consumidor o turista), para que las partes resulten obligadas, sin la necesidad de que se realice instantáneamente las prestaciones del viaje combinado.<sup>147</sup> El Texto Refundido en el apartado del contrato de viaje combinado, exige la formalidad de que se haga por escrito, sin embargo, el contrato se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, asumiendo sus obligaciones respectivas.
- Un contrato oneroso. El contrato de viaje combinado es oneroso porque la agencia de viajes vende el viaje combinado y el consumidor o turista paga el correspondiente precio total de la prestación, ya que cada una de las partes aspira a obtener un beneficio a la prestación que ofrece. La onerosidad del contrato va de la mano con la “causa” (en cuanto elemento esencial del contrato) estableciéndola como: “para cada parte contratante la prestación o

---

<sup>145</sup> Cfr. DÍAZ-AMBRONA HERNÁNDEZ, Ma. Dolores: “Viajes combinados”, *Op. cit.*, p. 399, “Plantease la doctrina si el contrato de viaje combinado es un contrato de adhesión y aunque buena parte se pronuncia en este sentido, sin embargo, a nuestro juicio, no parece muy claro que estemos ante un contrato de este carácter cuando se permite la producción de modificación posteriores en el programa-oferta por acuerdo previo de las partes. Los contratos de adhesión se caracterizan porque los consumidores o usuario no pueden, en ningún caso, realizar modificación de la oferta.”.

<sup>146</sup> ALBALADEJO, Manuel: *Derecho civil II...*, *Op. cit.*, P. 421, nos aclara que: “cuando se habla de contratos bilaterales, no se alude al número de personas que interviene, sino a que sea productos de obligaciones, bien a cargo de una sola de las partes, o bien a cargo de ambas...”.

<sup>147</sup> Conforme a lo establecido en el artículo 1.258 del Código Civil, dice: “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento...”.

promesa de una cosa o servicio por lo otra parte”.<sup>148</sup> Entendiendo que contiene una prestación económica equivalente para cada una de las partes y que funciona como contraprestación de la otra. Se puede dar la situación incluso de que se exija el pago integro de las prestaciones antes del comienzo del viaje.

- Conmutativo. Los contratos onerosos pueden ser conmutativos o aleatorios, el contrato de viaje combinado, conforme al Texto Refundido en su apartado sobre los viajes combinados es “conmutativo”, dado a las prestaciones respectivas del contrato, por un lado el de efectuar los servicios que forman parte integrante del viaje combinado, y por el otro, pagar el precio global de lo estipulado, es por eso que no necesita como en los contratos aleatorios “de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado”<sup>149</sup>, sino que se encuentran establecidos los derechos y obligaciones desde el momento de la celebración o inicio del contrato.<sup>150</sup>
- Contrato de tracto sucesivo. El contrato de viaje combinado es de “tracto sucesivo” dado a que los derechos y obligaciones de ambas partes no se extinguen en un solo acto, sino que tiene una duración en el tiempo, esto es durante el desarrollo del viaje.<sup>151</sup> El contrato de viaje combinado desde su perfeccionamiento, se prolonga hasta la conclusión del viaje en armonía con el “objeto” y “causa” del viaje, por ello es determinante la especificación del inicio y conclusión de las fechas pactadas, porque el retraso o demora de los servicios o prestaciones pueden dar lugar a un cumplimiento defectuoso o un incumplimiento total sobre cualquiera de los servicios contratados o peor aun sobre el motivo principal del viaje. Por ejemplo, si se reduce sensiblemente el tiempo de parada en una ciudad importante incluida en el circuito, si se llega al lugar cuya visita se había programado en el viaje fuera del horario de apertura

---

<sup>148</sup> En este sentido, es de aplicación el artículo 1.274 del Código Civil, dice: “En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte...”.

<sup>149</sup> En el artículo 1.790 del Código Civil, nos dice de manera clara que: “Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado”.

<sup>150</sup> ALBALADEJO, Manuel: *Derecho civil II...*, *Op. cit.*, p. 428, nos menciona que: “los contratos bilaterales son aleatorios o conmutativos, según que las partes, celebrándolos, asuman o no riesgo de pérdida o ganancia... ejemplos de conmutativos, la compraventa de una cosa totalmente determinada (así, el cuadro X) en cierto (cien mil pesetas), o el arrendamiento del local X por tal o cual renta...”, es por ello que en el contrato de viaje combinado se determina las prestaciones o servicios combinados que se van a prestar por un precio fijo total.

<sup>151</sup> Así, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 101.

de algún museo al público, o si en contra de lo pactado, no se pudo presenciar un determinado acontecimiento como un concierto, unas fiestas locales, un partido de fútbol en un mundial, todo esto por no especificar el modo, forma y tiempo de las prestaciones pactadas.

- Es un contrato con obligaciones de resultados. El viaje tiene como finalidad la realización efectiva, adecuada y pactada de las prestaciones o servicios contratados, es por ello que es considerado como un “contrato de resultados”.<sup>152</sup> El contrato de viaje combinado al estar compuesto por obligaciones de resultado, la mayoría de los autores lo consideran como un “contrato de obra”. La obligación que asume la agencia de viajes es en la efectiva realización del viaje como interés primario del turista, mediante la prestación (directamente o a través de terceros) de todos los servicios que lo integran, no como un objeto unitario, sino como un producto de la coordinación de diferentes prestaciones.<sup>153</sup> Complementando que las obligaciones contractuales no se extinguen en tanto el viaje combinado no se realice conforme a lo establecido en el contrato, y en el caso de que el turista o consumidor (acreedor) no obtenga los resultados de las obligaciones, el prestador o prestadores de servicios tendrán que asumir las correspondientes responsabilidades contractuales.<sup>154</sup> Por lo que en el contrato de viaje combinado, la obligación que asume la agencia de viaje frente al turista o consumidor no se pudiera entender como de actividad, porque en las obligaciones de actividad la satisfacción del interés primario del acreedor es

---

<sup>152</sup> SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 143, “...el objeto principal es la correcta ejecución de un plan o proyecto prestacional que conocemos como viaje combinado.” Además, considera el contrato de viaje combinado como un contrato de resultado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida (Sección 2ª), núm. 413/2005, de 8 de noviembre (westlaw JUR 2006\83098), F.D. 2., “con lo cual la conclusión sería el que el organizador responde del buen fin del viaje, asumiendo por lo tanto una obligación de resultado...”.

<sup>153</sup> En sentido, CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio: *Op. cit.*, p. 38 señala que: “Cuando hablamos de obligaciones de resultado estamos hablando a aquellas obligaciones en que el deudor garantiza la satisfacción del interés primario del acreedor...”.

<sup>154</sup> *Ibid.*, p. 31 “El interés primario del acreedor está garantizado por el deudor cuando la obligación es de resultado...”; p. 37 “Ante todo es importante subrayar que el interés del acreedor está presente en el objeto de toda obligación, sea de actividad o de resultado... En las obligaciones de resultado, la satisfacción del interés primario (el resultado) es plenamente exigible, de tal manera que si el deudor no lo logra, se produce un incumplimiento de la obligación...”. Además, expone sobre la obligación de las agencias de viajes de facilitar los servicios contratados, p. 83, que “La obligación de la agencia de facilitar los servicios contratados es de resultado, lo cual concuerda con la propia causa del contrato celebrado por la agencia con el cliente. Lo que éste pretende al contratar con la agencia es un resultado, sin que tenga relevancia alguna para él que dicho viaje lo efectúe la agencia con sus propios medios o recurriendo a servicios de terceros empresarios... Por ello, la obligación que asume la agencia frente al cliente no es una mera obligación de medios o actividad...”.

solo potencial, por lo que el hecho de lograrse no determina el incumplimiento del deudor (agencia de viajes), y con ello no se le da una verdadera protección jurídica al turista o consumidor como contratante débil como parte dentro del contrato.<sup>155</sup> En este sentido, con la obligación de resultado dentro del contrato de viaje combinado se protege y se garantiza la satisfacción del interés primario del viajero, que es la correcta realización del viaje.

#### **4. CLASES DE VIAJE COMBINADO.**

Normalmente los viajes combinado son previamente organizados y ofertados por las agencias de viajes, pero existe la posibilidad de que el consumidor o turista confeccione o solicite un plan de viaje a su medida, como mínimo con dos de los tres elementos que integran al viaje combinado. La cuestión sería, si existe viaje combinado y si es de aplicación o no el TRLGDCU.

En primer lugar, el autor PEREZ DE LA CRUZ<sup>156</sup>, hace una distinción de los viajes combinados, diferenciando entre viaje combinado singular y colectivo. En la primera modalidad de viaje combinado singular, la iniciativa proviene del cliente quien se dirige a la agencia, señalándole con mayor o menor aproximación la ruta que pretende seguir durante el viaje, el medio o medios de transporte que desea utilizar, los alojamientos que le gustaría ocupar y los servicios y prestaciones complementarias de que pretende disfrutar. En el caso del viaje combinado colectivo, es la agencia quien concierta previamente con los hoteleros, transportistas y demás empresarios llamados a realizar directamente los servicios, como un conjunto de prestaciones que debidamente ordenadas y conectadas, ofrece al público como un *res nova*: el viaje.

La forma más usual de contratación de un viaje combinado, es por medio de un proyecto turístico propuesto mediante un folleto y por un precio global. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de obligarse la agencia de viajes a la ejecución de un viaje combinado por la ausencia de un folleto publicitario o porque el precio exigido

---

<sup>155</sup> *Ibíd.*, p. 30 señala que “La distinción de los dos tipos de obligaciones determina una diversa distribución, entre el deudor y el acreedor, del riesgo por la falta de realización del resultado esperado por el acreedor: cuando la obligación es de actividad, el riesgo recae sobre el deudor... Cuando la obligación es de resultado la distribución es diversa...”, así el turista tiene el derecho de recibir el resultado que estipulo en el contrato de viaje combinado.

<sup>156</sup> PÉREZ DE LA CRUZ, Antonio: *Los contratos celebrados con las agencias de viajes (Ensayo para un estudio de su régimen jurídico)*, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Málaga, 1973, pp. 69 y ss.; DE LEÓN ARCE, Alicia: *Contratos de consumo intracomunitarios...*, *Op. cit.*, p. 240, distingue entre contratos proyectados a solicitud del cliente por un precio global y contratos proyectados y ofertados por la agencia de viajes con precio global.

sea la suma de las facturas de distintos componentes del plan de viaje confeccionado por el turista, lo que en definitiva importa es el ánimo de obligarse la agencia de viajes a la correcta ejecución del viaje solicitado por el turista, y asumirlo como un conjunto o un todo frente al consumidor o turista.<sup>157</sup>

## **5. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

En la extensión del análisis sobre el estudio del contrato de viaje combinado, es importante mencionar y desarrollar los diversos elementos que integran al contrato, principalmente los personales y los objetivos, sin olvidar por último la forma y perfección exigida para su celebración.

### **5.1. Elementos personales del contrato de viaje combinado.**

En el momento que se celebra el contrato de viaje combinado, diversos sujetos o elementos personales intervienen en el contrato. Porque es muy importante mencionar y explicar los posibles sujetos que integran al contrato, así como señalar sus características.

#### **5.1.1. Las agencias de viajes.**

En el Texto Refundido de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y Otras Leyes Complementarias, en su Libro IV sobre los viajes combinados, nos aclara que las agencias de viajes son las únicas que pueden organizar, vender y ofertar el viaje combinado a los consumidores. Las agencias de viajes o las empresas turísticas se pueden presentar como dos posibles posiciones contractuales distintas dentro del viaje combinado, ya sea una como “organizador” o “detallista”. Tanto el organizador como el detallista deben poseer la condición de agencias de viajes, puesto que la actividad dirigida a organizar o vender viajes combinados se reserva en exclusiva a este tipo de empresas turísticas.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Así, SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 164-165.

<sup>158</sup> AMAT LLOMBART, Pablo: *Op. cit.*, p. 282. Tanto el organizador como el detallista deben ser agencias de viaje El artículo 151.2 del TRLGDCU establece: “Que a los efectos previsto en este Libro, el organizador y el detallista deberán tener el carácter de agencias de viaje, de acuerdo con la normativa administrativa”. Además, el artículo 2.2 del RD 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regulaba la actividad de las agencias de viajes, reservaba en exclusiva a las agencias de viajes (y no a otro tipo de empresas turísticas) la actividad de organizador o vender viajes combinados (paquetes turísticos), ahora la regulación y desarrollo sobre las agencias de viajes depende de las Comunidades Autónomas.

Dentro del mismo TRLGDCU, se define al “organizador”<sup>159</sup> como aquella persona física o jurídica que organice de forma ocasional viajes combinados y los ofrece y vende directamente o por medio de un detallista. Además, también nos define lo que se entiende por “detallista”<sup>160</sup>, que es aquella persona física o jurídica que ofrece en venta el viaje combinado propuesto por un organizador. De las diferentes modalidades de agencias de viajes que se pueden presentar en el contrato de viajes combinado, es necesario comentar que la agencia de viajes que vende y celebra el contrato puede ser la misma agencia que ha organizado el viaje combinado, en este caso “organizador”; pero el “detallista” solo se limita a vender los viajes combinados organizados por otra agencia.<sup>161</sup>

El “organizador” realiza de manera habitual la función principal de organizar los viajes combinados para los consumidores o turistas y conforme al TRLGDCU quedan fuera o excluidos de aplicación de la normativa sobre los viajes combinados, todos aquellos supuesto en que el viaje combinado sea organizado por personas o entes que no suelen realizar habitualmente actividades empresariales destinadas profesionalmente a las actividades turísticas o sobre la organización sobre viajes combinados, como puede ser el ejemplo de una asociación cultural, una asociación de vecinos, deportiva, cultural o religiosa.<sup>162</sup> Además, el “organizador” tiene la posibilidad o facultad de vender directamente el viaje combinado al consumidor, o disponer de otras empresas de la misma área (agencias de viajes) que realicen la venta del producto de manera directa al turista.<sup>163</sup>

En consecuencia, el “detallista” conforme a la definición del TRLGDCU, es la persona que realiza el contrato de manera directa con el consumidor, ofreciéndole un producto

---

<sup>159</sup> En el artículo 151.1 b), del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias.

<sup>160</sup> En el artículo 151.1 c), del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias.

<sup>161</sup> MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 151. Definiciones”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentario al texto refundido para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias*, de Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 1776, “La previa organización ha de provenir de la llamada agencia organizadora, que también puede ser la que posteriormente contrate (venda) el viaje combinado con el consumidor, prescindiendo de la intervención de una agencia detallista. Si bien es posible –de hecho, es lo más habitual– que en la contratación del viaje combinado participen tanto un agencia organizador (la que combina previamente los elementos del viaje combinado) como una detallista (la que vende u ofrece a la venta al consumidor).”.

<sup>162</sup> *Ibid.*, p. 1784, “Nuestro legislador se ha decantado así por excluir de esta regulación especial los viajes combinados organizados o comercializados por entidades no profesionales...”.

<sup>163</sup> GÓMEZ LOZANO, María del Mar: “El contrato de viaje combinado”, *Op. cit.*, p. 637.

que él no ha elaborado (lo elaboró el “organizador”). La acción que realiza el “detallista” dentro del contrato de viaje combinado, pareciera ser la de un mediador entre “el organizador” que fue quien programó el viaje como tal y el “destinatario final” que es el consumidor o turista. Sin embargo, la agencia “detallista” realiza de manera directa un contrato de viaje combinado con el consumidor, a lo que en caso de responsabilidad, no se puede deslindar al decir que es un solo un intermediario dentro del contrato de viaje combinado.<sup>164</sup>

La agencia de viajes, como se ha mencionado anteriormente en repetidas ocasiones, puede desempeñar dos funciones diferentes, una como organizadora directa de los servicios turísticos, o bien como detallista si solo consiste en ofertar y vender el viaje combinado entre el cliente y otras empresas turísticas. El consumidor o turista puede comprar o celebrar el contrato de viaje combinado con el “organizador” o bien con el “detallista”, pero los dos serán responsables frente al consumidor del correcto cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.<sup>165</sup>

Durante la ejecución del contrato de viaje combinado, la agencia de viajes intervendrá conjuntamente con otras empresas turísticas como son los transportistas, los empresarios de hostelería, los de servicios de ocio, etc. Son ellos directamente los encargados de prestar al consumidor los servicios turísticos incluidos en el contrato de viaje combinado celebrado ante la agencia de viajes. Estas empresas turísticas que prestan los servicios turísticos establecidas en el contrato de viaje combinado, en caso de incumplimiento, serán también los responsables directos de los daños que sufra el consumidor o turista por una ejecución deficiente de los servicios o por su incumplimiento, pero no por ello se exime de responsabilidad a la agencia de viajes, sino que tanto el “organizador” como el “detallista” seguirán siendo responsables<sup>166</sup>, en

---

<sup>164</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 748/2001, de 23 de julio (westlaw RJ 2001\8411) F.D. 2. Expone que: “...la relación existente entre la agencia minorista y el usuario es la propia derivada de un contrato de compraventa, actuando la agencia como vendedora, en nombre y por cuenta propia, de los productos creados por ella o por una tercera agencia mayorista, a lo que existe una responsabilidad solidaria”. Así mismo, en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo civil, Sección 1ª), núm. 870/2009, de 20 de enero (westlaw RJ 2010\158) F.D. 5. A).

<sup>165</sup> BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María: “Contratos turísticos, de alojamiento...”, *Op. cit.*, p. 4766, “Si el contrato se celebra con el “detallista”, el “organizador” será también responsable frente al consumidor del correcto cumplimiento de todas las obligaciones que surjan en el contrato”.

<sup>166</sup> *Ibid.*, p. 4768, “Además, si en la ejecución del contrato intervienen otros empresarios turísticos (hosteleros, transportistas, etc.) que prestan directamente al consumidor los servicios pactados en el contrato, pueden ser éstos los responsables directos de los daños que sufra el consumidor por una ejecución deficiente de esos servicios o incluso por su no ejecución, sin perjuicio de que también sean responsables el organizador y detallista”, Además, se debe subrayar que estos empresarios en cuanto a prestadores de los servicios turísticos contratados serán, en su caso, los responsables directos de los daños



materia sobre las responsabilidad en el contrato de viaje combinado se expondrá en los capítulos siguientes.

### **5.1.2. El consumidor o turista como contratante principal, el “beneficiario” y el “cesionario”.**

El otro elemento personal del contrato de viaje combinado es el turista, o bien ya reconocido como consumidor. En este sentido, el TRLGDCU establece tres posibles supuestos o categorías en que se puede presentar, ya sea como “contratante principal”, “beneficiario”, y por ultimo “cesionario”.

Por “contratante principal” se entiende conforme a lo dispuesto por el artículo 151.1 d) del TRLGDCU como “la persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado”. Ante esta definición, lo normal es que sea una persona física, pero es posible que el “contratante principal” sea una empresa, como se da en los casos en los que un empresario premia a sus trabajadores por el buen desempeño de sus actuaciones laborales, pero lo que es innegable es que una persona física (el turista o consumidor) es quien al final va a realizar y disfrutar del viaje combinado que se haya contratado.<sup>167</sup> Lo más común o usual es que el propio turista o consumidor sea quien contrate directamente con la agencia de viajes.<sup>168</sup>

---

que haya podido sufrir el consumidor o usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución defectuosa de tales servicios; pero en cualquier caso, frente al consumidor, además de estos empresarios, también seguirían siendo responsable tanto la Agencia de Viajes “organizadora” del viaje combinado, como la “detallista”.

<sup>167</sup> Véase, GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 49, menciona que: “...puede ser una persona física que actúe en su propio nombre e interés, y en tal supuesto, será él quien, como parte en el contrato de viaje combinado, se constituye en acreedor de las prestaciones y servicios que lo integran y contrae la obligación de pagar el precio o la retribución correspondiente...”; DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 77, sostiene que: “No estaría sometido a la normativa vigente sobre viajes combinados el contratante principal que concluya un contrato a favor de un tercero a cambio de una contraprestación por la actividad desplegada a su favor”, es en los supuestos de que sea una persona jurídica; SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 185-186, expone que: la definición de “contratante principal” llega ser confusa, dado que desde su perspectiva se debería mejor señalar como el “contratante del viaje” y la del “viajero”, de lo cual expone que “Un concepto de contratante del viaje, término que mejor muestra la esencia jurídica de la figura, debe contemplar debidamente su posición jurídica, que no es otra que la contratación, en nombre propio, del viaje y la consiguiente asunción de la obligaciones del pago del precio... Dado a que su elemento característico es su posición deudora del precio y no la posibilidad de traslado o de disfrute del viaje combinado, el contratante del viaje puede ser tanto persona física como jurídica... La condición jurídica de viajero viene dada por su posición de titular del derecho al disfrute del viaje, con independencia del título en virtud del cual se le atribuye tal derecho”.

<sup>168</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 151...”, *Op. cit.*, pp. 1788-1789, comenta que: “el consumidor puede ser tanto el contratante principal [persona física o jurídica que compre o se comprometa a comprar el viaje combinado] como el beneficiario y el cesionario, a los que la Ley define respectivamente como la persona física [en contraste, con el contratante principal, que también podía ser una persona jurídica], en nombre de la cual el contratante principal se comprometa a comprar el viaje

El TRLGDCU en el artículo 151. e), también nos muestra la posibilidad de que el turista o consumidor sea parte del contrato de viaje combinado como “beneficiario”, por lo que se comprende que es la “persona física en nombre de la cual el contratante principal se compromete a comprar el viaje combinado”. La posición del “beneficiario” es muy común que se presente, cuando se contrata un viaje combinado para los menores de edad, en los cuales sus representantes van a celebrar el contrato, o bien, en los supuestos de que una empresa contrata a favor de sus trabajadores un viaje, éstos últimos serán los beneficiarios del viaje combinado.<sup>169</sup> Ante esta posible situación, “el beneficiario”, tiene el pleno derecho de ejercitar todas las acciones derivadas del contrato de viaje combinado como si fuera el contratante principal, siempre y cuando dentro del mismo contrato se haya especificado o identificado al beneficiario y a la vez sea reconocido por la agencia de viajes.

Se entenderá por “cesionario” como “la persona física a la cual el contratante principal u otro beneficiario cede el viaje combinado”, así lo especifica el artículo 151.1 f) del TRLGDCU. Aún y cuando en el desarrollo del trabajo se explicara la posibilidad de la “cesión” del contrato, se comprende que el cesionario será una persona física, especificando que la transmisión del cedente al cesionario no es solo un derecho de crédito, es decir de solo realizar el viaje, sino de una verdadera cesión de contrato, por lo que el cesionario asumirá la posición que tenía el cedente frente a la agencia.<sup>170</sup>

De las distintas posibilidades en las que se puede presentar la otra parte en el contrato de viaje combinado, lo más usual es que el propio turista o consumidor sea el contratante principal. Sin embargo, es muy común encontrarnos con el otorgamiento

---

combinado [que actuaría como representante de aquél, ya sea legal ya voluntario], o a la cual el contratante principal u otro beneficiario ceda el viaje combinado [cesionario contractual].

<sup>169</sup> En este sentido, MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *Op. cit.*, p. 100. El “beneficiario” se ha interpretado por la doctrina en un doble sentido, por un lado GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, pp. 49 y 50, menciona que puede interpretarse como un caso de representación directa legal o voluntaria; y por otro lado DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 74, establece que nos encontramos ante un contrato a favor de tercero, y no un mandato, pues no sería el contratante principal el verdadero contratante, sino un mero mandatario del beneficiario, además dice que “esta construcción tiene dos consecuencias: en primer lugar, que el beneficiario no se obliga en nada respecto del promitente; en segundo lugar que el beneficiario en cuyo nombre y en cuyo beneficio se realiza el contrato por el estipulante puede exigir del promitente el cumplimiento del contrato siempre que, según el artículo 1.257.2 CC haya hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido revocado la estipulación.”.

<sup>170</sup> Así, DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 75, establece que: “se trata de una cesión o transmisión, no solo del derecho de crédito, sino de una verdadera cesión del contrato, por que el cesionario adquiere, además del derecho de realizar el viaje, los derechos accesorios a la prestación principal, como es por ejemplo el de recibir información..., y es él quien queda obligado frente al cedido a pagar el precio que aun se deba.”.

de viajes combinados a turistas que no participan directamente con la contratación del viaje, como se da en los supuestos de viajes de incentivo o el haber ganado un viaje en algún concurso. Ante esta posibilidad de ser parte en un viaje combinado, es importante señalar en qué posición se encuentra el viajero o turista y que derechos tiene como tal.

Es usual que las empresas acudan a una agencia de viajes para contratar un viaje combinado para premiar a sus trabajadores por el buen desempeño de sus labores. En un principio, la agencia de viajes no conoce quien o quienes son los viajeros, pero la empresa en este caso como “contratante principal”, tendrá la obligación de mencionar y comunicar quienes son los “beneficiarios” antes de la salida del viaje. Por lo tanto, el trabajador será quien disfrute del viaje y su condición de viajero no se deriva o procede conforme a la manera usual del carácter de “beneficiario” estipulado por la Ley. En este sentido, el trabajador no tiene la obligación principal de pagar el precio del viaje, aun cuando no se haya abonado de manera completa, ya que no es quien contrato de manera directa el viaje combinado y solamente se ve beneficiado del premio. Sin embargo, es titular de los derechos del disfrute del viaje con todas las prestaciones establecidas, como a su vez de asumir las obligaciones derivadas del disfrute del viaje.<sup>171</sup>

De igual forma, son aquellos casos en los que el consumidor o turista obtiene un viaje combinado por medio de un concurso o sorteo. El “contratante principal” es el promotor del sorteo y el o los “beneficiarios” serán los ganadores de dicho concurso. En consecuencia, la agencia de viajes ignora en el momento de la celebración del contrato quienes son los viajeros, pero el organizador del concurso tendrá la obligación de proporcionar quienes han sido los premiados tras la realización del concurso, para que así puedan disfrutar del viaje combinado ganado, con todos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato, como a su vez obtener la protección derivada del TRLGDCU y del Código Civil.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 186-187, además menciona que el beneficiario del viaje combinado a través de un viaje de incentivo, tendrá el derecho de ceder del viaje y desistir del mismo sin verse obligado a satisfacer gastos alguno en concepto de gastos de anulación o desistimiento, aunque en algunos casos, los viajes adjudicados en sorteo o concursos se pacta la prohibición de la cesión contractual. Por último, afirmando que el beneficiario podrá ejercitar los remedios sinalagmáticos y las acciones de responsabilidad por daños.

<sup>172</sup> *Ibid.*, pp. 187, señala que en muchas de las situaciones es bastante oscura la posición jurídica que ocupa tanto empresarios como organizadores como las agencias de viajes implicadas, señalando que las personas cualificadas para la obtención del incentivo son jurídicamente beneficiarios del viaje... por lo que la obligación del precio del viaje recae en las empresas organizadoras del concursos o programa y no en el viajero participante. Además, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de febrero de

En cualquiera de los supuestos o casos que se presente el turista, se le reconocerá como consumidor en el contrato de viaje combinado. Es importante señalar que el beneficiario o el cesionario son personas físicas, y puede ser que el contratante principal sea una persona física o jurídica, es por ello que el TRLGDCU otorga una noción amplia de consumidor.<sup>173</sup>

## **5.2. Elementos objetivos del contrato de viaje combinado.**

Dentro del contrato de viaje combinado existen dos elementos objetivos a destacar, que son: 1) “el viaje combinado” con la diferentes prestaciones que lo componen; y 2) el “precio global” que debe abonar el consumidor para la realización del viaje combinado. En los siguientes títulos se explicara de manera concreta sobre los elementos objetivos que componen al contrato de viaje combinado.

### **5.2.1. Las diversas prestaciones del viaje combinado.**

El tipo de viaje que se contrata dentro del “viaje combinado”, se forma con la combinación de al menos dos elementos a elegir, de los cuales el TRLGDCU presenta tres posibles servicios que son: el transporte, el alojamiento y otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado.

Por transporte se entiende, que es el servicio que permite al turista el desplazamiento desde su lugar de residencia habitual o desde el punto de partida hasta el lugar de destino turístico, utilizando para ello el medio de transporte previamente contratado.<sup>174</sup>

El alojamiento es la residencia o estancia temporal, que constituye el turista en el establecimiento o empresa hotelera en el lugar de destino del viaje combinado.<sup>175</sup>

---

1993 (westlaw AC 1993\125), por el que se indemnizo por incumplimiento de un contrato, en el que se sorteó un viaje y que se negó ejecutar el viaje a los ganadores por parte de la agencia, por lo que se condenó a responder solidariamente tanto al organizador del concursos como a la agencia de viajes de manera solidaria ante el incumplimiento de la prestación principal.

<sup>173</sup> GÓMEZ LOZANO, María del Mar: “El contrato de viaje combinado”, en *Contratos mercantiles, Tomo III*, de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), *Op. cit.*, pp. 639-640.

<sup>174</sup> BLANQUER CRIADO, David: *Op. cit.*, p. 355, “En líneas generales, el contrato de transporte es aquél por el que un empresario se obliga, mediante el cobro de un precio, a trasladar de un lugar a otro a personas o cosas utilizando para ello el medio de locomoción pactado.”.

Sobre los otros servicios turísticos<sup>176</sup>, el TRLGDCU exige por una parte, que no sean accesorios del transporte o del alojamiento y por otra, que constituyan una parte significativa del viaje combinado.

Conforme lo estipulado en el TRLGDCU, la contratación más usual de servicios o prestaciones de actividades turísticas son las dos primeras, el transporte y el alojamiento, pero se presenta la posibilidad de que en el viaje combinado se integre o confeccione con “otros servicios”, los cuales en la normativa sobre el viaje combinado no precisa cuáles son esos “otros servicios”.

Para determinar los “otros servicios turísticos” que combinados con el alojamiento y el transporte, dan como resultado el viaje combinado, SOLER VALDÉS-BANGO<sup>177</sup> acude al Estatuto Ordenador de Empresas y Actividades Turísticas Privadas<sup>178</sup>, en el cual menciona “como actividades turísticas privadas todas aquellas que de manera directa o indirecta se relacionen o puedan influir predominantemente sobre el turismo, siempre que lleven consigo la prestación de servicios a un turista, tales como las de transporte, venta de productos típicos de artesanía nacional, espectáculos, festivales, deportes y manifestaciones artísticas, culturales y recreativas, y especialmente las profesiones turísticas”; y en otra normativa sectorial autonómica como la de Canarias, donde se dispone como actividades turísticas complementarias las “Salas de fiesta, discotecas, salas de espectáculos y de baile, atracciones y espectáculos, actividades recreativas, de animación y ocio, deportes, acción y aventura, catering , organización y asistencia a Congresos y traducción simultánea”; o a los enumerados en el artículo 128.1 del

---

<sup>175</sup> BADENAS CARPIO, Juan Manuel: “El contrato de hospedaje”, en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dirs.) / PETIT LAVALL, María Victoria (Coord.), *Lecciones de Derecho del turismo*, Op. cit., pp. 285-286. “El hospedaje es un contrato que se enmarca en el campo de las relaciones de *Derecho privado*... consiste en dar alojamiento a los viajeros... La doctrina ha definido el hospedaje como aquel contrato *sui generis* de carácter complejo, consensual y bilateral, en virtud del cual una de las partes (el titular del albergue u hotel) se obliga con respecto a la otra (huésped o viajero) a cederle el uso de una o más habitaciones, a prestarle ciertos servicios, a la custodia de su equipaje y a la reventa de ciertos objetos o energías industriales, a cambio de una contraprestación en dinero.”.

<sup>176</sup> GÓMEZ CALERO, Juan: Op. cit., p. 82., considera: “... que los siguientes servicios cumplirían esas dos exigencias legales: a) venta y cambio de divisas o cheques de viajero; b) alquileres de vehículos con o sin conductor; c) reserva, adquisición y venta de billetes de espectáculos, museos y monumentos; d) alquiler de equipos para practicar turismo deportivos; e) pensión alimenticia, no necesariamente incluida en el alojamientos; f) visitas y excursiones; g) servicio de informadores, interpretes o guías turísticos; h) formalización de seguro turístico”.

<sup>177</sup> SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: Op. cit., p. 152.

<sup>178</sup> Debemos recordar que el Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de Empresas y Actividades Turísticas Privadas se encuentra derogado, como se explico en capítulos anteriores.

Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres como tales servicios “la asistencia a cursos, conferencias o eventos deportivos, realización de excursiones o visitas a centros de interés cultural o turístico, entradas para la asistencia de un espectáculo en el lugar de destino, alquiler de vehículos o servicios de guía turística...”.

En la normativa del viaje combinado establecida dentro del TRGLDCU, cuando habla sobre la prestación de “otros servicios”, nos dice que éstos sean “significativos”, lo cual deben de tener una entidad propia y que no sean “prestaciones accesorias” a la del transporte y alojamiento.

Sobre que los “otros servicios sean una parte significativa del viaje combinado” se presentan varios cuestionamientos sobre su interpretación. El primero de los criterios, es que se va a determinar de acuerdo a la relevancia de una prestación en función de su valor económico. Con lo cual considerar este criterio, normalmente da extravagantes resultados, por ejemplo que una excursión sea menos onerosa que un transporte, de igual manera sucede con los eventos deportivos o culturales, que el precio de una entrada para un espectáculo sea inferior al del transporte hasta donde tendrá lugar el evento, lo cual no puede conducirnos a concluir su carácter auxiliar o secundario.<sup>179</sup>

Otro criterio que se plantea es el subjetivo, en el cual el aspecto determinante de la relevancia de la prestación es únicamente el interés individual del viajero, en el cual se muestra y caracteriza la protección de la Directiva y luego dentro del TRLGDCU en España. El criterio subjetivo, se va a considerar como elemento que ha influido en la decisión del consumidor de contratar el viaje combinado.<sup>180</sup>

Además, se emplean otros dos criterios para determinar el carácter accesorio de las prestaciones componentes del plan del viaje combinado: el valor intrínseco de las

---

<sup>179</sup> Véase, MARTIN OSANTE, José Manuel: “Información, contenido y modificación de los contratos de servicios turístico”, *Diario La Ley*, núm. 7315, Sección doctrina, 7 de enero 2010, Año XXXI, “...se plantea la duda de cuáles son esos servicios accesorios o que no forma una parte significativa del viaje y la respuesta no resulta sencilla por cuanto, efectivamente, un servicio sería accesorio o una parte no significativa del viaje cuando se trate de una prestación subordinada o auxiliar de la otra desde el punto de vista funcional, pero tal carácter subordinado no se puede hacer depender del valor económico de las prestaciones en el sentido que ambas tengan un precio similar, sino que debe ponderarse el interés o la motivación del turista en las prestaciones...”.

<sup>180</sup> SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 157, menciona que: “El criterio subjetivo, no puede regirse como el único canon de interpretación del carácter significativo o esencial de las prestación, que no necesariamente protege de manera suficiente los intereses de ambas partes...”.

prestaciones y el parámetro de la “subordinación funcional”. De acuerdo con el primero, aquellos elementos del viaje que tengan un valor propio, serán considerados como principales. En el segundo, aquellas prestaciones que guarden entre sí una relación de subordinación funcional no se consideraran “autónomas” y por tanto no podrán conformar una pluralidad.<sup>181</sup>

### **5.2.2. El precio.**

En la normativa dentro de la definición del viaje combinado uno de los elementos es que el precio del viaje combinado sea de manera global o total. Esto es, estableciendo un precio único que alcance y englobe todas las prestaciones incluidas en el viaje combinado contratado.<sup>182</sup>

En la situación de que la agencia de viajes quisiera introducir en el contrato de viaje combinado distintos tipos de formulas relativas a la fijación de un precio global para poder evitar la aplicación del TRLGDCU, se prevé que la facturación por separado de varios elementos de un mismo viaje combinado no exime al organizador o al detallista del cumplimiento de las obligaciones.<sup>183</sup>

El cumplimiento de establecer un precio general en el viaje combinado, no afecta de manera directa al cumplimiento del contrato, y a su vez a ningún requisito esencial para su validez, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente del viaje combinado. El resultado al incumplimiento de establecer un precio global seria en todo caso, de tipo administrativo pudiendo sancionarse a la agencia de viajes por tal omisión.

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, p. 157. Además, menciona que: “No se puede mantener un criterio único y absoluto que nos permita distinguir en todo caso entre prestación accesoria y principal dentro del plan de viaje sino que deberemos emplear conjuntamente las reglas apuntadas guiándonos en nuestra decisión, además, por lo que comúnmente se entiende en el tráfico turístico como accesorio”, p. 159.

<sup>182</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 150. Ámbito de aplicación”, *Op. cit.*, p. 1768, “... el consumidor tiene derecho a conocer el precio final del viaje, impuestos incluidos, y deberá ser informado asimismo de la existencia y, si se conoce, también del coste, de aquellos servicios incluidos en el viaje combinado que no deban abonarse al organizador o detallista (art. 152.2.1. f)...”.

<sup>183</sup> El artículo 150.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias menciona que: “La facturación por separado de varios elementos de un mismo viaje combinado no exime al organizador o al detallista del cumplimiento de las obligaciones”.

El precio establecido dentro del contrato de viaje combinado en un principio es definitivo y únicamente puede llegar a revisarse si incurren en circunstancias que marca el artículo 157 sobre la revisión de precios del TRLGDCU.

### **5.3. Causa (Vid. Supra. I.3.1).**

### **5.4. El perfeccionamiento y la forma del contrato de viaje combinado.**

La normativa vigente sobre el viaje combinado que es el TRLGDCU, contiene una regulación sobre el contenido y la forma en que se divulga la información a disposición del consumidor antes de la celebración del contrato y en fijar el contenido mínimo del contrato. Por eso es de gran consideración lo relativo al folleto del viaje y de cómo debe formularse el contrato.

#### **5.4.1. El programa o folleto informativo del viaje combinado.**

En el tema sobre el “programa o folleto informativo”, no debe considerarse como una sola obligación del organizador o detallista de poner a disposición del consumidor o turista el folleto informativo del viaje, sino la exigencia de la normativa de que el “folleto informativo contenga por escrito la correspondiente oferta sobre el viaje combinado”.<sup>184</sup>

El folleto informativo se debe considerar jurídicamente como una oferta contractual del viaje combinado, porque contiene todos los elementos esenciales del futuro contrato, y hace que el propio viaje combinado quede perfeccionado en los términos de dicha oferta, desde el momento en que un consumidor acepte algunas de las propuestas establecidas en el folleto. El consumidor se dirigirá al organizador o detallista que ha publicado y divulgado el folleto para inscribirse en un viaje o hacer la correspondiente reserva, en su caso, dentro del plazo de vigencia del programa-oferta y reunido las condiciones exigidas para tomar parte en el viaje.

La información contenida en el “programa o folleto informativo” del viaje combinado deberá ser clara, comprensible y precisa, teniendo que comprender un contenido

---

<sup>184</sup> Así, MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 152. Programa y oferta de viajes combinados”, *Op. cit.*, p. 1792, “La norma difiere de la previsión originaria de la Directiva, que se limitaba a establecer que, en caso de puesta a disposición del consumidor de un folleto, éste debería tener un determinado contenido (art. 3). No sólo es, sino que, además, en nuestra Ley nacional, el mencionado folleto ha de contener la correspondiente oferta contractual... y no una simple invitación a ofrecer, como es normal en cualquier actividad publicitaria.”.



mínimo sobre los aspectos básicos del viaje que se oferta. Esto se recoge del artículo 152.1 del TRLGDCU:

- Destinos y medios de transporte con mención de sus características y clase. Se debe indicar todo lo relacionado con los medios de transportes. Es decir, que tipo de vuelo es, en que categoría de autobús se viaja, o en los casos que se presenten conexiones que tipo de transportes se utilizaran para el desplazamiento a los diversos lugares o destino final del viaje. Asimismo, en la práctica se acostumbra informar al consumidor o turista sobre las condiciones de ejecución del transporte, como es el supuesto de presentarse en el lugar señalado para la salida del viaje con una antelación suficiente para realizar las gestiones administrativas y además sobre las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esta carga.
- Duración, itinerario y calendario de viaje. Sobre todo en las situaciones en que el turista va a realizar una ruta con diferentes destinos, se debe indicar las escalas más importantes del viaje y donde tendrá que tener mayor precaución.
- Relación de establecimientos de alojamiento, con indicación de su tipo, situación, categoría o nivel de comodidad y sus principales características, así como su homologación y clasificación turística en aquellos países en los que exista clasificación oficial. El organizador o detallista deberán informar si se trata de hoteles, apartamento, camping, etc. Es decir, mencionar todo sobre las características del alojamiento, con la respectiva descripción de las habitaciones sobre si contiene baño, televisión, ducha, video, teléfono, acceso a Internet, mini-bar, caja fuerte, etc. También se deberá especificar las instalaciones exteriores con la que cuenta el alojamiento, si tiene piscina, cancha de tenis, paddle, discoteca, restaurante, bar, lavandería, salón de juntas, peluquería, etc. Además mencionar la ubicación del hotel en relación con las distancias al centro de la ciudad, en su caso con la playa, con monumentos históricos, etc. Sobre la categoría del alojamiento, se debe informar al consumidor o turista sobre la calificación oficial del establecimiento, en el caso de que fuesen fuera de España se debe dar una explicación de las equivalencias de categorías conforme a las existentes en territorio español.
- El numero de comidas que se van a servir. En este sentido, las comidas se clasifican en pensión completa, media pensión, solo desayuno y el todo

incluido. Una reforma en el TRLGDCU en comparación a la Ley anterior es la de indicar si las bebidas o algún tipo de ellas no están incluidas en el régimen alimenticio previsto.

- La información general sobre pasaportes y visados (costos y plazos para su obtención) para los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y formalidades sanitarias necesaria para el viaje y la estancia.
- El precio final completo del viaje combinado, incluidos los impuestos, y precio aproximado de las excursiones facultativas. En el caso de gastos adicionales a los servicios incluidos en el viaje combinado que asuma el consumidor o turista, el organizador y detallista deben informar sobre la existencia y el costo total del importe.<sup>185</sup>
- El importe o el porcentaje del precio que deba pagarse en concepto de anticipo sobre el precio total y el calendario para el pago de la parte de precio no cubierta por el anticipo desembolsado, así como las condiciones de financiación que, en su caso, se oferten.
- Número mínimo de inscripciones para el viaje y en tal caso, la fecha límite de información al consumidor y usuario en caso de anulación (que no puede ser superior a los 10 días anteriores al inicio del viaje, esto conforme al artículo 154.1.f).
- Cláusulas aplicables a posibles responsabilidades, cancelaciones y demás condiciones del viaje. Es decir una referencia a las condiciones generales del contrato.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 152. Programa y oferta de viajes combinados”, *Op. cit.*, p. 1806, explica que: “Este apartado a experimentado modificación respecto de su redacción originaria dentro de la Ley de 1995, dirigidas a concretar aún más la información que el consumidor debe recibir sobre el coste final de su viaje, pues se ha añadido la previsión de hacer constar en el folleto el precio *final completo* del mismo, en el que se hallen *incluidos los impuestos* [vid. En el mismo sentido art. 60.2.b) TRLGDCU]... con la misma finalidad, se ha incluido en el precepto una nueva previsión sobre costes... las llamadas excursiones facultativas a que se refiere este apartado son aquellas que quedan al margen del viaje combinado (son contratadas por el consumidor en el lugar de destino, con terceros prestadores de servicios a lo que abonan un precio aparte). Por esta razón, el organizador no las incluye dentro del precio, aunque es habitual que el folleto informativo ofrezca un precio estimado con un carácter meramente orientativo o informativo para el consumidor...”. GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 150, dice que: “del mismo modo que hay que informar de las excursiones facultativas y de su precio estimado, el folleto habrá de especificar las excursiones, visitas y demás servicios incluidos en el precio del viaje...”.

<sup>186</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 153. Carácter vinculante del programa oferta”, *Op. cit.*, p. 1810 menciona que: “... la Agencia habrá que informar al consumidor de con cuanta antelación la cancelación por su parte del viaje no tendrá ningún tipo de consecuencia indemnizatoria para él (en

- Nombre y domicilio del organizador del viaje combinado así como, en su caso, de su representación legal en España.
- Toda información adicional y adecuada sobre las características del viaje ofertado, para la realización correcta del viaje combinado.

Si el consumidor o turista interesado en una oferta establecida en un programa-oferta de un organizador o detallista, no está conforme con toda ella y pretende introducir algunos cambios, al no coincidir exactamente con lo que desea, sobre el contenido del programa propuesto, nos encontramos ante una contraoferta del cliente, que el detallista o el organizador, a su vez, podrán aceptar o rechazar.<sup>187</sup>

Se puede dar la situación que dentro de la integración de un viaje combinado, se presten otros servicios significativos diferentes a los más comunes que son el alojamiento y transporte, por lo que estos “otros servicios” deben ser distintos y que no sean accesorios de los anteriores y deben ser considerados como un conjunto unitario, es decir, conforme al plan de viaje combinado ofertado.

Es muy común, que dentro de estos contratos de viaje combinado, se ofertan excursiones, actividades de ocio, deportivas, etc., y que estén dentro de los folletos informativos redactados e impresos por el organizador, el cual se considera como

---

referencia a la facultad que le reconoce el art. 160 del TRLGDCU).”. La introducción de las condiciones generales en el folleto informativo cumple las exigencias de información del TRLGDCU, así BOLDÓ RODA, Carmen: “El contrato de viaje combinado”, en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dir.) / PETIT LAVALL, María Victoria (Coord.), *Lecciones de Derecho del turismo*, *Op. cit.*, p. 234, “Esta obligación de información de la agencia previa al contrato se cumple normalmente insertando en el folleto publicitario las condiciones generales del contrato que luego se reproducirán o se darán por reproducidos mediante una remisión expresa en el contrato definitivo.”.

<sup>187</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 153. Carácter vinculante del programa oferta”, *Op. cit.*, pp. 1814-1815, referencia al artículo 153. a) y b) “... la modificación tiene lugar antes de la celebración del contrato, a instancias de la Agencia. Se trata, por tanto, de una modificación de la oferta (contemplada en el folleto informativo), cuya licitud dependerá (en los términos del propio precepto) del cumplimiento de dos requisitos: la previa comunicación por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato, y que tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa-oferta... La segunda excepción, que contempla la norma en su apartado b), es el acuerdo modificadorio alcanzado entre ambas partes (agencia y consumidor) con posterioridad a la celebración del contrato, que habrán de tener lugar por escrito...”. GOMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 153, menciona que: “...parece referirse al momento de la celebración del contrato, por lo que esta regla estaría contemplando un caso de novación modificativa, posible siempre que ambas partes estén conformes en modificar el contrato ya concluido. No obstante, es claro que también antes de contratar pueden las partes llegar a un acuerdo que compete una desviación, en algún aspecto, del programa general ofertado, como ocurre cuando el detallista o, en su caso, el organizador acepta una solicitud especial del consumidor...”.

parte íntegra total del plan de viaje y con la consecuencia obligatoria de cumplir satisfactoriamente.<sup>188</sup>

Sin embargo, existe la posibilidad de que la agencia informe por medio de documentación separada o por el folleto informativo u otro tipo de publicidad, la realización de actividades facultativas y que están directamente relacionadas a la obligación correcta en la ejecución del viaje. La manera de evitar como propia la obligación sobre la correcta ejecución de prestaciones facultativas por parte de las empresas como parte de un viaje combinado, es utilizando cualquier medio admitido en Derecho, como sucede en la práctica con las frecuentes cláusulas que entienden que las excursiones facultativas no forman parte del viaje combinado debido a su carácter voluntario.<sup>189</sup>

El contenido del programa expuesto en el folleto informativo solo puede ser modificado antes de la celebración del contrato, dándose dos supuestos. La norma del artículo 152.1 del TRLGDCU tiene dos excepciones establecidas en el artículo 153 del TRLGDCU: a) que los cambios se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y tal posibilidad se haya mencionado expresamente en el programa oferta; b) que se produzcan posteriores modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes. Más adelante se explicará con mayor amplitud los supuestos de la modificación de los elementos esenciales del contrato de viaje combinado.

#### **5.4.2. La forma del contrato del viaje combinado.**

---

<sup>188</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 748/2001, de 23 de julio (westlaw RJ 2001\8411), resolvió un asunto sobre la contratación de un viaje combinado, con la inclusión de un trayecto de avioneta. Otro supuesto, en el mismo sentido, es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 5ª), núm. 640/1998, de 11 de diciembre (westlaw AC 1998\2365), en la que se suscita un accidente en autobús durante la excursión dentro de un viaje combinado; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª), núm. 180/2000, de 20 de marzo (westlaw JUR 2000\127196), se presenta el caso de la reclamación de daños por el accidente en una actividad turística dentro de un viaje combinado; también en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª), de 29 de mayo (westlaw AC 2002\1244), donde se reclaman daños y perjuicios por el accidente en una excursión opcional durante la realización de un viaje combinado.

<sup>189</sup> En mi opinión, por ejemplo, si se publicita una actividad turística activa y facultativa, el organizador no puede eximirse de responsabilidad argumentando que estas actividades no se contrataban mediante su colaboración y que no asumía su ejecución. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 3ª), núm. 515/1998, de 23 de octubre (westlaw AC 1998\2255), sobre el accidente de autobús en una excursión facultativa, así como también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª), núm. 534/2008, de 20 de octubre (westlaw AC 2009\89), en donde se contrata una actividad facultativa dentro de un viaje combinado y que las agencias mayoristas y minoristas tienen una responsabilidad solidaria.

El contrato de viaje combinado, conforme a lo establecido en el artículo 154.1 del TRLGDCU exige que se realice por escrito, incluyendo un contenido mínimo de cláusulas, enumerando todos los elementos o prestaciones que se van a realizar como el destino del viaje, medios de transporte, alojamiento y demás servicios incluidos, precios y modalidades de pago, etc. Todo ello es acorde con las características de la oferta del viaje combinado que se trate. El contenido mínimo coincide en parte con lo estipulado en el folleto publicitario del viaje, en consecuencia se estipula que las condiciones aplicables al contrato contengan indicaciones veraces y comprobables, en los términos de los artículos 18 y 60 del TRLGDCU, con lo cual se intenta tener una mayor protección al consumidor.

El hecho de que el contrato de viaje combinado se realice o formalice por escrito, con un contenido de unas cláusulas mínimas, da una seguridad y una garantía de protección al consumidor o turista. Además, se debe de entregar una copia del contrato de viaje combinado al consumidor o turista. Todos los contratos de viaje combinado realizados por las agencias de viajes, deben ser inscritos o registrados ante el órgano administrativo correspondiente, por ser un contrato de adhesión y contener condiciones generales.

Si el contrato de viaje combinado no se realice por escrito no afecta la validez del mismo, se debe a que no es considerado como un elemento constitutivo o esencial del contrato, por lo tanto el contrato será válido y producirá sus efectos.<sup>190</sup> Por tanto no es admisible la nulidad del contrato si este no se realiza de manera escrita, recordando que el contrato se perfecciona con el mero consentimiento de las partes, y el consumidor o usuario tiene la facultad de exigir la formulación por escrito esto, para tener una acción probatoria sobre el contenido del contrato, considerando la admisión de otras pruebas como son las facturas, documentos que han permitido la prestación de los servicios ofertados, etc.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> Todo ello conforme a lo establecido por el artículo 1.278 del Código Civil: “Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. Además, en el mismo sentido expone AMAT LLOMBART, Pablo: *Op. cit.*, p. 291, “Respecto al valor de esta forma escrita (solemne), la doctrina parece defender la postura de que no hallamos ante una simple *forma ad probationem*, no constitutiva o esencial (GOMEZ CALERO y BOLDO RODA), por lo que en caso de no cumplirse el contrato sería válido y producirá sus efectos...”.

<sup>191</sup> BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María: “contratos turísticos, de alojamiento...”, *Op. cit.*, p. 4770.

Con el avance de las nuevas tecnologías, se puede presentar la situación de que el contrato de viaje combinado se celebre por medios electrónicos, en el cual se cumple con la formalidad escrita del contrato, otorgando al usuario o consumidor la posibilidad de almacenar y reproducir el programa del viaje combinado hecho por el organizador o detallista, enviando el documento contractual por escrito vía electrónica.<sup>192</sup>

En el TRLGDCU<sup>193</sup> se establece que el contrato de viaje combinado contendrá un contenido mínimo del cual destacamos los siguientes elementos:

- El destino o destinos del viaje.
- Las fechas, horas y lugares de salida y de regreso.
- Lugar, categoría turística y características básicas del alojamiento.
- Los medios y categorías de los transportes que se utilicen.
- Número mínimo de personas que en su caso, se exijan para realizar el viaje, así como la fecha límite para informar al consumidor de su cancelación (suelen ser 10 días).
- El itinerario del viaje.
- Las excursiones u otros servicios incluidos en el precio total del viaje.
- El nombre, la dirección del organizador y del detallista y si procede del asegurador (no sólo en los casos de seguros de responsabilidad civil, sino también, si se contrata un seguro de asistencia turística o un seguro de cancelación del contrato).
- El precio del viaje combinado, incluso modalidades de pago del precio, así como su posible financiación; los gastos de anulación.
- La obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato, al organizador, al detallista o al prestador de servicio que se trate.
- El plazo de prescripción de las acciones (artículo 164) en el que el consumidor podrá formular sus reclamaciones por la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
- Plazo en el que el consumidor podrá exigir la confirmación de sus reservas.

---

<sup>192</sup> Véase, en la Parte General, capítulo II.4 sobre “La contratación de servicios turísticos por medios electrónico”.

<sup>193</sup> MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 150. Ámbito de...”, *Op. cit.*, p. 1768, referencia al artículo 154.1 del TRLGDCU, “La norma exige... que este dotado de un contenido mínimo (puramente indicativo que se obligan a hacer constar puedan no estar incluidas dentro del viaje combinado)...en lo que se refiere al contenido del contrato, la norma ha sido dispuesta prácticamente en paralelo con el art. 152, sobre el programa oferta... no se trata de una repetición al contenido del programa-folleto, y que se pueden apreciar algunas diferencias...”.

El contenido mínimo del contrato de viaje combinado se asemeja bastante con lo establecido por el artículo 152 del TRLDCU que establece el contenido del “programa o folleto informativo”.

## **6. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DENTRO DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

### **6.1. Obligaciones de las agencias de viajes.**

En el TRLGDCU, nos encontramos con seis obligaciones que pertenecen a las agencias de viajes:

- Proporcionar al consumidor todos los servicios turísticos que contenga el viaje combinado contratado. Es decir, desarrollar una correcta ejecución del viaje combinado conforme al programa de viaje compuesto dentro del folleto publicitario. El organizador o detallista debe supervisar durante el desarrollo del viaje, los servicios prestados y vigilar los sujetos encargados de su ejecución.<sup>194</sup>
- Informar sobre el viaje combinado. Se debe facilitar a los consumidores o turistas información antes de celebrar el contrato, de forma accesible y comprensible, sobre el contenido de todas las cláusulas y condiciones que integran su contenido.<sup>195</sup> La forma en que la agencia de viajes pone a disposición de los consumidores o turistas la información es por medio del “programa o folleto informativo”<sup>196</sup>, que contiene la oferta sobre el viaje combinado y con lo cual se cumple con la obligación de informar. Para dar

---

<sup>194</sup> MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *Op. cit.*, p. 142. La supervisión de las prestaciones contiene verificar las condiciones de seguridad, “La obligación de seguridad... es el deber para la agencia de tomar las medidas de seguridad destinadas a evitar o reparar los daños sufridos a los clientes por parte de los prestadores... se concretan en cuatro obligaciones: 1. La obligación de diligencia en la elección de los prestadores de servicios; 2. Una obligación de control de estos últimos; 3. Una obligación de diligencia en la organización de las excursiones (ej. País en guerra, zona peligrosa, etc.); 4. Obligación de asistencia (por ej. En caso de accidentes, hospitalización, repatriación de las víctimas, etc.). Esta obligación de asistencia puede subsistir incluso después de finalizado el viaje.... Recuperar el equipaje perdido o para el resarcimiento de los daños derivados del viaje.”.

<sup>195</sup> MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 154. Forma y contenido del contrato”, *Op. cit.*, p. 1829, referencia al artículo 154.2 del TRLGDCU, “... este precepto establece el doble derecho del consumidor a ser informado, con anticipación a la celebración del contrato, del contenido de las cláusulas contractuales, así como a recibir una copia del mismo una vez que se haya formalizado...”. La entrega de una copia del contrato era una exigencia de la Directiva, que en el marco de la norma comunitaria se justificaba por el hecho de que el organizador o detallista no estaban obligados a poner un folleto a disposición del consumidor, así MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *Op. cit.*, p. 150.

<sup>196</sup> Véase, en la Parte Especial, Capítulo I.5.4.1. sobre “El programa o folleto informativo”.

cumplimiento con las obligaciones de informar a los turistas, no solo se toma en cuenta la normativa del viaje combinado, sino que además es importante considerar los preceptos del Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, si se emplean condiciones generales en el contrato de viaje combinado.

- Entregar al consumidor o turista una copia del contrato del viaje combinado celebrado.
- Después del perfeccionamiento del contrato, la agencia de viajes debe entregar al consumidor o turista, “los títulos o bonos de transporte, bonos de alojamiento en su caso, y demás documentos necesarios para la realización completa de los servicios incluidos en el paquete turístico, así como una factura en la que habrá de figurar además del precio global del paquete, una clara referencia a la oferta de que se trate”.<sup>197</sup>
- El organizador o detallista deberán prestar la asistencia necesaria al consumidor que se encuentre en dificultades.<sup>198</sup>
- La agencia de viajes deberá constituir y mantener en permanente vigencia una fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los consumidores de un viaje combinado.<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup> Así, se establecía en el artículo 27.2 de la Orden de 14 de abril de 1988, actualmente derogada, que regulaba a las agencias de viajes, en el cual se exige la obligación de entrega de toda la documentación en el momento de la perfección del contrato. Así, también MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 154. Forma y contenido del contrato”, *Op., cit.*, p. 1823, comentario al artículo 154 del TRLGDCU, “En el momento de la confirmación de la reserva suelen suceder tres cosas: 1)...; 2) Asimismo deberá entregarle la documentación necesaria para ejercer los derechos que derivan del contrato (a saber, los títulos o bonos de transporte, bonos de alojamiento en su caso y demás documentos necesarios para la realización completa de los servicios incluidos en el viaje combinado así como una factura)...”.

<sup>198</sup> Se ha presentado la falta de asistencia respecto a un viajero que enfermó en el viaje, como en la situación de unos turistas a un viaje a Túnez, conforme lo detalla la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª), núm. 540/2002, de 16 de octubre (westlaw JUR 2003\17739), donde se señala y se especifica la falta de asistencia por parte de el organizador o detallista, con lo que son acreedores a indemnizar los daños.

<sup>199</sup> El artículo 163 del TRLGDCU menciona que: “Los organizadores y detallistas de viajes combinados tendrán la obligación de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza en los términos que determine la Administración turística competente, para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado...”; MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 163. Garantía de la responsabilidad contractual”, *Op., cit.*, pp. 1946-1947, “El contrato de viaje combinado lleva consigo unos riesgos, que exceden de la mera consideración de la situación desigual de las partes dentro del contrato... el art. 7 DVC, exigió a los Estados miembros que facilitasen –pruebas suficientes de que, en caso de insolvencia o de quiebra, quedarán garantizados el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del consumidor-. Indicación que, en el caso de nuestra Ley nacional de transposición... en el que se estableció la obligación para las Agencias de viajes (organizadores y detallistas) de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza que garantizara en general las obligaciones de la prestación de los servicios frente a los contratantes del viaje combinado. Las obligaciones que quedan garantizadas mediante la fianza son: 1) las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los



Esta fianza es una garantía de que los consumidores podrán recuperar los fondos depositados en las agencias, en los casos de insolvencia de la empresa.<sup>200</sup>

Sobre los derechos que tienen las agencias de viajes, resalta sobre todo el de recibir el abono del precio global del viaje combinado en los términos pactados en el contrato, aun cuando el cliente no se presente a la salida del viaje, salvo acuerdo en contrario o caso fortuito. También tienen derecho a cobrar gastos de gestión, anulación y penalización en los casos de desistimiento unilateral del cliente. En los casos de fuerza mayor o caso fortuito, la agencia tiene derecho a exonerarse de la obligación de cumplimiento, además de dimitir unilateralmente de la celebración del viaje combinado por no haberse alcanzado el número mínimo de participantes, siempre y cuando tal circunstancia conste en el contrato o folleto informativo, y se comunique con la antelación de diez días.<sup>201</sup>

## **6.2. Derechos y obligaciones del consumidor o turista.**

Encontramos dos principales obligaciones del consumidor o turista, las cuales son:

- La más importante y principal es la de abonar el precio del viaje combinado a la agencia de viajes por los servicios recibidos. El pago del viaje combinado se puede hacer primero mediante un anticipo, abonando el resto del precio en la celebración del contrato y en todo caso antes del inicio del viaje combinado, salvo que existan condiciones especiales de financiación o pago aplazado. Lo que sucede en la práctica es que el organizador puede cobrar hasta el 40 por ciento del total del precio al formular la reserva (con un respectivo recibo

---

contratantes de un viaje combinado; 2) el reembolso de los fondos depositados y el resarcimiento por los gastos de repatriación en el supuesto de insolvencia o quiebra.”.

<sup>200</sup> Como se señala el TRLGDCU en su artículo 163 último párrafo, “... en caso de ejecutarse la fianza, deberá reponerse en el plazo de 15 días, hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma.”.

<sup>201</sup> Así, también MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 154. Forma y contenido del contrato”, *Op. cit.*, p. 1829, referencia al artículo 154.1. f) del TRLGDCU, establece que: “El apartado f) es algo más amplio que el art. 152 h): [Número mínimo de personas exigido, en su caso, para la realización del viaje combinado y, en tal supuesto, fecha límite de información al consumidor en caso de cancelación, que deberá efectuarse con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista de iniciación del viaje]. La ampliación consiste en el periodo mínimo de antelación con que el consumidor deberá ser informado de la cancelación del viaje por no haberse alcanzado el número mínimo de inscripciones, que paradójicamente tiene mucho más de norma general (apta para engrosar el folleto informativo) que de contenido contractual obligatorio (dentro del marco del art. 154).”.

entregado al consumidor, que conste la cantidad entregada y por el concepto en que se hace), y el resto al confirmar la reserva.

- La segunda obligación del consumidor o turista, es la de comunicar al organizador o detallista, por escrito o de modo de que exista constancia, sobre todo incumplimiento o cumplimiento parcial en la ejecución del contrato.
- Además, de las dos principales existen otras obligaciones referidas ya en servicios en concreto. Sobre el transporte ya sea por tierra, por mar o aire, las obligaciones del consumidor o usuario recaen sobre un adecuado comportamiento durante el trayecto, estas obligaciones estarán preestablecidas dentro del contrato de viaje combinado en el apartado sobre el contrato de transporte. En el caso del alojamiento, las obligaciones del turista deben ser sobre las normas usuales de convivencia y respetar el régimen interno del establecimiento. Igualmente, tiene las obligaciones de respetar a los demás miembros del grupo y no perturbar el disfrute del viaje, el incumplimiento que verse sobre cualquiera de estas posibles obligaciones puede ocasionar la resolución del contrato, así como el abono de los daños y perjuicios causados.<sup>202</sup>

Sobre los derechos del consumidor o turista se podría decir que son las obligaciones de la agencia, todo esto por ser un contrato de naturaleza recíproca. Por tanto, tiene derecho a la información antes y después del contrato, a obtener una copia del contrato, a que se le presten adecuadamente los servicios contratados y a recibir asistencia en caso de dificultades.<sup>203</sup> Además, antes de la salida del viaje, la agencia de viajes debe proporcionarle información sobre los siguientes puntos: horarios, lugares de escala y los enlaces, así como la indicación de la categoría de la plaza que debe ocupar el viajero en los medios de transporte que se utilicen, es importante añadir el nombre, las direcciones y el teléfono de la representación de la agencia en cada destino (en su defecto y, como mínimo, un número de teléfono de urgencia).

---

<sup>202</sup> En algunos contratos se redactan cláusulas como las siguientes: “En el supuesto de que uno de los viajeros perturbare manifiestamente la buena marcha del viaje y su organización, podrá ser invitado por los responsables de la agencia a abandonarlo de inmediato, poniendo a su disposición la documentación necesaria, los medios necesarios, para la vuelta al lugar de origen”. Este tipo de cláusula se considera válida y no abusiva, y por tanto, adecuada la expulsión del viajero por su mal comportamiento de un viaje de aventura. En MARTINEZ ESPIN, Pascual: *Op. cit.* p. 143, señala otro supuesto que se da sobre “las condiciones generales de los cursos de estudio de lenguas extranjeras contemplan una cláusula que sanciona a los contratantes que no presenten un comportamiento correcto y adecuado con la pérdida del derecho al viaje y al curso de lengua extranjera, estas cláusulas, prevén que, en tal caso, los viajeros serán repatriados sin reembolso alguno y todos los gastos a su cargo”.

<sup>203</sup> Conforme a lo estipulado en el artículo 154.2 del TRLGDCU y a lo explicado y desarrollado en capítulos anteriores.

La cesión de la reserva es otro derecho que tiene el contratante principal o el beneficiario para ceder gratuitamente su reserva en el viaje combinado a otra persona que reúna todas las condiciones requeridas, teniendo que comunicarlo por escrito a la agencia de viajes, con una antelación mínima de 15 días a la fecha inicio del viaje.<sup>204</sup>

En el supuesto de una cancelación del viaje combinado por parte del organizador o detallista, cualquiera que sea el motivo, siempre que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho al reembolso de todas las cantidades que hubiese pagado, además de una indemnización por los daños sufridos. Sin embargo, como se menciono en párrafos anteriores, no existiría indemnización por parte del organizador o detallista, si la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza mayor, ni tampoco si se debe a que el número de personas inscritas para el viaje combinado resulto ser menor al exigido, siempre y cuando se hubiese pactado esto último con el consumidor.

Se puede presentar la modificación del contrato, esto como otro derecho del consumidor, en el supuesto de que antes de la salida del viaje, el organizador o detallista, se ve con la necesidad de modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, como es el calendario de viaje, itinerarios, medios de transporte, alojamientos, etc. Por tanto se debe comunicar de manera inmediata al consumidor, y éste podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar la modificación introducida y su repercusión en el precio.<sup>205</sup> Del pago de la indemnización que corresponda, serán el organizador y el detallista los que estén obligados frente al consumidor o turista.

El consumidor o turista tiene derecho en caso de incumplimiento por parte de la agencia a presentar las reclamaciones (administrativas, civiles o penales) que se consideren acertados. Además, también podrá interponer las acciones judiciales

---

<sup>204</sup> Conforme al artículo 155 del TRLGDCU. Así, también MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 155. Cesión de la reserva”, *Op. cit.*, pp. 1833-1838, establece que: “El consumidor o usuario... podrán ceder gratuitamente su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas por el mismo...se trata de una cesión de contrato [atendido el momento de la perfección del mismo], esto es, la transmisión al cesionario de la íntegra posición contractual del contratante principal o beneficiario, tal y como se deduce del apartado 3 del mismo precepto, que establece la responsabilidad solidaria del cesionario (con el cedente) por el pago del saldo del precio y los gastos adicionales justificados que pudiera haber ocasionado la cesión. De conformidad con esta última interpretación, el cesionario tendría derecho no sólo a exigir las prestaciones propias del viaje combinado, sino también a recibir una copia del contrato..., así como la información adicional..., todo ello antes de la fecha de salida del viaje.”.

<sup>205</sup> Reconocido por el artículo 158 del TRLGDCU, por el que se modifique por el organizador, de manera significativa alguno de los elementos esenciales del contrato, antes del inicio del viaje.

necesarias a fin de ver satisfechas sus pretensiones indemnizatorias sobre lesiones o daños sufridos. Las acciones a las que tiene derecho tienen un plazo de prescripción de dos años.<sup>206</sup> El turista también puede presentarse ante el arbitraje de consumo, en los supuestos de que se haya pactado por las partes. En el caso de que el incumplimiento contractual sea previo al inicio del viaje se aplicara el artículo 158 del TRLGDCU y si es posterior se someterá a los artículos 159, 160 y 161 del TRLGDCU.

Se puede dejar sin efecto el contrato de viaje combinado, por parte del consumidor o turista como otro derecho, esto se presenta antes de la salida del viaje, y el consumidor tiene la facultad de resolver el contrato, dejando sin efecto los servicios solicitados o contratados.<sup>207</sup> Si el consumidor resuelve el contrato tiene derecho a la devolución de las cantidades entregadas, pero deberá indemnizar al organizador o detallista abonándoles los gastos de gestión, los de anulación si los hubiere y una señalización, eximiéndose de pagar en caso de que concurra fuerza mayor. La resolución del contrato se debe hacer comunicando a la agencia de viajes antes de la salida del viaje, en el supuesto de que el consumidor no se presentara a la salida del viaje, quedara obligado al pago total del viaje.

En los casos de que después de la salida del viaje combinado, el organizador o detallista compruebe que no puede suministrar una parte de los servicios previstos en el contrato, debe proponer alguna solución alternativa satisfactoria para el consumidor, y por tanto el turista tiene el derecho de aceptar o no las soluciones propuestas, en el caso de no aceptar tiene derecho a que se le facilite un medio de transporte al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida, sin perjuicio de las indemnizaciones que en su caso procedan.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> El artículo 164 del TRLGDCU, dice: “Prescribirán por el transcurso de dos años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en este libro.”; MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 164. Prescripción de acciones”, *Op. cit.*, p. 1951, referencia al artículo 164 del TRLGDCU, “Las acciones derivadas de los derechos reconocidos en este libro prescriben en el plazo de dos años. Estos derechos a que alude el precepto no son únicamente los que ostenta el consumidor frente a las Agencias de viajes (arts. 158, 159, 161, 162 TRLGDCU), sino también los que estos profesionales puedan ostentar frente al viajero (pago del precio, cobro de las penalización en caso de desistimiento [art. 160 TRLGDC]....”.

<sup>207</sup> En el artículo 160 del TRLGDCU, dice: “En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados...”; MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 160. Resolución del contrato por el consumidor y usuario”, *Op. cit.*, p. 1878, comenta que “El consumidor podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, en cualquier momento sin necesidad de alegar ninguna causa impeditiva, aunque debiendo abonar unos gastos y señalización, al menos que hubiera concurrido fuerza mayor.”.

<sup>208</sup> Así, MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 161. Consecuencias de la no prestación de servicios”, *Op. cit.*, pp. 1891-1901, “... el consumidor tendrá derecho a exigir a la Agencia la adopción de soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno del precio, o de solicitar un medio de regreso al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hubieran convenido, si las

Por último, el consumidor o turista tiene derecho al resarcimiento de daños, como se menciono en párrafos anteriores, a consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.<sup>209</sup> La responsabilidad se detallara en capítulos posteriores, pero los daños que sufra el turista, le corresponde responder al organizador o detallista del viaje combinado y en su caso, también al empresario prestador del servicio que incumplió o cumplió defectuosamente.

## **7. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

En la mayoría de los programas de viajes combinados, se puede presentar la situación de que la agencia de viajes tenga el Derecho de modificar el programa del viaje, con el fin o motivo de mejorar el desarrollo del viaje o a causa de mayores exigencias por parte de los turistas. Tales facultades de cambio se tratan principalmente sobre alguno de los elementos esenciales de contrato como es sobre algún cambio de hotel, el caso del medio de transporte inicialmente previsto, sobre el itinerario mencionado o por los precios inicialmente pactados.

### **7.1. Modificación de los elementos esenciales del contrato de viaje combinado.**

Es de importante relevancia señalar las posibles modificaciones que puede sufrir el contrato de viaje combinado en sus elementos esenciales. Es inminente que entre la celebración del contrato de viaje combinado y la fecha de salida transcurre un periodo determinado de tiempo, por lo que en este intervalo el organizador o detallista puede darse cuenta que le es imposible prestar al consumidor o turista algunos de los servicios contratados (por ejemplo, el alojamiento no es en una habitación con vista al mar, sino que tiene que ser una diferente, con vista al interior). Para cuando estos supuesto se presenten, el artículo 158 de la TRLGDCU menciona, que cuando antes de la salida del viaje, el organizador se encuentra obligado a alterar de forma

---

soluciones propuestas por el organizador fueran inviables o el consumidor o usuario no las aceptase por motivos razonables (p. 1892)... La segunda alternativa para el consumidor es no aceptar la propuesta del organizador, en cuyo caso éste habrá de facilitarle, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente (se entiende que al utilizado en el viaje de ida) para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que hayan convenido, siempre que esta negativa se deba a *motivos razonables* (p. 1898-1899).”.

<sup>209</sup> Conforme lo establecido en el artículo 162.2 del TRLGDC, que dice: “Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.”.

significativa algún elemento esencial del contrato, deberá comunicarlo inmediatamente al consumidor o turista.<sup>210</sup>

En los casos que se presenten tales situaciones, el consumidor o turista podrá optar por: a) El resolver el contrato, sin penalización alguna y con los derechos de reembolso e indemnización previstos por el artículo 159 LGDCU; o b) Aceptar la modificación contractual y con el adecuado ajuste sobre el precio. El consumidor o turista cuenta con tres días para comunicar su decisión a la agencia de viajes, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación por parte de la organizadora de la modificación del contrato. En el supuesto de que el turista o consumidor no manifiesta su decisión sobre la notificación de alguna modificación en los elementos esenciales del contrato, se entenderá que elige por resolver el contrato de viaje combinado con sus efectos y consecuencias correspondientes que mas adelante se detallaran.

Como se establece en párrafos anteriores el consumidor o turista tendrá el Derecho de elegir entre resolver o aceptar la modificación sobre alguno de los elementos esenciales del contrato, “salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas individualmente”, el actual Texto Refundido presenta una modificación sobre su redacción, en comparación a la anterior Ley derogada de viajes combinado sobre el mismo artículo “salvo que las partes convengan otra cosa”.<sup>211</sup> El presente Texto Refundido es más absoluto o precavido respecto al de la LVC en este aspecto, con lo que se procura que el acuerdo entre las parte se alcance tras la modificación del viaje combinado y no antes por la incorporación o redacción previa del acuerdo en las condiciones generales de dicho contrato, en virtud de que si fuese como la Ley anterior el consumidor o turista no podrá ejercitar el derecho de opción entre resolver o aceptar las modificaciones del contrato.

En el caso de que el consumidor opte a la resolución del contrato por modificación, tiene derecho al reembolso de las cantidades pagadas y la indemnización de daños y

---

<sup>210</sup> De igual manera lo establecen como una obligación de informar al consumidor, autores como BLANQUER CRIADO, David, *Op. cit.*, p. 322; GOMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 182; GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 104; HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, María Dolores: “Viajes combinados”, en *Derecho civil de la..., Op. cit.*, pp. 402-403.

<sup>211</sup> Conforme a lo estipulado en el artículo 158.2. del TRLGDCU, que anteriormente era el artículo 8.2 de la derogada Ley de Viajes Combinados.

perjuicios, siendo causas de exoneración del organizador y el detallista si los efectos de los cambios significativos se debieran por caso fortuito o fuerza mayor.<sup>212</sup>

Es importante señalar, que la modificación debe afectar de manera significativa a algún elemento esencial del contrato. Porque si una determinada modificación es significativa para el contrato, se debe determinar si es o no es una modificación primordial y en muchas ocasiones depende en buena medida de las características de cada viaje y del criterio personal del cliente.<sup>213</sup> En cualquier caso pueden considerarse modificaciones esenciales, además de la revisión, la sustitución del hotel por otra de categoría inferior, la sustitución de la suite nupcial por una habitación ordinaria, la sustitución del avión como medio de transporte por el tren, las variaciones acusadas de horario en viajes de corta duración, la pérdida de días de viaje, la imposibilidad de practicar el deporte para el que se realiza el viaje (submarinismo, descenso de cañones, alpinismo...), el cambio del lugar de inicio del viaje, la supresión o modificación del servicio de restauración, la supresión de excursiones previstas, etc.<sup>214</sup>

## **7.2. La revisión de precios en el contrato de viaje combinado.**

Existe la posibilidad de que el precio o precios del viaje combinado puedan ser revisados, todo esto con la admisibilidad a la excepción de la regla general sobre la irreversibilidad de los precios, establecido en el artículo 157.1 de la LGDCU,<sup>215</sup> que

---

<sup>212</sup> Véase, MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 168. Modificación del contrato”, *Op. cit.*, pp. 1863-1866, además, añadir que “en cualquier caso debe advertirse cómo la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor podrán eximir a las agencias de su obligación de responder (abono de daños y perjuicios), pero no podrán privar en ningún caso al consumidor la posibilidad de resolver el contrato...”.

<sup>213</sup> En este sentido, GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 107.

<sup>214</sup> BOLDÓ RODA, Carmen: *Op. cit.*, p. 242, “Los elementos esenciales del contrato son el transporte, el alojamiento o los otros servicios turísticos configurados del viaje. En cuanto a la valoración de cuándo se trata de una variación significativa, parece que lo correcto es conjugar aspectos objetivos y subjetivos pero quizá dando prioridad a estos últimos, de manera que será significativa cuando el consumidor no hubiese contratado con la modificación introducida.”. En un mismo sentido, MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 168. Modificación del contrato”, *Op. cit.*, p. 1859, “en cuanto al carácter significativo de la modificación, ha de prevalecer un criterio objetivo, a menos que los motivos personales del consumidor hubieran sido incorporados al contrato (ya se de modo expreso o porque fueran conocidos por la agencia en el momento de contratar); DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 152, “la determinación de cuándo una modificación será significativa, en última instancia dependerá del criterio jurisprudencial, pero creo que debe hacerse una interpretación flexible y subjetiva del término, en el sentido de que, al menos, hay que combinar la entidad de la variación con las repercusiones que para el consumidor tenga la misma...”; la Sentencia de la Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª), núm. 138/2008, 24 de marzo (westlaw JUR 2008\163636), considero que la variación en el horario de ida del viaje, de que los demandantes solo tuvieron noticia pocas horas antes de la prevista inicialmente, podía considerarse una “modificación de un elemento esencial del contrato”.

<sup>215</sup> Véase, GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 103.

reproduce lo dispuesto anteriormente en la LVC. De tal manera que los precios del viaje combinado podrán ser revisados cuando concurren los siguientes requisitos:

- Que el mismo contrato de viaje combinado contemple de manera explícita la posibilidad de revisar el precio. A tal efecto, el contrato deberá incorporar la correspondiente cláusula específica en la que se establezca el régimen de revisión de precios.<sup>216</sup>
- Que la previsión contractual contemple la revisión del precio “tanto al alza como a la baja”. Los precios podrán incrementarse por la agencia de viajes, pero los clientes también podrán solicitar una rebaja en el precio cuando concurren las circunstancias determinantes de su revisión y aplicando las modalidades de cálculo correspondiente, y resulte que el precio del viaje se ha visto reducido con posterioridad a la celebración del contrato y antes de la salida (ejemplo, por haber disminuido el precio del carburante o las tasas de embarque).
- Que la cláusula contractual sobre revisión de precios recoja las formulas para calcular de forma precisa tal revisión. Es decir, que determinen cuales son los porcentajes (el alza o baja del precio de un componente del viaje, normalmente, no significa que se trasladara en un cien por ciento al cliente tal variación, sino en un porcentaje menor, etc.) que se tendrán en cuenta a fin de revisar los precios.
- Que el cambio de los precios afecte a “los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado”.<sup>217</sup>
- Que la revisión de los precios al alza no tenga lugar en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. En caso de no respetarse este plazo el incremento del precio será nulo.<sup>218</sup>

---

<sup>216</sup> Así, SOLER VALDES-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 268.

<sup>217</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 157. Revisión de precios”, *Op. cit.*, p. 1853, referencia al artículo 157.2 del TRLGDCU que: “las circunstancias que justifican la revisión siguen siendo tasadas y excepcionales en el art. 157 TRLGDCU (antiguo art. 7 LVC). Se trata de las tres siguientes: 1) variaciones del precio del carburante; 2) variaciones de las tasas e impuestos relativos a determinados servicios (tasas aeroportuarias); y 3) variaciones de los tipos de cambio aplicados al viaje combinado, que a tal efecto deberán quedar determinados en el propio folleto o contrato...”.

<sup>218</sup> *Ibid.*, p. 1855, comentario al artículo 157.3 del TRLGDCU, que: “también es un requisito establecido por la norma para las variaciones de precio introducidas a instancia del organizador, siempre que fueran al alza, el siguiente límite temporal: nunca podrá tener lugar en los veinte días anteriores al inicio del viaje. La revisión que exceda de este último límite será nula de pleno derecho, en el sentido de inoponible frente al consumidor. Y, aunque la norma no lo contemple, la misma sanción (nulidad, inoponibilidad frente al



Si la agencia de viajes revisase los precios incumpliendo alguno de los cinco requisitos anteriormente mencionados la revisión de precios sería nula.<sup>219</sup>

En el momento que se presente la modificación del precio cumpliéndose con los cinco requisitos constituye en principio, una revisión justificada que el cliente debería de aceptar. Ahora bien, esta revisión puede dar lugar a un acusado incremento del precio del viaje combinado, siendo injusto que el cliente se vea obligado a hacer frente al mismo. Al respecto, debe entenderse que los aumentos significativos o considerables del precio antes de la salida autorizan al cliente a resolver el contrato, sin penalización alguna, por aplicación del régimen de la modificación significativa de algún elemento esencial del contrato previsto en el artículo 158 de la TRLGDCU, que otorga al consumidor el derecho a resolver el contrato sin que se le penalice por ello.<sup>220</sup> A falta de otros criterios en la regulación de los viajes combinados prevista en la TRLGDCU, la determinación de cuando un alza en el precio es significativo debería realizarse al amparo del artículo 28 Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 (RAV), de tal suerte que un incremento superior al quince por ciento sería un incremento significativo.<sup>221</sup>

## **8. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

En este apartado se detallara la forma de extinción y de resolución del contrato de viaje combinado conforme a lo establecido en los artículos 159, 160 y 161 del TRLGDCU.

### **8.1. La resolución del contrato de viaje combinado por causa imputable al organizador o la cancelación del viaje.**

En el artículo 159 de la TRLGDCU actual normativa reguladora del contrato de viaje combinado, se expone un mismo régimen jurídico sobre la resolución del contrato, que son: a) La resolución del contrato por parte del consumidor al no aceptar modificación

---

consumidor) cabrá aplicar a la cláusula de revisión que no se atenga a los requisitos establecidos en este precepto.”.

<sup>219</sup> Véase, DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 145.

<sup>220</sup> En este sentido, GOMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 181.

<sup>221</sup> No obstante, SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 275, considera que una modificación del precio superior al 10% sería ya una modificación significativa, pues “la tendencia en los países de nuestro entorno es la de bajar considerablemente” el porcentaje del 15%.

de algún elemento esencial del contrato; b) La cancelación del viaje combinado por parte del organizador antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor (por ejemplo, un terremoto, un huracán, etc.); c) Cuando el consumidor o turista no obtuviese confirmación de la reserva, previsto y exigible dentro de los términos del contrato, es el caso concreto de que aún y con la celebración de contrato de viaje combinado con su respectiva reserva, esta pendiente la confirmación posterior por parte de la agencia de viajes dentro del plazo fijado en el supuesto contrato.<sup>222</sup>

En los casos en el que el organizador y detallista concorra ante alguno de estos supuestos, el consumidor o turista tendrá además de los derechos antes mencionados, los siguientes:

Tiene derecho al reembolso de todas las cantidades abonadas o pagadas respecto al contrato de viaje combinado, o bien el derecho a la realización de otro viaje equivalente o de calidad superior que le sugiera la propia agencia de viajes. Si el consumidor o turista decide realizar el otro viaje equivalente o de calidad superior respecto al inicialmente pactado, la agencia no puede exigir el abono de cantidad adicional alguna al consumidor o turista.<sup>223</sup> En el supuesto de que el ofrecido viaje alternativo y aceptado fuese de una calidad inferior al inicialmente contratado, el consumidor o turista tendría derecho al reembolso de la diferencia de los precios.<sup>224</sup>

Al organizador o detallista que se le exija el reembolso de las cantidades ya abonadas al contrato de viaje combinado por parte del consumidor o turista, se encuentra obligado a reintegrar tales cantidades en los plazos y condiciones establecido en el artículo 76 del propio TRLGDCU. El plazo máximo es de 30 días para realizar los reembolsos conforme al artículo anteriormente citado, en el supuesto de dejar transcurrir el plazo máximo sin generar ningún reembolso de las cantidades pagadas,

---

<sup>222</sup> Aunque el TRLGDCU no prevé cuál es la antelación mínima a la fecha de salida con la que deberá confirmarse la reserva, es posible la aplicación de 10 días de antelación mínima a la fecha de salida previsto para la cancelación del viaje por no alcanzarse el número mínimo de personas inscritas exigido para realizar el viaje, artículos 154.1.f) y 159.4.a) de la LGDCU. En este sentido, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 136; MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 155. Cesión de la reserva”, *Op. cit.*, p. 1828, en el que menciona que en el artículo 154.1. o) “...cuando alude a la constancia en el contrato del plazo en que el consumidor y usuario podrá exigir la confirmación de sus reservas... la fijación de una antelación legal mínima para que la agencia efectúe esta confirmación, tal y como se ha hecho en otro de los apartados respecto de la cancelación del viaje...”.

<sup>223</sup> Así, lo establece el artículo 159.1 del TRLGDCU, en su primer y segundo párrafo.

<sup>224</sup> Véase, BALLESTEROS DE LOS RIOS, María: “Contratos turísticos, de alojamiento...”, *Op. cit.*, p. 4777.

el consumidor o turista tiene derecho a reclamar el doble de las sumas exigidas, como a su vez los daños y perjuicios causados que excedan de esa cantidad duplicada.<sup>225</sup>

En el momento de la notificación sobre la resolución o cancelación del contrato (modificación de algún elemento esencial del contrato) por parte del consumidor o turista hacia la agencia de viajes, inicia el cómputo del plazo de 30 días. En el caso de la no confirmación de la reserva, el TRLGDCU no menciona nada sobre el cómputo del plazo, por lo tanto la agencia de viajes debe confirmar la reserva al turista con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de la salida del viaje. En el hecho de no confirmarse la reserva del viaje combinado, el cómputo del plazo de 30 días se debe iniciar en la misma fecha límite de diez días antes de la fecha prevista para la salida del viaje combinado.

El cliente tendrá Derecho a una indemnización (mínima legal, conforme al artículo 159.3 TRLGDCU o de mayor cuantía cuando los daños acreditados sean superiores) en los supuestos de resolución por el consumidor (ante modificaciones significativas de los elementos esenciales efectuadas por el organizador con anterioridad a la salida), de cancelación por la agencia (antes de la fecha de salida) por cualquier motivo que no sea imputables al consumidor y de no confirmación de la reserva por la agencia de viajes.<sup>226</sup> La cuantía de la indemnización varía en función de la resolución, cancelación o no confirmación de la reserva del viaje con la proximidad a la fecha de inicio del viaje: no inferior al 5% del precio total del viaje si se incumple entre los dos meses y quince días antes de la salida; al 10% si sucede entre los quince y tres días anteriores; y al 25% si ocurre en las 48 horas anteriores a la fecha prevista para comenzar el viaje combinado. El pago de la indemnización, no excluye al consumidor o turista el derecho a una indemnización mayor, si se acredita el haber sufrido daños y perjuicios mayores o no cubiertos por la normativa del viaje combinado.<sup>227</sup>

---

<sup>225</sup> Véase, GARCÍA VICENTE, José Ramón: “Artículo 76. Devolución de sumas percibidas por el empresario”, en *Comentario del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias*, de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Op. Cit.*, pp. 870-872.

<sup>226</sup> Igualmente, HERNANDEZ DÍAZ-AMBRONA, María Dolores: “Viajes combinados”, en *Derecho Civil de...*, *Op. cit.*, pp.407-409.

<sup>227</sup> Así, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 194; MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 159. Resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje”, *Op. cit.*, p. 1874, dice: “...En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que, aunque imperativas, se trata de indemnizaciones mínimas, esto es, que no impedirían al consumidor la reclamación de mayores daños, siempre que fueran previsibles y hubieran sido acreditados, de conformidad con los requisitos generales...”.

Existen dos supuestos en los que el consumidor o turista no tendrán Derecho a la indemnización, conforme al artículo 159.4 del TRLGDCU se establece que: a) Si la cancelación se debe a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comuniquen por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación mínima a la fecha prevista de iniciación del viaje;<sup>228</sup> y b) Si la cancelación se debe a fuerza mayor. Es importante señalar, que si bien la segunda causa de exoneración solo se refiere a la cancelación del viaje, es también de aplicación cuando se presenta la resolución del contrato por el consumidor al no aceptar alguna modificación significativa del viaje, por lo que si el origen de la modificación fue por fuerza mayor, no se deberá de indemnizar al consumidor.<sup>229</sup>

## **8.2. Resolución del contrato de viaje combinado por el consumidor o turista.**

El Derecho de desistimiento, denuncia o receso de la relación obligatoria, como lo denomina DÍEZ-PICAZO, se comprende como una facultad de cualquiera de las partes de poner fin a la relación obligatoria mediante un acto enteramente libre y voluntario, que no tiene que fundarse en ninguna causa especial.

En el artículo 160 del TRLGDCU se establece el derecho de desistimiento que el consumidor o turista puede ejercer antes o incluso ya iniciado el viaje combinado. El derecho de desistimiento ya se preveía en la derogada LVC como mecanismo de protección a los derechos del consumidor.<sup>230</sup>

El consumidor o turista puede ejercitar el Derecho de desistimiento por diversas causas o motivos. Por ejemplo, por la enfermedad del turista, por que se haya producido antes de la salida o durante el viaje una catástrofe natural en el lugar de destino, etc. Ante estos posibles acontecimientos, el artículo 160 del TRLGDCU, le

---

<sup>228</sup> Conforme a lo establecido el artículo 159.4 a) del TRLGDCU.

<sup>229</sup> En este sentido, MARTÍN OSANTE, José Manuel: “Contrato de viaje combinado: resolución y responsabilidades”, *Revista de Derecho Mercantil*, Núm. 273, 2009, p. 1046; GOMÉZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 199. En el propio artículo 159.4b) del TRLGDCU se define lo que debe entenderse por fuerza mayor “... aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.”.

<sup>230</sup> A diferencia de lo que plantea la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, sobre viajes combinados, que no establece la figura del desistimiento, a lo que llevo al legislador Español a introducir el Derecho de desistimiento conforme al artículo 8 de la Directiva que dice: “Los Estados miembros podrán adoptar, o mantener, disposiciones más estrictas en el ámbito regulado por la presente Directiva, a fin de proteger al consumidor”.

otorga al consumidor el derecho de dejar sin efectos o mejor dicho desistir del contrato de viaje combinado “en todo momento”, con la posibilidad de exigir la devolución de las cantidades ya abonadas. Sin embargo, deberá abonar a la agencia de viajes (salvo que sea por fuerza mayor), los gastos de gestión, los gastos de anulación si existieran y una penalización.<sup>231</sup>

Sobre el Derecho de desistimiento del consumidor o turista es importante señalar y analizar las particularidades que establece el artículo 160 del TRLGDCU:

1.- El cliente o turista debe comunicar a la agencia de viajes su derecho de desistimiento del contrato de viaje combinado, el desistimiento producirá sus efectos desde el momento en que la agencia de viajes tenga conocimiento de la postura del cliente.<sup>232</sup>

2.- El TRLGDCU no establece una forma determinada de comunicar a la agencia de viajes la decisión del desistimiento del contrato de viaje combinado por parte del consumidor o turista. La comunicación puede ser vía telefónica, vía fax, correo electrónico, carta con acuse de recibo, etc. Sin embargo, es preferible realizar la comunicación de forma escrita para obtener una prueba eficaz en caso de controversias.<sup>233</sup>

Se debe expresar en la comunicación a la agencia de viajes, la voluntad del consumidor o turista de querer dejar sin efecto el contrato de viaje combinado. Si se ejercita el derecho de desistimiento por causa de fuerza mayor, se deberá de especificar en el momento o contenido del comunicado, con el objetivo de que la agencia de viajes no reclame indemnización al turista.

---

<sup>231</sup> Conforme al artículo 160. a) y b) del TRLGDCU. La penalización por desistimiento del contrato puede disminuir o incrementar conforme a la fecha en que se ejerce este derecho con la fecha de inicio del viaje, en el mencionado artículo se establecen los porcentajes.

<sup>232</sup> Estima que esta notificación es necesaria, aunque no se establezca en el artículo 160 del TRLGDCU, así DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 174, “... es de lógica que para que se produzcan las consecuencias del desistimiento se requiere que el consumidor realice esta comunicación a la agencia y que el desistimiento será efectivo a partir del momento en que ésta lo conozco o pueda conocer...”.

<sup>233</sup> Así, SOLER VALDES-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 294, “El ejercicio de esta facultad por el viajero no está supeditada a una forma especial teniendo lugar mediante una declaración unilateral de voluntad cuyos efectos comienza desde el mismo instante de su recepción... este derecho, pudiendo ser ejercitado oralmente. Sin embargo en aras de una mayor seguridad del tráfico, a lo que se añaden motivos de prueba, creemos recomendable la forma escrita.”.

3.- El Derecho de desistimiento se puede ejercitar “en todo momento”, así lo establece el TRLGDCU, por lo que existe la posibilidad de desistir del viaje combinado después de la salida del viaje. En un principio, el desistimiento por parte del consumidor o turista, solo es de aplicación antes de la salida o en el mismo momento de la salida del viaje (el caso de que el viajero no se presente). No obstante el consumidor o turista puede desistir del contrato de viaje combinado una vez iniciado el viaje, pero al desistimiento no le será de aplicación el artículo 160 del TRLGDCU. Es imprescindible determinar la causa del desistimiento posterior al inicio del viaje, para así determinar sus consecuencias jurídicas, porque si el cliente desiste por su libre voluntad, deberá abonar el importe total del viaje (consecuencia prevista, para los supuestos en que el cliente no se presente a la salida, a lo que se deberá aplicar esta consecuencia a los casos en que ya iniciado el viaje se desiste de manera voluntaria del mismo), pero si el turista o cliente desiste ante incumplimientos de la agencia de viajes (que pueden tener su causa incluso en la concurrencia de fuerza mayor) deberían aplicarse las normas sobre incumplimiento establecidas en los artículos 161 y 162 del TRLGDCU.<sup>234</sup>

4.- El consumidor o turista tiene Derecho a la devolución de todas las cantidades abonadas por el viaje combinado contratado.

5.- El consumidor o turista debe abonar a la agencia (organizador o detallista) los gastos de gestión, de anulación si los hubiese, con una penalización, salvo que la resolución del contrato se debiese a causas de fuerza mayor.<sup>235</sup> El TRLGDCU exige en el artículo 154. j) y k), que en el contrato de viaje combinado se desglosen los gastos de gestión, los gastos de anulación y la penalización para así tener conocimiento de las cantidades aproximadas que se deberán abonar a la agencia de viajes en caso de ejercitar el Derecho de desistimiento.

La penalización a diferencia de los gastos de gestión y de cancelación no tiene el carácter de una indemnización, sino que tiene la finalidad de sancionar contractualmente al cliente por el incumplimiento de las cláusulas preestablecidas, por

---

<sup>234</sup> MARTÍN OSANTE, José Manuel: “Contrato de viaje combinado: resolución y responsabilidades”, *Op. cit.*, p. 1048.

<sup>235</sup> En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), núm. 183/2005, de 1 de abril (westlaw AC2005\665), una cancelación del viaje combinado, por fuerza mayor, la enfermedad grave de la madre, F.D. 2.; así también, la Sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección 1ª), núm. 351/2009, de 17 de junio (westlaw AC2009\1657), reclamación de cantidad, procedencia, viaje combinado, fallecimiento de la hermana de la actora y cuñada del actor tras intervención quirúrgica, F.D. 2.

lo que la señalización tiene un carácter punitivo.<sup>236</sup> La penalización se puede establecer conforme al apartado a) del artículo 160 del TRLGDCU: a) Un 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez días y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; b) El 15% entre los días tres y diez; y c) Un 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.<sup>237</sup> Si el desistimiento se produce con quince días de antelación a la fecha de salida, el cliente no debe abonar penalización alguna, pero deberá pagar los gastos de gestión y de anulación.<sup>238</sup>

6.- En el artículo 160. b) del TRLGDCU se establece que: “En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.”.

7.- Solamente cuando exista fuerza mayor, el turista o consumidor no deberá pagar a la agencia de viajes los gastos de gestión, los de anulación y la penalización.<sup>239</sup> En el caso de ejercer el derecho de desistimiento, la fuerza mayor comprende aquellas situaciones imprevisibles e inevitables que siendo ajenas a la

---

<sup>236</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 5ª), núm. 464/2003, de 18 de septiembre (westlaw JUR2003/263907), subraya el carácter objetivo que tiene la penalización, que se gradúa en función del tiempo de antelación con que se comunica el desistimiento, teniendo distinta naturaleza de la indemnización de los gastos de gestión y anulación que efectivamente deben ser probados, F.D. 2. “...ya que en contra de lo que se sostiene en el recurso la penalización es independiente de los gastos de anulación y no necesita por ello ser probada...”. Así lo considera, SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 302, “... previsión que no tiene carácter indemnizatorio sino punitivo.”.

<sup>237</sup> En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 3ª), núm. 483/2003, de 25 de septiembre (westlaw JUR 2004/74599) F.D. 2, establece el caso de que “... el desistimiento se produjo dos horas antes de la salida del avión, la penalización legalmente prevista es el 25% del precio total del viaje.”.

<sup>238</sup> Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 5ª), núm. 567/2007, de 22 de noviembre (westlaw JUR 2008\29898) F.D. 2, en la que se resuelve un supuesto de desistimiento unilateral por el consumidor del contrato de viaje combinado, confirmándose la sentencia de instancia en la que se condena al consumidor al abono de los gastos de anulación, a pesar de que el desistimiento tuvo lugar con más de 15 días de antelación a la fecha de salida. En diferente sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (Sección 1ª), núm. 177/2005, de 16 de septiembre (westlaw JUR 2006\3594) F.D. 2, considera que si el desistimiento por el consumidor se produce con una antelación de al menos de 15 días a la fecha prevista de salida, no existe obligación de abonar ni los gastos de gestión y de anulación, ni la penalización.

<sup>239</sup> GOMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 205, que señala que: “El papel de la fuerza mayor no es justificar el incumplimiento por parte del consumidor sino justificar su falta sobrevenida de interés en participar en el viaje por imposibilidad de aprovecharlo o disfrutarlo con sentido”. En el mismo sentido a señalado, SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 309, sin embargo, considera que las circunstancias personales mencionadas en el texto pertenecen claramente a la esfera de riesgos del viajero y, por tanto, deben ser asumidos por él.

voluntad y al control del cliente o consumidor le impide aprovechar a disfrutar del viaje contratado.<sup>240</sup>

8.- En el supuesto de que el turista o cliente no se presente a la salida del viaje combinado, éste deberá abonar el 100% del precio del viaje, salvo que las partes acuerden lo contrario.<sup>241</sup>

### **8.3. El incumplimiento de las prestaciones en el contrato de viaje combinado.**

En el artículo 161 del TRLGDCU se establece la regulación por el incumplimiento de la prestación de los servicios proporcionados por la agencia de viajes. Regula las consecuencias jurídicas en los supuestos de que “después de la salida del viaje, el organizador no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato”.

El artículo 161 del TRLGCU se refiere a los casos de incumplimiento parcial o de inejecución u omisión de algunos de los servicios contratados (por ejemplo, no se realizaron las excursiones previstas, no se realiza el servicio de transporte del aeropuerto al hotel, etc.).<sup>242</sup> Sin embargo, también es de aplicación el presente artículo en los casos de cumplimientos defectuosos o ejecución incorrecta. Es decir, los servicios que se hubieran prestado con diferencias a lo pactado en el contrato (por

---

<sup>240</sup> En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª), núm. 686/2004, de 20 de septiembre (westlaw JUR 2004\292298), si se considero un supuesto de fuerza mayor, un episodio depresivo, aunque la enfermedad como tal estuviera diagnosticada con anterioridad, F.D. 2., “... califica como caso de fuerza mayor la enfermedad de la actora...”; en contra, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 4ª), de 28 de febrero (westlaw AC 2003\959), entiende que el desistimiento del contrato por una enfermedad que estaba diagnosticada con anterioridad a la celebración del contrato no se puede calificar como un caso fortuito que le exonere del deber de indemnizar por la cancelación.

<sup>241</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 160. Resolución del contrato por el consumidor y usuario”, *Op. cit.*, p. 1886, referencia al artículo 160. a) segundo párrafo del TRLGDCU, “Una vez que el consumidor ha decidido dejar sin efecto el contrato deberá notificar su decisión a la Agencia detallista o, en su caso, a la organizadora (dependiendo de quién sea su contraparte contractual), sin necesidad de observar una forma especial. Si no lo hace, y se limita a no presentarse a la salida, estará obligado al pago del importe total del viaje, lo que significa no sólo perder el depósito que hubiera efectuado sino también tener que abonar las cantidades restantes.”.

<sup>242</sup> Como se acredita, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, núm. 138/2008, de 24 de marzo (westlaw JUR 2008\163636) F.D. 4., se señala que el “incumplimiento de una de las prestaciones en el viaje combinado adquirido por los consumidores, relativa a la visita guiada a la ciudad de Praga...”.



ejemplo, el alojamiento de una calidad inferior a la contratada, falta de higiene o suciedad en el hotel, etc.).<sup>243</sup>

Las causas o supuestos que son de aplicación el artículo 161 del TRLGDCU son los siguientes:

1.- La agencia de viajes tiene como obligación principal la de prestar de manera adecuada y correcta el viaje combinado contratado. En consecuencia el incumplimiento como a su vez el cumplimiento defectuosa de alguna de las prestaciones establecidas en el contrato, constituirán un incumplimiento de las obligaciones, por ello el artículo 161 del TRLGDCU regula las “consecuencias de la no prestación de servicios”.

2.- Ante la posibilidad de que la agencia de viajes (organizador o detallista) “no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios turísticos contratados”, se buscara soluciones necesarias para continuar el viaje con la opción de prestar un servicio alternativo, sin suplemento de precio para el consumidor o turista.

3.- La aplicación del artículo 161 del TRLGDCU sobre los cumplimientos defectuosos de las prestaciones en el contrato de viaje combinado, es para una mayor protección de los derechos del consumidor o turista.

Como se menciona en capítulos anteriores, el contrato de viaje combinado es considerado como un contrato con obligaciones de resultado, por lo que no importa cuál sea la causa del incumplimiento de las prestaciones (dolo, negligencia, caso fortuito...), por lo que la agencia de viajes se compromete a conseguir un resultado

---

<sup>243</sup> Así, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 259; DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 185; SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 317-318. El precepto solo se refiere a que el organizador “no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato...”. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (Sección 2ª), núm. 181/2006, de 20 de octubre (westlaw JUR 2007\95174), en la que se demuestra que hubo deficiencias en las condiciones del hotel y que no concuerdan con lo contratado en el viaje combinado; así, también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª), núm. 402/2001, de 25 de abril (westlaw JUR 2001\211098) F.D. 2., en el que la prestación de los servicios contratados fueron muy deficientes; y por último, un supuesto en que el consumidor realiza un cambio de hotel, atendido el hecho de que carecía de las mismas condiciones higiénicas y de seguridad, no ajustándose a las características recogidas en el folleto informativo, Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 5ª), núm. 785/1999, de 4 de mayo (westlaw AC 1999\5097).

como es la correcta ejecución del viaje contratado,<sup>244</sup> de manera que la defectuosa ejecución del viaje constituye un incumplimiento de las prestaciones. No todas las molestias, inconveniencias o incidencias dentro de un viaje combinado pueden ser consideradas como cumplimiento defectuoso de las prestaciones del viaje, como son el retraso de una o dos horas en la salida del medio de transporte, la fila para entrar a un evento o concierto, etc. Sin embargo, si la causa del incumplimiento es imputable al consumidor o turista, se puede exonerar a la agencia de viajes de responsabilidad.<sup>245</sup>

En la práctica turística, ante el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios contratados, el organizador está obligado en subsanar el plan de viaje corrigiendo sus defectos de ejecución, así lo establece el artículo 161 del TRLGDCU que dice: “se adoptaran las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizador”. La solución se debe de comunicar al consumidor o turista y a la vez puede ser aceptada o no por éste.

El consumidor o turista, tiene la obligación de comunicar el incumplimiento o cumplimiento defectuoso que se presente en la ejecución del contrato de viaje combinado, ya sea al organizador, al detallista o al prestador material del servicio, por escrito o en cualquier otro medio que permita dejar constancia de la existencia de un supuesto vicio,<sup>246</sup> para que así el organizador o detallista tomen “las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado”.<sup>247</sup> En el supuesto de que el consumidor comunique el incumplimiento de las prestaciones al organizador, al detallista o al prestador material del servicio y ninguno de ellos adopte medidas para

---

<sup>244</sup> En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª), de 5 de febrero de 2004, (westlaw JUR 2004\97946) F.D. 2, por el incumplimiento dentro de un contrato de viaje combinado al considerar que es: “Un contrato que participa de las características propias del arrendamiento de obra en el sentido de ser un contrato de resultado en el que no se puede entender cumplido si el resultado del producto ofrecido, constituido por una multitud de prestaciones y servicios (todos los contratados, el buen trato y la razonable satisfacción de los clientes ), no se cumplen o se hacen de forma gravemente deficiente en relación a lo contratado...”.

<sup>245</sup> Así, MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores y detallistas”, *Op. cit.* p. 1924, en referencia al artículo 162.2 a) del TRLGDCU, “La norma se refiere solo a la ejecución deficiente (defectos), aunque debe entenderse también incluida la no ejecución del contrato. Esta causa de exoneración de responsabilidad de la agencia de viajes sólo debe operar cuando el defecto sea imputable exclusivamente al turista (o a una persona distinta de la que él sea responsable –hijo menor de edad-...”.

<sup>246</sup> En el artículo 154.1 n) del TRLGDCU, por lo que es “obligación del consumidor y usuario de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato, por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista, y en su caso, al prestador del servicio de que se trate”.

<sup>247</sup> La ausencia de la comunicación del incumplimiento no excluye que el consumidor pueda reclamar a la Agencia de Viajes la oportuna indemnización por incumplimiento, solamente dificultara al consumidor la prueba de lo ocurrido y debería ponderarse a la hora de fijar la cuantía de la misma, véase, MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 161. Consecuencias de la no prestación de servicios”, *Op. cit.*, p. 1895.

reparar los defectos del viaje, el consumidor estará legitimado para subsanar tales defectos.<sup>248</sup>

El TRLGDCU no establece un plazo en el que el organizador debe subsanar el defecto, debe considerarse las circunstancias de cada caso y el contrato de viaje combinado es de gran importancia, porque el consumidor o turista puede resolver el contrato si no acepta la propuesta de subsanación. Además, el turista puede establecer un plazo razonable, sin exigir comportamientos imposibles.

La aceptación de las soluciones que se proponen por el organizador o detallista, debe de ser de forma expresa o de manera tácita (se continua el viaje con las propuestas nuevas).<sup>249</sup> En consecuencia, la aceptación de soluciones no impide al turista poder reclamar conforme al artículo 162.2 TRLGDCU, al organizador y detallista una indemnización por daños y perjuicios derivados por el incumplimiento del contrato de viaje combinado.

Normalmente ante un cumplimiento defectuoso existe la opción, no contemplada por la Ley, en que sea el propio consumidor o turista que realice la subsanación del defecto, o lo que es la ejecución forzosa del viaje, una vez que tenga conocimiento que el organizador no va a satisfacer su legítimo interés.<sup>250</sup> El consumidor buscara una solución inmediata, como puede ser la búsqueda de un medio de transporte alternativo para volver a su país de origen y desde luego, que después podrá reclamar la devolución de los costes, proporcionados a la entidad del problema a resolver y debidamente justificados.

---

<sup>248</sup> GARCÍA RUBIO, María Paz: *La responsabilidad contractual de las agencias de viaje, en el contrato de viaje combinado*, Montecorvo, Madrid, 1999, p. 287, dice que: "... en el caso de que el organizador y/o detallista o sus representantes en el lugar de que se trate no tomen medidas adecuadas para salvar el problema, el consumidor está legitimado para ponerles remedio (ejemplo, buscando él mismo otro hotel, si el prometido está completo o no tiene las condiciones requeridas)...".

<sup>249</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: "Artículo 161. Consecuencias de la no prestación de servicios", *Op. cit.*, p. 1898, "La aceptación de las prestación sustituirás propuestas por las Agencia deberá entenderse tácitamente realizada por el consumidor cuando, una vez efectuadas, éste continúe el viaje...".

<sup>250</sup> SOLER VÁLDES-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 340-341, menciona que: "... ante la comunicación de la existencia de un vicio del viaje el organizador debía proceder diligentemente a su subsanación comunicando al viajero las medidas dirigidas tal fin. Igualmente también sabemos que el grado de diligencia podía ser concretado por el viajero en atención a sus necesidades. Por ello, si el organizador deja pasar el plazo establecido podrá el viajero proceder a la ejecución forzosa de la prestación reparadora. Lo mismo sucede en el caso de que el viajero no fije un plazo ya que, en nuestra opinión, éste deberá medirse según el parámetro de la diligencia de un ordenado empresario...".

Ante la posible negativa por parte del consumidor o turista de aceptar las soluciones del cumplimiento defectuoso, éste tiene derecho a:

- Se le debe facilitar el regreso al lugar de salida o a otro diferente que hubiesen pactado las partes. A lo que la agencia de viajes deberá proporcionar al consumidor o turista un medio de transporte de vuelta equivalente en la ida y sin que tenga un coste adicional. Considerando que el viaje de regreso anticipado se facilitara por el organizador siempre y cuando el viaje combinado contratado comprenda el viaje de ida y vuelta y no cuando solo sea un viaje de ida.
- Tiene derecho a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado, al amparo del artículo 162.2 del TRLGDCU.

## **9. LA RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO.**

La regulación de la responsabilidad de los organizadores y detallista en el contrato de viaje combinado se encuentra regulado en el artículo 162 del TRLGDCU.<sup>251</sup> La normativa introduce un sistema de responsabilidad contractual por daños, en el que ambos (organizador y detallista) son responsables del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se distingue si el daño se produce debido a un incumplimiento contractual anterior al inicio de la ejecución del viaje o posterior al mismo.

De este modo organizadores y detallistas responden frente al consumidor en función de las obligaciones que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales con independencia de que éstas deban ser ejecutadas por ellos o por terceros que son los prestadores de los servicios.<sup>252</sup> La responsabilidad frente al consumidor será solidaria, de lo cual más adelante se expondrá.

---

<sup>251</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores y detallistas”, *Op. cit.*, p. 1903, comentario al artículo 163 del TRLGDCU, “Este precepto constituye una de las principales novedades del TRLGDCU respecto de la versión originaria de la norma [el art. 11LVC], al haberse reemplazado el antiguo sistema de responsabilidad mancomunada de las Agencias organizadora y detallista, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del viaje combinado, por uno de responsabilidad solidaria.”.

<sup>252</sup> RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo: “Viajes combinados. Solidaridad de los organizadores tras el Texto Refundido de la LGDCU”, *Repertorio de Jurisprudencia*, núm. 9/2008, Editorial Aranzadi, SA, Pamplona, 2008, p. 2.

### 9.1. La responsabilidad contractual de los organizadores y detallistas en el viaje combinado.

Los organizadores y detallistas son responsables “del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”, por lo daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado, por lo tanto es un responsabilidad contractual.<sup>253</sup>

En una idea general los sujetos responsables por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado son el organizador y detallista. Sin embargo, existe la posibilidad de que “el detallista” no intervenga en el contrato del viaje combinado, a lo que se entiende que “el organizador” fue el que vendió directamente al consumidor o turista el viaje combinado. En consecuencia, ante cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios contratados, el organizador será el único responsable.

Pero, en el supuesto de que concurren en el contrato de viaje combinado “el organizador” como “el detallista”, la responsabilidad civil es atribuida a ambos “en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado”, por lo que la responsabilidad es solidaria si intervienen varios empresarios en la contratación del viaje combinado frente al consumidor o turista.<sup>254</sup>

La responsabilidad de los organizadores y detallistas se atribuye por la correcta ejecución de las obligaciones asumidas en el contrato de viaje combinado, junto con el cumplimiento correcto de los servicios pactados que realizan directamente otros prestadores de servicios como son los hoteles o empresas de transporte, etc. En el contrato de viaje combinado intervienen los que prestan materialmente los servicios turísticos, es porque el organizador del viaje previamente contrató con ellos, por lo que

---

<sup>253</sup> En este sentido, varios autores DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*; GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*; MARTÍN OSANTE, José Manuel: “Contrato de viaje combinado...”, *Op. cit.*; SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*; GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*; y otros más.

<sup>254</sup> Recordemos que el organizador es quien organiza y programa el viaje, mientras que el detallista se encarga de la selección y venta del viaje, así como de aportar la debida información y documentación al consumidor. Sobre la concurrencia del organizador y detallista dentro de un contrato de viaje combinado y su responsabilidad, se encuentra la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 870/2009, de 20 de enero (westlaw RJ 2010\158) F.D. 2, 4, 5, 6 Y 8, así como en el FALLO 4º. En contra, la jurisprudencia menor la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 2ª), núm. 217/2000, de 25 de abril (westlaw JUR 2000/192418), y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17ª), de 14 de marzo (westlaw AC 2000/1483).

existe una obligación contractual del organizador y detallista de vigilar el correcto cumplimiento de los servicios contratados para el viaje combinado. Sin embargo, el consumidor o turista puede reclamar la responsabilidad civil extracontractual a la persona o personas que presten los servicios materiales pactados en el contrato de viaje combinado, siempre y cuando los daños y perjuicios no sean causados por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado y que concurran los requisitos de la responsabilidad extracontractual.<sup>255</sup>

La reclamación de la responsabilidad civil extracontractual por parte del consumidor o turista de los daños y perjuicios ocasionados por el prestador material de los servicios, presenta ciertas ventajas y desventajas.<sup>256</sup> El consumidor o turista que reclame la responsabilidad civil extracontractual tendría a su favor que:

1.-Ante la posible insolvencia del organizador, que es a quien se compró el viaje combinado, el consumidor o turista contara con otro patrimonio adicional contra al que puede dirigirse como es el del prestador material del servicio.

2.- El prestador material del servicio (demandado extracontractualmente) tendrá serias dificultades para poder oponer al reclamante las limitaciones de responsabilidad previstas en los convenios internacionales reguladoras de dichas prestaciones (excepciones que sí podría oponer frente a organizadores y detallistas, y estos frente al consumidor) debido a la tendencia de la jurisprudencia a considerar que la reclamación extracontractual de indemnización de daños y perjuicios debe resolverse precisamente aplicando los preceptos reguladores de la responsabilidad extracontractual y, por lo tanto, sin aplicar los preceptos reguladores de la responsabilidad contractual en lo que se recogen, entre otros aspectos las limitaciones de responsabilidad.

---

<sup>255</sup> Aceptan la aplicación de responsabilidad civil por vía extracontractual, DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *Op. cit.*, p. 219-222; GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*, pp. 184 y 185, señala que: "... la responsabilidad contractual del organizador y/o detallista frente al consumidor y la contractual o extracontractual que corresponde al prestatario directo de los servicios presentan naturaleza solidaria ya que, a pesar del tenor literal del art. 1137 del CC y de acuerdo con lo que en nuestro Derecho es ya jurisprudencia constante, el régimen de la solidaridad se aplica siempre que existen varios responsables de un mismo daño, aun cuando unos lo sean por fuente contractual y otros extracontractual."; y SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p.389, dice: "... la existencia de una responsabilidad contractual, en el justo marco del contrato celebrado entre el organizador y el prestador del servicio incluido en el viaje no es óbice para que el viajero se dirija extracontractualmente frente a aquel en el supuesto de que se den los requisitos..."

<sup>256</sup> MARTÍN OSANTE, José Manuel: "Contrato de viaje combinado...", *Op. cit.*, pp. 1055-1056.

Las desventajas con las que se puede afrontar el consumidor o turista ante la reclamación de daños y perjuicios por vía extracontractual son:

1.- El demandante debería probar la culpa del prestador del servicio si ejercita su acción al amparo del artículo 1.902 del CC, y si la ejercitase con fundamento en el artículo 1.903 CC, quedaría expuesto a que el empresario demandado se liberase de su responsabilidad acreditando su actuación diligente; frente al carácter objetivo de la responsabilidad contractual prevista para los viajes combinados.

2.- El plazo más breve de prescripción de la acción extracontractual, se fija en un año por el artículo 1.968.2 CC, en lugar del plazo de prescripción de dos años de las acciones ejercitadas al amparo de la normativa reguladora de los viajes combinado, artículo 164 del TRLGDCU.

## **9.2. La responsabilidad solidaria del organizador y detallista en el contrato de viaje combinado.**

Conforme al artículo 162 del TRLGDCU la responsabilidad de los organizadores y detallistas en el contrato de viaje combinado es solidaria. La solidaridad se refiere a la responsabilidad civil entre el organizador y el detallista frente al consumidor, a consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por el turista (incluyendo los daños morales) por causa del incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado.

En la antigua LVC el sistema de responsabilidad civil del organizador y detallista en el contrato de viaje combinado era de una responsabilidad mancomunada. Sin embargo, en el TRLGDCU se optó por un sistema de responsabilidad civil solidaria entre el organizador y detallista del viaje combinado, para otorgar una mayor protección jurídica al consumidor o turista. En el TRLGDCU la redacción del segundo apartado del artículo 162.1 dice: “la responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurren conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado”. En consecuencia, se establece la solidaridad entre todos los empresarios que intervengan en el contrato

de viaje combinado y el derecho de repetición entre ellos, el cual no estaba expresamente previsto en la derogada LVC.

Anteriormente, existían diferentes posiciones doctrinales sobre si la responsabilidad civil del organizador y detallista en el contrato de viaje combinado es o no solidaria. Con el nuevo precepto establecido en el TRLGDCU se considera que la empresa organizadora y la detallista del viaje combinado, tienen frente al consumidor una responsabilidad solidaria, al considerar así que existe un único responsable frente al consumidor o turista, por lo que es más fácil de identificar.<sup>257</sup> Encontramos jurisprudencia que en su mayoría se pronuncian a favor de la responsabilidad solidaria.<sup>258</sup> Además, el Tribunal Supremo establece que los organizadores y detallistas de los viajes combinados tienen frente a los consumidores una responsabilidad solidaria.<sup>259</sup>

### **9.3. Exoneración de responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado y la prohibición de insertar cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad.**

Las causas de exoneración de la responsabilidad civil contractual se encuentran establecidas en el artículo 162.2 del TRLGDCU. Por el cual se mencionan los casos en que las agencias de viajes (organizador y detallista) no serán imputables de

---

<sup>257</sup> DE LA HAZA, Pilar: *Op. cit.*, pp. 215-219, defiende esta responsabilidad entre el detallista y el organizador ya que ambas agencias están implicadas en el contrato. Considera que así se otorga una mayor protección del consumidor y que la interpretación literal del artículo 11 de la LVC supone un injustificado atraso. Es más, a su juicio, hay que tener en cuenta el artículo 27 de la LGDCU que establece la responsabilidad solidaria en los implicados en la causación del daño; MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores y detallistas”, *Op. cit.*, p. 1903, menciona que, “Este precepto constituye una de las principales novedades del TRLGDCU respecto de la versión originaria de la norma [el art. 11 LVC], al haberse reemplazado el antiguo sistema de responsabilidad mancomunada de las Agencias organizadora y detallista, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del viaje combinado, por uno de responsabilidad solidaria de ambas frente al consumidor... con ello, el refundidor ha querido resolver definitivamente el problema interpretativo que había generado esta norma...”.

<sup>258</sup> Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia (Sección 1ª), núm. 163/2010, de 17 de junio (westlaw AC 2010\1069) F.D. 2.; Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª), núm. 434/2007, de 23 de julio (westlaw AC 2007\2374) F.D. 3.; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), núm. 102/2010, de 30 de marzo (westlaw AC 2010\995) F.D. 2.; Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección 1ª), núm. 187/2009, de 4 de junio (westlaw 2009\28993) F.D. 1.; y existen otras más sentencias que se pronuncian a favor de la responsabilidad solidaria.

<sup>259</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 870/2009, de 20 de enero (westlaw RJ 2010\158) F.D. 2.; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 298/2006, de 21 de marzo (westlaw RJ 2006\1593) F.D. 2.



responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado.

Los organizadores y detallistas no responderán frente a los consumidores o turistas por la no ejecución o por la ejecución defectuosa del contrato de viaje combinado cuando prueben que tiene su origen en alguna de las siguientes circunstancias:

- Actos imputables al consumidor o turista. Son los casos en que el propio turista incumpla en su obligación de colaboración para el normal desarrollo del viaje, la no presentación en el lugar y hora indicados, la falta de comunicación de las deficiencias existentes en los servicios contratados, etc. Estas son posibles causas de exoneración aunque la normativa no lo contemple expresamente. Es necesario que el incumplimiento sea imputable exclusivamente al consumidor o turista para exonerar a la agencia de viajes de responsabilidad.<sup>260</sup> Sin embargo, puede existir una imputación parcial del consumidor o turista con el incumplimiento parcial de las obligaciones del organizador y el detallista, por lo que la responsabilidad de las agencias de viajes permanecerá, resultando en función de la respectiva contribución de las conductas a la consecuencia del resultado dañoso.<sup>261</sup>
- Actos imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable. En el TRLGDCU no se indica que se entiende por tercero ajeno al suministro, por lo que será cualquier persona ajena a la ejecución de los servicios que integran el viaje combinado. En este sentido, no puede ser el organizador, el detallista, el prestador material de los servicios y tampoco los dependientes o auxiliares de éstos.<sup>262</sup> Los terceros ajenos podrían ser, por ejemplo, quien le roba la billetera

---

<sup>260</sup> En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª), de 1 de marzo de 2001 (westlaw JUR 2001\156408) F.D. 5., por el que se absuelve a la agencia de viajes frente a una reclamación del turista que se imposibilitó de iniciar su viaje por tener su documento nacional de identidad caducado, estableciendo la obligación de pagar el precio del viaje.; la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª), núm. 196/1999, de 29 de julio (westlaw 1999\6527) F.D. 2.

<sup>261</sup> Así, GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*, pp. 192 y 193; la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de civil, Sección 1ª), núm. 748/2005, de 11 de octubre (westlaw RJ 2005\8769), en la que se declaró la concurrencia de culpas ante los daños sufridos por el turista en un desplazamiento por autobús por Egipto, “No obstante conocer esa situación de inestabilidad en la zona, asume realizar el viaje en autobús y el riesgo, efectivamente materializado, que ello implicaba”. En cambio, en un supuesto similar (ataque terrorista en Egipto en el falleció el hijo del actor), el TS señala que “no consta que el actor tuviera conocimiento de esta situación...”.

<sup>262</sup> En este sentido, *Ibid.*, p. 197.

al turista, el accidente en una pista de esquí provocado por otro esquiador. El hecho realizado por un tercero tiene los mismos atributos que el caso fortuito (artículo 1105 CC) por que el incumplimiento definitivo tiene un “carácter imprevisible o insuperable”.<sup>263</sup>

- Que los defectos se deban a fuerza mayor. El artículo 162.2.c) del TRLGDCU define a la fuerza mayor como: “aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida”. Es importante señalar los siguientes puntos en los supuestos de fuerza mayor: 1) El artículo 1.104 del Código civil será el que determine si un acontecimiento puede calificarse de fuerza mayor;<sup>264</sup> 2) La agencia de viajes demandada será quien tenga la carga de la prueba sobre la concurrencia de fuerza mayor, al igual que del resto de causas de exoneración;<sup>265</sup> 3) Las circunstancias deben ser ajenas a quien las invoca, imprevisibles e inevitables. Tal es el caso de los huracanes, en los cuales se deben desarrollar de manera imprevisible e inevitable durante el viaje, para que así se exonere a la agencia de viajes de una posible responsabilidad civil.<sup>266</sup>
- Por caso fortuito. El caso fortuito se define como el “acontecimiento en que el detallista, o en su caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la

---

<sup>263</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores y detallistas”, *Op. cit.*, pp. 1926-1927, comentario al artículo 162.2 b) del TRLGDCU, menciona que “La interpretación de esta segunda causa de exoneración ha de poner en consonancia con la primera parte del precepto, que responsabiliza a las Agencias de viajes por la incorrecta (o no ejecución) de las obligaciones contractuales ejecutadas por los prestadores de servicios... si el daño hubiera sido causado por un tercero ajeno al contrato, las agencias quedarán exoneradas, a menos que estos defecto fueran previsibles, ya que lo norma exige que los defecto causados por un tercero revistan un carácter imprevisible o insuperable. En este último caso, el turista podrá reclamar directamente contra esos terceros por la vía de la acción de responsabilidad extracontractual.”.

<sup>264</sup> Como señala MARTÍNEZ ESPIN, Pascual: “Comentario de la Sentencia de 11 de octubre de 2005 y 2 de febrero de 2006”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, Núm. 73, 2007, p. 75, “El nivel de diligencia no es aquí el de un buen padre de familia sino que se exigirán niveles superiores de previsión o evitación de eventos dañosos “atendiendo al objeto del contrato (contrato de consumo) y a las partes contratantes (profesionalidad de la agencia e inferioridad del consumidor).”.

<sup>265</sup> En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1ª), núm. 366/2004, de 4 de noviembre (westlaw JUR 2005/2262) F.D. 2º, en el que “...la fuerza mayor originadora del retraso en el vuelo no ha sido demostrada cuando precisamente es sobre la agencia de viajes sobre quien recae la carga de prueba de la misma para exonerarse de responsabilidad.”.

<sup>266</sup> Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección 1ª), núm. 282/2010, de 3 de diciembre (westlaw AC 2011\8), por lo que se genera la responsabilidad de los organizadores y detallistas, al no considerar causa de exoneración por fuerza mayor la formación del huracán Wilma en México, al saber la formación y la trayectoria sobre el lugar de destino del viaje combinado y no haber tomado las medidas necesarias incluso antes de la fecha de inicio del viaje.

diligencia necesaria, no podía prever ni superar”.<sup>267</sup> También el artículo 1.104 del Código civil será quien determine si se concurre en un caso fortuito. A todo esto, no se puede considerar caso fortuito ni fuerza mayor el overbooking, entre otros motivos, por su carácter previsible y superable.<sup>268</sup> Normalmente las huelgas de personal ajeno al organizador y detallista exoneran, frecuentemente a las agencias de viajes de responsabilidad (siendo imprevisibles e inevitables).<sup>269</sup>

Sin embargo, en el último párrafo del artículo 162.2 del TRLGDCU establece que a pesar de la ausencia de responsabilidad de organizadores y detallistas, en los últimos apartados, las agencias de viajes que sean parte en el contrato de viaje combinado estarán obligadas a prestar la oportuna asistencia al turista que se encuentre en dificultades.

Es de consideración las cláusulas de modificación de la responsabilidad contractual existentes en la práctica turística, las cuales tienen su base en el principio de libertad de pactos. Sin embargo, dentro del TRLGDCU se establece la prohibición de establecer cláusulas que vulneren lo dispuesto en el artículo 162.4 en relación a los sujetos responsables y la obligación de responder de los daños originados por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios turísticos que forman parte del contrato de viaje combinado, salvo los casos dispuestos por el TRLGDCU en su artículo 162.2.

No todas las cláusulas modificativas del régimen de responsabilidad de las agencias de viajes establecido en TRLGDCU deben considerar como contrarias a la Ley, sino que pueden ser admitidas cláusulas que aumenten el ámbito de imputación de responsabilidad civil del organizador y detallista (poco frecuentes en la práctica), en el que se establece un régimen de responsabilidad más favorable al consumidor o turista. Sin embargo, son contrarias a la ley las cláusulas de exoneración de responsabilidad y las de limitación por daños (distintas a las previstas por el

---

<sup>267</sup> Así, GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 133, “Esta imposibilidad de -previsión- y de -superación- nos permite equiparar la exención que nos ocupa a uno de -aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos, fueran inevitables-; que es la fórmula utilizada por el artículo 1105 del Código Civil para describir el caso fortuito...”.

<sup>268</sup> Así, MORALES IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores y detallistas”, *Op. cit.*, p. 1931.

<sup>269</sup> Así, lo señala, LÓPEZ SANTANA, Nieves: *El incumplimiento del contrato de viaje combinado por causa de huelga: La protección al turista*, Comares, Granada, 2003, pp. 39-41.

TRLGDCU) impuestas legalmente<sup>270</sup>, por lo que serían nulas al considerarse como cláusulas abusivas, conforme a los artículos 82 y siguientes, particularmente el artículo 86.2 del TRLGDCU.<sup>271</sup>

#### **9.4. Los daños que sufre el consumidor o turista por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato de viaje combinado.**

Los organizadores y detallistas deberán indemnizar los daños sufridos por los consumidores como consecuencia del incumplimiento del contrato de viaje combinado, salvo que concurra alguna causa de exoneración. El artículo 162.2 del TRLGDCU menciona que “Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo de los daños sufridos por el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato”.

Para imputar a la agencia de viajes de responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado debe existir un daño. El daño que sufra el consumidor o turista, presume la existencia de responsabilidad contractual civil por parte de la agencia de viajes, a consecuencia de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso en el contrato, por lo que el consumidor o turista tiene la carga de la prueba por los daños ocasionados a causa del incumplimiento contractual de la agencia de viaje.<sup>272</sup>

---

<sup>270</sup> Igualmente, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, pp. 253-255. En contra, SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, pp. 410-412, admite la validez de las cláusulas limitativas de responsabilidad siempre que sean “razonables”, sin embargo, la postura de este autor contradice al artículo 86.2 del TRLGDCU, que este tipo de cláusulas (limitativas) no son razonables en ningún caso, por ser abusivas.

<sup>271</sup> El artículo 82.6 del TRLGDCU dispone que “En cualquier caso serán abusivas...aquellas estipulaciones que prevean... 2. La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél”; GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel: “Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, *Op. cit.*, pp. 1073-1074, haciendo referencia al artículo 86.2 del TRLGDCU, mencionando que: “... el art. 86.2 declara abusiva la exclusión o limitación de la responsabilidad por daños, sin que en este caso, a diferencia del art. 86.1, I, pueda haber una *forma adecuada* de desplazar la liquidación que se seguiría de las reglas generales. Puesto que el precepto alude en general a -daños-, y de otro lado [a la muerte o lesiones], por la doctrina se ha entendido que no puede en absoluto el predisponente evitar la responsabilidad por los daños causados [cualquiera que sea su origen o naturaleza], según las reglas generales que en este ámbito se reputan imperativas en beneficio del consumidor.”.

<sup>272</sup> Precisamente opina, GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*, p. 217, “... la función básica de la responsabilidad contractual sigue siendo fundamentalmente indemnizatoria y por lo tanto es presupuesto ineludible para su nacimiento la existencia efectiva de daños al acreedor...”.

Los daños indemnizables a consecuencia del incumplimiento o cumplimiento del contrato de viaje combinado por parte de la agencia de viajes, serán en un sentido amplio todo tipo de daños. Es decir, todos los daños que el consumidor o turista pueda sufrir como son los físicos (lesión o muerte), morales (sufrimiento, trastorno psicológico, aflicciones, etc.) y materiales (perdida del equipaje).

Los daños morales sufridos durante la ejecución de un de viaje combinado han sido indemnizados a los consumidores por la frustración de sus vacaciones. Para determinar los daños morales hay que tener en cuenta la utilidad del viaje que puede haber sido prevista por las partes (viajes de novios, de nieve, de aventura) o en su caso contrario, por las consecuencias o daños usuales en los viajes. Por ejemplo, por la pérdida de las maletas durante tres días<sup>273</sup>; por la incomodidad, perturbación padecidas como consecuencia de la llegada de un huracán, lo que genero la repatriación en unas condiciones de gran incomodidad, retraso y desatención<sup>274</sup>; por sufrir una cadena de incumplimientos “falta de higiene en las habitaciones, comida escasa y de mala calidad, piscina sucia, hormigas en las habitaciones, mal servicio, etc.”<sup>275</sup>, etc. Solo deben indemnizarse estos daños en los casos de incumplimiento total o cumplimiento defectuoso de carácter grave.<sup>276</sup>

El Tribunal Supremo establece que al momento de valorar un daño moral no se puede obtener de una prueba objetiva, sino que dependerá de los órganos judiciales para fijar la cuantía indemnizatoria caso por caso en concreto, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes.<sup>277</sup>

---

<sup>273</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 8ª), núm. 523/2001, de 5 de octubre (westlaw JUR 2002\92087), en el que se acredita la pérdida durante tres días del equipaje y los destrozos que presentaban las maletas y bolsos.

<sup>274</sup> Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3ª), núm. 221/2007, de 11 de julio (westlaw 2008\43198) F.D. 3. y 4.

<sup>275</sup> Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3ª), núm. 402/2001, de 25 de abril (westlaw JUR 2001\211098).

<sup>276</sup> Véase, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 250 que señala “... parece preciso que la falta sea de cierta entidad y que, por tanto, se trate de un **incumplimiento total o de un cumplimiento gravemente defectuoso** (pues difícilmente puede acreditarse un daño moral ocasionado por un defecto leve, como que no se sirva el desayuno en el hotel)”; GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*, pp. 220-235, entiende que “parece sensato considerar que para ser indemnizable la frustración ha de tener determinada importancia y los incumplimientos contractuales han de ser de una entidad suficiente como para poder considerarse causantes que tal umbral haya sido superado (p. 231)”; y SOLER VALDÉS-BANGO, Alfredo: *Op. cit.*, p. 408.

<sup>277</sup> Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 867/1996, de 21 de octubre (westlaw RJ 1996\7235) FD 2º.

Es importante decir, que algunas sentencias señalan que el precio del viaje combinado no se considera como el límite máximo de la indemnización de daños y perjuicios sufridos por el consumidor o turista.<sup>278</sup> Mientras que en otras se establece lo contrario, señalando que la cuantía máxima de indemnización tendrá como referencia el precio total del viaje, siendo muy frecuente la reducción de la cantidad reclamada, para prevenir que el turista se enriquezca injustificadamente.<sup>279</sup> En la mayoría de los casos, el Juez tendrá en consideración el coste total del viaje combinado al momento de establecer el importe de la indemnización de un daño sufrido en un viaje combinado. Sin embargo, dado a que la finalidad de la indemnización es la reparación del daño ocasionado, el precio máximo no debe constituir necesariamente un límite al importe de la indemnización.

Por último, el resarcimiento o la indemnización de los daños sufridos por el consumidor a consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones establecidas en el contrato de viaje combinado, estará limitada con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones, así lo establece el artículo 162.3 del TRLGDCU. Así, la normativa vigente del contrato de viaje combinado protege a las agencias de viajes de tener que responder de los daños que sufra el consumidor o turista, originados por los servicios prestador por otras empresas, en el caso de que posteriormente en vía de regreso la empresa causante del daño opone a la agencia de viajes una limitación de responsabilidad amparada en un convenio internacional.<sup>280</sup>

## **9.5. La garantía de responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado.**

---

<sup>278</sup> Como indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), núm. 217/1998, de 6 de abril (westlaw AC 1998\5335) F.D. 4.

<sup>279</sup> Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), núm. 195/2008, de 17 de julio (westlaw JUR 2008\321002), por lo que la Audiencia rebaja la indemnización concedida por el Juzgado de Primera Instancia, que había concedido a los actores la cantidad de 800 euros por viajero, lo cual excedía del precio del viaje.

<sup>280</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 162. Responsabilidad de los organizadores y detallistas”, *Op. cit.*, p. 1936, comentario al artículo 162.3 del TRLGDCU, menciona que: “Como explica nuestra doctrina, a través de esta limitación la Directiva comunitaria pretendía evitar que los organizadores y detallistas terminaran respondiendo mas allá de lo que lo hacían los prestadores de servicios, de tal forma que pudieran luego reclamar a éstos el reintegro de lo abonado.”; GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*, pp. 240-241, “El primero de los párrafos transcritos permite al tour operador limitar su responsabilidad con arreglo a los convenios internacionales. El texto de la Directiva no especifica a que convenios se refiere... en todo caso parece que han de tratarse de convenios internacionales que estén efectivamente en vigor...”.

La agencia de viajes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones (sobre todo en el reembolso de las cantidades anticipadas y los gastos de repatriación) deben constituir y mantener una fianza en los términos que determine la Administración turística competente, con el fin, de responder del cumplimiento de las obligaciones originadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado, así lo establece al artículo 163 del TRLGDCU. Además, La fianza garantiza la devolución “de los fondos depositados y el resarcimiento de los gastos de repatriación en los supuestos de insolvencia o quiebra” de las agencias de viajes. Las garantías quedan afectadas al cumplimiento de las obligaciones que deriven de las resoluciones firmes en vía judicial o de los laudos arbitrales que declaren las responsabilidades económicas de las agencias de viajes por la contratación y prestación de sus servicios.

Como se explico en capítulos anteriores, Inicialmente la normativa administrativa preveía este requisito en el artículo 5 del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y el artículo 15 de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, por el que se regulaba el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes en el ámbito estatal, y que actualmente se encuentran derogadas por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, junto con otras disposiciones estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio, a lo que, actualmente la ordenación de las empresas turísticas (las agencia de viajes), está regulado por los Decretos dictados por las distintas Comunidades Autónomas en desarrollo de la regulación contenida en sus respectivas leyes de ordenación turística.<sup>281</sup>

Tal y como se regulaba en las derogadas normativas administrativas y actualmente por la mayor parte de las Comunidades Autónomas, la fianza puede ser de dos tipos: individual o colectiva.

Como fianza individual se podrá constituirse mediante el ingreso en efectivo al organismo administrativo competente, aval bancario, póliza de seguro. La cuantía de la fianza individual en las regulaciones autonómicas oscila entre los 60.101,21 Euros

---

<sup>281</sup> La exigencia de la constitución de garantías financieras se ha aceptado por las Comunidades Autónomas, que las prevén en sus respectivas normas, si bien, algunas de ellas especifican que dicha garantía está vinculada de forma especial a las situaciones de insolvencia de las agencias de viajes, incorporando la expresa mención de la antigua Ley de Viajes Combinados y el actual artículo 163 del TRLGDCU (caso de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia); y otras la determinan con carácter general para responder de las obligaciones que se establezcan con los consumidores (como la normativa propia de las Islas Baleares o la nueva regulación Valenciana).

para las agencias minoristas, 120.202,42 Euros para las agencias mayoristas-minoristas, en el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, incrementa las fianzas a 90.151 Euros para las agencias detallistas (minoristas), a 180.303 Euros para las mayoristas y a 240.404 Euros para las mayoristas-detallistas (mayoristas-minoristas). En el caso de la fianza colectiva, se forma mediante la incorporación de la agencia de viajes a una asociación legalmente constituida en las que se agrupan varias agencias, constituyendo un fondo solidario de garantía. La cuantía de esta fianza será del 50% de la suma de las fianzas que las agencias de viajes, individualmente consideradas, habrían de constituir conforme a lo dispuesto para las fianzas individuales, pero con un importe que no podrá ser inferior a los 24.040.048,42 Euros por asociación, con independencia del ámbito ya sea nacional o regional.<sup>282</sup>

En el caso de que la fianza se ejecute, la agencia o asociación de agencias que gestiona el fondo colectivo de cobertura afectada vendrá obligada a reponerla en un plazo no superior a 15 días, hasta subir la cantidad de la misma, ya que de no hacerlo, se le revocaría el título-licencia, como lo establecía antes la normativa estatal y que la mayor parte de las Comunidades Autónomas siguen aplicando.<sup>283</sup>

Además, sigue siendo habitual que se requiera a las agencias de viajes la suscripción de una póliza de seguro que deberá cubrir la responsabilidad civil por la explotación del negocio, la responsabilidad civil indirecta o subsidiaria y la responsabilidad por los daños patrimoniales. La cobertura se extiende a los diversos siniestros a saber, daños corporales, daños materiales y los perjuicios económicos. La póliza de seguro de responsabilidad civil debe mantener su vigencia durante el ejercicio de la actividad.<sup>284</sup>

---

<sup>282</sup> Así, SOLERNOU SANZ, Stella: “El régimen de las Agencias de Viajes”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 248, 2003, p. 733; RECALDE CASTELLS, Andrés, “Las Agencias de Viajes”, en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés, (Dir.) / PETIT LAVALL, María Victoria (Coord.), *Lecciones de Derecho del turismo*, *Op. cit.*, p. 170, “Las Agencias de Viaje están obligadas igualmente a constituir una fianza o a incluirse en un fondo de garantía para responder del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios...”.

<sup>283</sup> MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Artículo 163. Garantía de la responsabilidad contractual”, *Op. cit.*, p. 1949, comentario al artículo 163 del TRLGDCU, dice que: “En el caso de que la fianza se ejecute..., las Agencias estarán obligas a reponerla en el plazo de quince días, hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma. Esto confirma que la obligación a que se refiere el precepto de mantener en permanente vigencia la fianza no se refiere a un determinado contrato de viaje combinado, sino en general al tiempo de actividad de la Agencia de viajes...”.

<sup>284</sup> Anteriormente se regulaba la póliza de seguro por medio del artículo 5 de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988 ya derogada. Sin embargo la suscripción de una póliza de seguro sobre responsabilidad civil continúa subsistiendo por la exigencia sobre la protección de los consumidores y la seguridad en el desempeño de las actividades de servicios turísticos.



## 9.6. La prescripción de acciones en el contrato de viaje combinado.

En el artículo 164 del TRLGDCU se determina que dos años es el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa del contrato de viaje combinado. El plazo de prescripción se debe establecer en el contrato de viaje combinado, para que el consumidor o turista tenga conocimiento de sus derechos. Porque así, el turista podrá ejercitar las oportunas acciones en reclamación por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones de los servicios en el contrato de viaje combinado.

No solo el plazo de prescripción para ejercitar acciones es para el consumidor o turista, sino que también para las agencias de viajes, como por ejemplo el cobrar el precio total del viaje combinado. Con ello, se otorga una amplia protección jurídica para la defensa de sus derechos reconocidos en el TRLGDCU.<sup>285</sup>

El inicio del cómputo del plazo de prescripción se deriva de la aplicación del artículo 1.969 del Código civil.<sup>286</sup> En consecuencia, el cómputo empezará en la fecha de finalización del viaje combinado prevista en el contrato.<sup>287</sup> Sin embargo, el consumidor o turista sufre lesiones o daños, el inicio del cómputo del plazo iniciará en el momento en que se conozca de forma definitiva las consecuencias del daño.<sup>288</sup>

Además, la aplicación del plazo de prescripción de dos años establecido en la normativa de viajes combinados en su artículo 164 del TRLGDCU, resulta preferente y

---

<sup>285</sup> Así lo establece, GÓMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 96, “... no cabe duda de que la norma alcanza y concierne también a los derechos de las Agencias de viajes (como partes en aquel contrato) y a las acciones derivadas de estos derechos...”, esto es, que no solo es para los consumidores o usuarios que participen en el contrato de viaje combinado, sino que también es de aplicación para las agencias de viajes.

<sup>286</sup> Conforme a lo establecido en el artículo 1.969 del Código civil dice: “El tiempo para prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse...”

<sup>287</sup> Así, GARCÍA RUBIO, María Paz: *Op. cit.*, p. 301, “... parece lógico considerar que dicho cómputo debe iniciarse precisamente en el momento que el viaje finaliza o, mejor aún, hubiera debido finalizar de acuerdo con los plazos contractuales previstos (y no, por ejemplo, en el momento en el que el consumidor regresa por haber tenido que hacerlo de manera anticipada a causa del incumplimiento)”.

<sup>288</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª), núm. 118/2007, de 21 de marzo (westlaw AC 2007/1556) F.D. 3., en relación con la reclamación de indemnización de daños y perjuicios por la deficiente prestación de los servicios concertados en un contrato de viaje combinado, “...es manifiesto que el plazo para el ejercicio de la acción de reclamación de los perjuicios ocasionados por la deficiente prestación de los servicios concertados en un contrato de viaje combinado, como regla general, deberá empezar a contarse desde el momento en que finalizó la prestación de los servicios que se consideran defectuosos en relación con los pactados en el contrato y que han generado los perjuicios reclamados.”.

excluyente con respecto a los diversos plazos de prescripción establecida en el Código civil. Sin embargo, la regulación especial de los viajes combinados no tiene pretensión alguna de exclusividad, con lo que los plazos de prescripción establecidos en el Código civil son supletorios ante la ausencia o confusión del juzgador.<sup>289</sup>

## **II. CONTRATO DE VIAJE COMBINADO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RIESGO.**

### **1. CONSIDERACIONES PREVIAS.**

Ante una creciente demanda del turismo, especialmente buscando el ocio y la actividad física en unas instalaciones deportivas o entorno natural, se ha propiciado la aparición de iniciativas empresariales de promocionar y desarrollar una nueva forma de turismo, llamado “turismo deportivo”, “turismo activo” o “turismo de aventura”.<sup>290</sup>

Uno de los elementos que componen al contrato de viaje combinado son los “*otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado*”, sobre éstos y conforme a la interpretación explicada en capítulos anteriores, las actividades deportivas y de riesgo pueden ser una de las prestaciones establecidas en el contrato de viaje combinado.

Normalmente la oferta de sol y playa ya no llega ser suficiente para los turistas, por la evolución y tendencia de las personas. Por ello la cultura, la salud o el deporte son

---

<sup>289</sup> En este sentido, GÓMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, p. 300 “La LVC aspira a regular las cuestiones centrales del régimen jurídico del contrato de viaje combinado; y que éste se contemple específicamente, sacándolo del Código civil y situándolo en una Ley especial, parece hablar a favor de la voluntad del legislador de dotarle de un régimen propio y aparte del general en aquellas cuestiones explícitamente contempladas...”; además, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14ª), núm. 388/2005, de 20 de junio (westlaw JUR 2005\180809) F.D. 5., al señalar que resulta aplicable al caso la determinación del plazo de prescripción de dos años de la derogada LVC (Art. 13) por tratarse de un plazo previsto de carácter “específico” para las acciones derivadas de contratos de viajes combinados.

<sup>290</sup> Así, LUQUE GIL, Ana María: “La evaluación del medio para la práctica de actividades turístico-deportivas en la naturaleza”, *Cuaderno de Turismo*, núm. 13, 2003, p.133, explica que: “La notabilidad que ha venido adquiriendo las prácticas deportivas y turísticas en los últimos años, hay que enmarcarla en los cambios experimentados por el sector del ocio a lo largo del siglo XX.”; LACOSTA ARAGÜÉS, Antonio: “La configuración de nuevos destinos turísticos de interior en España a partir del turismo activo y de aventura (1992-2001)”, *Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada*, núm. 34, 2004, p.12.; DEL TORO VEGA, Gabriel / GONZÁLEZ ROMERO, Francisco / HERNÁNDEZ MORENO, José: “Catalogación de las praxis motrices de turismo activo en entornos naturales”, *Cuadernos de Psicología del Deporte*, Vol. 10, núm. Suple., 2010, p. 94.

alguno de los atractivos turísticos en los que se apoyan los organizadores y detallistas de viajes combinados para llamar la atención de sus clientes.<sup>291</sup>

El deporte, el turismo y el entorno de la naturaleza son elementos cada vez más llamativos y de aceptación en la sociedad. En consecuencia, se han desarrollado las actividades físico-deportivas y recreativas en el medio natural por parte de diversas empresas.

Las actividades deportivas dentro del entorno del turismo activo tiene una cierta peculiaridad, que es la implicación de un cierto riesgo y las personas requieren para su desarrollo un mínimo de destreza y fortaleza física.<sup>292</sup> Por lo que es muy importante explicar las posibles actividades deportivas que se efectúan en el ámbito turístico y cual son dentro del sector de turismo activo.

## **2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL SECTOR TURÍSTICO.**

Son varias las actividades de ocio que tradicionalmente componen al sector turístico para aumentar su atractivo y para dar un valor añadido a un viaje, que consiste en un servicio complementario.<sup>293</sup> Actualmente, las actividades y servicios deportivos se consideran como un elemento importante en los viajes, siendo la causa principal en el momento de elegir un determinado viaje.

---

<sup>291</sup> Así, PEÑALVER TORRES, María Teresa: “El turismo activo como alternativa y complemento al modelo turístico en la región de Murcia”, *Cuaderno de Turismo*, núm. 14, 2004, p. 180, expone: “En los últimos años se han producido numerosas transformaciones en el sector turístico que han derivado en la aparición de una serie de nuevos productos turísticos complementario a los destinos tradicionales de sol y playa o de interior.... a la hora de planificar el tiempo libre, no solo se organizan los viajes a lugares determinados por las características particulares que este puede ofrecer o buscando un lugar para el descanso, hoy se pretende que el destino turístico elegido, además, nos oferten otras actividades complementarias, en definitiva se impone la idea de *ocio activo* en detrimento de un turismo pasivo”.

<sup>292</sup> GRANERO GALLEGO, Antonio: “Las actividades físico-deportivas en la naturaleza y la industria turística”, *Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y el deporte*, Vol. 7, núm. 26, 2007, p. 115, menciona que estas actividades reciben diferentes denominaciones: “deportes de aventura, deportes tecno-ecológicos, deportes en libertad, deportes californianos, deporte salvaje, actividades deslizantes en la naturaleza, actividades de aventura, etc., además aparecen cada vez más denominaciones como: turismo de naturaleza, eco-turismo, turismo en entorno rural, turismo cultural, turismo de aventura, turismo deportivo, turismo ambiental, agroturismo, turismo cultural, turismo de salud, turismo religioso o etnoturismo.”, se puede apreciar que existe una gran diversidad de denominaciones a este tipo de actividades deportivas en el sector turístico.

<sup>293</sup> En este sentido, LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, p. 133, establece: “Por su parte el turismo se ha constituido en un segmento fundamental del ocio, sobre todo por la democratización del tiempo y del espacio (reducción del tiempo de trabajo, vacaciones pagadas, etc.), apoyado por un soporte infraestructural. Esta democratización supone que cada persona decide “si disfrute o no de su tiempo de ocio”, “como disfruta de su tiempo de ocio” y “cuando inicia y acaba su tiempo de ocio”...”.

El deporte dentro del fenómeno turístico se puede abordar por la actuación del consumidor o turista en un doble aspecto: como espectador o como practicante.<sup>294</sup> Independientemente de cuál sea el desempeño del turista en el viaje (la asistencia a un evento deportivo o la práctica de actividades deportivas)<sup>295</sup>, puede llegar a constituirse como causa principal del contrato.

A lo que nuestra investigación interesa, es el turismo deportivo que se especializa en la participación y práctica activa de los turistas en un deporte.<sup>296</sup> La intención del consumidor al practicar una actividad deportiva dentro de un viaje, es poder realizar actividades recreativas-deportivas orientadas a la acción, donde predomina una actitud activa, de descubrimiento y de reto ante lo nuevo, la aventura y el dominio ante situaciones difíciles.<sup>297</sup>

### **3. EL TURISMO ACTIVO.**

#### **3.1. Concepto de “turismo activo” y su regulación en la legislación autonómica.**

La práctica deportiva esta cada vez más relacionada con otras actividades de ocio o lúdicas, que se manifiestan en una nueva categoría de turismo llamado “turismo deportivo”, “turismo activo” o “turismo de aventura”, obteniendo como resultado una mayor demanda de servicios y a la vez exigiendo una mayor protección jurídica para

---

<sup>294</sup> LÓPEZ BUSTOS, Francisco / MAYORGA, Juan / DE LA PLATA, Nicolás: *El entorno jurídico de las nuevas tendencias: deporte de aventura, animación deportiva y ocio activo*, Dykinson, Madrid, 2006, p. 191, el turista espectador es: “consecuencia del deporte de alto nivel. El circo deportivo y la alta competición son foco de atracción del turismo. Por ser más explícitos, podemos poner como ejemplos algunos eventos como los Juegos olímpicos, Campeonatos de fútbol, los Campeonatos de automovilismo, etc.”.

<sup>295</sup> Así, PEÑALVER TORRES, María Teresa: *Op. cit.*, p. 181, “Podemos decir que las actividades deportivas son uno de esos elementos que pueden hacer más atractivo un destino turístico frente a otro que no tenga capacidad para acoger la práctica de deportes...”.

<sup>296</sup> La idea de practicar este tipo de actividades deportivas normalmente se realiza en un entorno de la naturaleza, así LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, p. 133, “Es indiscutible la relación existente entre deporte y turismo y este vínculo se percibe, al igual que en otros espacios turísticos, en el medio natural, donde entre la oferta de bienes y servicios están adquiriendo un interés creciente los recreativos y de esparcimiento.”.

<sup>297</sup> Existen diversas opiniones sobre la motivación o causa para realizar este tipo de actividades deportivas, véase, PEÑALVER TORRES, María Teresa: *Op. cit.*, pp. 180-181; ROYO GRACIA, Juan Félix: “Turismo deportivo en la provincia de Teruel”, *Revista de humanidades*, núm.13, 2007, pp. 231-232; GRANERO GALLEGO, Antonio, *Op. cit.*, pp. 112-118; SANTOS ARREBOLA, José Luis: “Las nuevas tendencias de los consumidores-turistas”, *Estudios sobre consumo*, núm. 23, 1992, pp. 33-44; LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, pp. 134-135, y otros más.

los turistas. Esta nueva modalidad turística ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos años, por la demanda de muchos deportistas.<sup>298</sup>

Existen diversas causas por lo que el turista o consumidor realiza actividades deportivas de alto riesgo y peligrosas, pero considero que se deben principalmente por las siguientes: a) Una respuesta a los deportes institucionalizados; b) Acercamiento a la naturaleza; c) Avances tecnológicos; d) Búsqueda de riesgo y aventura; e) Aumento de la cultura y el tiempo libre; f) Valor del aporte de aspectos educativos; g) Impulso del marketing y la gestión privada; h) Mayor tiempo de compromiso motor; y i) Carácter utilitario de ruptura con la rutina.<sup>299</sup>

El turismo activo puede ser definido como una forma de ocio consistente en la práctica de actividades físico-deportivas recreativas en el entorno o medio de la naturaleza.<sup>300</sup>

El deporte que se practica en un entorno o medio natural son conocidos como deportes de aventura o de riesgo provocando una afluencia de senderistas, ciclistas, conductores, voladores, jinetes y piragüistas entre otros.<sup>301</sup>

---

<sup>298</sup> En este sentido, LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, pp. 138, menciona que “El turismo activo es un turismo alternativo, porque tiene características opuestas al turismo de masas o convencional (es de baja densidad, pequeños negocios familiares, etc.), un turismo deportivo (cuya motivación principal es la práctica de una actividad deportiva) y un turismo en la naturaleza (ya que la misma le sirve como lugar de desarrollo pero mediante un uso inadecuado puede llegar a modificarla)”. Sobre los deportes que normalmente se realizan en esta clase de turismo, son los deportes de alto riesgo, así MEDINA ALCOZ, María: *La asunción del riesgo por parte de la víctima. Riesgos taurinos y deportivos*, Dykinson, Madrid 2004, p. 240, “Dentro de los deportes extra competitivos, se encuentran los llamados “deportes de alto riesgo”, caracterizados por desarrollarse en un medio físico particularmente hostil (v. gr., montañismo, alpinismo, rafting, espeleología, apnea (, así como el llamado turismo activo o de aventura.”.

<sup>299</sup> PEÑALVER TORRES, María Teresa: *Op. cit.*, p. 181. Estas causas son muy específicas y en realidad existen diversos motivos para la realización de actividades deportivas de alto riesgo. Por eso, hay autores que consideran más causas para la práctica de actividades deportivas como LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, pp. 134-135.

<sup>300</sup> Así, ASPAS Y ASPAS, José Manuel: “Los deportes de aventura ¿deporte o turismo?”, en *Derecho y Turismo*, MELGOSA, Javier, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, p.300. Diferentes autores dan una definición de turismo activo, sin establecer una en concreto, pero reunido los elementos que esta actividad contiene, así PEÑALVER TORRES, María Teresa: *Op. cit.*, p. 183, “El turismo activo, es el que oferta actividades deportivas, que con cierto riesgo, pueden practicarse bajo la tutela de un monitor en plena naturaleza...”; DEL TORO VEGA, Gabriel / GONZÁLEZ ROMERO, Francisco / HERNÁNDEZ MORENO, José: *Op. cit.*, p. 94, “El turismo activo es el viaje de carácter lúdico y para practicar actividad física de adaptación ambiental, en espacio con incertidumbre de manera no competitiva”; La Organización Mundial del Turismo, Madrid, 1985, “El papel de la animación turística en el desarrollo de las “vacaciones activas” y del “turismo temático”, para favorecer el enriquecimiento de la experiencia de las vacaciones=, “las vacaciones activas pueden definirse como vacaciones durante la cuales se busca una actividad cultural, artesanal de recreo o deportiva, con el objeto de auto-realizarse y de permitir el perfeccionamiento de la propia personalidad.”.

<sup>301</sup> MARTÍN ROJO, Inmaculada / PELÁEZ VERDET, Antonio: “Nuevos productos turísticos: el turismo activo”, *Diagnostico empresarial en la provincia de Málaga, Estudios Turísticos*, 2006, números. 169-170, p. 147. Se considera que es un deporte de aventura porque la “búsqueda de la aventura” es un elemento que caracteriza este tipo de turismo, con la intención de obtener una sensación de riesgo o

El turismo activo se caracteriza por la práctica de un deporte como motivo principal del desplazamiento turístico, vinculado a la voluntad del turista o consumidor de realizar personalmente una actividad deportiva, aunque no se especifique que tipo de actividad deportiva se realizará. Además, en la oferta de este tipo de turismo se incluyen otras actividades relacionadas con la animación socio cultural, en las que se incluyen los parques temáticos como Disney World, museos, zoológicos, etc.

Es importante señalar que en España se han realizado una regulación jurídica del turismo activo en distintas Comunidades Autónomas, determinando un concepto casi uniforme, destacando a los deportes de aventura, deportes de riesgo y aventura, turismo deportivo, turismo de ocio activo o incluso turismo de aventura.

Actualmente once Comunidades Autónomas han llevado a cabo una regulación estricta del turismo activo, las cuales son: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia.<sup>302</sup>

La Comunidad Autónoma de Cataluña fue la primera en regular los deportes de aventura y turismo activo mediante Decreto 81/1991, 25 de mayo, *por el que se establecen los requisitos que han de reunir las empresas dedicadas a la organización de actividades deportivas y turísticas de aventura*. Esta norma ha sido derogada expresamente por el Decreto 56/2003, de 20 de febrero, *por el cual se regulan las actividades físico-deportivas en el medio natural*.<sup>303</sup>

---

aparente peligro que normalmente suelen acompañar a este tipo de prácticas, de ahí su vínculo con el concepto de aventura, así LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, p. 138.

<sup>302</sup> La legislación autonómica en materia de turismo activo son las siguientes: 1) Aragón, Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de turismo activo; 2) Galicia, Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo; 3) Andalucía, Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo; 4) Asturias, Decreto 92/2002, de 11 de julio, de Turismo Activo; 5) Cataluña, Decreto 56/2003, de 20 de febrero, por el cual se regulan las actividades físico-deportivas en el medio natural; 6) La Rioja, Decreto 111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja; 7) Navarra, Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la actividad de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de turismo activo y cultural; 8) Castilla-La Mancha, Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo; 9) Castilla y León, Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula la ordenación de las empresas de turismo activo de las Comunidades de Castilla y León; 10) Murcia, Decreto 320/2007, de 19 de octubre, por el que se regulan las empresas de turismo activo de la Región de Murcia; 11) Cantabria, Decreto 31/97, por el que se regulan los objetos y actividades de turismo en el medio rural de Cantabria.

<sup>303</sup> Varios autores comentan que Cataluña fue la primer Comunidad Autónoma en regular el fenómeno del turismo activo, así ASPAS Y ASPAS, José Manuel: *Op. cit.*, 291; GARCÍA SAURA, Pilar Juana: “Turismo activo y medio ambiente: una implicación necesaria. Aspectos jurídicos”, *Cuadernos turísticos*,

Es en Andalucía, mediante el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de *Turismo en el Medio Rural y Turismo activo*, que se emplea la expresión turismo activo, sin embargo no se define en el texto normativo.<sup>304</sup>

Actualmente en la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de turismo de Castilla y León, capítulo III, en su artículo 45 se establece un concepto de turismo activo: “Las actividades de turismo activo consisten en la prestación, a cambio de un precio, de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente cierto grado de destreza para su práctica, que se publiciten como tales.”.

### **3.2 Actividades deportivas que integran el turismo activo.**

Existe un amplio catálogo de actividades deportivas dentro del turismo activo, pero para identificar de que deporte se trata dependerá del medio o entorno de la naturaleza que se utilice. Normalmente las actividades deportivas de alto riesgo que las empresas de turismo activo ofertan a los consumidores o usuarios son: 1) actividades terrestres; 2) actividades acuáticas; y 3) actividades aéreas. Es de considerar que siempre surgen nuevas actividades deportivas de alto riesgo.<sup>305</sup>

#### **1) Actividades deportivas terrestres.**

Las actividades terrestres son aquellas actividades deportivas que se ejecutan o realizan con relativo a la tierra. Algunas de estas actividades son: la escalada o montañismo (en las que se incluyen escalada en roca, escalda deportiva, escalda en hielo, tirolesa), la bicicleta (encontramos la bicicleta de montaña, de paseo o de

---

núm. 26, 2010, p. 161; GALÁN AGUADO, Alejandro: “La regulación del turismo activo en Castilla y León. Estado de la Cuestión”, en *Derecho y Turismo*, Universidad de Málaga, 2004, p. 328, y otros.

<sup>304</sup> Es necesario, precisar que el turismo activo no es considerado en Andalucía como una modalidad turística sino más bien como una actividad turística o un servicio turístico en sí. En este sentido, PÉREZ MONGUIÓ, José María: “El régimen del turismo activo en España desde la perspectiva andaluza”, *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núm. 33, 2008, p.305.

<sup>305</sup> Es importante señalar que existen diversas actividades deportivas de alto riesgo en el turismo activo o de aventura, intento señalar aquellas que son más conocidas u ofertadas a los turistas, pero podemos encontrar mucho mas, véase, LUQUE GIL, Ana María: *Op. cit.*, p. 136; PEÑALVER TORRES, María Teresa: *Op. cit.*, pp. 184 y ss.; ROYO GRACIA, Juan Félix: *Op. cit.*, pp. 232 y ss.; SANTOS ARREBOLA, José Luis: *Op. cit.*, pp. 8-9.; ASPAS Y ASPAS, José Manuel: *Op. cit.*, pp. 300-310; y PÉREZ MONGUIÓ, José María: *Op. cit.*, pp. 307-311.

carretera), una actividad hípica (y se puede ser conforme a una ruta, un curso de quitación y excursiones), salto elástico (esta el bungy dumping, high-jump), excursionismo (puede ser el senderismo), alpinismo, descenso de barranco, tiro con arco (en las que encontramos también el paint-ball), motor (moto todoterreno, karts, motos de nieve), esquí (snowboard, esquí alpino, esquí de montaña, raquetas de nieve, en general los deportes de nieve).

## 2) Actividades acuáticas.

Las actividades deportivas acuáticas son las que se producen o desarrollan en el agua, y encontramos las siguientes: piragüismo (el kayak, canoa, kayak de mar), vela (windsurf, vela, catamarán, kite surf), actividades subacuáticas (snorkel), buceo, de motor (esquí náutico, moto de agua).

## 3) Actividades aéreas.

Son las actividades deportivas que se realizan en el aire, dentro de las cuales mencionamos: parapente, paracaídas, globo aerostático, caída libre, sky surf, salto (puenting), vuelo libre, etc.

### **3.3. Las empresas de turismo activo.**

Las empresas que se dedican al turismo activo son las que organizan las actividades deportivas de alto riesgo o un turismo de aventura, las cuales deben cumplir con una serie de requisitos para poder desarrollar o desempeñar sus funciones conforme a la ley.

Se puede decir que las empresas de turismo activo, son aquellas que se dedican a ofertar y vender actividades deportivas en el entorno natural. El Decreto 20/2002, de 29 de enero, *de turismo en el medio rural y turismo activo de Andalucía*, considera que las empresas de turismo activo son aquellas que realizan actividades de turismo activo, y en su artículo 4 define que: “Se consideran actividades propias del turismo activo las relacionadas con actividades deportivas que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en el que se



desarrollen, a las cuales le es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza.”.<sup>306</sup>

La regulación en materia de turismo activo que han desarrollado las Comunidades Autónomas, es con la finalidad de controlar las empresas que prestan estos servicios deportivos y también para asegurarse que cumplen con unos requisitos mínimos para ofrecer un servicio de calidad y garantizando unos estándares de seguridad para permitir una adecuada utilización del medio natural.<sup>307</sup>

Lo que es importante para el desarrollo del trabajo, es que normalmente la comercialización de los productos y servicios de las empresas de turismo activo no la realizan directamente con los turistas o consumidores, sino que normalmente acuden a empresas de intermediación, como son las agencias de viajes (como puede ser Barceló Viajes), y es así en donde se pueden ofrecer y contratar los viajes combinados con actividades deportivas y de riesgo.

Por lo tanto, los organizadores o las agencias de viajes que oferten a los consumidores o turistas un viaje combinado con actividades deportivas y de riesgo, le es de aplicación el TRLGDCU, de manera especial el capítulo sobre la regulación de los viajes combinados, porque las actividades deportivas y de riesgo pueden ser consideradas dentro de la categoría de los “otros servicios complementarios”.

#### **4. LA RELACIÓN JURÍDICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE RIESGO.**

La práctica de cualquier actividad deportiva se encuentra al alcance de todo individuo o sujeto, como una forma de aprovechar el tiempo libre. Muchas veces, para el desarrollo del deporte, no es necesario vincularse de forma directa a una relación contractual, sino que la práctica es voluntaria, a no ser que se le considere a la persona como un deportista profesional.

---

<sup>306</sup> Otra definición de empresas de turismo activo sería: “Por empresas de turismo activo y de aventura se entiende a toda sociedad legalmente constituida para organizar, mediante precio, actividades relacionadas con la naturaleza y los deportes de aventura”, así LACOSTA ARAGÜÉS, Antonio: *Op. cit.*, p. 16.

<sup>307</sup> Sobre los requisitos de las empresas turísticas y su procedimiento de inscripción en el registro correspondiente, considero que puede ser objeto de un estudio más profundo en otra investigación, por lo que se puede consultar a: PÉREZ MONGUIÓ, José María: *Op. cit.*, pp. 311-319; LACOSTA ARAGÜÉS, Antonio: *Op. cit.*, pp.16-24; GARCÍA SAURA, Pilar Juana: *Op. cit.*, p.49. en el caso de autorización e inscripciones, véase ASPAS Y ASPAS, José Manuel: *Op. cit.*, pp. 310-311.

Ahora bien, ante qué situación jurídica nos ubicaríamos, si una persona para la práctica de algún deporte decide contratar alguna prestación de servicios deportivos, ya sea para aprender alguna nueva modalidad deportiva, usar instalaciones deportivas, practicar un deporte de riesgo en entornos naturales, etc. Por ello, es importante establecer la naturaleza de estas prestaciones en relación a la contratación de servicios deportivos, junto con sus elementos, los derechos y obligaciones, legislación aplicable, etc.

#### **4.1. Ideas y concepto.**

En la legislación general tanto como en la específica, no existe una regulación de Derecho privado sobre la contratación de servicios o actividades deportivas, por lo que conforme a las disposiciones generales de los contratos, nos encontraríamos en una modalidad del contrato de “arrendamiento de servicios” o “contrato de prestación de servicios”.

Se podría definir al contrato de actividades deportivas como “el acuerdo de voluntades entre dos o más partes, por el que una parte se compromete a favor de la otra a prestar, mediante una contraprestación, un servicio de carácter deportivo”, en aproximación al contrato de arrendamiento de servicios tipificado en el Código Civil artículo 1.544.<sup>308</sup>

En el Código Civil se regula el contrato denominado como “arrendamiento de servicios” en los artículos 1.583-1.587, refiriéndose principalmente a los servicios de criados y trabajadores asalariados. Sin embargo, como insiste la jurisprudencia y doctrina este tipo de contrato puede englobar un amplio abanico de servicios.<sup>309</sup>

---

<sup>308</sup> El artículo 1.544 del Código Civil define el arrendamiento de servicios junto al arrendamiento de obra: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.”; LUCAS FERNÁNDEZ, Francisco: “Comentario al artículo 1.544 del Código civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 1058-1060, comenta que: “... Nuestra doctrina acepta generalmente como criterio diferencial el que la prestación del arrendador vaya dirigida a un resultado (arrendamiento de obra) o a desplegar una actividad abstracción hecha del resultado (arrendamiento de servicios). Aunque algunos autores ofrecen además otros criterios puede afirmarse que el apuntado es el de mayor aceptación por nuestra doctrina y el consagrado por nuestra jurisprudencia...”.

<sup>309</sup> Por todos, DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial IV, Las particulares relaciones obligatorias*, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2010, p. 459, “... lo que los autores del Código civil introdujeron en tales puntos, siguiendo las pautas del Código civil francés, fue alguna norma sobre lo que allí se llama servicios de criados y trabajadores asalariados. Resta, sin embargo, un figura contractual por virtud de la cual se contratan genéricamente servicios.”.

De manera general, señalar que en el contrato de prestación de servicios el prestador se compromete a desplegar un comportamiento diligente dirigido a la consecución de un resultado determinado, pero sin que se asuma el compromiso de su efectiva obtención.<sup>310</sup> Estableciéndose una obligación que se configura como de una mera actividad. Es así, en la realización de actividades deportivas, el que presta el servicio suministra o desempeña lo necesario para llevar a cabo dicho deporte de forma correcta, independientemente de los posibles riesgos que conlleva la práctica de todo tipo de deporte.

La prestación de un servicio deportivo puede llegar a tener contenidos muy amplios y generales, por lo que en el presente estudio se intenta solo puntualizar los aspectos jurídicos importantes que sobresalen de la relación jurídica entre una persona física (en este caso, consumidor, usuario, turista o deportista no profesional) con una empresa o persona especializada en actividades deportivas.

#### **4.2. Características del contrato.**

- Es un contrato oneroso, porque la prestación de servicios deportivos se realizan a cambio de una retribución o remuneración. Así, como en el contrato de prestación de servicios, no podrían ser considerados como tales, aquellos en los que se realicen por benevolencia, amistad o buena voluntad.<sup>311</sup> Cuando un deportista quiere realizar alguna actividad deportiva dentro de unas instalaciones privadas debe pagar por su utilización, como son los gimnasios, canchas deportivas, pistas de esquí, etc., o cuando se hace esquí acuático se paga para que lo remolquen por el agua a cierta velocidad, por lo que se presta un servicio a cambio de dinero.
- Parcialmente típico. Al estar regulado escasamente el contrato de “arrendamiento de servicios” en el Código civil, podemos decir que se

---

<sup>310</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 19/2005, de 19 de enero (westlaw RJ 2005\518), menciona la diferencia entre el contrato de arrendamiento de obra y el de servicios, señalando en su F.D.2: “En el artículo 1544 del Código Civil (LEG 1889, 27) se recogen dos contratos distintos: el arrendamiento de obra y el arrendamiento de servicios. En el arrendamiento de obra la prestación del arrendador va dirigida a un resultado (sentencia de 13 de marzo de 1997 [ RJ 1997, 1934] ) y en el arrendamiento de servicios a una actividad independiente del resultado (sentencia de 3 de noviembre de 1983 [ RJ 1983, 5953] ).

<sup>311</sup> En este sentido, LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros: *Elementos de Derecho civil II, Derecho de obligaciones, Vol. II*, Dykinson, 3ª Ed., Madrid, 2005, p. 202, “Por tanto, igual que el mandato o el depósito, cualquier otro servicio puede ser oneroso o gratuito. No obstante, para ajustarnos a la tipología romana y al sentido del C.c. no debemos denominar “arrendamiento de servicios” a la promesa o prestación gratuita de éstos.”.

encuentra tipificado, pero de manera muy general. Además, en específico este tipo de contrato puede estar considerado como un “contrato parcialmente atípico”, esto de acuerdo, al análisis sobre su causa, que sería una “causa atípica” como elemento esencial del negocio jurídico.<sup>312</sup>

- Es consensual. Porque existe declaración de voluntad de entre las partes, con lo que expresan tanto el consentimiento de prestar el servicio deportivo, como a su vez de pagar por ello.<sup>313</sup>
- Es generalmente plurilateral. En una primera idea, en el contrato se presentan dos sujetos o partes que realizan y formalizan el contrato, del cual se generan y estipulan obligaciones reciprocas para cada parte. Sin embargo, puede que exista una pluralidad de sujetos que intervengan en el contrato, como sucede en el contrato de viaje combinado que contenga la práctica de alguna actividad deportiva. Ante esta situación, nacen obligaciones reciprocas o bilaterales para cada una de las partes integrantes del contrato, por un lado la agencia de viajes que vende y oferta el viaje combinado, en otro la empresa o persona que va a prestar el servicio deportivo, y por último, el consumidor o turista deportivo.<sup>314</sup>
- Generalmente es un contrato de adhesión. En la mayoría de los casos, en este tipo de contrato, las cláusulas se preestablecen por una de las partes (el prestador del servicio), por lo que el deportista o consumidor solo tiene la opción de aceptar o rechazar las condiciones o cláusulas. En los contratos de

---

<sup>312</sup> Véase, en la parte especial capítulo I.3.1. sobre “la causa dentro del contrato de viaje combinado”, en donde menciono y explico la posible existencia de una “causa atípica y mixta” dentro de un contrato y en específico en el contrato de viaje combinado.

<sup>313</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis: “Comentario al artículo 1.258 del Código Civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 436., señala: “El precepto que comentamos se abre con una declaración categórica y lacónica en virtud de la cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Reitera la regla del art. 1.254, según la cual el contrato existe desde que las personas consienten en obligarse y aparece guiado por el designio de convertir todos los contratos en consensuales... Cualesquiera que pudieran haber sido los designios de los redactores de la regla, ésta no puede ser tomada con carácter absoluto y hay que atribuirle el valor de un principio general, que, por ello mismo, permite excepciones. Los contratos son generalmente consensuales y, excepcionalmente pueden perfeccionarse mediante el cumplimiento de determinadas formas o solemnidades...”.

<sup>314</sup> ALBALADEJO, Manuel: *Derecho civil II... Op. cit.*, p. 103, nos explica que: “Cuando el acreedor en una obligación está a su vez obligado hacia su deudor, de forma que ambas obligaciones son la una contrapartida -causa- de la otra, se dice que existen obligaciones *reciprocas* (o *bilaterales*)...”; p. 421, “El negocio jurídico, según que sea celebrado por una o dos partes, es *unilateral* o *bilateral*. En este sentido, el contrato es siempre negocio jurídico bilateral (o plurilateral). Pero cuando se habla de contrato unilateral o bilateral, no se alude al número de partes que intervienen..., sino a que sea productor de obligaciones, bien a cargo de una sola de las partes..., bien a cargo de ambas, como contrapartida la de la una por la de la otra. Es decir, contrato bilateral es el que produce obligaciones *reciprocas* o *bilateral*.”.

adhesión, se establece un modelo de contrato redactado por una de las partes y está compuesto por unas “condiciones generales”.<sup>315</sup>

- Contiene una obligación de actividad. El prestador de servicios se compromete a realizar una prestación de actividad, la cual se establece en el contrato por las partes, pero a su vez el prestador del servicio no se compromete al logro u obtención de un resultado.<sup>316</sup> Considero que es una obligación de actividad porque el deudor (la empresa que presta el servicio) se obliga a desarrollar, a favor del acreedor (consumidor o deportista), una determinada conducta, encaminada a satisfacer el resultado esperado del acreedor. Sin embargo, debido al carácter subjetivo o incierto de dicho resultado, el deudor no garantiza su obtención (como puede ser la diversión), y cumple si actuó con la diligencia debida, aunque no se produzca la satisfacción del interés primario del acreedor.<sup>317</sup>

---

<sup>315</sup> Sobre las características de los contratos de adhesión y de las condiciones generales, véase en la parte general, capítulo II.1.3 sobre: “Las condiciones generales de la contratación en el sector turístico”; y en la parte especial, capítulo I.3.2 sobre “Características del contrato de viaje combinado.”.

<sup>316</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol. IV. Op. cit.*, p. 459, “La característica de los contratos de servicios es que en ellos se compromete una prestación del actividad, descrita según los intereses de las partes, pero sin comprometer el logro del resultado...”.

<sup>317</sup> En este sentido, CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio: *Op. cit.*, pp. 29-30, además esta obra es de gran importancia, para un mayor estudio sobre las diferencias y características de éste tipo de obligaciones. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo civil, Sección 1ª), núm. 364/2004, de 6 de mayo (westlaw RJ 2004/2099), explica la diferencia o distinción entre el contrato de obra y el de arrendamiento de servicios, en su F.D. 3., “La diferencia de esta locación y el arrendamiento de servicios radica, según el art. 1544 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ), en que en el primero, arrendamiento de obra, una de las partes se obliga a ejecutar una obra y en el de servicios a prestar un servicio. Se trata de la conocida distinción procedente del Derecho Romano entre la *locatio operis* y la *locatio operarum* y cuya diferencia radica en que en el primero se compromete el resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, mientras que en el último es la prestación del trabajo en sí misma y no el resultado que produce. Como ha recogido la doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el arrendamiento de obra la prestación del arrendador va dirigida a un resultado – sentencias de 19 de octubre de 1995 ( RJ 1995, 7524) y 13 de marzo ( RJ 1997, 1934) y 10 de mayo de 1997 ( RJ 1997, 3831) – cuyo objeto, no es tanto la actividad como el resultado, al paso que en el arrendamiento de servicios supone una actividad independiente del resultado – sentencia de 3 de noviembre de 1983 ( RJ 1983, 5953) –”; La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo civil), núm. 394/1994, de 25 de abril (westlaw, RJ 1994/3073), F.D. 3., “... a la hora de calificar el contrato que une al paciente con el médico a cuyos cuidados se somete, esta Sala, en doctrina constante, lo ha considerado como de arrendamiento de servicios y no de arrendamiento de obra, en razón a que, tanto la naturaleza mortal del hombre, como los niveles a que llega la ciencia médica -insuficientes para la curación de determinadas enfermedades-, y, finalmente, la circunstancia de que no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual, lo que hace que algunos de ellos, aun resultando eficaces para la generalidad de los pacientes, puedan no serlo para otros, todo ello impide reputar el aludido contrato como de arrendamiento de obra, que obliga a la consecución de un resultado -el de la curación del paciente- que, en muchos casos, ni puede, ni podrá nunca conseguirse, dada la aludida naturaleza mortal del hombre, entendiéndose que, por tratarse de un arrendamiento de servicios, a lo único que obliga al facultativo es a poner los medios para la deseable curación del paciente, atribuyéndole, por tanto, y cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una llamada obligación de medios.”.

Así por ejemplo, cuando se contrata la práctica de algún deporte no se garantiza la diversión, sino que el deudor realizará el comportamiento correcto para la práctica del deporte, sin saber si al final es divertido para el deportista o no, o por ejemplo en la práctica deportivas de riesgo, el deudor desarrollara todas las medidas necesarias enfocadas (incluidas las de seguridad) a satisfacer el interés primario del acreedor que es la práctica o realización del deporte de riesgo, pero no garantizará que durante el desarrollo de la actividad no se produzca un posible daño, y todo ello porque en los deportes de riesgo, se es más propenso a sufrir algún tipo de daño, lesión o incluso hasta la muerte, pero lo que el deudor (empresa de turismo activo o cualquier otra empresa) debe desarrollar, es la realización de la prestación con la diligencia correcta para tratar que no sufra un daño dentro de los límites de la actividad deportiva, sin garantizar que por la práctica del deporte nunca se va a sufrir algún daño .

#### **4.3. Elementos del contrato.**

Como el contrato de servicios deportivos carece de regulación específica del Derecho privado, se regulará por las reglas generales del contrato de arrendamiento de servicios y por las reglas generales de las obligaciones y contratos, con el propósito de cubrir las lagunas sobre este tipo de relación jurídica.

##### **4.3.1. El objeto del contrato.**

El objeto en el contrato de arrendamiento de servicios consiste en una prestación de hacer, que es la correcta realización de una actividad y sin compromiso acerca de la obtención de un resultado; es decir el contrato contiene una obligación de actividad que sería el realizar una actividad deportiva o de riesgo.<sup>318</sup>

---

<sup>318</sup> Así, ÁLVAREZ LATA, Natalia / BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María / BUSTO LAGO, José Manuel / y otros: *Contrato de prestación de servicios y realización de obras*, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (Dir.): *Tratado de Contratos, Tomo III*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 2887, "... El objeto del contrato de prestaciones de servicios consiste en una prestación de hacer -en un <<facere>>- al que se obligue el arrendador y que viene delimitada por la voluntad de las partes con los límites genéricos que resulten de aplicación al objeto de todo contrato de conformidad con las previsiones de los arts. 1271 a 1273 del CC, de modo que las prestación de hacer habrá de ser posible, lícita y determinada."; VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen: *Los contratos de servicios*, La Ley, Madrid, 2009, p. 119, "... la relación jurídica entre las partes se nominara contrato de servicios cuando la prestación principal debida por el prestador consista en una actividad útil conforme a lo pactado o lo deducido de la naturaleza de la obligación asumida, lo que pueda conllevar la consecuencia de un determinado resultado como buen fin de la operación, sobre todo si el consentimiento de las partes ha recaído expresamente en la representación de un resultado, en consecuencia propia de la actividad debida; en otras circunstancias, el prestador no debe un resultado cuya consecuencia no puede garantizar..."; además la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 1179/1994, de 24 de diciembre (westlaw RJ 1994\9779), F.D.

Generalmente los contratos de servicios que se celebran son bilaterales. En la que una de las partes (deudor) se obliga a la realización de una actividad o trabajo en servicio o interés de la otra parte, por lo que la prestación del “servicio” es el objeto del contrato y de la obligación de hacer que asume el deudor.<sup>319</sup>

Pero no solamente existe una obligación de hacer como objeto en el contrato, sino que el acreedor tiene que pagar una suma de dinero por la prestación o servicio que recibe, es decir, su obligación va consistir en un dar y no en un hacer o *facere*, por lo que la contraprestación o el pago por el “servicio” es también objeto en el contrato de arrendamiento de servicios y el acreedor lo asume como una obligación de dar.<sup>320</sup>

En este sentido, el servicio que se va a prestar es la realización de una actividad deportiva determinada por las partes conforme a sus declaraciones de voluntad y recordando que el objeto debe ser lícito, posible y determinado.<sup>321</sup>

---

3., en los casos de enseñanza se ha considerado como un contrato de prestación de servicios, “... tratándose de **servicios de enseñanza de Corte y Confección**, se configura un negocio consensual, oneroso, bilateral y conmutativo, en el que **el objeto viene determinado por la específica actividad de enseñanza** que se presta por una de las partes a otra, a la que le asiste intencionalidad de alcanzarla para su progreso intelectual, profesional e incluso enriquecimiento humano de su caudal de saber y conocer. Por consecuencia, **no se promete ni se contrata un efectivo resultado, ya que éste depende de la disponibilidad del alumno para conseguirlo**, con la captación útil y aprovechamiento positivo de las enseñanzas que se le imparten, por lo que el negocio se concreta a llevar a cabo la actividad pactada, aunque la misma se oriente directamente a producir el resultado que se espera de la prestación docente que se recibe y por ello exige la necesaria disponibilidad colaboradora del alumnado. Consta probado y **no se discute que la recurrente recibió las enseñanzas que había convenido y también resultó averado que, no obstante ello, no alcanzó el nivel necesario para poder acceder al diploma privado...**”.

<sup>319</sup> VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen: *El servicio como objeto de tráfico jurídico*, La Ley, Madrid, 2009, p. 293-295, explica sobre los servicios como objeto de la prestación de hacer que: “... el objeto de la prestación en las obligaciones de puro hacer, salvedad hecha de aquellas que consisten en la emisión de una declaración de voluntad, sería el servicio útil acaecido con la consecuencia de la actividad en qué consiste la prestación... En las obligaciones de puro, el objeto de la obligación es la prestación, y el objeto de la prestación es el servicio útil que satisface el interés del acreedor... en las obligaciones de puro hacer, en las cuales alcanza un concreto resultado no está in *obligatione*, el deudor cumple desplegando la actividad debida, dirigida a la consecuencia e un resultado, que no obstante no le es exigible para estimar cumplida la obligación.... Cuando el deudor desarrolla la prestación debida, esa actividad en sí misma considerada, representa el servicio como objeto de la prestación.”.

<sup>320</sup> Así, VAQUERO PINTO, María José: *El arrendamiento de servicios, propuesta de modelo general para la contratación de servicios*, Comares, Granada, 2005, pp. 32-43.

<sup>321</sup> En este sentido, DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol. IV. Op. cit.*, p. 462. “El servicio queda determinado por las referencias que al mismo existan en las declaraciones de voluntad de las partes, que, en lo necesario, habrán de quedar integradas por las referencias a los usos de los negocios. Así por ejemplo, si la actividad contratada es la llevanza de la contabilidad, ello supondría la aplicación de las reglas y principios admitidos para tal ciencia.”.

- Conforme a lo establecido en el Código civil, la licitud de la prestación de los servicios debe ser conforme a la ley, la moral y el orden público.<sup>322</sup> En este sentido, con carácter general la prestación de actividades deportivas son correctamente lícitas, salvo que por excepción existan deportes ilícitos como puede ser la pelea de perros o gallos, o la práctica de matar algún animal protegido por ley (por ejemplo focas) y se vea como una actividad deportiva, o el rally Cabo a Cabo.<sup>323</sup>
- Que el objeto sea posible. Se refiere a que se pueda ejecutar conforme tanto a los aspectos empíricos como a sus aspectos jurídicos. La imposibilidad del objeto extingue la obligación cuando no es imputable al deudor, así el artículo

<sup>322</sup> Conforme al artículo 1.255 del Código civil: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.”, DÍEZ-PICAZO, Luis: “Comentario al artículo 1.255 del Código civil”, en *Comentario de Código civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 430-431, establece que: “La última parte del artículo dibuja, aunque con la falta de fijeza que siempre producen las cláusulas generales, los límites de la libertad contractual: la ley, la moral y el orden público. La ley aludida en el art. 1.255 es la ley imperativa, es decir, aquella que se antepone a los negocios jurídicos de los particulares y que estos no pueden por tanto evitar... Establece el art. 1.255 un límite moral a la autonomía privada. Por “moral” en el sentido de este artículo debe entenderse el conjunto de las convicciones de ética social imperantes, en un determinado momento histórico, con carácter general en la comunidad jurídica... Al establecerse la moral como límite de la autonomía contractual, quedan impedidos los contratos inmorales. La inmoralidad del contrato afecta a la causa del mismo y lo hace ineficaz o nulo... El último de los límites que el art. 1.255 coloca a la autonomía o libertad contractual es el de “orden público”... Lo que el Código llama orden público es la organización general de la comunidad o sus principios fundamentales y rectores.... Pertenecen en la actualidad al orden público del art. 1.255 las materias estrictamente situadas dentro del orden constitucional (p. ej., la dignidad de la persona, sus libertades básicas, su derecho a la igualdad y a la no discriminación) que no pueden quedar impedidas o menoscabadas por los pactos o contratos de los particulares, aunque en ellos intervenga el mismo sujeto afectado.”. Además, el artículo 1.271.3 del Código civil dice: “Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.”, a ello GETE-ALONSO Y CALERA, M.<sup>a</sup> Del Carmen: “Comentario al artículo 1.271 del Código civil”, en *Comentario del Código civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 474., comenta: “La licitud, tiene diferente formulación según se trate de cosas (pár. I) o de servicios (pár. II). Genéricamente la licitud se refiere a su adecuación al tráfico jurídico de conformidad con el ordenamiento jurídico en el que el contrato se realiza y debe ejecutarse... Servicios. La condición se predica de su no contrariedad a la ley -*legalidad*- o a las buenas costumbres -*moralidad*-. Aunque el precepto hable sólo de servicios pareciendo restringirlo sólo a aquellos casos en los que el objeto sea una actividad de signo positivo, ha de extenderse también a la conducta negativa (cuando se tiene la obligación, o el deber jurídico de actuar en un sentido determinado, el compromiso de abstención, puede llegar a calificarse de ilícito). Los ejemplos clásicos de servicios ilícitos con el del arrendamiento de servicios hecho por toda la vida...”.

<sup>323</sup> <http://motor.terra.es/motor/articulo/html/mot3795.htm>, “La policía sueca quiere impedir o dificultar la celebración del próximo Rally Cabo a Cabo. El motivo es simple: este rally es ilegal. El objetivo de esta prueba es alcanzar el récord de velocidad entre el norte y el sur de Europa. El recorrido es de 5.000 kilómetros, tiene su salida prevista en Cabo Norte, en Noruega, y la llegada, en la localidad gaditana de Tarifa (España). El próximo 27 de septiembre, si la policía no lo impide, dará comienzo esta prueba. El jefe de Policía de Norrbotten, una localidad sueca, califica esta prueba como “absurda, puesto que pone en juego la vida de otros automovilistas” e insiste en que “es tarea de la Policía impedir, o al menos, dificultar este rally...”.



1.184 del Código civil, en el cual las obligaciones de hacer el deudor queda liberado cuando la prestación resulte legal o físicamente posible.<sup>324</sup>

Cuando hablamos de la determinación de la prestación en el contrato, nos referimos que sea un objeto cierto para que sea materia del contrato, así el artículo 1.261.2 del Código civil.<sup>325</sup> Los servicios que se van a prestar deben ser identificados por ambas partes en el contrato, para qué así se determine qué servicio en concreto se va a realizar, en este caso uno de carácter deportivo arriesgado.

#### **4.3.2. La causa del contrato.**

Como se ha mencionado reiteradamente en el trabajo, la causa es un requisito esencial para la existencia de un contrato (así, el artículo 1.261.3 del Código civil). Al decir anteriormente que el contrato de prestación de servicios deportivos es oneroso, la causa es: “para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte:...” (Artículo 1.274 del Código civil).<sup>326</sup>

---

<sup>324</sup> BADOSA COLL, Ferran: “Comentario al artículo 1.184 del Código Civil”, en *Comentario del Código civil. Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 259 y 260, opina: “... Con el -quedará liberado el deudor- se viene a indicar además lo que es más específico de esta causa extintiva; que el deudor se libera “queda...” con independencia de cualquier actuación suya o ajena a diferencia de lo que ocurre en el pago... La “imposibilidad” del art. 1.184 es tanto física como jurídica; el carácter absoluto de la imposibilidad física supone que la conducta lo es con independencia de quien sea su autor y, por tanto, excluye el caso de imposibilidad subjetiva del deudor unido a no encontrar persona dispuesta a realizarla por él... La segunda es la diferencia total de contexto respecto de los arts. 1.182 y 1.183. Ha desaparecido toda mención de las circunstancias de la imposibilidad; la alternativa [culpa-caso fortuito] y las referencias al *post moram* y a la doble obligación; por el contrario, se pasa directamente de la imposibilidad a la eficacia extintiva...”.

<sup>325</sup> MORALES MORENO, Antonio Manuel: “Comentario al artículo 1.261 del Código civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 442-446, menciona: “El consentimiento de los contratantes debe producirse en relación con los dos elementos esenciales del contrato, al objeto y la causa (art. 1.261.1.). Los problemas del consentimiento contractual provienen, bien de la falta de voluntad, bien de la falta de acuerdo (consentimiento) de los contratantes, acerca del objeto o la causa... El art. 1.261 exige, para que haya contrato, además de consentimiento (sobre el objeto y la causa) que en el plano de la realidad exista objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. El objeto y la causa aparecen contemplados en el plano del consentimiento y en el plano de la realidad...”.

<sup>326</sup> Independientemente de la clase de contrato que sea, es necesario la existencia de una causa, y además, debe ser lícita y veraz. En consecuencia si no hay causa, o es falsa o ilícita, el contrato en cuestión sería nulo, en este sentido lo explica AMORÓS GUARDIOLA, Manuel: “Comentario al artículo 1.275 del Código civil”, en *Comentario del Código civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 485, señalando que: “... se recoge dentro del supuesto de hecho de este art. 1.275 dos figuras distintas pero próximas: la inexistencia de la causa y la licitud de la causa. La referencia legal se hace a los contratos en que, o no hay causa, o la causa que existe se califica de ilícita. En ambos casos la consecuencia jurídica es la misma: la ineficacia total de los contratos que adolece a esas irregularidades o vicios causales. La consecuencia de unos de esos defectos de la causa determina la nulidad del contrato...”.

Por la ausencia de una regulación específica sobre el contrato de prestación de servicios deportivos, se entiende en un principio, que la causa de este contrato se origina de lo regulado en el artículo 1.544 del Código civil entendiendo que: “una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”, estableciendo así una causa objetiva genérica, de aplicación al amplio abanico de servicios existentes en el tráfico jurídico y comercial.

Cuando el Código civil regula el arrendamiento de servicios lo hace de una forma general, de esta forma establece una causa objetiva en el contrato,<sup>327</sup> la cual consiste en que una de las partes se compromete a prestar un servicio a la otra por un precio cierto, por lo que en cierta manera los motivos o razones personales pueden llegar a tener una importante relevancia en el negocio jurídico.

Aún cuando los motivos personales o causas subjetivas originen que el acreedor celebre el contrato, en un principio no deben influenciar en la causa de carácter objetiva, porque la normativa prevé genéricamente la causa en el contrato de prestación de servicios. Sin embargo, para que los motivos, fines o causa subjetiva tengan relevancia jurídica dentro del contrato, se deben exteriorizar, reconocer e incorporar las razones o causas a través de la declaración de voluntad en el propio contrato.<sup>328</sup>

---

<sup>327</sup> La relevancia de la teoría objetiva es la función económica-social que cada contrato tenga, en correlación con el ordenamiento legal para una protección jurídica, en este sentido DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Volumen I, Introducción, Teoría del contrato*, Thomson Civitas, 6ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 267, señala que: “... La <<razón del negocio>> es su <<función económico-social>>. El negocio, como acto de ejercicio de la autonomía privada, es ante todo un fenómeno social. Lo que hay que buscar entonces es la función típica de este fenómeno social que es lo que el Derecho valora y tutela hasta el punto de elevarlo a la categoría de fenómeno jurídico... La causa, razón o justificación objetiva del negocio se encuentra en su función. Quien promete, dispone, renuncia o acepta, dice BETTI, no tiene pura y simplemente a obligarse, despojarse de un bien, transmitirlo o adquirirlo, sin otro fin, por el puro placer de realizar un acto que es fin en sí mismo, sino que mira siempre a alcanzar una de las finalidades prácticas típicas que rigen la circulación de los bienes y la prestación de los servicios en la vida de relación...”.

<sup>328</sup> En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo civil, Sección 1ª), núm. 426/2009, de 19 de junio (westlaw RJ 2009\449), F.D. 4., “El artículo 1274 del Código civil, cuya directa inspiración en la doctrina de POTHIER ya fue reconocida por esta Sala en decisiones muy antiguas, ha sufrido una lectura jurisprudencial en la que se ha acentuado el sentido objetivo, más coherente con las tesis doctrinales imperantes que presentan la causa como la función económico-social del negocio. Así, las Sentencias de 8 de julio de 1983 ( RJ 1983, 4117 ) , 4 de mayo de 1987, 25 de febrero de 1995 ( RJ 1995, 1643 ) , 24 de enero de 1992, 8 de febrero de 1996, 17 de abril de 1997 o 17 de diciembre de 2004 ( RJ 2005, 1813 ) , entre muchas otras, consideran que la causa es la razón objetiva, precisa y tangencial a la formación del contrato y se define e identifica por la función económico-social que justifica que un determinado negocio jurídico reciba la tutela y protección del ordenamiento jurídico. En los contratos sinalagmáticos, la causa está constituida por el dato objetivo del intercambio de las prestaciones (SSTS 8 de julio de 1974, 8 de julio de 1983, 17 de enero de 1985 ( RJ 1985, 180 ) , 11 de abril de 1994, 21 de julio de 2003 ( RJ 2003, 5850 ) , etc.). Así entendida, la causa se ha de distinguir de los móviles subjetivos, cuya relevancia se produce cuando sean reconocidos y

El texto normativo habla de una prestación o arrendamiento de un servicio, por lo que no especifica qué tipo de servicio, sino que hace referencia a servicios de carácter general, por lo que es muy importante señalar qué tipo de servicio se desea contratar. Es ahí, donde entra en juego el motivo o la causa subjetiva de quienes desean contratar un servicio, y en este caso el servicio es de carácter deportivo.<sup>329</sup> La prestación de un servicio deportivo como causa, es totalmente válida, ya que como elemento de existencia es lícito, posible y veraz. Todo lo contrario sería si se quisiera (por ejemplo), contratar los servicios de un asesino a sueldo, ya que estaríamos hablando de un delito tipificado y penado por la ley, además de que el objeto y causa del supuesto contrato sería completamente ilícito.

En este sentido, el deportista o consumidor busca la práctica de algún deporte, por medio de una prestación de servicios, es decir, desea aprender una nueva modalidad deportiva, desea usar instalaciones deportivas, ser partícipe de una actividad deportiva de riesgo, etc. Este tipo de motivos personales, llegan a ser considerados como causa dentro del contrato cuando se incorpora y se tiene conocimiento por las partes integrantes del negocio jurídico, es por ello que mucha de las veces las causas subjetivas tienen una gran relevancia<sup>330</sup> (por ejemplo, se contrata la práctica deportiva

---

**exteriorizados por ambas partes contratantes** (SSTS 4 de mayo de 1987, 30 de septiembre y 21 de noviembre de 1988, 31 de enero de 1991, 8 de febrero de 1996, 6 de junio de 2002 ( RJ 2002, 4874) , etc.). Esta concepción no elude el peso de los factores subjetivos, pues cabe que el móvil o propósito que guía a las partes tenga peso en la determinación de la voluntad negocial, hasta el punto de que se configure en el caso un "propósito empírico común de las partes" que encarne, en ese supuesto, el elemento causal del negocio. Y así es posible que el móvil subjetivo, que en principio es una realidad extranegocial, salvo que las partes lo incorporen al contrato como cláusula o como condición ( SSTS 19 de noviembre de 1990 ( RJ 1990, 8957) , 4 de enero de 1991, 28 de abril de 1993, 11 de abril de 1994, 1 de abril de 1998 , etc.), se incorpore a la causa ("móvil casualizado") y tenga trascendencia como tal elemento del contrato ( SSTS 11 de julio de 1984 ( RJ 1984, 3939) , 21 de noviembre de 1988, 8 de abril de 1992, 1 de abril de 1998, 21 de marzo y 21 de julio de 2003 , etc.). Pero para llegar acausalizar una finalidad concreta será menester que el propósito de que se trate venga perseguido por ambas partes y trascienda el acto jurídico como elemento determinante de la declaración de voluntad en concepto de móvil impulsivo (SSTS 16 de febrero de 1935, 20 de junio de 1955, 17 de marzo de 1956, 30 de enero de 1960, 23 de noviembre de 1961, 27 de febrero de 1964, 2 de octubre de 1972, 8 de julio de 1977, 1 de abril de 1982, 8 de julio y 17 de noviembre de 1983 ( RJ 1983, 6118) , 30 de diciembre de 1985, 17 de febrero de 1989, 4 de enero de 1991, 11 de abril de 1994, 6 de junio de 2002, 21 de julio de 2003 ( RJ 2003, 5850) , etc.).”.

<sup>329</sup> AMORÓS GUARDIOLA, Manuel: “Comentario al artículo 1.274 del Código civil”, *Op. cit.*, p. 480, explica la teoría subjetivista de la causa: “La causa equivale al fin que persigue una persona cuando se obliga. En los contratos con obligaciones recíprocas ese fin se identifica con la obligación de la otra parte. Finalidad subjetiva de las partes que corresponde al fin abstracto y típico en cada contrato en particular. Ese fin genérico, que es siempre el mismo en cada contrato, es independiente de los móviles personales o concretos que cada parte persigue a través de la celebración del contrato en cuestión...”.

<sup>330</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: *Sistema de Derecho civil, Vol. II.*, Tecnos, 9ª Ed., 5ª Reim., Madrid, 2005, p.46, “para que tenga relevancia el propósito ha de ser común a las partes del negocio o, por lo menos, si una de ellas lo ha tenido, ha sido reconocido y no rechazado por la otra u otras

de esquí en nieve y en el lugar no hubiese la suficiente nieve para poder esquiar, o bien se contrate el uso de una cancha de fútbol para jugar y que esta se encuentre en malas condiciones y no se pueda jugar correctamente, o se contrata el aprendizaje de montar a caballo y ya no existen caballos por lo que te quieren enseñar a montar en burro, etc.).

#### 4.3.3. La forma del contrato.

No existe un precepto que exija alguna forma del contrato, porque conforme a lo dispuesto en los artículos 1.278 y concordantes del Código civil, prevalece el principio de libertad de forma, por lo que las partes involucradas en el negocio jurídico pueden acordar una determinada forma.<sup>331</sup> Sin embargo, sería recomendable que el deportista

---

y acceden a su celebración para alcanzarlo. Cuando no exista un propósito específico, la causa se encuentra simplemente en el propósito de alcanzar la finalidad genérica típica del negocio...”. Sobre la causa subjetiva que se integra al negocio jurídico, que es conocido por las partes y a su vez elevado a presupuesto determinante del pacto, existe jurisprudencia como la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 190/2011, de 17 de marzo (westlaw RJ 2011\2881) F.D. 4., menciona: “Como declara la sentencia de esta Sala nº 852/2009, de 21 diciembre ( RJ 2010, 299) , salvo los casos excepcionales en que el móvil se integra en la función objetiva del negocio jurídico, caso del móvil causalizado, el de carácter SUBJETIVO es intrascendente para el derecho; así lo dijo expresamente la sentencia de 1 de abril de 1998 ( RJ 1998, 1912) al afirmar que el móvil SUBJETIVO es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo incorporen al negocio como una cláusula o como una condición, como reflejan las: sentencias de 19 de noviembre de 1990 ( RJ 1990, 8956) , 4 de enero de 1991 ( RJ 1991, 106) , 28 de abril de 1993 ( RJ 1993, 2952) y 11 de abril de 1994 ( RJ 1994, 2787) , entre otras.”; también la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 306/1998, de 1 de abril (westlaw RJ 1998\1912) F.D. 3. que dice: “**A la vista del artículo 1274 del Código Civil se ha mantenido reiteradamente que la CAUSA, como elemento esencial del negocio jurídico y, por ende, del contrato, es un concepto objetivo** : así, Sentencias de 31 enero 1991 ( RJ 1991\522 ), 24 enero 1992 ( RJ 1992\204 ) y 8 febrero 1996 ( RJ 1996\952 ). **El móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo incorporen al negocio como una cláusula o como una condición** : Sentencias de 19 noviembre 1990 ( RJ 1990\8956 ), 4 enero 1991 ( RJ 1991\106 ), 28 abril 1993 ( RJ 1993\2952 ) y 11 abril 1994 ( RJ 1994\2787 ). **Sin embargo, puede darse el caso de que el móvil se incorpore a la CAUSA -es el móvil causalizado- y tenga trascendencia como tal elemento del negocio jurídico** : así, Sentencias de 11 julio 1984 ( RJ 1984\3939 ), 21 noviembre 1988 ( RJ 1988\9038 ) y 8 abril 1992 ( RJ 1992\3023 ); **como elemento, afecta a la existencia** (momento de la perfección) pero no al **desarrollo o al cumplimiento del contrato** .

<sup>331</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis: “Comentario al artículo 1.258 del Código Civil”, *Op. cit.*, p. 436, señala: “... Es verdad que el art. 1.278 establece un principio de libertad de forma y que el 1.279 considera las exigencias legales sobre el otorgamiento de escrituras o de otras formas especiales, simple condición para hacer efectivas las obligaciones propias del contrato. Sin embargo no puede negarse que existen contratos que son formales por disposición de la ley, en los cuales la perfección sólo se produce en el momento en que la forma se llena, y que existen asimismo contratos que se perfeccionan documentalmente por voluntad de las partes...”; LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel: “Comentario al artículo 1.278 del Código Civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 503, establece: “...está firmemente asentado en las decisiones judiciales y en la opinión común de los autores, el denominado [principio espiritualista] o de no necesidad de la forma como elemento esencial del contrato (por todos, DE CASTRO, *Negocio*, p.211, y entre infinidad de sentencias, STS 9-XII-77, 10-IV-78, 24-V-80 y 30-VI-82, que aunque referidas al entero sistema de los arts. 1.278, 1.279, 1.280 CC reafirman posteriormente como premisa el principio de libertad de forma contenida en el primero de los preceptos, que se entiende reflejo de los arts. 1.254 y 1.258 CC.)....”.

o turista que celebre este tipo de contratos, exija que se realice por escrito, y más aun cuando se formalice entre una empresa dedicada a las actividades deportivas y algún deportista aficionado (considerado como consumidor y usuario), para que así se otorgue una mayor protección de sus derechos.

#### **4.4. Elementos personales.**

Como se ha explicado en párrafos anteriores el contrato de prestación de servicios deportivos generalmente es plurilateral. Sin embargo, en una primera idea encontramos a dos sujetos o partes: Por un lado, el que presta el servicio (arrendador); y en segundo lugar, la persona en cuyo favor se van prestar los servicios (arrendatario).<sup>332</sup>

- El arrendador o el prestador del servicio. Es la persona física o jurídica que presta de manera directa o por medio de sus auxiliares un servicio estipulado en el contrato, en este caso “servicios deportivos”. El prestador o arrendador de servicios, se vincula únicamente en virtud de una obligación de medios, con independencia del resultado, lo que determina consecuencias relevantes en el marco de la responsabilidad por incumplimiento (se verá más adelante). En el caso de prestaciones deportivas y de riesgo, regularmente el prestador llega a ser una empresa (por ejemplo, las empresas de turismo activo), las cuales deben de cumplir con ciertos requisitos legales para su funcionamiento en el comercio o tráfico jurídico, para que así promuevan y ejecuten actividades deportivas o de riesgo en un entorno natural.<sup>333</sup>

---

<sup>332</sup> El artículo 1.546 del Código civil, establece a los sujetos en el contrato de obra, así como en el de servicios, “arrendador” y “arrendatario”; DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, Vol. IV., Op. cit., p. 460, “Por lo que se refiere a los sujetos son, como en todas las relaciones contractuales, básicamente dos, el prestador de los servicios y aquel en cuyo favor los servicios han de prestarse...”; VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen: *Los contratos...*, Op. cit., pp. 71-72, explica la denominación de las partes en el contrato de prestación de servicios, señalando que: “... el arrendador será denominado en función de la concreta prestación que lleve a cabo o la alusiva a la propia de su oficio o profesión, o bien en relación a su organización como << empresario >> o << profesional >>, o bien la general del << prestador >> del servicio; y el arrendatario será el << cliente >>, o, sin nominar, con la expresión perifrástica << quien recibe el servicio >> por << destinatario >>.”.

<sup>333</sup> Es importante señalar que también instituciones públicas, como son los polideportivos de las comunidades, pueden ofrecer servicios de actividades deportivas, por lo que su regulación y la forma de contratación corresponde a las administraciones públicas, por lo tanto sería materia de Derecho público, y a lo que esta investigación corresponde, es la contratación con empresas privadas. Sin embargo, la naturaleza jurídica del contrato de servicios deportivos que celebre la administración pública tendrán como base también el contrato de arrendamiento de servicios previsto en esta investigación.

- El arrendatario. Es la persona física o jurídica que contrata el servicio, en este caso el cliente puede ser un deportista o consumidor. Cuando nos referimos a que puede ser una persona jurídica, es la posibilidad de que una empresa (por ejemplo, una agencia de viajes) contrate la prestación de servicios deportivos, para a su vez venderlos u ofrecerlos como elemento integrador de un viaje combinado.

La persona que va a realizar la actividad deportiva se le considera de manera general como deportista, el cual puede ser profesional o no profesional. Para la presente investigación, cuando hablamos de deportista nos referimos a un deportista no profesional, es decir, una persona normal que no es experta y que desea practicar deporte. Además, a esta clase de deportista se le debe considerar como un consumidor o usuario, por que el contrato de servicio deportivo va dirigido u ofertado de manera específica o especial a los consumidores y usuarios, por lo tanto, tienen la aplicación del TRLGDCU para la protección de sus derechos.

En materia de capacidad de las partes, se regirá también conforme a las reglas generales de la contratación. En el caso de que sea un menor de edad que desea contratar la prestación de algún servicio deportivo, es necesario el consentimiento de su representante legal, para que así, el menor quede obligado frente al prestador del servicio.<sup>334</sup>

Es importante señalar que en algunas ocasiones el servicio deportivos lo puede prestar una persona física, la cual se compromete de manera directa a la realización de la actividad deportiva, así sucede cuando se enseña una nueva modalidad deportiva (no se debe olvidar que el profesor debe contar con las acreditaciones necesarias para poder enseñar la actividad deportiva).<sup>335</sup> La razón por lo que se prestan éste tipo de servicios deportivos se debe a las habilidades o experiencia del deudor o arrendador y se comprende que la obligación debe ser cumplida personalmente por el obligado, dando como resultado un contrato *intuitu personae*.

---

<sup>334</sup> Así, el artículo 162 del Código civil señala que: “los padres que ostentan la patria potestad tiene la representación legal de sus hijos menores de edad...”, y en el último párrafo establece que “Para celebrar contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales se requiere el previo consentimiento de éste si tuviera suficiente juicio...”.

<sup>335</sup> Así, el Decreto 20/2002, de 29 de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo de Andalucía, en su artículo 27.2 menciona: “Para poder desempeñar con solvencia dichas funciones, las empresas que organicen actividades de turismo activo pondrán al frente de estos a monitores/as, mayores de edad, que posean alguna de las titulaciones establecidas en el Anexo VI, siendo responsables de su formación permanente. En todo caso los monitores/as deberán estar en posesión del título de socorrista o de primeros auxilios.”.

Ahora bien, el deudor o arrendador de servicios se puede valer de otras personas, como es el caso de los auxiliares o colaboradores para así cumplir con la obligación principal, que es la realización de la actividad deportiva. Esta situación, se presenta cuando se contrata un viaje combinado con actividades deportivas y de riesgo, ya que la agencia de viajes no presta directamente la actividad, sino se vale de uno o varias terceras personas.<sup>336</sup>

#### **4.5. Los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.**

##### **A) Derechos y obligaciones del arrendador.**

Obligación principal del arrendador. Prestar el servicio deportivo conforme a lo pactado por las partes y establecido como objeto del contrato, basado en las obligaciones de hacer, con la aplicación de las normas y principios que regulan esta clase de obligaciones, sin olvidar las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de ciertas actividades deportivas.<sup>337</sup>

Cuando la prestación del servicio no sea de carácter personal, el prestador del servicio puede utilizar colaboradores o auxiliares para el cumplimiento de su obligación, los cuales actuarán bajo la directa supervisión del arrendador asumiendo éste la responsabilidad civil derivada del incumplimiento o del defectuoso cumplimiento de la prestación deportiva.<sup>338</sup>

El prestador del servicio está obligado a ejecutar la prestación de acuerdo a las instrucciones que expresamente le haya dado el arrendatario en el momento de celebrarse el contrato, siempre que éstas no supongan una injerencia o intromisión en la actuación profesional del prestador del servicio deportivo.<sup>339</sup>

---

<sup>336</sup> La introducción de un tercero en el cumplimiento de la obligación por el deudor le hace responsable de su actuación, así lo expone de manera muy precisa VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen: *Los contratos...*, *Op. cit.*, pp. 121-146.

<sup>337</sup> ÁLVAREZ LATA, Natalia / BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María / BUSTO LAGO, José Manuel / y otros: *Contrato de prestación de servicios...*, *Op. cit.*, p. 2890.

<sup>338</sup> En este sentido, *Ibid.*, p. 2890, por lo que comentan que: “El carácter personal de la prestación a que se obliga el arrendador no excluye, cuando no se trate de obligaciones personalísimas, la utilización de colaboradores o auxiliares en el cumplimiento, quienes actuarán bajo la directa supervisión del arrendador, asumiendo éste la responsabilidad civil derivada del incumplimiento o del defectuoso cumplimiento de la prestación frente al arrendatario.”.

<sup>339</sup> *Ibid.*, p. 2891.

Existe la obligación de información por parte del prestador del servicio deportivo. Con ello se evita que en la fase precontractual el arrendatario de los servicios (especialmente cuando sea un consumidor o usuario, en este caso un deportista) se obligue y preste su consentimiento a la ejecución de un servicio que no es conforme a lo que desea, ya sea por las características de la prestación o de la persona que va a ejecutarla, o en su caso por el precio.<sup>340</sup> Esta obligación de información, tanto en la fase previa a la realización de la prestación del servicio, como en la fase de ejecución del mismo, es de gran relevancia en el caso de actividades deportivas y más aun de riesgo.

El Derecho principal del arrendador es recibir el abono del precio por la prestación del servicio deportivo, conforme a los términos pactados en el contrato. Además, ante un posible desistimiento unilateral por parte del arrendatario, el arrendador tendrá derecho a una indemnización por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

#### B) Derechos y obligaciones del arrendatario.

La obligación principal del arrendatario es pagar la contraprestación por el servicio deportivo, por lo que normalmente se establece un precio cierto y generalmente en dinero, conforme al artículo 1.544 del Código civil.<sup>341</sup> El lugar en donde se debe realizar el pago por la prestación del servicio deportivo es en donde los servicios sean o fuesen prestados, sin perjuicio de que en ocasiones, se pueda establecer (mediante la declaración de voluntad) que el pago se debe abonar en el domicilio del deudor. En la situación de que no se establezca un plazo para el pago del precio del servicio deportivo prestado, el arrendador podrá exigir el pago desde el momento en que se realice la prestación contratada.<sup>342</sup>

---

<sup>340</sup> *Ibid.*, p. 2893, además, es de gran importancia en la fase de ejecución del contrato ya que: “En la fase de ejecución del contrato, la obligación de información hace que el arrendatario o comitente adecue su comportamiento a cánones de colaboración o de cooperación tendentes a que la prestación del servicio se desarrolle por los cauces esperados y no se produzcan efectos o consecuencias no deseados, siempre que la conducta del arrendatario no resulte irrelevante en orden al buen de la ejecución de los servicios y especialmente en aquellos casos en los que la prestación incide sobre su persona, como acontece, v.gr., en el caso de los servicios médicos.”

<sup>341</sup> En este sentido, DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, Vol. IV. *Op. cit.*, p. 463, “Su importe pecuniario, se determina por el pacto de las partes y a falta de pacto expreso, por el uso de los negocios y por el valor común o valor de mercado. Cabe, por supuesto, el resto de las posibilidades de determinación de una prestación contractual, generalmente medida en dinero.”

<sup>342</sup> Conforme al artículo 1.113.1 del Código Civil, que dice: “Será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren...”, a esto ALVAREZ VIGARAY, Rafael: “Comentario del artículo 1.113 de Código Civil”, en



En la contratación de prestación de servicios deportivos o de riesgo, el arrendatario tiene que cumplir una serie de obligaciones accesorias de comportamiento adecuado, así se podrá obtener una correcta ejecución del servicio. Ante un posible incumplimiento a este tipo de obligaciones accesorias, se puede llegar a obstaculizar la correcta actuación del arrendador al momento de prestar el servicio deportivo; por ejemplo que el deportista no respete la condiciones de seguridad para el desarrollo de la actividad deportiva contratada. Con el cumplimiento de estas obligaciones accesorias, el arrendador podrá prestar en condiciones el servicio deportivo, que es objeto del contrato.<sup>343</sup>

El incumplimiento de algún deber accesorio por parte del acreedor de los servicios deportivos, habilita al arrendador la facultad de resolución contractual, siempre y cuando se determine la imposibilidad en el cumplimiento del contrato por parte del prestador del servicio deportivo, sin olvidar las consecuencias indemnizatorias vinculadas a la resolución del contrato, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.124.2 del Código civil.<sup>344</sup>

El derecho principal del arrendatario o acreedor es recibir la prestación deportiva conforme a lo pactado o establecido en el contrato, por lo que ante algún incumplimiento por parte del prestador del servicio deportivo, el arrendatario tendrá derecho a reclamar indemnización por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones principales y accesorias del contrato.

---

*Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 76, señala: “...Inmediata exigibilidad de las obligaciones puras. El legislador señala como característica de las obligaciones puras frente a las condicionales y a termino la exigibilidad inmediata, lo cual no puede entenderse con todo rigor que conduzca a interpretaciones absurdas y a exigencias de imposible cumplimiento instantáneo...”.

<sup>343</sup> Así, ÁLVAREZ LATA, Natalia / BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María / BUSTO LAGO, José Manuel / y otros: *Contrato de prestación de servicios...*, *Op. cit.*, p. 2904.

<sup>344</sup> En este sentido, DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: *Sistema de Derecho civil, Vol. II., Op. cit.*, p. 397.; ALVAREZ VIGARAY, Rafael: “Comentario al artículo 1.124 del Código Civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 97, señala: “... Existe doctrina jurisprudencial de que no procede la resolución por incumplimiento cuando se trata de la inejecución de obligaciones accesorias o secundarias ha sido reiterada, entre otras, por las SS de 55-V-53 y 10-III-74; no obstante, ALVAREZ VIGARAY, *Resolución*, p. 146, afirma que el incumplimiento de obligaciones accesorias unas veces puede dar lugar a la resolución del contrato y en la mayoría de las ocasiones solamente procederá la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan causado.. Dicho de otro modo, hay resolución si hay imprudencia unida a imposibilidad posterior absoluta y definitiva de las prestación o imposibilidad de alcanzar el fin del contrato...”.

#### **4.6. La extinción del contrato. En especial, la resolución de la relación contractual por la existencia de un incumplimiento grave por cualquiera de las dos partes.**

Las formas de extinción del contrato de servicios deportivos, son las generales a las de todo contrato y en especial a las establecidas en el apartado de los arrendamientos de servicios del Código civil.

En primer lugar debemos establecer que el arrendamiento de servicios hecho por toda la vida es nulo.<sup>345</sup> En el ámbito de la contratación de servicios deportivos, generalmente las partes fijan un cierto tiempo de duración de las prestaciones deportivas contratadas, por lo que es muy común que sean por horas o por días.<sup>346</sup>

El contrato de prestación de servicios deportivos se extingue por el transcurso del plazo de duración, siempre y cuando se determine en el contrato, pues es norma general que la llegada del término pone fin a la relación obligatoria, salvo que ésta resulte expresamente prorrogada.

Cuando en el contrato de prestación de servicios deportivos, no se estipule algún plazo de duración determinado o en el supuesto que sea indefinido, se reconoce el derecho de desistimiento por la declaración unilateral a cada una de las partes, en el

---

<sup>345</sup> TORRES LANA, José Ángel: “Comentario al artículo 1.583 del Código Civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 1171, dice: “Cuida el CC, en cambio, de declarar nulo el contrato hecho “para toda la vida”, término incierto (*certus an, incertus quando*) que también supone un mayor grado de concreción que la pura indefinición (“sin tiempo fijo”). La razón es clara: rechazar la eficacia de una situación de resonancias feudales, en un todo similar a la esclavitud...”; DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol. IV. Op. cit.*, pp. 462-463, “...nadie puede obligarse a prestar servicios durante toda su vida o por tiempo que exceda notoriamente de lo que sea usual.... el Código contiene en el inciso segundo del art. 1583, que declara la nulidad del arrendamiento hecho de por vida, lo que encuentra su justificación en que si hay vinculación contractual que genera una limitación de la libertad individual, cualquiera que sea el alcance de ésta, una limitación vitalicia de la libertad deber ser considera contraria al orden pública...”.

<sup>346</sup> En este sentido, CAPILLA RONCERO, Francisco: “Contratos de servicios (I): Prestación de servicios y ejecución de obra”, en LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel (Dir. y otros), *Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 464, “La duración puede ser indefinida o puede pactarse por tiempo cierto, bien fijando una fecha de finalización, bien por la naturaleza temporal de los servicios contratados.”; ÁLVAREZ LATA, Natalia / BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María / BUSTO LAGO, José Manuel / y otros: *Contrato de prestación de servicios...*, *Op. cit.*, p. 2905, “El transcurso del lapso de tiempo por el que se contrató la prestación del servicio. Esta causa de extinción opera «ipso iure» con independencia de si el tiempo de duración de la relación contractual se estableció a fecha fija o atendiendo a la naturaleza de la actividad objeto del contrato.”.

cual debe existir una comunicación hacia a la otra parte del contrato, con una antelación razonable conforme a las reglas de la buena fe.<sup>347</sup>

La muerte del deudor del servicio será una causa específica de extinción, en el caso de que se contrata con él, en atención a sus cualidades personales, no con la empresa.<sup>348</sup> Así, pudiese suceder cuando se contrata el aprendizaje de algún deporte con alguien que es experto en esa modalidad deportiva, como es el karate, surf, esquí, etc.

Como se ha mencionado anteriormente, por la falta de una regulación adecuada en el Código civil del contrato de arrendamiento de servicios, las consecuencias de la extinción del contrato se establece por la teoría general de las obligaciones y contratos. Por lo que en el caso, de que se presente un desistimiento unilateral por cualquiera de las partes, la otra parte tiene derecho recibir una indemnización por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Ante esta posible situación, se pueden establecer dos tipos de soluciones, una es la que el Código preconiza en materia de contratos de obra, que es que la indemnidad consista en pagar el trabajo realizado y el beneficio contractual que se pudiera obtener

---

<sup>347</sup> Sobre las reglas de la buena fe, el artículo 7.1 del Código civil dice: “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.”; el artículo 1.258 del Código civil dice: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”; DÍEZ-PICAZO, Luis: “Comentario al artículo 1.258 del Código civil”, *Op. cit.*, p. 437., explica que la buena fe: “... aspira a que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzcan conforme a una serie de principios que la conciencia social considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecidos por la costumbre o por el contrato. En su aplicación al régimen de una relación contractual la buena fe constituye un criterio de determinación del alcance de las prestaciones contractuales y de la forma y modalidades del cumplimiento, y una fuente de creación de deberes accesorios del deber principal de prestación...”.

<sup>348</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol. IV. Op. cit.*, p. 464, menciona que en las formas de extinción de la relación contractual en la prestación de servicios puede ser por: “c) La relación nacida del contrato de servicios se extingue por el fallecimiento del obligado a prestarlos cuando se hubiese concertado con una contemplación o *intuitu personae*, o en el caso de que tal contemplación faltara. El Anteproyecto de 1993 admitía también la extinción de la relación contractual por el fallecimiento del que se había encargado de prestar los servicios en el caso de que el heredero de éste estimara que por razón del fallecimiento ya no le eran de utilidad.”. Así también, ÁLVAREZ LATA, Natalia / BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María / BUSTO LAGO, José Manuel / y otros: *Contrato de prestación de servicios...*, *Op. cit.*, p. 2907, “La eficacia de esta causa extintiva de la relación contractual -a la que ha de asimilarse la declaración de fallecimiento del prestador (ex art. 196 CC)- resulta de aplicación en todos aquellos supuestos en los que la prestación de servicios se haya concertado *«intuitu personae»*. En efecto, constituye una regla general que rige en el ámbito del Derecho de obligaciones y contractual que los derechos derivados de relaciones jurídicas contractuales establecidas *«intuitu personae»* -con fundamento en el carácter infungible de la obligación de hacer asumida por el arrendador- se extinguen como consecuencia del fallecimiento del titular...”.

del resto, o aplicar las reglas relativas al enriquecimiento sin causa, porque si de la prestación no realizada completamente se siguiera alguna utilidad para el que la contrató deberá valorar y abonarse.<sup>349</sup>

#### **4.7. La protección del deportista por la contratación de un servicio deportivo conforme al TRLGDCU.**

Como se ha explicado en capítulos anteriores, la parte que normalmente presta el servicio deportivo es una empresa especializada en ello y la persona que contrata la realización de la actividad deportiva se le considera como deportista, pero sería mejor considerarlo como un consumidor o usuario. Con lo cual, el deportista tendría una mayor protección en sus derechos, ante cualquier tipo de vulneración de sus legítimos intereses económicos y sociales, por la relación contractual que adquiriera con las empresas deportivas o de turismo activo.

El TRLGDCU contiene normas que protegen al consumidor o usuario en la contratación de servicios de manera general, en este sentido, los derechos generales establecidos en la normativa de consumo son de aplicación al deportista que desea contratar un servicio de actividad deportiva.

Por ello, se van a señalar los derechos generales que recibe un usuario de algún servicio, que también sirve de aplicación y protección al deportista común:

- Derecho a recibir información antes de la celebración del contrato.<sup>350</sup> En este sentido el deportista o usuario de servicios deportivos tiene derecho de recibir información de manera anticipada a la celebración del contrato, la cual debe ser exacta y completa respecto a las modalidades, condiciones y precios pactados. Muchas veces, la información que recibe el deportista para la

---

<sup>349</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial*, Vol. IV. *Op. cit.*, p. 464.

<sup>350</sup> El consumidor o usuario, en este caso deportista, tiene un derecho básico, que es el de información, conforme a lo establecido en el artículo 8 d) del TRLGDC “Son derechos básicos de los consumidores y usuario: ... d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute...”, regulando de forma más directa el Derecho a la información en los artículo 17 y 18 del TRLGDCU. Para una mejor estudio y análisis sobre el derecho de información se puede consultar, MORENO-LUQUE CASARIEGO, Carmen: “Protección previa a la contratación de bienes y servicios”, en *Derecho de los consumidores y usuario (Doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios)*, Tomo I, DE LEÓN ARCE, Alicia / GARCÍA GARCÍA, Luz María (Coord.), 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2007 pp. 195-226; CERVILLA GARZÓN, María Dolores: *La prestación de servicios profesionales*, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pp. 254-258.

contratación de servicios deportivos, es a través de la publicidad, por lo que está debe ser veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales. La falta de información previa antes de la celebración del contrato, es una infracción grave hacia el deportista o usuario, porque puede inducir al engaño en la prestación de los servicios deportivos, por tanto puede reclamar que se le vulnere su derecho de información previa, que otorga el TRLGDCU para una mejor protección al consumidor o usuario al momento de querer contratar un servicio.

- Derecho a recibir el cumplimiento de los servicios contratados. Conforme a una de las obligaciones principales del deportista es pagar por el servicio, a su vez tiene derecho a recibir el correcto cumplimiento o ejecución del servicio contratado.<sup>351</sup> Ante cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso del servicio deportivo contrato, el deportista o usuario puede exigir responsabilidad civil contractual, conforme a lo establecido en el TRLGDCU.
- Derecho a recibir copia del contrato.<sup>352</sup> Aun y cuando en el Código civil no se establezca una formalidad en el contrato de arrendamientos de servicios, conforme al derecho de consumo, el deportista tendrá derecho a formalizar el contrato por escrito, con la obligación de que el empresario debe entregar copia del mismo (por ejemplo, recibo, factura, etc.), con ello se complementa el otro derecho de recibir información previa a la contratación del servicio, porque así en el documento se redactara toda la información que el deportista hubiese recibido. Con el derecho de recibir copia del contrato, el deportista o usuario tendrá un medio de prueba, ante cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación del servicio.

---

<sup>351</sup> El deportista al realizar el pago por el servicio contratado, tiene que recibirlo conforme a lo pactado, y ante algún cumplimiento defectuosos o incumplimiento contractual tiene derecho a exigir responsabilidad civil por un servicio defectuoso, así lo menciona el TRLGDCU en su libro III sobre “Responsabilidad civil por bienes y servicios defectuosos”.

<sup>352</sup> El Derecho del consumidor, usuario o deportista de recibir copia o algún tipo de documento sobre los servicios contratados se establece en el artículo 63.1 del TRLGDCU, por el que dice: “En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación...”. Además, este tipo de derecho, también se reconoce en alguna legislación autonómica sobre turismo activo, como es el caso del Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de turismo activo, en su artículo 12 sobre el “Deber de información escrita. Formalización del contrato”, en su apartado 2 “La empresa acreditará documentalmente a los clientes la contratación de las actividades de turismo activo, con desglose de servicios prestados y del precio. El resto de condiciones se podrá remitir a los folletos publicitarios o condiciones generales expuestas en el establecimiento.”.

- Derecho a recibir una protección sobre las condiciones generales y de las cláusulas abusivas.<sup>353</sup> Las condiciones generales que establezcan las empresas de servicios deportivos, deberán estar acorde a los requisitos formulados por la Ley sobre Condiciones generales de la contratación. Además, no se pueden estipular cláusulas abusivas por parte de las empresas de servicios deportivos, así el deportista o usuario no se encontrara en situación de un desequilibrio contractual frente al empresario deportivo.
- El derecho a una seguridad en su persona y bienes. El deportista tiene un derecho de recibir seguridad al momento de realizar la actividad deportiva contratada, pero no debemos olvidar, que la práctica de cualquier deporte conlleva un riesgo mínimo y aumenta conforme a las diversas modalidades deportivas existentes, como las consideradas de alto riesgo.<sup>354</sup> Sin embargo, la empresa que presta el servicio deportivo, debe asegurar que las instalaciones se encuentren en buen funcionamiento y con las medidas de seguridad necesarias para el correcto desarrollo de la actividad deportiva (como sucede en las pistas de esquí, o campos de fútbol, etc.), sobre esta cuestión se analizara más adelante, en el apartado sobre la responsabilidad civil en la práctica de los deportes. Es importante especificar que es un derecho del deportista o consumidor, recibir una adecuada protección sobre su salud y su integridad física, y dependiendo del caso, se analizara si el tipo de actividad o servicio deportivo fue de un alto riesgo o no, y más aun cuando el propio consumidor asume el riesgo por el simple hecho de practicar la actividad deportiva.

---

<sup>353</sup> Es un Derecho básico reconocido a los consumidores y usuarios en el artículo 8 b) del TRLGDCU, que dice: “La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.”. Sobre las condiciones generales de la contratación, véase en la Parte General, capítulo II.1.3.

<sup>354</sup> El derecho de la salud y de la seguridad de los consumidores y usuarios, que también es de aplicación a los deportistas aficionados cuando contratan algún servicio deportivo, se encuentra regulado en el artículo 8 a) del TRLGDCU “La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad...”, y en el capítulo III del TRLGDCU es sobre “Protección de la salud y seguridad”, y se detalla con mayor exactitud el tipo de protección que se debe proporcionar al consumidor o usuario. Es importante señalar, que la mayoría de las actividades deportivas conlleva un riesgo de sufrir algún tipo de daño y más aun en los deportes de aventura o de riesgo. Sin embargo, se debe informar sobre los riesgos que puede sufrir la persona en su salud si los llega a practicar, o bien que las instalaciones se encuentren en el correcto estado para la práctica y así se proporcione una mayor seguridad, o sin duda que los instrumentos o utensilios que use el deportista para la práctica deportiva sean seguros conforme a su adecuado funcionamiento y revisión.

#### **4.8. La prestación de servicios deportivos dentro de un contrato de viaje combinado.**

Dentro de un contrato viaje combinado se pueden contratar “otros servicios”, del cual no existe ningún impedimento que sea un servicio de carácter deportivo.

Los viajes combinados que comprenden actividades deportivas se promocionan o publicitan dentro de los propios folletos informativos o publicidad del viaje combinado que recibe el consumidor, por lo que actualmente llega a ser mucho más atractivo para el turista, deportista o consumidor. Este tipo de viajes combinados son los llamados de nieve, el cual se desarrolla en zonas montañosas durante el invierno, para la práctica del esquí, incluyendo el transporte y el alojamiento cerca de las instalaciones deportivas.

Las agencias de viajes que ofertan este tipo de viajes combinados, contratan directamente con la empresa que presta el servicio de actividad deportiva, y lo integra dentro de su oferta del viaje combinado (así es como sucede con el transporte y alojamiento). Por lo que el turista o deportista no contrata directamente con los que prestan los servicios, sino que lo hace directamente con la agencia de viajes. Pero a su vez el turista tiene como derecho principal el disfrutar o realizar de manera correcta el viaje contratado con todos sus elementos que lo componen, incluyendo en este caso la actividad deportiva estipulada dentro del contrato de viaje combinado.<sup>355</sup>

Más adelante, en la investigación se expondrá la responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado que incluya una actividad deportiva, ya sea por el cumplimiento o incumplimiento defectuoso de la prestación deportiva o la exoneración de responsabilidad por la asunción del riesgo en la práctica del deporte.

### **5. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA PRÁCTICA DE LOS DEPORTES.**

---

<sup>355</sup> Es importante volver a señalar, que los técnicos o monitores deportivos que presten un servicio a través de una empresa de turismo activo deben reunir ciertos requisitos, por ejemplo, deben tener un título que los acredite. Además, que las diferentes normativas autonómicas que regulan el turismo activo, hablan de que se debe de contar con directores técnicos titulados y/o monitores o guías, o de disponer de personas monitoras con la titulación correspondiente o de facilitar un número suficiente de monitores, con ellos se dará una mayor seguridad y protección al deportista o usuario. Las diferentes normativas reguladoras de turismo activo se encuentra señaladas en la Parte Especial, capítulo II.3.1. sobre “Concepto de turismo activo y su regulación en la legislación autonómica”.

El deporte o la práctica de actividades recreativas vinculadas con el esfuerzo físico son de gran importancia para la sociedad, es una forma de disfrutar el tiempo libre o de ocio. La mayoría de las personas que practican actividades deportivas no son profesionales, lo hacen con la intención de mantener un buen estado de salud física y como actividad de entrenamiento y ocio (sin olvidar a los deportistas profesionales y el deporte como espectáculo).

Es normal que las actividades deportivas generen ciertos riesgos y daños por el simple hecho de practicarlos.<sup>356</sup> En el ámbito jurídico, se ha desarrollado un estudio sobre la responsabilidad a consecuencia de los daños que la actividad deportiva ocasiona, tanto para el que lo práctica, como para los terceros, o para los espectadores de un evento deportivos y por las empresas que prestan u organizan actividades deportivas.

La presente investigación se centrará sobre los daños que sufran los deportistas, consumidores o turistas a consecuencia de la realización de una actividad deportiva o lúdica contratada en un viaje combinado. Pero es importante establecer previamente un análisis general sobre la responsabilidad civil por la prestación y práctica de servicios en el ámbito deportivo.

### **5.1. Responsabilidad civil contractual y extracontractual en las actividades deportivas.**

Es importante señalar unas primeras ideas sobre la responsabilidad civil. El Diccionario de la Real Academia Española,<sup>357</sup> contiene una definición sobre responsabilidad: *“la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para conocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”*. Por lo que la responsabilidad es la **imputación** a un sujeto de derecho que en su patrimonio o en su persona produce un hecho en el que ha participado activa o pasivamente. Cuando un sujeto incumple un deber o una obligación, o cuando causa un daño, es responsable siempre que el incumplimiento o el daño le sea **imputable**.

---

<sup>356</sup> Las actividades deportivas conllevan un riesgo, MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 26, señala que no se debe confundir con: “... la aceptación de los riesgos por parte de la víctima, que es distinta de la aceptación de los daños que pueden producirse como consecuencia de realizarse aquellos. Nos situamos en la posibilidad/probabilidad de su producción, y no en la certeza de su realización.”, es lo que denomina como riesgo consentido pero daño no asumido.

<sup>357</sup> Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda edición, [http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=responsabilidad](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responsabilidad).



En el Derecho civil encontramos dos instituciones de responsabilidad civil, una contractual y otra extracontractual. La responsabilidad contractual tiene su presupuesto en el incumplimiento (o en el cumplimiento inexacto o parcial) de las obligaciones derivadas de un contrato, a consecuencia de lo cual queda insatisfecho el derecho de crédito y además, y eventualmente, es causa de un daño o perjuicio suplementario para el acreedor.<sup>358</sup>

Por su parte, la responsabilidad extracontractual tiene como presupuesto la causación de un daño sin que entre el dañante y el dañado medie una relación contractual previa, o preexistiendo ésta, el daño es completo y ajeno al ámbito que le es propio.<sup>359</sup>

En el Código Civil español, los artículos 1.101 y siguientes, establecen el régimen genérico de la responsabilidad en las obligaciones. La responsabilidad no sólo se deriva de un contrato, sino también, cuando la obligación que se incumple estaba previamente constituida por la ley o cuasicontrato; y los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil versan sobre las obligaciones extracontractuales. CASTAN TOBEÑAS<sup>360</sup>, señaló que “la diferencia entre estas dos instituciones de responsabilidad civil, es que en la contractual no es más que un anexo a la obligación principal que ya estaba establecida y que algún acto u omisión ha truncado el cumplimiento pacífico de lo pactado en un contrato de acuerdo con la autonomía de la voluntad; y mientras que en la responsabilidad extracontractual surge el deber de indemnizar de forma nueva y sustancial”.

---

<sup>358</sup> YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: *Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2001, pp.79-80, menciona que: “En la responsabilidad civil contractual, el hecho dañoso viene producido precisamente como resultado del incumplimiento de un contrato, y viene a menoscabar precisamente el patrimonio de un acreedor que ya se encontraba determinado de antemano... La consagración legal de esta forma de responsabilidad se encuentra en el art. 1101 C.civ.: Quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquella...”; Para un mejor estudio véase, BADOSA COLL, Ferrán: “Comentario al artículo 1.101 del Código civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 34-36. Ver un contenido más extenso en BADOSA COLL, Ferrán: *La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil*, Bolonia, Real Colegio de España, 1987.

<sup>359</sup> Así, YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: *Sistema de responsabilidad...*, *Op. cit.*, p. 80, señala que: “Otras veces la obligación de resarcir surge entre personas que no se encontraban vinculadas por una relación previa. Dicho de una manera deliberadamente poco técnica, las partes se conocen a través del hecho dañoso: es el accidente de tráfico... Es la llamada responsabilidad civil extracontractual, también llamada aquiliana... El precepto básico se contiene en el art. 1902 C. civ.: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”; Véase para un mayor análisis, PANTALEON, Fernando: “Comentario al artículo 1.902 del Código civil”, en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pp. 34-36.

<sup>360</sup> CASTÁN TOBEÑAS, José: *Op. cit.*, p. 679.

La práctica de actividades deportivas o de riesgo han tenido una gran relevancia en el ámbito jurídico de la responsabilidad civil, a consecuencia de los múltiples daños causados que afectan directamente a los participantes o a terceros, porque el deporte en general como una actividad física puede generar lesiones o daños.<sup>361</sup>

Por la existencia de un contrato de prestación o de arrendamiento de servicios deportivos se generan derechos y obligaciones para las partes, por ejemplo el derecho a utilizar unas instalaciones deportivas (canchas de fútbol, baloncesto, esquí, gimnasio, etc.), la contratación de un servicio de aprendizaje de algún deporte (maestro de natación, de esquí, equitación, etc.) o se contrata el aprendizaje incluyendo el material deportivo (rafting, buceo, etc.), la contratación para la asistencia a los eventos deportivos (olimpiadas, mundiales de fútbol, etc.), inclusive la contratación de diversas actividades deportivas y de riesgo dentro de un contrato de viaje combinado que es el objeto de esta investigación.

En este sentido, la mayoría de los daños que llegase a sufrir el deportista o usuario se enmarcan dentro de una relación contractual y la responsabilidad civil sería contractual. Sin embargo, la mayoría de los Tribunales se inclinan a resolver por vía extracontractual los daños sufridos por los deportistas en la realización de actividades deportivas, salvo en casos concretos como los antes mencionados en los que existe un contrato previo.<sup>362</sup>

Sobre el tipo de responsabilidad civil en que se fundamente una demanda presentada ante los Tribunales, desde el punto de vista del presente trabajo, dependerá de la

---

<sup>361</sup> En este sentido, ORTI VALLEJO, Antonio: “La jurisprudencia sobre responsabilidad civil deportiva”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes de azar, entretenimiento y música*, núm. 4, 2000, p. 37, “...el deporte, dependiendo del tipo de modalidad deportiva, en cuanto se supone un ejercicio al cuerpo, comporta para aquel que lo practica y en menor medida para las personas que directa o indirectamente entran en contacto con el deportista (espectadores, instructores, árbitros), un riesgo para la integridad física de uno y otros... no es extraño, que los litigios sobre daños por ejercicios de actividades deportivas se hayan multiplicado..., como tampoco es casualidad que sean los deportistas no profesionales los que registren mayor número de accidente.”.

<sup>362</sup> Véase, PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil. Práctica deportiva y asunción de riesgo*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 158-172; PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil del prestador de servicios deportivos”, en *La responsabilidad civil por daños causados por servicios defectuosos*, de ORTI VALLEJO, Antonio (Dir.), Thomson Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2006, p. 522, “lo cierto es que los tribunales siguen resolviendo la responsabilidad civil del prestador de servicios deportivos conforme a las normas de la responsabilidad extracontractual...”; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 145/2007, de 15 de febrero (westlaw RJ 2007\1452) F.D. 2 primer párrafo, F.D. 3 segundo párrafo y F.D. 4.

existencia de un contrato o no, y si es contractual que el daño se derive del cumplimiento parcial o incumplimiento de las obligaciones pactadas.<sup>363</sup>

El Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales han resuelto controversias generando distintas teorías o corrientes, lo que ha provocado que no se adopte una línea definida sobre qué tipo de responsabilidad civil se debe de aplicar por los daños y perjuicios derivados de una actividad deportiva. Esto se origina porque una persona puede practicar cualquier actividad deportiva sin que exista una relación contractual de por medio y en otros supuestos se contrata la realización o desarrollo de una actividad deportiva con otra parte o una empresa especializada. En consecuencia, se genera en cada caso una dificultad para los Tribunales dependiendo de si se encuentran ante responsabilidad civil contractual o extracontractual, pronunciándose la mayoría de las veces por conceder al perjudicado de los daños un derecho de opción basado en la unidad de culpa civil que da lugar a la formula de yuxtaposición de responsabilidades, lo que permite interponer ambas acciones de forma alternativa o subsidiaria, siendo el juez el que aplique las normas más favorables para la víctima.<sup>364</sup>

Ambas responsabilidades la contractual como la extracontractual, comparten la misma finalidad (que es obtener el resarcimiento de la víctima del accidente), sin embargo tienen características diferentes, como el plazo de prescripción o el alcance de la indemnización.<sup>365</sup>

---

<sup>363</sup> Así, REBOLLO GONZÁLEZ, Juan Carlos: “Responsabilidad civil en la práctica deportiva de riesgo: análisis de la respuesta legal y jurisprudencial”, *Revista española de derecho deportivo*, núm. 13, 2001, p. 28, señala que: “... la práctica de deportes que implican riesgo, y sobre todo en la práctica del montañismo, esta diferenciación es importante ya que en muchas ocasiones la responsabilidad va a derivar de un contrato o cuasicontrato, es decir se contratan los servicios de guías de montaña, o de empresas especializadas o se participa en las actividades organizadas por alguna de las asociaciones, escuelas o federaciones deportivas, aunque muchas ocasiones sea difícil concretar una prueba de ello, pues se realizan de forma oral, o la prueba de la existencia del contrato es un simple billete de autobús, etc.”, por lo que nos encontraríamos ante una responsabilidad contractual, el problema sería la prueba; ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza: “Análisis jurisprudencial de la responsabilidad civil en el ámbito de la actividad deportiva”, *Revista jurídica del deporte*, Aranzadi, núm. 12, 2004, p. 172, dice: “... para que opere la responsabilidad contractual con exclusión de la responsabilidad alquiliana no es bastante que haya un contrato (o una preexistencia relación de otra naturaleza) entre las partes, sino que se requiere para ello la realización del hecho dañoso acontezca dentro de la rigurosa orbita de lo pactado y como desarrollo del contenido negocial.”; PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 521, afirma que la responsabilidad del prestador de servicios es contractual “Se puede considerar que el daño que se produce como consecuencia del incumplimiento de un deber contractual...”.

<sup>364</sup> En este sentido, ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza: “Análisis jurisprudencial de la responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 172.

<sup>365</sup> PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil. Práctica deportiva...*, *Op. cit.*, p. 171, sobre la concurrencia de ambas clases de responsabilidad en yuxtaposición “no puede permitirse que los abogados recurran a uno u otro régimen en función de sus intereses, puesto que las citadas particularidades tienen

La contratación de la prestación de un servicio de actividades deportivas y de riesgo dentro de un viaje combinado (considerado como elemento que integra al viaje dentro de los llamados “otros servicios”) origina el nacimiento de una relación obligacional entre el organizador del viaje, el prestador de los servicios deportivos y el usuario que realiza el viaje y la actividad deportiva. En consecuencia, ante cualquier cumplimiento parcial o incumplimiento de un deber contractual pactado, tendríamos una responsabilidad civil contractual y objetiva, porque el consumidor o turista que contrate un viaje combinado tiene la protección del TRLGDCU.

## **5.2. El riesgo en las actividades deportivas. La teoría de la asunción del riesgo por el deportista como régimen general en la práctica libre del deporte.**

Las actividades deportivas implican una actividad física con la finalidad de competir y divertirse, cuya práctica es libre y voluntaria. Normalmente al realizar actividades deportivas, las personas son propensas a sufrir un accidente o lesión, por el riesgo intrínseco que contiene el deporte.<sup>366</sup>

A los daños sufridos tanto por los deportistas profesionales como por los no profesionales, le son de aplicación de manera general la teoría de la asunción del riesgo, por lo que no se indemnizaran los daños que puedan considerarse riesgos típicos de la práctica de los deportes. Sin embargo no es así cuando el riesgo normal asumido excede de los parámetros usuales de la actividad deportiva.

Generalmente los deportes se clasifican en dos grupos, por un lado los de riesgo unilateral y por otro los de riesgo bilateral. Dentro de la primera clasificación, los deportes de riesgo unilateral son aquellos en que el contacto físico con otra persona o deportista es imposible o muy poco habitual (atletismo, natación, esquí, etc.), por lo que el deportista asume los riesgos de caída o accidentes, independientemente si sean constitutivos por asunción del riesgo o culpa exclusiva de la víctima, en función

---

su razón de ser en las diferencias existentes entre la vulneración de un contrato previo y la causación de un perjuicio sin existir ninguna vinculación obligacional anterior.”.

<sup>366</sup> Dentro de los riesgos, MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 236, señala: “... tales riesgos, hay que diferenciar, para su adecuado tratamiento jurídico, los supuestos constituidos por la participación activa de la víctima en un deporte y los integrados por su participación pasiva (espectador) o por su falta de participación (tercero no espectador). En el primer caso, la asunción del riesgo por parte del deportista conlleva, como criterio general, la exclusión de la responsabilidad civil del agente creador del riesgo...”.

de su comportamiento diligente o no.<sup>367</sup> En el segundo grupo, son todos los deportes en el que el contacto físico es probable, ya sea directo (boxeo) o que al jugarse en grupo, se genera cierto contacto (fútbol), en consecuencia existe una mayor probabilidad de sufrir daños.<sup>368</sup>

En definitiva, la práctica de cualquier deporte implica un riesgo ya sea en mayor o menor medida, que dependerá del tipo de actividad deportiva que se trate. Cuando se contrata un servicio deportivo con alguna empresa, el deportista usuario debe recibir la información de los riesgos típicos y los que él desconozca que se pudieran producir durante su práctica (más aun, sin son deportes de riesgo o de aventura), dado a que es un derecho de los consumidores previsto por el artículo 18.2. e) del TRLGDCU de gran importancia (entre otros aspectos, como es en la formación del consentimiento contractual y también en materia de daños al consumidor).<sup>369</sup> Es importante que los deportistas conozcan los riesgos típicos de la actividad deportiva que van a realizar, incluso si es posible que se estipulen cláusulas dentro del propio contrato en las que se informe sobre los riesgos y contradicciones propias de una determinada actividad deportiva. Así, en un principio se podrá eximir de responsabilidad a la empresa prestadora del servicio sobre los daños generados por el propio riesgo de la actividad

---

<sup>367</sup> MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 237, “Llamamos deportes de riesgo unilateral a aquellos en los que el contacto físico de los contendientes no puede producirse, así como a aquellos en los que tal contacto es rigurosamente anormal (por ejemplo, esquí y natación), por lo que el mismo no encaja en la tipicidad social del riesgo consentido.”.

<sup>368</sup> Así, PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil...*, *Op. cit.*, p. 178; PIÑEIRO SALGUERO, José: “Accidentes deportivos: lesiones consentidas”, *Indret Revista para el análisis del Derecho*, Barcelona, 2005, [www.indret.com](http://www.indret.com), “En ningún caso, el deportista carga con los costes de un accidente causado por la negligencia de un tercero, es decir, nunca se asume la negligencia ajena, ya sea de otro deportista, del organizador de la actividad o del titular de la instalación.”, además, señala que por la jurisprudencia existen dos deportes de riesgo unilateral donde más sufren daños los deportistas aficionados, que son el esquí y la equitación. Además, MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 237, señala que: “La bilateralidad del riesgo supone que cada jugador crea un riesgo que sufre el contrincante y que, a su vez, éste crea el que sufre aquél (asunción recíproca del riesgo desplegado).”.

<sup>369</sup> En este sentido, PIÑEIRO SALGUERO, José: “Accidentes deportivos: lesiones...”, *Op. cit.*, [www.indret.com](http://www.indret.com), p. 24, analiza algunas legislaciones autonómicas del turismo activo, “las empresas del sector deberían proceder del siguiente modo: antes de realizar la actividad, informar por escrito y de forma detallada a los usuarios de, entre otros aspectos, los riesgos que implica el deporte y los requisitos físicos mínimos para poder practicarlo. De esta forma, los practicantes serían conocedores de los riesgos de la actividad y, por tanto, los asumirían en caso de concreción, salvo que el accidente haya sido consecuencia de alguna negligencia del monitor o de la empresa organizadora.”; Podemos encontrarnos en el supuesto de un turismo activo o de aventura, en los cuales, diversas legislaciones autonómicas lo regulan, exigiendo que se le proporcione al turista o consumidor, información sobre la actividad, las dificultades de la práctica de ese deporte de riesgo, medidas de seguridad, etc., así lo establecen por ejemplo el artículo 8 del Decreto 81\1991 de Cataluña o el artículo 29 del Decreto 20\2002 de Andalucía, entre otros más.

deportiva, pero no se exonerará frente a los errores o fallos propios humanos o de materia.<sup>370</sup>

Por otro lado, existen actividades deportivas que últimamente tienen mucha demanda por los deportistas, los llamados “deportes de riesgo”, en los cuales se caracteriza que el riesgo representa el componente o causa principal y que ánima a su práctica, pero a su vez ha presentado un gran número de accidentes relacionados con éste tipo de actividades.<sup>371</sup>

Los deportes de aventura o de riesgo muy diferentes a los deportes que normalmente se practican (el fútbol, baloncesto, golf, tenis, etc.), por no tener unas reglas o normas de participación y especialmente la asunción del riesgo es el motivo por el que se someten los participantes.<sup>372</sup> Para la persona que busca este tipo de actividades deportivas, el riesgo o el peligro se interpreta como diversión y generalmente estas personas no son profesionales, por lo tanto son los que registran mayor número de accidentes.<sup>373</sup>

En los deportes de aventura aumenta la posibilidad de sufrir algún tipo de daño, por el riesgo implícito que conlleva al realizar éste tipo de actividades. Sin embargo, cuando

---

<sup>370</sup> GÁZQUEZ SERRANO, Laura / MÉNDEZ SERRANO, María del Mar: “Responsabilidad civil en los deportes de riesgo”, *Revista española de Derecho deportivo*, núm. 13, 2001, p. 14.

<sup>371</sup> MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 238, menciona: “Casi todos los deportes, por las actividades en qué consisten o por los medios materiales utilizados, son peligrosos y susceptibles de generar daños por su posible descontrol, crean riesgos de intensidad y muy variable, tanto por la importancia de los daños producibles como por el grado de su posibilidad, que discurre desde una enorme lejanía a un situación de casi completa certeza.”.

<sup>372</sup> Así, VERDERA SEVER, Rafael: “Una aproximación a los riesgos del deporte”, *Indret, Working Paper*, núm. 116, 2003, p. 3, [www.indret.com](http://www.indret.com); también, ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza: “Análisis jurisprudencial de la responsabilidad civil en el ámbito de la actividad deportiva”, *Revista jurídica del deporte*, Aranzadi, núm. 12, 2004, p. 177, “En general, en la práctica de los deportes, existe un claro riesgo de lesión que todos los participantes asumen...”.

<sup>373</sup> En este sentido, HIDALGO GARCÍA, Santiago: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de esquí”, *Practica Derecho de daños: Revista especializada en responsabilidad civil y seguros*, núm. 98, Año 9, Noviembre de 2001, p. 6, “La práctica del esquí en sus distintas modalidades (...) ha venido cobrando cada vez mayor popularidad en España en los últimos años... Con ello se ha incrementado sustancialmente el número de accidentes que se producen, dado a que se trata de una práctica deportiva que puede calificarse de alto riesgo y, por tanto, generadora de una diversidad de supuestos de responsabilidad civil... Hay dos ámbitos de responsabilidad por una lado, la de los esquiadores entre sí y, por otro, la de la entidad explotadora de la estación de esquí frente a éstos...”; DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Pilar: “Información y asunción del riesgo en la práctica del esquí”, *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 19, 2009, “En efecto en el turismo aventura, la víctima generalmente no es una persona conocedora de la actividad que práctica, no conoce la reglas, y la finalidad es siempre la diversión, la adrenalina que ocasiona su práctica, el desafío personal...”.

el accidente sufrido excede del riesgo típico o deriva de un aumento de riesgo, nada impide su resarcimiento.<sup>374</sup>

Las medidas de protección de daños en el ámbito deportivo dependerán de distintos casos o supuestos, dependerá por el tipo de deporte que se practique (fútbol o parapente), de los sujetos que lo practiquen (profesionales o no) o del lugar donde se realice (instalaciones deportivas o en un entorno natural).

Está claro que los deportistas asumen la existencia de un claro riesgo de lesión, pero el riesgo intrínseco de la actividad deportiva no cubre ni ampara cualquier tipo de actuación que se desarrolle durante la actividad, por ejemplo, dentro de un partido de baloncesto no puede ser supuesto de asunción del riesgo las agresiones directas y contundentes contra la salud del contrario, pues se rebasan los límites del riesgo asumido en el ejercicio ordinario del deporte.<sup>375</sup>

Ahora bien, la teoría o doctrina de la asunción del riesgo es mayoritariamente aceptada por los daños sufridos por un deportista, a consecuencia de la realización de cualquier tipo de actividad deportiva. Así lo pone de manifiesto la mayoría de los autores en materia de responsabilidad civil deportiva, especificando que el Tribunal Supremo la reconoce por primera vez en la Sentencia de 22 de octubre de 1992.<sup>376</sup>

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de octubre (RJ 1992\8399), en el que se sufrió un accidente durante un partido de pelota de pala,

---

<sup>374</sup> Es importante volver a señalar, que en la presente investigación las personas que sufren daños en este tipo de actividades no son deportistas profesionales, nos referimos a personas que no son expertos ni profesionales, sino simples personas que desean practicar este tipo de deporte. VERDERA SEVER, Rafael: “Una aproximación a los riesgos del deporte”, *Op. cit.*, p. 3, [www.indret.com](http://www.indret.com).

<sup>375</sup> En este sentido, DE LA TORRE OLID, Francisco: “Derecho y deporte. Particular referencia a los accidentes deportivos. Responsabilidad civil y riesgos en el deporte”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes de azar, entretenimiento y música*, núm. 24, 2008, p. 23, “Se pasa hablar de situaciones jurídicas en las que reconocer a la persona revestida de una *lex artis* o pericia que implica un conocimiento de los riesgos típicos por lo que no se tiene que entrar en el debate de la culpa...”.

<sup>376</sup> PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil. Práctica deportiva...*, *Op. cit.*, pp. 184-185; ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil en la explotación y práctica de actividades de ocio peligrosas”, en REGLERO CAMPOS, Fernando (coord.), *Tratado de responsabilidad civil, Tomo II, Parte especial segunda*, Aranzadi, 4ª Ed., 2008, p. 483; ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza: “Análisis jurisprudencial de la responsabilidad...”, *Op. cit.*, p. 177; DE LA TORRE OLID, Francisco: “Derecho y deporte. Particular...”, *Op. cit.*, p. 24; GÁZQUEZ SERRANO, Laura / MÉNDEZ SERRANO, María del Mar: “Responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 16. La teoría de la Asunción del riesgo ha sido admitida por el Tribunal Supremo en sentencias como 22 de octubre de 1992 (westlaw RJ 1992\8399), por lesiones sufridas con ocasión de juego de pelota; 20 de marzo de 1996 (westlaw RJ 1996\2244), accidentes practicando el esquí; 17 de octubre de 2001 (westlaw RJ 2001\8639), accidente practicando rafting; 15 de febrero de 2007 (westlaw RJ 2007\1452), lesiones en un accidente de esquí.

exigiendo responsabilidad al compañero contrincante por la pérdida de un ojo, en el F.D. 5º se pone de manifiesto la asunción del riesgo "... debe también señalarse que en materia de juegos o deportes de este tipo la idea del riesgo que cada uno de ellos pueda implicar -roturas de ligamentos, fracturas óseas, etc.-, va ínsita en los mismos y consiguientemente quienes a su ejercicio se dedican lo asumen, siempre claro es que las conductas de los partícipes no se salgan de los límites normales ya que de ser así podría incluso entrar en el ámbito de las conductas delictivas dolosas o culposas.", con ello los deportistas asumen o aceptan los riesgos derivados de las actividades deportivas, y más aun si se tratan de prácticas deportivas de riesgo.<sup>377</sup>

En un mismo criterio se apoya la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009 (RJ 2010\8639)<sup>378</sup>, en el supuesto de un daño en la práctica de la actividad deportiva llamada supercross. El deportista sufrió una caída y se lastimó provocándole paraplejía. El golpe fue con un obstáculo situado a distancia sin aumentar el riesgo inherente y asumido por los participantes y de conocimiento por el actor desde el inicio de la carrera. Con la teoría de la asunción del riesgo, los deportistas que realicen actividades deportivas o de riesgo serán los únicos responsables de los daños sufridos, incluyendo con más razón los daños que se sufran por la práctica de los deportes de aventura o turismo activo.<sup>379</sup>

La teoría de la asunción del riesgo por el deportista, ha sido aplicada frecuentemente en los accidentes que se producen por el ejercicio del deporte del esquí, como se presentó en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2006 (RJ 2006\5400).<sup>380</sup> La actividad de montar a caballo o mejor dicho la equitación, también

---

<sup>377</sup> El criterio de la asunción del riesgo o la del consentimiento informado, se emplea frecuentemente en las prácticas deportivas y en los tratamientos médicos, como puede ser una operación quirúrgica, en este sentido, MALDONADO RAMOS, Jaime: "Responsabilidad por la práctica de deportes de riesgo", *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes de azar, entretenimiento y música*, núm. 12, 2004, p. 239; MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 29, también menciona el caso del accidente de pelota y otros más y señala que: "son actividades de peligro específico en los que, sin embargo, se produce la liberación de su agente creador (*Dominus periculi*) porque el daño se imputa al comportamiento arriesgado de la víctima (*assumptor periculi*), como consecuencia del rango causal -atributivo- del riesgo consentido. En ellos hay una verdadera asunción del riesgo por parte de la víctima."

<sup>378</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 857/2009, de 22 de diciembre (westlaw RJ 2010\866), F.D. 3.

<sup>379</sup> En este sentido, REBOLLO GONZALÉZ, Juan Carlos: "Responsabilidad civil en la práctica deportiva...", *Op. cit.*, p. 24, señala: "... en la presunción de que quien practica un deporte conoce los riesgos que entrañan y se expone a ellos de forma responsable, y si sufre daños sabe que éstos estaban en la esfera de lo posible y por ello se debe asumir, sin más."

<sup>380</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 660/2006, de 27 de junio (westlaw RJ 2006\5400), donde se exonera al prestador del servicio deportivo de esquí, por la aplicación de la teoría de la asunción del riesgo por parte del deportista, F.D. 3, dice: "En definitiva, aunque hubo



contiene un riesgo que asume el deportista; por ello, también es de aplicación la teoría de la asunción del riesgo. Como supuestos de alquiler de caballos o contratación de excursiones a caballo, es importante señalar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2005 (RJ 2005\8549), por la que se exonera al dueño del caballo al no acreditarse una actuación negligente por su parte.<sup>381</sup>

Cuando el deportista de manera general asume los riesgos de la actividad deportiva que practique, se entiende que es responsable él mismo de los accidentes que sufra al actuar dentro de los parámetros normales de la actividad, así es la teoría del riesgo.<sup>382</sup> Solamente cuando el accidente se produce fuera de los límites impuestos por la asunción del riesgo por el practicante o deportista, puede exigirse responsabilidad civil al culpable.

Pero no conviene confundir la teoría de la asunción del riesgo con la teoría del riesgo, pues en la primera el riesgo se imputa al perjudicado y en la segunda se imputa al agente (en este caso el prestador del servicio o un tercero). A su vez, para estimar esta teoría hay que proceder caso por caso, nunca usándola de manera *a priori*. Es decir, no se puede extender a todas las actividades de la vida, sino solo a las que impliquen un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios.<sup>383</sup>

Ahora bien, en los deportes considerados de riesgo (rafting, descensos en ríos, montañismo, etc.), existe una mayor obligación por parte de la empresa o deudor que

---

causalidad material, falta la causalidad jurídica, pues no cabe atribuir a la propietaria de la instalación, y del mecanismo de remonte, la omisión, en relación con su funcionamiento o utilización, de una comportamiento, que exigible, haya desencadenado, o contribuido a la causación del accidente. No ha creado más riesgo que el de facilitar la utilización de un instrumento para la práctica deportiva que el que lo contrata por supuesto asume. Por ello no hay base causal para decretar la responsabilidad civil en ninguna de las esferas contractual y extracontractual que podrían generarla alegadas por el demandante y aquí recurrente.” y el F.D.5.

<sup>381</sup> La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 24 de octubre de 2005 (westlaw RJ 2005\8549), considera que el régimen de imputación objetiva del art. 1905 CC, no es de aplicación en los casos de daños sufridos por caídas de caballos alquilados, así lo establece en los F.D.2 incisos d) y e)

<sup>382</sup> Así, MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, p. 254, especifica que: “debe quedar claro que se asumen los riesgos normales (típicos) del juego o de la competencia y no los riesgos anormales (atípicos o cualificados)”.

<sup>383</sup> MALDONADO RAMOS, Jaime: “Jurisprudencia reciente de la Sala Primera...”, *Op. cit.*, p. 87. Además, se puede consultar otros autores para profundizar en el estudio del tema, como: ALCAÍN MARTINEZ, Esperanza: “Análisis jurisprudencial de la responsabilidad...”, *Op. cit.*, pp. 173-179; ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil en la explotación...”, *Op. cit.*, pp. 484-487; PIÑEIRO SALGUERO, José: “Accidentes deportivos: lesiones...”, *Op. cit.*, [www.indret.com](http://www.indret.com), pp. 92-114; ORTI VALLEJO, Antonio: “La jurisprudencia sobre...”, *Op. cit.*, pp. 38-40; entre otros más.

presta el servicio deportivo, como es el otorgar la información sobre los requisitos y riesgos que conlleva la práctica de dichos deportes. Sin embargo, no parece exigible informar sobre aquellos riesgos que son típicos en los deportes normales o que el deportista no pudiera desconocer en función de su experiencia. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 7 de septiembre de 2009 (JUR 2009\407095)<sup>384</sup>.

La teoría de la asunción del riesgo tiene sus excepciones de aplicación, porque si en todos los casos o supuestos de daños deportivos se aplicara esta teoría sería injusta para los deportistas. Por ejemplo cuando se sufre un daño por el mal estado de la pista de esquí o de un campo de fútbol. Las causas de excepción de la teoría de asunción del riesgo son: 1) la conducta imprudente o negligente de otro deportista o jugador; 2) las instalaciones deportivas no reúnen las condiciones de seguridad adecuada; 3) falta de medidas de organización; 4) cuando en el aprendizaje de algún deporte no se adopten medidas de seguridad.<sup>385</sup>

A continuación, se desarrollará la responsabilidad civil de los prestadores de servicios deportivos. Es decir, cuando existe una relación contractual con el deportista y la empresa que presta el servicio deportivo no cumple con sus obligaciones, se le puede imputar de responsabilidad, a causa de la inseguridad de las instalaciones o la falta de organización, etc. En estos casos no sería de aplicación la teoría de la asunción del riesgo imputable al deportista usuario.

---

<sup>384</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª), núm. 296/2009, de 7 de septiembre (westlaw JUR 2009\407095), en la que se exonera de toda responsabilidad a la empresa que se dedicaba a la prestación de actividades de “quad”, a consecuencia de la pérdida de control del vehículo, F.D. 3. párrafos quinto y sexto: “En cuanto a que antes del comienzo del recorrido tan solo le fue proporcionada una “vaga explicación del funcionamiento de dicho vehículo”, con lo que se pretende aludir nuevamente a negligencia en la información trasladada a los participantes en la actividad, al tratarse de un cuatriciclo o cuatrimoto, que es la traducción del término inglés “quad”, debe tenerse en cuenta que se trata de un vehículo automático en el que su funcionamiento tan solo precisa acelerar y frenar, sin que la palanca de cambios se toque desde el momento en que se entrega con la marcha adelante puesta; no precisa, en consecuencia, de una información excesiva, y en cualquier caso, de no haber entendido algunas de dichas instrucciones, debería haber sido la propia actora quien desistiera de emprender la excursión. Siendo así las cosas, no es posible la estimación del recurso, desde el momento en que se considera correctamente valorada la prueba, sin que se haga preciso entrar en el segundo motivo de la impugnación relativa a la inaplicación de la normativa de consumidores y usuarios, al concluirse con la inexistencia de culpa o negligencia por parte de la entidad demandada en el incidente que tuvo lugar.”.

<sup>385</sup> Véase, para un amplio análisis sobre las excepciones a la teoría de la asunción del riesgo, ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil en la explotación...”, *Op. cit.*, pp. 491-500; ORTI VALLEJO, Antonio: “La jurisprudencia sobre...”, *Op. cit.*, pp. 41-45; DE LA TORRE OLID, Francisco: “Derecho y deporte. Particular...”, *Op. cit.*, pp. 24-29; PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil Práctica deportiva...*, *Op. cit.*; VERDERA SERVER, Rafael: “Una aproximación a los riesgos...”, *Op. cit.*, [www.indret.com](http://www.indret.com), pp. 7-12; entre otros más.

### 5.3. La responsabilidad civil del prestador de servicios o actividades deportivas.

Anteriormente se ha señalado que en la mayoría de los accidentes o daños ocasionados por la realización de actividades deportivas, los tribunales resuelven por la vía de la responsabilidad extracontractual y aplicando la teoría de la asunción del riesgo como régimen general de exoneración de responsabilidad al prestador de los servicios. Sin embargo, conforme a lo estudiado y establecido en la presente investigación, existe una relación contractual, que en este caso es el contrato de arrendamiento o prestación de servicios deportivos entre el deportista o consumidor y una empresa prestadora del servicio.

Antes de continuar con la presente investigación, se puede presentar la posibilidad de que el servicio deportivo lo preste una Institución pública, por lo que sí es en el ámbito público será materia de responsabilidad de la Administración pública, conforme a la jurisdicción de lo contencioso administrativo<sup>386</sup>, y como en el desarrollo de la investigación se estudia desde el ámbito privado, nos centramos a la relación contractual entre una empresa privada y un deportista usuario, por lo que es de jurisdicción civil.

Hasta este punto de la investigación sabemos que la práctica de cualquier actividad deportiva conlleva un riesgo intrínseco que asume el deportista, y a la vez el que presta un servicio deportivo es creador de un peligro. En este sentido, el prestador del servicio no debe agravar o aumentar el peligro o riesgo intrínseco de la práctica deportiva, porque ante un comportamiento negligente o incumplimiento de sus obligaciones principales, puede ser imputable de responsabilidad civil.<sup>387</sup>

---

<sup>386</sup> La legislación aplicable sobre responsabilidad de la administración pública son los arts. 139-ss. de la Ley 1/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. MALDONADO RAMOS, Jaime: “Jurisprudencia reciente de la Sala Primera...”, *Op. cit.*, pp. 79-80, “Pero existe también la responsabilidad de la Administración, en la que a quien se le exige la indemnización es a la Administración Pública. Se reconoce así el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufra... puede pensarse en el caso de que la actividad deportiva esté organizada por una Administración Pública (un Ayuntamiento, por ejemplo, que organice una competición deportiva) y el competidor sufra un daño porque ese servicio público haya funcionado anormalmente. En este caso, sin perjuicio en el derecho de repetición que tendrá la Administración contra el funcionario o contratado culpable de mal funcionamiento de la actividad deportiva, el deportista dañado deberá reclamar frente a la Administración...”.

<sup>387</sup> Así, SEOANE SPIEGELBERG, José Luis: “La responsabilidad civil derivada del deporte”, en SEIJAS QUINTANA, José Antonio (Coord.), *Responsabilidad civil aspectos importantes*, Sepin, Las Rozas (Madrid), 2007, p. 490, “La fuente de responsabilidad civil de los organizadores y prestadores de servicios deportivos radica en el cumplimiento de las funciones específicas que les correspondan como tales. La imputación objetiva sobre el daño exige una relación física o material entre la actividad prestada

La responsabilidad civil de los prestadores de servicios deportivos se genera por el incumplimiento de sus obligaciones principales establecidas dentro del contrato, que dependen de cada caso en específico. Por ejemplo: tener en buen estado las instalaciones o entornos naturales en donde se va a practicar el deporte, que el material facilitado para la práctica del deporte se encuentre en correctas condiciones, que se adopten las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva, que la persona que colabore en la práctica deportiva cuente con la titulación requerida para su desarrollo, el deber de información sobre la intensificación del riesgo asumido en la práctica del deporte, etc.<sup>388</sup>

En este sentido, el criterio de imputación de la responsabilidad civil por los daños que se generen en la prestación de un servicio deportivo se delimitará entre el ámbito del riesgo típico inherente a cada modalidad deportiva (que resulta asumido por el deportista) con el incremento del riesgo típico y asumido, que resulta de una acción u omisión del prestador de servicios.<sup>389</sup> Sin olvidar, que es importante establecer cuál es el aumento del riesgo asumido por el deportista, como causa principal de imputación de responsabilidad civil al prestador de servicios deportivos.

### **5.3.1. El aumento del riesgo asumido por el deportista.**

---

y el resultado acaecido, y otra jurídica, en el sentido de que el mismo sea susceptible de serles reprochado como consecuencia de la omisión de alguna de las obligaciones que personalmente les incumbían.”.

<sup>388</sup> En un mismo sentido, PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 521, “En el marco de los daños causados por un prestador de servicio, éste asume un deber especial de protección frente a la víctima ya que su poder de organización empresarial o profesional se confía la adopción de las medidas de seguridad que mantengan el riesgo en los niveles típicamente previsibles y asumidos por el usuario deportista.... En la responsabilidad por los daños causados en el ámbito de una prestación de servicios existen elementos, como un deber especial de seguridad y el beneficio económico..., que justifican la adopción de un criterio de responsabilidad distinto al que viene empleándose en los daños de causación bilateral...”.

<sup>389</sup> Así se comprende conforme a lo establecido por ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza: “Análisis jurisprudencial de la responsabilidad...”, *Op. cit.*, p. 183, “... la Teoría de la Asunción del riesgo carece de efectividad cuando falla algún elemento en la organización o en la instalación donde se produce el daño, ya que en este caso no será imputable la responsabilidad al deportista que ha causado el daño... Con carácter general podemos afirmar que en estos casos se opta por la objetivación de la responsabilidad, exigiendo una mayor y acentuado rigor en la diligencia exigible, a tenor de las circunstancias concurrentes a cada caso...”; MALDONADO RAMOS, Jaime: “Responsabilidad por la práctica de deportes...”, *Op. cit.*, p.238, “... el criterio general en este tipo de actividades es el de la asunción del riesgo. Mediante el, se considera que el deportista asume, razonablemente, el riesgo que de su actividad se deriva, siendo irreprochables los accidentes que sufran al actuar dentro de esos parámetros normales de riesgo. Sin embargo, cuando el accidente se produce fuera de los límites impuestos por la asunción del riesgo por el practicante, puede exigirse responsabilidad civil al culpable.”.

Conforme a la teoría de la asunción de riesgo, el deportista o usuario que contrata la prestación de servicios deportivos asume el riesgo de padecer algún tipo de daño, dependiendo de qué tipo de actividad deportiva realice.

No siempre el daño o lesión que pueda llegar a sufrir el deportista o usuario será originado por el riesgo normal y típico de la propia actividad deportiva. Sino que el daño puede tener su origen o causa en acciones u omisiones controlables por el propio deportista, un tercero o el prestador de los servicios deportivos.

Los prestadores de servicios deportivos son consientes de que generan un riesgo y al mismo tiempo obtienen un beneficio económico, aun cuando el riesgo creado en gran parte es consentido por el deportista o consumidor. Sin embargo, aunque el riesgo se asume por parte del deportista, la empresa prestadora del servicio deportivo será responsable de todo daño que tenga por causa una intensificación anormal del riesgo aceptado, sea esta intensificación negligente o no, por razón del riesgo que se crea.<sup>390</sup>

El aumento del riesgo que asume el deportista por un comportamiento negligente del prestador del servicio deportivo tendrá como resultado la imputación de responsabilidad por culpa del prestador del servicio. Normalmente, las acciones negligentes por parte de los prestadores de servicios deportivos se fundamentan en tres aspectos: 1) La deficiente conservación de las instalaciones o material deportivo empleado; 2) La falta de medidas de organización; y 3) La omisión del cuidado especial que requiere el aprendizaje de algún deporte.

Por lo tanto, el comportamiento negligente o falta de vigilancia por parte del prestador del servicio deportivo, tiene como resultado el incremento del riesgo asumido por el deportista, por lo que será difícil llegar a exonerar al prestador de los servicios por los daños que sufra el deportista fuera del ámbito de riesgo intrínseco de la actividad deportiva.<sup>391</sup>

---

<sup>390</sup> En este sentido MEDINA ALCOZ, María: *Op. cit.*, pp. 92-93 y PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 530.

<sup>391</sup> PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, pp. 530-531, menciona que: “Es importante señalar, que la imputación de responsabilidad al prestador de servicios deportivos, recae sobre un análisis al riesgo asumido por el deportista usuario, de acuerdo a cada situación y a cada tipo de actividad deportiva que se desarrolla, con una conexión causal entre el daño y un aumento del riesgo asumido, que en muchos casos será, aunque no siempre, culpa por parte del prestador de servicios... Por lo que, corresponderá a la víctima probar que la causa material del daño no ha sido el riesgo inherente a la actividad deportiva de la que se trate, sino una fuente que estando bajo el control empresarial del prestador de servicios ha supuesto una intensificación de ese riesgo.”

Mediante una información previa en el contrato sobre el riesgo asumido por el deportista, ante cualquier posible daño dentro de los parámetros normales de riesgo de la realización de la actividad deportiva, será posible la exoneración de responsabilidad civil al prestador de servicios deportivos. Sin embargo la teoría de la asunción del riesgo no tendrá aplicación cuando el origen o causa del daño es el aumento del riesgo derivado de un comportamiento negligente por parte del prestador del servicio deportivo, el cual no debe llegar a afectar el *quantum* indemnizatorio.<sup>392</sup> Pero puede presentarse la existencia de concurrencia de culpas entre la víctima y el prestador del servicio deportivo, entonces si habrá una reducción en el *quantum*.<sup>393</sup>

### **5.3.2. Criterios de imputación de responsabilidad civil a los prestadores de servicios deportivos.**

Como se ha mencionado anteriormente, la exigencia de responsabilidad civil a los prestadores de servicios se debe a la falta de una correcta diligencia sobre seguridad en la prevención de daños o el aumento del riesgo asumido por el deportista. En párrafos anteriores, se indicaron los casos más comunes de negligencia que incurren los prestadores de servicios, de los cuales considero que las condiciones de las instalaciones, la seguridad del equipamiento empleado y las condiciones medioambientales, son las más adecuadas a la presente investigación por su implicación directa con actividades deportivas y de riesgo, por lo que a continuación se intentará explicar y desarrollar este tipo de posibles negligencias.

- Las inadecuadas condiciones de las instalaciones deportivas.

De manera frecuente en los contratos de prestaciones de servicios deportivos se estipula como objeto del contrato la utilización de las instalaciones deportivas, para que el deportista tenga un lugar en donde desarrollar la actividad deportiva deseada.

---

<sup>392</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 64/2011 de 9 de febrero (westlaw RJ 2011\1811), en la cual existió un aumento del riesgo creado por parte del prestador del servicio deportivo, en este caso la práctica del esquí, por omitir una mayor diligencia en las medidas de seguridad en la pista de esquiar..

<sup>393</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 830/2005 de 28 de octubre (westlaw RJ 2005\8558), en el que unos jóvenes se deslizaron sobre un plástico en un pista prohibida de esquí, chocando contra una caseta de cemento la cual no estaba correctamente protegida y sin prevenir las medidas efectivas para la evitación de conductas prohibidas por parte del prestador del servicio deportivo, existiendo una concurrencia de culpas, afectando al *quantum* indemnizatorio, F.D. 2 Y 3.

El deportista espera que el prestador del servicio deportivo tenga unas instalaciones deportivas con las medidas adecuadas de seguridad. Es decir, que el riesgo inherente de la propia actividad deportiva no se incremente o aumente a causa de las malas condiciones de las instalaciones y que éstas cuenten con las medidas de seguridad necesarias para la práctica de la actividad deportiva contratada. Porque ante la falta de seguridad del propietario o del titular que explote las instalaciones tendrán la obligación de responder por los daños y perjuicios que ocasione por su negligente actuación o mantenimiento de las instalaciones.<sup>394</sup>

Son comunes los daños sufridos por los deportistas a consecuencia de las malas condiciones de las instalaciones deportivas en la práctica del esquí. Normalmente, se presentan carencias o inapropiadas medidas de seguridad en la protección de vallas o redes, ante la posibilidad de sufrir caídas por parte de los esquiadores. Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 9 de febrero (AC 2007\1517), en el que un deportista sufrió un accidente en la práctica de esquí, por la ausencia de un colchón de protección que envuelve los postes cercanos a la pista, resultando que las condiciones de seguridad no eran las correctas o adecuadas.<sup>395</sup> La práctica del deporte de esquí comporta un riesgo inherente en su práctica, sin embargo, cuando ese riesgo asumido se incrementa por la negligencia del prestador de servicios, éste debe responder.<sup>396</sup>

---

<sup>394</sup> En este sentido, lo explican con mayor análisis ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil en la explotación...”, *Op. cit.*, pp. 491-493; ORTI VALLEJO, Antonio: “La jurisprudencia sobre...”, *Op. cit.*, pp. 41-42; REBOLLO GONZÁLEZ, Juan Carlos: “Responsabilidad civil en la práctica deportiva...”, *Op. cit.*, pp. 31-32.

<sup>395</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida (Sección 2ª), núm. 55/2007 de 9 de febrero (westlaw JUR 2007\1517), F.D. 3. “...la práctica del esquí, se trata de actividad deportiva que, por sí misma, entraña cierto riesgo y que la práctica voluntaria del mismo supone una aceptación y un sometimiento, también voluntario, de ese riesgo implícito, pero sin que ello implique a ultranza y en todo caso, la existencia de culpa del propio perjudicado en caso de que se produzcan daños corporales, pues pueden concurrir factores ajenos al perjudicado generadores de responsabilidad y de la correlativa obligación de indemnizar, por incidir en una conducta por acción u omisión, merecedora de un juicio de reprochabilidad. Así sucede cuando el daño sufrido por quien realiza esta actividad no sea consecuencia directa de su práctica sino que sea producto de que quien ofrece al público esta concreta práctica deportiva lo haga en condiciones tales que supongan un incremento del riesgo que le es propio, ya sea por el estado de las instalaciones, por sus propias características o forma en la cual ofrecen su ejercicio, o por la inadecuación de los medios que facilita, o por la omisión de alguna de las cautelas que le son razonablemente exigibles para prevenir riesgos, de forma que no hayan agotado la diligencia necesaria en el desarrollo de la actividad que ofrecen a terceros, con quienes contratan y que confían en que, a pesar de todo, no sufrirán ningún tipo de daño. Esta última situación es la que se aprecia en el supuesto enjuiciado, al atribuir responsabilidad a la estación asegurada en la mercantil demandada por falta de las necesarias medidas de seguridad y protección exigibles.”

<sup>396</sup> Para un mayor estudio la responsabilidad civil en la práctica del esquí se puede consultar: DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Pilar: “Información y asunción del riesgo en la práctica del esquí”, *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 19, 2009, paginas 2779-2794; HIDALGO GARCÍA, Santiago: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de esquí”, *Op. cit.*, pp. 6-17; VERDERA SEVER, Rafael:

También es importante señalar los daños que se producen a consecuencia del incorrecto funcionamiento de un medio mecánico como sucede en las estaciones de esquí, dado a que los usuarios no asumen el riesgo de los remotes o telesillas tengan algún defecto de seguridad.<sup>397</sup> Pero situación distinta sería que el deportista o usuario tuviera una participación activa y en la producción del daño, por ejemplo la caída al descender de una telesilla o al perder el equilibrio en un telesquí.<sup>398</sup>

- El equipamiento empleado para el desarrollo de la actividad deportiva.

En algunas actividades deportivas es necesario que el deportista tenga algún equipamiento especial para practicar correctamente la actividad deportiva contratada, y es usual que en el momento de la contratación de la actividad se incluya en el precio el equipo o instrumento necesario para la práctica deportiva.

El deportista o usuario espera que el equipo contratado cuente con las condiciones y garantías necesarias de seguridad para el correcto funcionamiento al momento de practicar la actividad deportiva. Sin embargo, es posible que el daño se origine a causa de un defecto de seguridad en el equipo contratado para la actividad deportiva, por lo que se considera como un daño inesperado que el deportista no debe soportar y tampoco asumir.<sup>399</sup>

Es posible que la causa del daño se origina por un defecto de fabricación, por lo que la responsabilidad del prestador de servicios deportivos será concurrente con el fabricante o importador del equipo empleado para la práctica deportiva. Cuando exista una concurrencia de culpas entre el prestador de servicios deportivos y el fabricante o

---

“Una aproximación a los riesgos del deporte”, *Indret, Working Paper*, núm. 116, 2003, [www.indret.com](http://www.indret.com); LAMARCA I MARQUÉS, Albert: “Accidentes de esquí”, *Indret, Working Paper*, núm. 110, 2002, [www.indret.com](http://www.indret.com).

<sup>397</sup> Véase, HIDALGO GARCÍA, Santiago: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de esquí”, *Op. cit.*, p. 11; ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil en la explotación...”, *Op. cit.*, p. 492.

<sup>398</sup> Así en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca (Sección 1ª), núm. 175/2008 de 28 de julio (westlaw JUR 2008\353257), en donde hubo un accidente en la práctica del esquí, el cual el deportista sufrió una caída por no estar adecuadamente colocado cuando el remonte o telesilla se aproximaba, se demostró la ausencia de responsabilidad por parte del prestador del servicio.

<sup>399</sup> PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 548 dice: “... el daño debe imputarse al prestador de servicios por tratarse de un daño derivado de un riesgo por él creado a consecuencia del desenvolvimiento de una actividad de la que obtiene un beneficio económico, con independencia de que el daño haya sido fortuito o imputable a la negligencia de un tercero, como el fabricante.”.



importador del material o equipo deportivo, la responsabilidad civil será solidaria y con posibilidad de repetición entre ellos.<sup>400</sup> Sin embargo, cuando la causa del daño sea por falta de mantenimiento o porque el material o equipo se encuentra obsoleto, el prestador de servicios deportivos será el único responsable por su falta de vigilancia.

Cuando se va a utilizar un material o equipo específico para el desarrollo de una actividad deportiva, el prestador de servicios deportivos tiene la obligación de informar al deportista usuario de su correcta utilización y sin olvidar mencionar los posibles peligros que conlleva su uso y manejo.<sup>401</sup>

- Problemas meteorológicos que afecten la práctica deportiva.

Diversas actividades deportivas se desarrollan en un entorno natural y el deportista asume todos los riesgos inherentes que conlleva su práctica, porque el riesgo asumido aumenta por el solo hecho de practicar alguna actividad deportiva en la naturaleza, por eso no es obligatoriamente necesario que el prestador de servicios deportivos informe de este tipo de riesgos.

Pero cuando se vaya a practicar una actividad deportiva en la naturaleza y se presenta unas condiciones medioambientales que afecten o aumenten el riesgo asumido por el deportista para la práctica de la actividad deportiva contratada, el prestador del servicio deportivo si tiene la obligación de informar, ya que si no lo hiciera se le podría imputar de responsabilidad civil.<sup>402</sup>

---

<sup>400</sup> En el artículo 137 y ss. del TRLGCU se establece el concepto legal de producto defectuoso y la manera de imputar de responsabilidad civil al fabricante e importador de los productos defectuosos; PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p.548, menciona que: “En el supuesto de concurrencia de responsabilidad entre el prestador de servicios y la del fabricante o importador, sería solidaria y con la posibilidad de repetición entre los deudores responsables conforme al ex artículo 1145 del C.c., por lo que el prestador de servicios puede reclamar al fabricante o importador la totalidad de la indemnización satisfecha a la víctima, si la causa del daño solo hubiese sido que el equipo estuviese defectuoso y sin que el prestador del servicio hubiese contribuido en el incremento del riesgo que por su defecto de origen ya existía, y esto sucede cuando el prestador del servicio sabe que tiene un defecto el equipo y aun así lo sigue ocupando para el desarrollo de la actividad.”.

<sup>401</sup> Así se muestra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 5ª), núm. 401/2010 de 8 de octubre (westlaw JUR 2011\71708), en el que un deportista contrató una moto de esquí y sufrió un accidente, resolviendo que hubo una concurrencia de culpas por ambas partes, pero especificando que no hubo una correcta información por parte del prestador del servicio en cómo utilizar de manera adecuada el equipo alquilado, es decir la moto de esquí.

<sup>402</sup> Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 23 de marzo de 1988 (westlaw RJ 1988\2226), en la cual se condenó a la estación de esquí demandada por no haber informado correctamente al deportista accidentado sobre la ausencia de nieve en una de las pistas de la estación, siendo esta la causa del daño, porque la ausencia de nieve es una circunstancia que incrementa el riesgo inherente en la práctica del esquí.

Existe la posibilidad de que se presente una situación o evento, por el cual el prestador del servicio deportivo no prevé ciertos acontecimientos inciertos y más aun cuando se desarrollan en la naturaleza. Es decir, que dentro de los riesgos que asume el deportista se encuentran los eventos impredecibles que sorprendan tanto al deportista como al prestador del servicio deportivo, por ejemplo un terremoto cuando se practica alpinismo.<sup>403</sup>

### **5.3.3. El nexo de causalidad del daño.**

#### **A) La causa del daño.**

El daño que se origine fuera del ámbito del riesgo asumido por el deportista, se comprende que no ha sido por un comportamiento negligente por parte de él. Es decir, el daño se causa por la falta de diligencias de seguridad por parte del prestador del servicio deportivo, provocando así el aumento del riesgo asumido. Por ello, cuando el deportista sufra un daño a consecuencia de un comportamiento negligente del prestador del servicio deportivo tiene que probar o justificar ante los Tribunales competentes, que la causa del daño se origina por el aumento del riesgo asumido y a su vez que el aumento del riesgo se presento de manera sorpresiva y no asumida.<sup>404</sup>

En consecuencia, el sistema de responsabilidad civil imputable al prestador de servicios deportivos no se basara en la culpa del deportista por el riesgo asumido. Al contrario, se debe justificar que la causa del daño se origina fuera del ámbito del riesgo asumido por el deportista, siendo así una imputación causal objetiva al prestador del servicio deportivo. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 9 de febrero (westlaw RJ 2011\1822), considero responsable a la empresa prestadora del servicio de esquí, porque un esquiador sufrió una caída impactando con un cañón de nieve artificial, provocando la rotura de vértebras que le ocasiono una

---

<sup>403</sup> Así PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, pp. 550-551; REBOLLO GONZÁLEZ, Juan Carlos: “Responsabilidad civil en la práctica deportiva...”, *Op. cit.*, p. 38, señala que, cuando en la práctica deportiva de montañismo contratada con una empresa, “se exige que se tenga e cuenta los datos meteorológicos y se repasen las normas de seguridad con los clientes antes de empezar la actividad.”, así no existirá un incremento al riesgo asumido por el deportista.

<sup>404</sup> En este sentido, ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 487, señala que: “... el titular de las instalaciones deportivas o el organizador de la actividad deportiva sólo será responsable del daño que sufre el deportista en la medida que se haya causado por su culpa o negligencia...”; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 64/2011 de 9 de febrero (westlaw RJ 2011\1822), F.D. 1.3 y 4.

parapleja. Se demuestra el incremento del riesgo inherente a la práctica deportiva, por la omisión de las medidas de seguridad necesarias para prever un riesgo previsible.<sup>405</sup>

Resulta difícil o incluso imposible tener una certeza jurídica de que el daño se origina por una intensificación del riesgo por parte del prestador de los servicios deportivos, o en su caso, que el daño se encuentra dentro de la esfera del riesgo asumido por el deportista. Por eso, es importante que el prestador de servicios cumpla con todas sus obligaciones y con más énfasis en la de informar o instruir al deportista correctamente en la manera de practicar la actividad deportiva que se va a desarrollar y de las consecuencias o riesgos que conlleva su mala práctica. A su vez, el deportista tiene la obligación de respetar y desarrollar correctamente la práctica deportiva conforme a las recomendaciones o medidas de seguridad que proporciona el prestador de servicios deportivos.<sup>406</sup>

## **B) La aplicación de la responsabilidad objetiva.**

El criterio de imputación de responsabilidad civil de los prestadores de servicios deportivos es el “incremento del riesgo asumido”. Es decir, el criterio de atribución de la responsabilidad ya no es la culpa sino el riesgo creado por el prestador del servicio deportivo con su actuar. En este sentido, quien recibe un beneficio por la práctica de una actividad peligrosa susceptible de causar un daño a un tercero, debe indemnizar a quien haya resultado perjudicado.<sup>407</sup>

La responsabilidad objetiva no debe ser de aplicación general en el ámbito del deporte, porque en la práctica de cada una de las actividades deportivas que se pueden desarrollar siempre se asume un riesgo que soporta el deportista, tal es el caso de un daño la práctica deportiva dentro de una competencia oficial a causa de la acción del algún adversario y que actúa dentro de los lineamientos deportivos correctos. Sin embargo, la doctrina del riesgo o la aplicación de una responsabilidad

---

<sup>405</sup> Así, HIDALGO GARCÍA, Santiago: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de esquí” *Op. cit.*, pp. 10-13, destaca mediante un estudio y análisis la sentencia.

<sup>406</sup> El Derecho de recibir una información adecuada, es un Derecho reconocido a los consumidores y usuarios el cual se explico en capítulos anteriores.

<sup>407</sup> Varios autores mencionan que es una responsabilidad cuasi objetiva, entre ellos: MALDONADO RAMOS, Jaime: “Jurisprudencia reciente de la Sala Primera...”, *Op. cit.*, pp. 86-87; REBOLLO GONZALÉZ, Juan Carlos: “Responsabilidad civil en la práctica deportiva...”, *Op. cit.*, pp. 32-33; ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 487. Otro autores mencionan que es objetiva, PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 569; DE LA TORRE OLID, Francisco: “Derecho y deporte. Particular...”, *Op. cit.*, pp. 28-29.

objetiva, será en los casos que presenten un notable grado de peligrosidad y a su vez está acompañado de un lucro por parte de quien presta o permite el desarrollo de la actividad deportiva. Por eso, cuando los organizadores o titulares de las instalaciones infringen sus obligaciones de seguridad su responsabilidad será objetiva, por lo que el deportista debe demostrar que el daño originado se causa fuera de su ámbito de riesgo asumido.<sup>408</sup>

Es importante comparar el incremento del riesgo con otras causas de imputación, que puedan influir de manera directa en el origen del daño y valorar si puede llegar a ser una causa de exoneración de responsabilidad para el prestador de servicios deportivos. Estas circunstancias son: la asunción del riesgo, la culpa de la víctima y el riesgo general de la vida.

- La asunción del riesgo.

Cuando se pueda acreditar que el daño se origina o causa por el incremento del riesgo inherente de la actividad deportiva por parte del prestador de servicios, la asunción del riesgo no forma parte del nexo causal del daño. Es decir, el daño se produce por el aumento del riesgo creado por el prestador de servicios deportivos (que a la vez recibe un beneficio económico) y no por la manifestación de voluntad o aceptación del riesgo intrínseco de la práctica deportiva.<sup>409</sup>

- La culpa de la víctima.

Cuando el resultado dañoso se origine de forma única y exclusiva a la actuación negligente o imprudente de la propia víctima, solo se podrá imputar de responsabilidad al propio lesionado o a los encargados de su guardia y custodia, es decir, es culpa

---

<sup>408</sup> En este sentido, en un amplio análisis YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: “El deporte y los espectáculos deportivos en el contexto general de la responsabilidad civil”, en GÓMEZ GÁLLIGO, Francisco Javier (Coord.), *Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias, Vol. 2*, Civitas, Madrid, pp. 1819-1821, señala que: “En resumen, la responsabilidad objetiva o sin culpa no puede pasar a ser la regla general, sino la excepción. Fuera de los casos en los que la establece el propio legislador con el fin de que se gobiernen con ellas los casos de daños y perjuicios causador en el desarrollo de actividades que presentan un notable grado de peligrosidad (navegación aérea, energía nuclear, vehículos de motor, productos defectuosos, caza, animales, etc.), lo más a lo que puede llegar el aplicador de un Derecho que presenta la responsabilidad subjetiva o por culpa como regla básica del sistema es extremar el rigor en la apreciación de la diligencia, o a permitir el juego de la prueba de presunciones de culpa. Tanto más cuanto más peligrosa sea la actividad dañosa, y más si cabe de la misma se genere un beneficio para quien la lleve a cabo... Acaso, como también veremos, sean en parte distintas las varas de medir en relación con los organizadores de los eventos deportivos o con los titulares de las instalaciones en las que se practica la actividad o en las que tales eventos tiene lugar...”.

<sup>409</sup> En este sentido, PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: “La responsabilidad civil...”, *Op. cit.*, p. 570.

exclusiva de la víctima. Sin embargo, pueden presentarse casos en que la conducta de la víctima no es la única causa del daño, porque puede presentarse la falta de medidas de seguridad por parte del prestador del servicio deportivo, por lo cual habría una aminoración en el quantum indemnizatorio.<sup>410</sup>

Si el usuario deportivo es víctima de un daño y no es producto del riesgo asumido, ni tampoco se origina por un comportamiento negligente de él. La responsabilidad del prestador de servicios deportivos se decidirá en que si la causa del daño se origina por una circunstancia imputable al prestador del servicio por haber aumentado el riesgo asumido por el deportista.

- Los riesgos generales de la vida.

Los daños generales de la vida son aquellos que pueden suceder en cualquier momento, sin afectar el aumento del riesgo asumido por el deportista al instante de practicar cualquier actividad deportiva. Por ejemplo, las caídas que se producen en instalaciones deportivas, siendo accidentes que pueden llegar a suceder en cualquier otra situación.

Existen casos en los que el riesgo de sufrir una caída es mayor, por el hecho especial de las condiciones en que se encuentran las instalaciones en donde se desarrollan ciertas actividades deportivas, por lo que entonces dejaría de ser un riesgo general de vida para convertirse en un riesgo específico de ciertas actividades deportivas. Un ejemplo, es el fallo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 12 de junio de 2007 (westlaw JUR 207\301208), en la que se condenó a la estación de esquí demandada a indemnizar los daños sufridos a un usuario al resbalar por causa del hielo existente en uno de los caminos de acceso, en el cual el prestador de servicios deportivos no preparo el camino conforme al estado climatológico del lugar, razón por la que debió haber esparcido sal por el camino para poder evitar el aumento y acumulación de hielo. La sentencia es acertada porque un resbalón en estas condiciones no es un riesgo general de vida, sino un riesgo específico. Además la causa de la caída ha sido una circunstancia imputable al prestador de servicios por la ausencia de sal en el camino que ha incrementado el riesgo de caída.<sup>411</sup>

---

<sup>410</sup> Es muy frecuente que la culpa exclusiva de la víctima se presente en la práctica del esquí, así lo expone con un análisis jurisprudencial amplio HIDALGO GARCÍA, Santiago: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de esquí”, *Op. cit.*, pp. 13-15,

<sup>411</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja (Sección 1ª) núm. 179/2007, de 12 de junio (westlaw JUR 2007\301208), F.D. 1, “.... La zona en que se produce la caída forma parte de las instalaciones de la

Existen enfermedades que puede llegar a desconocer o padecer el deportista por la práctica de ciertas actividades deportivas y más aún con las de alto riesgo, por ejemplo, la de sufrir un infarto o paro cardíaco. En los deportes de alto riesgo existe la posibilidad latente de sufrir una enfermedad súbita, por lo que deja de ser un riesgo general de vida para convertirse en un riesgo específico de ciertas actividades deportivas, por lo que alguna imputación de responsabilidad civil al prestador del servicio deberá valorarse en términos de la asunción del riesgo o del incremento del riesgo asumido.<sup>412</sup>

En las actividades deportivas de riesgo en donde se puedan presentar enfermedades súbitas, es de especial consideración la obligación de información y de las posibles recomendaciones que conlleva la práctica de actividades deportivas de riesgo por parte de los prestadores de servicios para personas que puedan sufrir determinadas patologías.

#### **5.3.4. Supuestos de no imputación de responsabilidad civil al prestador del servicio deportivo.**

El prestador de servicios deportivos puede no ser imputado de responsabilidad civil cuando se justifique que el daño sufrido por el deportista se origina o causa por un evento ajeno a la actividad desplegada por el prestador del servicio deportivo, provocando la inexistencia de un nexo causal. Estos supuestos o casos de exoneración de responsabilidad civil al prestador de servicios deportivos son: 1) fuerza mayor o caso fortuito; 2) por culpa exclusiva de la víctima y; 3) por acto de un tercero.

- Fuerza mayor o caso fortuito.

---

propia estación de esquí, explotada por Valdezcaray SA, que debe, igual que en el resto de las instalaciones, velar por la seguridad de los usuarios que acuden a la misma, facilitando los accesos sin riesgo, adoptando las medidas precisas al respecto, lo que en este caso en la zona en la que cayó la Sra. Regina no realizó, aunque sí actuase de tal modo en la zona aneja de aparcamiento y paso de peatones. Tal situación, además de evidente, no es cuestionada: ni se retiró la nieve y el hielo en la zona de paso para peatones en que cayó la actora, ni se vertió sal sobre la misma para evitar deslizamientos y caídas, ni se avisó siquiera del riesgo que suponía transitar por el lugar.”.

<sup>412</sup> PIÑEIRO SALGUERO, José: “Accidentes deportivos: lesiones...”, *Op. cit.*, [www.indret.com](http://www.indret.com), pp.23-25, menciona que dentro de las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios deportivos de riesgo, se debe cumplir con la información sobre enfermedades o patologías que pueda llegar a padecer el deportista, para que se abstenga de participar en la práctica de la actividad deportiva de riesgo.

Los casos de fuerza mayor son aquellos acontecimientos que no tienen una conexión causal con la prestación del servicio deportivo contratado. Un ejemplo de este tipo de situación, sería como el que se resolvió en la Audiencia Provincial de Málaga de 30 de mayo (AC 2005\1288), en la que no se considero responsable al que impartía una clase de gimnasia por los daños sufridos por el deportista al correr hacia atrás en el tatami y sufrir una caída fortuita.<sup>413</sup>

- Por el acto de un tercero ajeno al prestador del servicio deportivo.

Otro de los supuestos de exoneración para el prestador de servicios deportivos de responsabilidad civil son los actos de terceros y que los daños originados sean ajenos del riesgo creado por la práctica o por el desarrollo de la actividad deportiva.<sup>414</sup>

Sin embargo, no es posible exonerar de responsabilidad civil a los prestadores de servicios deportivos por los daños que se originen a causa de algún defecto de fabricación en el material deportivo que se proporcione a los deportistas para la práctica deportiva, por el defectuoso mantenimiento de las instalaciones cuando compete a un empresa externa o al propietario si es un sujeto distinto del prestador de servicios. En estos casos, la imputación de responsabilidad civil será tanto para el prestador de servicios deportivos como para al tercero, independientemente de los niveles de diligencia empleados. Sería una responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la posibilidad de repetición frente al tercero, de acuerdo a una proporción conforme a la participación de cada uno en la producción del resultado del daño.<sup>415</sup>

- La culpa exclusiva de la víctima.

La culpa exclusiva de la víctima es una causa de exonerar de responsabilidad al prestador de servicios deportivos. Porque la única causa del daño, se origina en exclusiva a la víctima, al no existir una causa o circunstancia de imputación al prestador de servicios deportivos. Es decir, no existe un incremento en el riesgo

---

<sup>413</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 4ª), núm. 463/2005 de 30 de mayo (westlaw AC 2005\1288), F.D. 3.

<sup>414</sup> ORTI VALLEJO, Antonio: “La jurisprudencia sobre...”, *Op. cit.*, p. 43; ORTI VALLEJO, Antonio: “La responsabilidad civil en la explotación...”, *Op. cit.*, p. 496; LAMARCA I MARQUÉS, Albert: “Accidentes de esquí”, *Indret, Working Paper*, núm. 110, 2002, [www.indret.com](http://www.indret.com), pp. 8-9.

<sup>415</sup> Véase, en la presente investigación, la Parte Especial, capítulo II. 5.3.2. “Criterios de imputación de responsabilidad civil a los prestadores de servicios deportivos”.

creado o desplegado por el prestador del servicio deportivo, solo encontramos la asunción del daño por la simple práctica de la actividad deportiva.<sup>416</sup>

La culpa exclusiva de la víctima es causa de exoneración de responsabilidad civil para el prestador de servicios deportivos, porque la causa que origina el daño es imputable al deportista. Es decir, no se demuestra que exista una causa de imputación de responsabilidad por el incremento del riesgo creado o desplegado por el prestador de servicios deportivos. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial del Granada de 16 de marzo de 2005 (JUR 2005/138862)<sup>417</sup> al considerar que los daños sufridos por un esquiador que colisiono contra un palo que se encontraba correctamente protegido, sea por la culpa exclusiva del deportista por descender a una velocidad notablemente inadecuada para las características de la pista, pero se observa que el fallo hubiera sido realmente el mismo si el usuario se hubiera comportado diligentemente, porque en ese supuesto habría sido una materialización de un riesgo asumido que no hubiera resultado incrementado por la conducta del prestador de servicios.

## **6. RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS EN LOS QUE SE INCLUYE UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE RIESGO.**

En este apartado, se expondrán sentencias de tribunales en las se hayan resuelto controversias de responsabilidad civil derivado de un contrato de viaje combinado en el que se incluyan actividades deportivas o de riesgo. En principio, la imputación del daño sufrido por el turista o deportista se deriva del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones establecidas en el contrato de viaje combinado.

Como sabemos, el contrato de viaje combinado está compuesto frecuentemente por el transporte, el alojamiento y otros servicios (en este caso, actividades deportivas), por un precio global. En este sentido, el contrato de viaje combinado se vende como un todo, y la falta de alguno de las prestaciones se puede considerar como un incumplimiento contractual. La mayoría, de las actividades deportivas contratadas en un viaje combinado, las ejecutan las empresas prestadoras de servicios especializadas en actividades deportivas o de riesgos, que previamente la agencia de

---

<sup>416</sup> En este sentido, MALDONADO RAMOS, Jaime: “Jurisprudencia reciente de la Sala Primera...”, *Op. cit.*, pp. 84-85.

<sup>417</sup> Véase, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), núm. 207/2005 de 16 de marzo (westlaw 2005\138862), F.D. 2.



viajes (organizadora y detallista) contrata como elemento integrador de la oferta del viaje combinado.

Es importante volver señalar, que la responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado es objetiva y solidaria, conforme a lo establecido en el Libro IV del TRLGDCU, que regula los viajes combinados.

En el contrato de viaje combinado una empresa organizadora o detallista se compromete al desarrollo adecuado del viaje y con las obligaciones de resultado contraídas, por lo que existe responsabilidad del organizador y detallista por las actuaciones que realicen otros prestadores de servicios. Usualmente las prestaciones de un viaje combinado, son proporcionadas por el organizador y detallista, pero a su vez se pueden cumplir las obligaciones principales sirviéndose de otros empresarios, de modo que la responsabilidad por el cumplimiento total de las prestaciones del viaje combinado, no sólo puede recaer sobre las actuaciones que realicen las agencias de viajes, sino también a las derivadas de las colaboraciones concertadas con otras personas o empresas.

Se expondrán las sentencias por las que se condena o absuelve a los organizadores y detallistas de responsabilidad civil por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato de viaje combinado, en relevancia con actividades de ocio, deportivas y de alto riesgo y en las que intervienen otros prestadores de servicios.

A) Jurisprudencia donde existe responsabilidad de los organizadores y detallista, por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las prestaciones de ámbito deportivo, de ocio y de riesgo.

+ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Isla Baleares, de 9 de noviembre (Westlaw JUR 2010\8687), se condena de manera solidaria al organizador y detallista a indemnizar al consumidor o turista por el defectuoso cumplimiento del contrato de viaje combinado, porque el alojamiento fue en un hotel con distintos servicios y ubicación previamente contratado. Los consumidores o turistas contrataron un viaje combinado en el que se incluía diversos servicios turísticos que eran el transporte, alojamiento y la práctica de determinadas actividades, etc. La agencia de viajes informa antes del inicio del viaje, que no se podían alojar en el hotel contratado, así que se ofreció otro hotel supuestamente con las mismas condiciones al inicialmente contratado. Sin embargo no fue así, en el F.D. 2 de la citada sentencia se señala que: “aun cuando los hoteles... tengan igual categoría (tres estrellas), no disponen de los

mismos servicios y ni tampoco son similares en cuanto a su ubicación...”. Además, no contaba con los servicios para la realización de determinadas actividades.

Al ser un cumplimiento defectuoso en uno de los objetos principales del contrato, frustró a los actores el disfrute del viaje y se condenó una indemnización. Es importante señalar, que en la sentencia no se especifica qué tipo de actividades eran, sin embargo, pueden ser actividades de ocio o deportivas que se quería realizar, ya sea porque el hotel contaba con cierto tipo de instalaciones (como puede ser cancha de tenis, baloncesto, etc.) y que el consumidor o turista no pudo realizar por la ausencia de instalaciones que contaba el segundo hotel en el contrato de viaje combinado.<sup>418</sup>

+ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 23 de marzo (Westlaw AC 1999\739), resuelve que existió un incumplimiento parcial o deficiente dentro de un contrato de viaje combinado, porque en el folleto informativo del viaje se refería que en el hotel existían actividades de equitación, cuando realmente el establecimiento hotelero carecía de esos servicios. Además, se demuestra que el turista o deportista decidió contratar el hotel ofertado en el viaje combinado porque tenía la posibilidad de practicar la actividad deportiva de equitación, de manera que el tribunal resolvió condenar a la agencia de viajes a indemnizar los daños sufridos al consumidor por un cumplimiento defectuoso contractual.<sup>419</sup>

---

<sup>418</sup> En esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª), núm. 469/2009, de 30 de septiembre (westlaw JUR 2010\8687), existe un incumplimiento de las obligaciones principales del contrato de viaje combinado, tal y como lo señala el artículo 162.1 del TRLGDCU, en el que los organizadores y detallistas serán responsables directos, en función de las obligaciones que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión. Así, MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, María del Pilar: “Orientaciones jurisprudenciales sobre la responsabilidad de organizadores y detallistas en los viajes combinados”, *Práctica de Tribunales, Revista especializada en Derecho procesal civil y mercantil*, núm. 63, septiembre 2009, p. 37, “Teniendo en cuenta que el organizador se compromete a un viaje concertado como un todo, y no como una mera suma de prestaciones independientes, se considera que existe incumplimiento del viaje en caso de que se deje de cumplir alguna de las prestaciones incluidas en el programa...”.

<sup>419</sup> Conforme al artículo 153 del TRLGDCU, la información contenida en el folleto o programa- oferta del viaje combinado, será vinculante para el organizador y detallista. Dado que en el folleto del viaje se mencionaba la actividad de equitación, esto fue motivo para la vinculación y la reclamación de daños, que en el presente caso le es de aplicación el artículo 162.2 del TRLGDCU, por lo que el organizador y detallista responderán del incumplimiento deficiente, en este sentido un incumplimiento parcial. La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), núm. 203/1999, de 23 de marzo (westlaw AC 1999\739), F.D. 1, “...el hotel elegido, la posibilidad de la práctica de la equitación en el propio Hotel, pues, a más de otros servicios, venía incluido entre ellos, al consignar la palabra «caballos», como dice la juzgadora indicada, así como entre los servicios en el panel de entrada al Hotel, y esas expresiones no van referidas a la mera visión, sino mostrar dicha posibilidad de esa práctica deportiva, es decir, su monta, sea en paseos o en otras actividades propias de esos animales y su utilización por el hombre; aunque no se ha probado el grado de determinación e influencia que pudiera haber movido al actor a aceptar la oferta, sólo contamos con sus afirmaciones, es evidente que en su propósito estaba la

+ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 19 de mayo (Westlaw AC 2000\4309), el actor y tres amigos contrataron un viaje combinado con una agencia de viajes que comprendía cuatro noches en un apartamento, 5 días forfait, material de esquí y un seguro de accidentes en pista. En el primer descenso que realizaban en las pistas de esquí, uno de ellos cayó al intentar esquivar a otro esquiador y no pudo desprenderse el esquí izquierdo de la bota, en consecuencia sufrió graves lesiones en su rodilla izquierda. En el parte de la evaluación, se indicó que el mecanismo de fijación de la bota era defectuoso y que la agencia de viajes no había concertado un seguro de accidentes en pista de esquí.<sup>420</sup>

+ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 27 de julio (Westlaw JUR 2007\91621), en la que se demuestra responsabilidad de la agencia de viajes, por el incumplimiento de un contrato de viaje combinado. El turista o deportista extravió su equipaje que contenía un equipamiento especial para la realización de la actividad deportiva de trekking. En consecuencia, no pudo realizar de forma esperada el viaje combinado y su actividad deportiva, el tribunal resuelve que se indemnice al turista por daños morales al no poder disfrutar de sus vacaciones.<sup>421</sup>

---

utilización de esos servicios, bien por él o por sus hijas o hija, prueba de ello es la fotografía de la habitación del hotel, con botas altas; a viaje tan largo no se suelen llevar sino es para esa práctica...”; F.D. 3, “Ante ello debemos concluir que influyó en la elección del viaje ofertado y establecimiento concertado, la existencia de actividades de equitación; existió no un incumplimiento total, sino solamente parcial o deficiente, pues no es lo mismo su práctica en el mismo Hotel o dependencias inmediatas que tener que desplazarse a otro aunque sea cercano, sin que se necesite más comentarios...”.

<sup>420</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6ª), núm. 477/2000 de 19 de mayo (westlaw AC 2000\4309), F.D. 6. Se condena a la agencia de viajes a pagar una indemnización. Por un lado, el seguro concertado con la aseguradora era de asistencia sanitaria y, por tanto, sólo cubría los gastos de asistencia en los días de viajes, no los posteriores a consecuencia de la lesión. En segundo lugar, se condena a la agencia de viajes en virtud de los arts. 8.1 y 27.1 de la LGDCU, y porque en el folleto publicitario se señalaba que existía un seguro de accidentes en pista, que el actor había acordado, cuando en realidad la entidad no había suscrito tal seguro. Como la lesión fue a consecuencia del incorrecto funcionamiento de la fijación, la entidad debe pagar los de más gastos, así PIÑEIRO SALGUERO, José: “Responsabilidad civil. Práctica deportiva...”, *Op. cit.*, p. 417; No debemos olvidar que conforme a los artículos 152 y 153 del TRLGDCU, “la información contenida en el programa-oferta será vinculante para el organizador o el detallista del viaje combinado”.

<sup>421</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3ª), núm. 124/2006 de 27 de julio (westlaw JUR 2007\91621), F.D. 4 y 5. En este sentido, BALLESTEROS DE LOS RIOS, María: “El contrato de viaje combinado”, *Op. cit.*, pp. 4786-4787, los daños morales derivados de la frustración de las vacaciones “Para determinar el daño moral hay que tener en cuenta la utilidad del viaje que pueda haber sido prevista por las partes (viajes de novios, de nieve, de aventura...) o, en caso contrario venir determinada por la finalidad usual de este tipo de negocios... en otros supuestos la indemnización por daño moral surge del fracaso del fin normal de esta clase de negocios, al frustrarse las expectativas y objetos lúdicos y de ocio, que constituyen un elemento determinante de la oferta.”. Sin duda, por la pérdida del equipaje, que era el equipo especial para la práctica de la actividad deportiva no pudo disfrutar el viaje y por ello sufre un daño moral. Sobre la responsabilidad civil el artículo 162.1 del TRLGDCU, establece la regla de responsabilidad solidaria entre los distintos empresarios que concurran conjuntamente en el contrato, ORTUÑO BEAZA, María Teresa: “La regulación de los viajes combinados

+ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de 25 de octubre (Westlaw AC 2004\1858), los turistas o deportistas reclaman responsabilidad civil contractual a la agencia de viajes, por el incumplimiento de diversas prestaciones o servicios en un contrato de viaje combinado. Resolviendo el tribunal que se indemnice a los actores la cantidad abonada por incumplimiento general del programa del viaje combinado que decía “todo incluido”. De los diversos incumplimientos de la agencia de viajes, resaltan la ausencia de clases de buceo y que las actividades deportivas se alejaron mucho de lo ofrecido en el programa del viaje combinado.<sup>422</sup>

+ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, de 21 de junio (Westlaw AC 1999\1426), se demuestra la existencia de responsabilidad civil por incumplimiento contractual, por parte de la agencia organizadora del viaje combinado y la empresa intermediaria que presta el servicio deportivo contratado dentro del viaje combinado. Se resuelve indemnizar a los consumidores o turistas por daños morales consistente en no poder cruzar el país de destino en un vehículo 4 x 4 (se considera como actividad deportiva de riesgo), por la avería de dichos vehículos. La actividad deportiva de aventura establecida en el contrato de viaje combinado, se debe cumplir conforme a lo pactado.<sup>423</sup>

---

por el TRLGDCU: Novedades más significativas en la protección del consumidor turístico”, *Práctica de Tribunales, Revista especializada en Derecho procesal civil y mercantil*, núm. 63, septiembre 2009, p. 18.

<sup>422</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial (Sección 2ª), núm. 280/2004 de 25 de octubre (westlaw AC 2004\1858), F.D. 2. En la sentencia se hace referencia a la antigua Ley de Viajes combinados, por lo que en este caso sería de aplicación el artículo 161 del TRLGDCU, dado que el incumplimiento del contrato fue con posterioridad a su inicio, aunque el dicho artículo se refiere a una parte importante, también es de aplicación a aquellos cumplimientos defectuoso o parciales que previamente se hubieran contratado, es decir a las actividades deportivas o de buceo. En este sentido DE LA HAZA, Pilar: *Op. cit.*, p. 184, “...el consumidor tiene derecho a la percepción y disfrute de un objeto complejo, compuestos por un conjunto de servicios, prestados directamente por diferentes empresas con las que él no ha contratado... , existirá incumplimiento cuando se produzca una inadecuación entre la efectiva prestación y los servicios descritos en las cláusulas contractuales relativas al objeto de la prestación del viaje: el destino, el itinerario, el número de comida o las excursiones y visitas incluidas...”, por lo que se incluyen las actividades de buceo previamente contratadas.

<sup>423</sup> En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 1ª), núm. 389/199 de 21 de junio (westlaw AC 1999\1426), F.D. 3, “...de acuerdo con los términos de la Ley de 1995, tanto la pérdida de los servicios contratados y en la forma en que lo fueron (privación durante tres días de los vehículos 4x4), como el daño moral, consistente en la frustración de las expectativas y objetivos lúdicos y de ocio, que constituían elemento determinante de la oferta...”. Se contrata un viaje combinado con una actividad deportiva de aventura, en los cuales es de aplicación la teoría de la asunción del riesgo por la realización de este tipo de actividades (tal como se explico en apartados anteriores). Sin embargo, en este caso no hubo un daño físico de reclamación, sino más bien un daño moral, derivado del incumplimiento de una de las prestaciones del contrato de viaje combinado, por lo que no es de aplicación la teoría de la asunción del riesgo. Sin son de aplicación los artículos 161 y 162 del TRLGDCU, en el caso específico de la responsabilidad civil en el contrato de viaje combinado, los organizadores y detallistas responderán frente al consumidor en función de las obligaciones que le correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales con independencia de que éstas deban ser ejecutadas por ellos o terceros, los prestadores de servicio. En este sentido,

+ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, de 19 de septiembre (Westlaw AC 1998\1658), se resuelve que existe una responsabilidad civil solidaria entre la agencia de viajes organizadora del viaje combinado y la empresa encargada de prestar el servicio de una actividad deportiva, en este caso un estación de esquí. Los turistas o deportistas reciben una indemnización por el incumplimiento defectuoso de una de las prestaciones pactadas en el contrato de viaje combinado. Porque el motivo de la contratación de este viaje combinado por parte de los turistas fue poder practicar la actividad deportiva de esquí y cuando los consumidores llegaron al destino del viaje le fue imposible esquiar, por estar cerrada la estación de esquí por falta de nieve.<sup>424</sup>

+ Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, de 2 de octubre (Westlaw JUR 2006\257252). En el presente caso la demandante junto con su esposo y un grupo de amigos contrató con la agencia de viajes un viaje de tipo combinado, en el que se establecía los servicios de alojamiento con pensión completa y otras actividades, de las cuales una de las actividades pactadas consistía en un paseo a caballo bajo la vigilancia de un monitor. El daño se produjo cuando se encontraban a cierta distancia del punto de salida una yegua, que estaba situada delante del caballo montado por la

---

RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo: “Viajes combinados. Solidaridad de los organizadores tras el Texto Refundido de la LGDCU”, *Op. cit.*, p. 21., en la sentencia citada, el que presta el servicio de los vehículos es otra empresa que el organizador del viaje combinado contrata previamente, y por ello se debe de responder del incumplimiento del servicio contratado en el viaje combinado.

<sup>424</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincia de Castellón (Sección 1ª), núm. 425/1998 de 19 de septiembre (westlaw AC 1998\1658), F.D. 4, “...en el fondo del asunto de la documentación obrante en autos se deduce que la demandada sólo cumplió parcialmente sus obligaciones contractuales, pues a tenor de las condiciones generales predispuestas por ella misma para este tipo de viajes, no informó a los viajeros sobre el estado en que se encontraba la estación de esquí francesa donde el día 26 de diciembre debían llegar, permitiendo que aquéllos desembolsaren las cantidades pendientes de pago los días inmediatamente anteriores a la salida del viaje. En efecto, durante los días 19 a 26 de diciembre de 1994, la estación de «los siete lagos» estuvo cerrada por falta de nieve. Esta circunstancia tenía obligación de conocerla la organizadora del viaje, y de este modo proceder, tal y como señalan las condiciones generales antedichas, a la anulación de los gastos que fueron satisfechos finalmente por los demandantes...”. En este caso, el organizador del viaje combinado no cumplió con la obligación de dar información adicional a los viajeros o usuarios sobre el estado de las pistas de esquí, ya que al momento de llegar a la estación de esquí no había nieve suficiente para la práctica deportiva del esquí. La obligación de informar al consumidor antes del inicio del viaje se encuentra en el artículo 156 del TRLGDCU, aunque no se establece nada sobre el estado de las instalaciones en donde se efectuara el viaje, no debe ser causa de exoneración de responsabilidad, porque al cliente se le debe informar, entre otras cuestiones, acerca de los sucesos que sin impedir la realización del viaje amenacen o impida la finalidad pretendida con la contratación de dicho viaje (como por ejemplo, la llegada de un huracán a la zona elegida como destino de viaje, la existencia de una plaga de medusas en las playas de la isla que se visita, etc.). En este sentido, MARTÍN OSANTE, José Manuel: “Información, contenido y modificación de los contratos de servicios turísticos”, *Diario la Ley*, núm. 7315, 2010. Ante la falta de información y del incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales del viaje combinado se indemnizó a los actores, conforme a la responsabilidad civil que se regula en el artículo 162 del TLGDCU, es importante señalar que en esta sentencia no se encontraba en vigor la Ley de Viajes Combinados de 1995, por lo que fue de aplicación interpretativa la Directiva 90/314/CEE relativa a los viajes combinados.

demandante, la cual comenzó de forma inesperada a realizar movimientos violentos, en consecuencia la demandante perdió el dominio del animal y cayó al suelo, lo que le provocó una serie de lesiones. La Audiencia consideró como acertada y correcta la aplicación por parte del tribunal de instancia, el artículo 1905 del Código civil para imputar responsabilidad a la entidad demandada, porque no se trataba de un arrendamiento de un caballo en el que se produce un desplazamiento de posesión, sino de un viaje combinado que contenía la prestación de servicio consistente en un paseo a caballo con monitor, de forma que debía responder el dueño o poseedor del animal, salvo fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima.<sup>425</sup>

B) En las siguientes sentencias se exonera al organizador y detallista del viaje combinado y a las empresas que presten servicios con actividades deportivas y de riesgo, porque en la práctica de los deportes se asumen los riesgos de cada actividad deportiva. Es decir, es de aplicación la teoría de la asunción del riesgo porque el deportista o turista asume los riesgos intrínsecos de la práctica deportiva que se desarrolla.

+ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 30 de septiembre (Westlaw JUR 2009\460184), considera que no existe una responsabilidad civil imputable a la empresa organizadora del viaje combinado, por los daños sufridos durante una excursión a caballo. En esta sentencia se exonera de responsabilidad civil contractual a la agencia de viajes, porque la actividad deportiva de equitación o de paseo a caballo contiene unos riesgos intrínsecos propios de la actividad deportiva, por lo que el turista asume los riesgos y no puede ignorarlos. Es decir, se da la aplicación la “teoría de asunción del riesgo”, por lo que no se puede condenar al

---

<sup>425</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección 1ª), núm. 384/2006 de 2 de octubre (westlaw JUR 006\257252), F.D. 2. En los accidentes de equitación es de aplicación la teoría de asunción del riesgo, normalmente los accidentes en relación a la equitación se dan por jinetes aficionados y en un caballo alquilado. Cfr. PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil. Práctica deportiva...*, *Op. cit.*, p. 417, “... no comparto la aplicación del art. 1905 CC al caso y la consiguiente condena del organizador del viaje combinado. En mi opinión, el tribunal debería haber analizado en detalle los hechos del caso y determinar si el comportamiento del caballo era un riesgo inherente a la monta que debía asumir la amazona o, por el contrario, considerar que el caballo no era adecuado para su monta, de forma que se había producido un incremento del riesgo que no asumía la persona. Solo en este segundo caso, debería responder el organizador del viaje combinado por los daños sufridos por la usuaria, igualmente, de conformidad con el art. 162.1 TRLGDCU, después podría repetir contra el prestador del servicio de alquiler de caballos, a quien sería imputable el cumplimiento defectuoso del concreto servicio.” Dado a que en el caso en cuestión, nos encontramos ante una actividad concertada con la entidad demandada puesto que, además del alojamiento y pensión, también se incluían otras actividades como la del paseo a caballo bajo la vigilancia de la entidad demandada. Además, influye mucho que el grupo de turistas tenían a su disposición un monitor cuya finalidad era aleccionar a los componentes del grupo sobre la manera de manejar a los animales, así como prevenir cualquier caso de riesgo que pudiera presentarse.

prestador de los servicios ni tampoco al organizador del viaje porque no hubo un incumplimiento contractual del viaje combinado.<sup>426</sup>

+ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 24 de noviembre (Westlaw AC 2007\305), se demuestra la no existencia de responsabilidad civil por los daños y perjuicios a consecuencia de la caída sufrida por la demandante dentro de un viaje combinado. La caída se produjo durante una excursión en camello en la que no fue organizada por la agencia de viajes, ni pactada dentro del contrato de viaje combinado. Por lo que se resolvió que no existió un vínculo causal del daño sufrido por el turista entre el viaje combinado contratado con la agencia de viajes y el tercero que prestó el servicio de excursión en camello, porque el turista asumió libre y voluntariamente los riesgos intrínsecos que conlleva la práctica de este tipo actividad deportiva. Sin embargo, pudiese que se lograra imputar responsabilidad civil a la

---

<sup>426</sup> La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª), núm. 469/2009 de 30 de septiembre (westlaw JUR 2009\460184), F.D. 2, "...En cualquier caso, aun entrando a considerar esa tesis, expuesta por primera vez, de que la persona que guiaba al caballo no lo sujetó bien, no puede aceptarse que hubiese negligencia de ninguna clase en la conducta de la organizadora del viaje. O, por utilizar la expresión de la ley, no puede aceptarse que hubiese una "ejecución deficiente del contrato."; F.D. 3, "Lo que ocurrió, en definitiva, fue un percance propio de una situación que comportaba cierto riesgo, voluntariamente asumido por la turista. Los caballos pueden hacer movimientos inesperados en un momento dado y quien sube a uno de ellos puede saberlo antes de subirse, dado que es algo evidente. Eso es lo que, al parecer, ocurrió en este caso: que el caballo hizo inesperadamente un extraño. Pero es que no sólo ocurrió eso, sino que concurrió la circunstancia casual de que la actora tenía la mano en alguno de los aparejos del animal, de tal modo que el movimiento de éste produjo la lesión, que no habría ocurrido de no haberse dado esa circunstancia concomitante y casual. No es que el caballo saliese corriendo o hiciese un movimiento de tal índole que motivase una caída, sino que se movió mientras la demandante se bajaba y tenía la mano de algún modo enredada en alguna brida o elemento semejante del aparejo. Por tanto, hay dudas sobre la forma en que ocurrieron los hechos y lo único que se constata es que la demandante asumió participar en una actividad que comportaba riesgos, como ella no podía ignorar...". En este sentencia es imprescindible la teoría de la asunción del riesgo por parte del turista, porque: "las actividades ecuestres comportan un riesgo intrínseco ya que no se trata de prácticas deportivas que tengan un carácter mecánico y de control garantizado". En este sentido PERTIÑEZ VÍLCHEZ, Francisco: "La responsabilidad civil del prestador de servicios...", *Op. cit.*, p 551. Además, señala que los daños sufridos con ocasión de excursiones a caballo: "la diferencia con la equitación, es que el caballo no es empleado como medio de la práctica de una actividad deportiva intrínsecamente peligrosa en la que la velocidad es un elemento esencial, sino como medio para realizar una excursión, la expectativa de seguridad que el usuario tiene sobre la docilidad del caballo es máxima, pudiendo asumir el riesgo de caída que tenga que ver con su propia ineptitud para mantener el equilibrio en condiciones de trote, pero no el riesgo que se derive de una reacción inesperada del animal...". En el presente caso existieron dudas en la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que fue difícil establecer una imputación al organizador del viaje, lo que no queda duda es que el turista decidió participar en la actividad y ésta comporta un riesgo intrínseco, que no se puede negar y por lo tanto no es posible establecer una responsabilidad conforme a los artículos 162 del TRLGDCU. Sobre la responsabilidad civil por daños en equitación, véase PIÑEIRO SALGUERO, José: "Accidentes deportivos...", *Op. Cit.*, [www.indret.com](http://www.indret.com), en donde se realiza un gran estudio sobre los riesgos que conlleva la práctica de este tipo de deporte.

empresa que prestó el servicio de excursión por falta de diligencia el desarrollo de la actividad deportiva, mediante la aplicación de la teoría del riesgo.<sup>427</sup>

+ La Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 9 de marzo (Westlaw AC 2000\4088), se presenta el caso en el que un consumidor o turista contrata con una agente mayorista un viaje combinado, en el cual se establece determinados servicios, consistentes en el transporte, alojamiento y servicios que incluían la práctica de determinadas actividades deportivas de riesgo, otras actividades estrictamente técnico-deportivos y otros meramente lúdicas o de riesgo limitado. Durante la práctica de una actividad deportiva denominada “ski-bus”, el turista o deportista sufrió una serie de lesiones. La sentencia de apelación declara que no habiéndose acreditado el nexo causal u origen de los daños, no es imputable de responsabilidad civil la agencia de viajes y el prestador del servicio deportivo, procediendo a resolver la demanda con la absolución de la agencia de viajes y del prestador de servicios de cualquier tipo de negligencia.<sup>428</sup>

---

<sup>427</sup> En la presente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª), núm. 420/2006, de 24 de noviembre (westlaw AC 2007\305), se demuestra en autos que la excursión en camello por parte de la actora no estaba incluido dentro del viaje combinado contratado. Además, se demuestra que el día que sufrió el accidente se encontraba programado un día libre, así se estableció en el itinerario y folleto informativo del viaje combinado, por lo que la actora contrató con un tercero ajeno al contrato de viaje combinado una excursión de paseo de camello. En consecuencia, no es de aplicación el artículo 162 del TRLGDCU sobre responsabilidad civil de los organizadores y detallistas de viajes combinados. Por otro lado, es posible imputar a la empresa prestadora del servicio deportivo, en este caso la excursión a camello, por falta de diligencia en el desarrollo de la actividad, siempre que se demuestre el nexo causal del daño, aunque no se detallan los hechos o causas del accidente, en principio este tipo de actividades conlleva un riesgo intrínseco que asume el deportista y las causas que pueden llegar a imputar de responsabilidad civil a estas empresas es por negligencia del monitor o guía de la excursión o defecto en los arneses. Es decir, mediante la aplicación de la teoría del riesgo, así se puede ver para un amplio análisis PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil. Práctica deportiva...*, *Op. cit.*; ORTI VALLEJO, Antonio (Dir.): *La responsabilidad civil por los daños...*, *Op. cit.*; REGLERO CAMPOS, Fernando: *Tratado de responsabilidad civil...*, *Op. cit.* Sin embargo, es imprescindible el estudio en cada caso en concreto para determinar si existe responsabilidad o no del organizador de actividades deportivas.

<sup>428</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 3ª), núm. 98/200 de 9 de marzo (westlaw AC 2000\4088), F.D. 1, “...En consecuencia, y sobre ello no pueden caber dudas, existe un vínculo contractual entre el actor y las dos entidades con las que contrató, directamente («Azul Marino», mayorista) e indirectamente («Arroyo Sport», minorista), y teniendo en cuenta que la culpa contractual consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, resulta inconcuso que, si en el desarrollo de las actividades contratadas se actúa negligentemente por el obligado a prestarlas, se ha de responder por culpa contractual, no por culpa extracontractual.”; F.D. 2, “...el objeto del contrato era precisamente que el conductor de la embarcación motora que arrastraba el «ski-bus» adquiriera velocidad y zigzagueara, para forzar así a los practicantes a sujetarse y ejercitar su destreza para evitar la caída al agua. No puede imputarse al conductor de la motora (que no ha sido demandado, obligación que en modo alguno puede ponerse a cargo de los restantes demandados, sino que incumbe expresamente al actor), ni a la empresa prestadora del servicio o sus representantes, negligencia en el desenvolvimiento de la prestación a la que estaba obligado cuando la que se pretende acción negligente coincide con la obligación contratada. Quien acepta voluntariamente subirse en un «ski-bus», porque así lo ha convenido previamente, sabe no sólo que puede caerse al agua, sino que con toda probabilidad acabará cayéndose a ella, pues en ello radica el atractivo de la diversión... En el caso que nos ocupa, no habiéndose acreditado por qué razón el actor se



Conforme al estudio de la sentencias anteriormente expuestas, la responsabilidad civil de los organizadores y detallistas en el contrato de viaje combinado en el que se incluyan actividades deportivas o de riesgo, se fundamenta en el artículo 162.2 del TRLGDCU al amparo de la “no ejecución o ejecución deficiente del contrato”, y los responsables del incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato del viaje combinado deberán responder conforme a lo estipulado en el artículo 162.1 del TRLGDCU, el cual establece una responsabilidad solidaria “entre los distintos empresarios que concurren conjuntamente en el contrato”. En este sentido, si la empresa que presta el servicio deportivo incumple o cumple de manera parcial en alguna de las prestaciones contratadas en el viaje combinado, el organizador y detallista también será responsable por las actuaciones realizadas por los prestadores de servicios deportivos, porque son quienes realizaron de manera deficiente el contrato de viaje combinado con actividades lúdicas, deportivas o de riesgo.

En el TRLGDCU se establece que los sujetos responsables frente a los consumidores son los organizadores y detallistas, sin perjuicio que estos últimos repitan la concurrencia de responsabilidad contra los prestadores de servicios deportivos. En este sentido, se pone en duda por la doctrina la posibilidad de que los consumidores puedan exigir responsabilidades directamente a los prestadores de servicios deportivos,<sup>429</sup> pero en la práctica es usual que los consumidores o turistas reclamen

---

produjo las lesiones por las que ahora reclama, y no pudiendo imputarse a los demandados negligencia alguna, contractual o extracontractual, en la causación del evento lesivo enjuiciado, no cabe otra solución que la absolutoria, que es la solución a la que llegó la Juez de instancia y con la que esta Sala ha de mostrar su conformidad.” En esta sentencia, existe un contrato de viaje combinado compuesto por transporte, alojamiento y otras actividades deportivas, lúdicas y de riesgo. Todas estas prestaciones se cumplieron tanto por el organizador como por el detallista, no existiendo un incumplimiento contractual sobre las obligaciones contraídas en el contrato de viaje combinado. Por lo que no es posible imputar de responsabilidad civil a la agencia de viajes conforme al artículo 161 y 162 del TRLGDCU. Por otro lado, la actividad de “ski-bus” consiste en que una lancha motora acuática arrastre un cilindro neumático en aguas profundas, en este caso pantano. En esta actividad lúdica existe un riesgo que asume el deportista cuando lo práctica, que es la caída en el agua producto del cansancio o de las maniobras de la lancha, por lo que es aplicable la teoría de la asunción del riesgo. En este caso, no se demostró que los daños sufridos se causaran por negligencia en el desenvolvimiento de la prestación, porque si hubiese sido así, sería causa de exoneración para la aplicación de la asunción del riesgo y podría ser imputable de responsabilidad la empresa prestadora del servicio deportivo, por no contar con las medidas de seguridad o por que el equipo con el que se desarrolla la actividad deportiva es defectuoso, etc. En consecuencia, sería la aplicación de una responsabilidad civil objetiva al prestador del servicio deportivo y tendría que responder por los daños y perjuicios ocasionados por la práctica de la actividad deportiva, aplicando la teoría del riesgo. Sin embargo, los daños sufridos fueron por el riesgo normal asumido, es decir, por la caída del perjudicado al agua y no se demostró que existiera una causa imputable al prestador del servicio deportivo, como pudo ser desarrollar la actividad deportiva a velocidades exageradas o falta de pericia del conductor de la lancha.

<sup>429</sup> DE LA HAZA DÍAZ, María del Pilar: *Op. cit.*, pp. 216-ss., considera que: “El consumidor turista tiene acción frente al agencia organizador o detallista, no en cambio frente a los prestadores de servicios,

responsabilidad a los organizadores, detallistas y también al tercero prestador del servicio.

Como se mencionó anteriormente, el organizador y detallista se comprometen a la realización del viaje combinado de manera correcta, por lo que ante cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones pactadas en el contrato de viaje combinado con actividades deportivas y de riesgo, serán imputables de responsabilidad civil contractual. Independientemente, de que si la causa del incumplimiento de las prestaciones turísticas establecidas en el contrato de viaje combinado, no son originadas materialmente por el organizador o detallista del viaje combinado, sino que se causan por los prestadores directos de los servicios deportivos con los que se haya contratado previamente.

Sin embargo, no serán responsables el organizador y detallista del viaje combinado de los daños y perjuicios que sufra el turista o deportista causados u originados por el riesgo intrínseco o natural que conlleva al practicar actividades deportivas y de riesgo, por lo que se aplicaría la “teoría de la asunción del riesgo” y el deportista soportaría los daños que se deriven de la propia práctica deportiva. Pero es necesario e indispensable el estudio de cada caso en concreto, para saber si es posible exigir responsabilidad civil contractual a través de la existencia de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios deportivos contratados en el viaje combinado o no.

Por último, conforme al estudio realizado en apartados anteriores sobre la responsabilidad civil en la práctica actividades deportivas y de riesgo, es necesario determinar si la causa del daño es por la asunción del riesgo del deportista o si existe un nexo causal entre el daño y el prestador de servicios deportivos. Es decir, si el prestador del servicio deportivo es generador de un riesgo y ese riesgo que asume el deportista se aumenta por la falta de diligencia de las actuaciones en sus obligaciones contractuales, es posible imputar de responsabilidad civil objetiva al prestador de

---

porque considera que únicamente podrá dirigirse el consumidor o turista frente a los prestadores de servicios en caso de que el daño quede fuera del ámbito del contrato y si se hubiera producido aunque este no hubiera existido...”; SOLER VALDÉS BANGO- Alfredo, *Op. cit.*, p.389, considera la posibilidad de que el consumidor o turista reclame extracontractualmente al prestador de servicios; en el mismo sentido, GOMEZ CALLE, Esther: *Op. cit.*, pp. 91-ss., señala que: “salvo que el contrato se configure como un contrato a favor de tercero, al consumidor o turista solo le quedara la posibilidad de reclamar al prestador de servicios por la vía de responsabilidad extracontractual...”; GOMEZ CALERO, Juan: *Op. cit.*, p. 135, manifiesta que los turistas no deben reclamar a los prestadores de servicios, con lo que no tiene ningún vínculo directo, sino que se debe reclamar a los organizadores o detallistas.

servicios deportivos, porque recibe una ganancia económica al generar el riesgo de las actividades deportivas y no realiza las diligencias necesarias para evitar el daño. Sin olvidar, las causas de exoneración de responsabilidad civil al prestador de servicios deportivos y de la posible concurrencia de causas que originen el daño. En consecuencia, se debe realizar un estudio a cada situación o caso en concreto, en el que se presente un daño por la práctica de actividades deportivas y de riesgo, independientemente que se encuentren o no integradas dentro del contrato de viaje combinado



## **CONCLUSIONES.**

### **I.**

Las personas intentamos aprovechar al máximo nuestro tiempo libre y de ocio, por lo que la mayoría de la veces realizamos un viaje, es decir, hacemos turismo. En las nuevas formas o modalidades de viajar ya no solo se busca descansar, sino que se intenta realizar diversas actividades dentro del mismo viaje, para así hacer del turismo, una forma más atractiva de disfrutar unas vacaciones.

La motivación o la causa lúdica, de ocio, de comodidad, de practicar algún deporte, etc., será determinante para los turistas o consumidores al momento de realizar o contratar algún servicio turístico. Por lo que esta intención del turista, influenciará directamente al hecho de realizar un viaje, independientemente de la causa objetiva que se delimite en los contratos turísticos.

### **II.**

Existen nuevas modalidades de turismo las cuales cada vez son más buscadas por los consumidores o turistas, una de ellas es la práctica de algunos deportes, incluso los considerados de riesgo, porque la búsqueda de sensaciones nuevas o de adrenalina es motivo o causa principal del viaje, este tipo de viajes se le conoce como “turismo activo” o “turismo deportivo”. Por ello, es muy común que se celebren contratos de viajes combinados en el que se incluyan como elemento integrador y esencial la práctica de actividades deportivas y de riesgo.

De los diferentes y diversos “otros servicios” que se pueden contratar lícitamente en el contrato de viaje combinado, se debe considerar la implicación directa de la causa al incluir las actividades deportivas y de riesgo en el contrato, para que el servicio requerido por el turista tenga una trascendencia jurídica ante cualquier incumplimiento contractual.

### **III.**

El turismo es considerado objeto de estudio en el Derecho, por lo que existe la rama llamada “Derecho de turismo”, el cual contiene doctrina y principios del Derecho Privado y Público. El Derecho Privado en el ámbito del turismo es muy importante,

porque es de aplicación a los contratos que celebren los turistas con empresarios que se dedican a comercializar productos y servicios turísticos. En este sentido, el turista o consumidor, al ser un destinatario final de un viaje o de servicios turísticos, tendrá la protección o tutela del Derecho Privado por el Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y usuarios, del Código civil, de la teoría general de las obligaciones y contratos, y de más normas especiales que regulen contratos turísticos.

El contrato de viaje combinado es objeto de estudio en la esfera jurídica del Derecho privado. Esto quiere decir, que por un lado interviene el Derecho mercantil, como área jurídica que regula y controla de manera importante la constitución de empresas (se entiende, que son agencias de viaje porque su ámbito de negocio es el turismo), estableciendo los derechos y obligaciones que deben cumplir, para poder ejercer una actividad de comercio de manera legal y normal (por ejemplo, se debe suscribir una póliza de seguro ante cualquier siniestro o acontecimiento). No debemos olvidar, que el contrato de viaje combinado es también objeto de estudio y análisis en el Derecho civil, porque este tipo de contratos van dirigidos especialmente a los turistas, que son consumidores, por lo tanto son ellos los que celebran el contrato y a su vez disfrutan del viaje conforme a lo pactado, por lo cual también es de aplicación el Derecho de consumidores.

#### IV.

Con el estudio realizado sobre la normativa de la Comunidad Europea en el ámbito del turismo, se pretende dar una visión general de la regulación del sector turístico en la actualidad, mencionando los distintos Reglamentos y Directivas que han sido elaborados al respecto. La mayoría de las normativas de carácter comunitario en el ámbito del turismo, puntualizan sobre una protección al turista como usuario de servicios turísticos, imponiendo unos requisitos básicos para su tutela. Ante los grandes avances en la tecnología, que inciden de manera importante en los contratos turísticos, es necesaria una coordinación coherente entre la normativa que regulan los aspectos derivados del turismo con las normas de comercio electrónico o los contratos a distancia, para así tener una aplicación eficiente de la normativa comunitaria con la de carácter estatal.

#### V.

Las Comunidades Autónomas tienen la competencia en materia de promoción y ordenación del turismo dentro de su territorio, conforme a lo establecido en el artículo 148.1.8 de la Constitución. Sin embargo, con el análisis sobre la competencia del

turismo, se demuestra que el Estado tiene una atribución de competencia sobre diversas actividades turísticas que inciden en áreas o materias, que solamente le competen al Estado como son las relaciones internacionales, el comercio exterior, y otras más.

El hecho de que las Comunidades Autónomas tengan competencia sobre el turismo, no significa que también la tengan sobre los contratos turísticos (en especial, el contrato de viaje combinado) dado a que es un ordenamiento jurídico de carácter privado y porque el Estado tiene la competencia exclusiva en el Derecho civil y sobre las bases de las obligaciones contractuales, conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución. Sin olvidar, a las 6 Comunidades Autónomas que regulan su propio Derecho civil dentro de su competencia, pero hasta el momento sin poder hacerlo sobre las bases de las obligaciones contractuales. En este sentido, la normativa vigente sobre algunos contratos turísticos, como es el supuesto del contrato de viaje combinado, es una reglamentación única y uniforme para todos los turistas en territorio español.

Las distintas normativas estatales en el ámbito de actividades turísticas, mencionadas en la presente investigación, actualmente se encuentran derogadas por el Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, produciendo un cambio sobre la tradicional regulación de las agencias de viajes, que estaba reglamentada por el Estado. Con esta reforma, se otorgó una mayor competencia a las Comunidades Autónomas sobre la ordenación y desarrollo del turismo dentro de su territorio, a lo que ha dado como resultado, que varias Comunidades empiecen adaptar y desarrollar una normativa que incida y vigile a las empresas turísticas, conocidas como las agencias de viajes.

## VI.

Cuando una empresa turística se obliga a favor de un turista a la prestación de algún servicio turístico (hospedaje, avión, tren, viaje combinado, por Internet o no), previo pago respectivo del servicio, estamos frente a una categoría de contratos llamados “turísticos”. A este tipo de contratos, le son de aplicación la legislación especial, las normas que regulan la contratación privada, además de la regulación en materia de consumidores.

La mayoría de los contratos turísticos contienen condiciones generales, por lo que se consideran como contratos de “adhesión”, y solamente el turista tiene la posibilidad de

aceptar o no las cláusulas establecidas unilateralmente por las empresas. En consecuencia, se le debe brindar una mayor protección jurídica al consumidor o turista que contrate algún servicio turístico, sobre el tipo de cláusulas abusivas y las no negociadas individualmente, porque pueden llegar a vulnerar de manera directa al turista en sus intereses económicos, como a su vez la igualdad jurídica de las partes. Es decir, estar en una posición de inferioridad al momento de la celebración de contratos turísticos.

## VII.

El turista al encontrarse fuera de su domicilio necesita de una mayor protección jurídica, en este sentido se han pronunciado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, al extender la inviolabilidad del domicilio a las habitaciones de los establecimientos turísticos de alojamiento hotelero.

Para otorgar una mayor protección se considera al turista como un consumidor y usuario, teniendo así la tutela jurídica del TRLGDCU, dando como resultado una concreta y amplia seguridad al turista sobre posibles abusos de sus derechos como consumidor o usuario. No debemos olvidar, que ante las nuevas formas de contratar, como es a través de medios electrónicos, también le corresponde la aplicación y protección de la legislación vigente en España sobre la celebración de contratos electrónicos, con una coordinación sobre los Derechos y obligaciones que tutelan al consumidor o turista en el TRLGDCU, por ser considerada una normativa de carácter general, otorgando así una mayor y mejor protección al consumidor on-line al momento de la celebración de contratos turísticos vía Internet.

## VIII.

En la contratación de un contrato de viaje combinado lo normal es que intervengan dos partes, las empresas turísticas (agencias de viajes) y los turistas (consumidores y usuarios), y el TRLGDCU especifica las posibles clases o categorías en las que se pueden presentar. Sin embargo, el contrato de viaje combinado puede ser plurilateral en caso de que sea un viaje colectivo o bien intervengan otras empresas que presten los servicios contratados, como es el caso de las empresas especializadas en servicios deportivos

En la actualidad, existen nuevas formas de incentivar a los trabajadores de una empresa o bien la posibilidad de que alguna persona sea afortunada de obtener un



viaje combinado por medio de un concurso, por lo que se debe interpretar que la posición jurídica que tiene el ganador en el contrato de viaje combinado es la de un “beneficiario”. En principio, es confusa la situación o posición jurídica en el contrato de viaje combinado del ganador, porque el TRLGDCU nos dice que el “contratante principal se compromete a comprar” por lo que se interpretaría como un mandato.

Sin embargo, lo común ante estas situaciones es que por el desconocimiento por parte de las empresas de saber quien o quienes serán los turistas o consumidores que realizarán el viaje combinado al momento de contratar, es de considerarse como un contrato a favor de tercero conforme al art. 1.257.2 CC, porque el ganador acepta el derecho de realizar el viaje como consumidor o turista después del sorteo, por lo que no podría existir realmente una representación legal o voluntaria ya que la empresa que contrato el viaje no sabía quién sería el afortunado del premio al momento de contratar el viaje combinado, sin olvidar que se le debe notificar a la agencia de viajes el o los nombres de los ganadores. Por lo que ante esta posibilidad o situación, el trabajador o ganador del concurso se le reconocerá como “beneficiario” en el contrato de viaje combinado, pudiendo ejercer todas las acciones reconocidas por la normativa relativa al contrato de viaje combinado y demás legislaciones vigentes en contra de la empresa o la agencia de viajes por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato.

## IX.

El contrato de viaje combinado contiene obligaciones de resultado, porque el deudor o la agencia de viajes garantizan la correcta ejecución del viaje. Es decir, tiene que satisfacer el interés primario del acreedor que es la correcta realización del viaje combinado con todos sus elementos o servicios pactados en el contrato y lo publicitado en el folleto del viaje (y más aún, cuando las agencias de viaje anuncian “Nosotros nos encargamos de todo” o “Déjelo en nuestras manos”), por lo que la agencia de viajes se obliga o compromete a un resultado.

En principio, la causa del contrato de viaje combinado se interpreta desde la propia definición que expone el TRLGDCU. Sin embargo, no solo se debe considerar la causa objetiva de los contratos, sino también la causa subjetiva, porque esta causa influye si se manifiesta por medio de la autonomía de la voluntad y se incorpora de forma directa al contrato (se busca un hotel con playa o poder realizar actividades deportivas, etc.). En consecuencia, resultaría ser la causa subjetiva del acreedor,

turista o consumidor de una importantísima relevancia en el negocio jurídico del “contrato de viaje combinado”.

El contrato de viaje combinado se encuentra tipificado en el TRLGDCU. Conforme al análisis de la naturaleza jurídica del contrato del viaje combinado y por el desarrollo de la presente investigación lo considero como un contrato parcialmente atípico. Porque en primer lugar, en el estudio sobre la causa del contrato, se interpreta que no siempre va ser la misma causa para todos los turistas que realizan el viaje combinado, ya que dependerá de lo que cada persona busque al momento de contratar, porque no solo es hospedarse en un hotel o transportarse al destino del viaje, sino que además resaltan otras prestaciones que son causas subjetivas o atípicas que sobresalen en función o fin del viaje combinado. En segundo término, las diversas prestaciones, servicios o elementos que componen un viaje combinado se unen o combinan en un solo contrato. Esto quiere decir, que se presenta una pluralidad de causas y contratos para formar uno solo, como son los contratos “múltiples” o “mixtos” y que encuadran en la categoría de los contratos atípicos y ante las posibles dudas o lagunas legales sobre el propio contrato de viaje combinado, es de aplicación la normativa especial y de manera general el Código civil con la teoría general de las obligaciones y contratos.

## X.

Una vez iniciado el viaje combinado, se puede presentar algún incumplimiento de alguna de las prestaciones o servicios contratados con la agencia de viajes. Puede ser un incumplimiento total o un cumplimiento defectuoso, a lo que el organizador y detallista deben responder por los daños, porque el resultado del viaje combinado no ha sido el esperado conforme a lo contratado.

Se debe indemnizar al consumidor o turista de los daños y perjuicios sufridos, por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos o parciales, que afecten de manera importante alguno de los elementos esenciales y establecidos en el contrato de viaje combinado, como por ejemplo el no poder practicar la actividad de esquí porque no había la suficiente nieve en la pista o porque la habitación no tiene vista al mar.

El organizador o detallista del viaje combinado debe de corregir los incumplimientos contractuales incluso una vez iniciado el viaje, por lo que tiene la obligación de proponer o adoptar las soluciones o medidas adecuadas para la continuación del viaje. Además, el consumidor debe de informar o comunicar (vía fax, correo electrónico,

teléfono, etc.) cualquier incumplimiento que se presente durante la ejecución del viaje combinado, dado que si no, se interpreta que está conforme con las prestaciones que recibe. Todas las soluciones que realice el organizador, se deben de comunicar al turista o deportista para que tenga la opción de aceptarlas o no. Pero independientemente, el consumidor podrá reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios a consecuencia del incumplimiento parcial de las prestaciones pactadas una vez finalizado el viaje combinado, porque el plazo para ejercer acciones en contra de la agencia de viaje prescribe a los dos años.

## XI.

El tema de la responsabilidad civil de los organizadores y detallistas, ha sido un apartado del contrato de viaje combinado muy estudiado y analizado por varios autores. En un principio la LVC nos llevaba a una cierta confusión sobre si la responsabilidad ante algún incumplimiento contractual por parte del deudor sería solidaria o no. Actualmente, en el TRLGDCU, establece que la responsabilidad del organizador, el detallista y otras empresas prestadores de servicios será solidaria. Por lo que tendrán que responder ante cualquier posible daño y perjuicio, incluso los morales que llegue a sufrir el consumidor o turista a consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato.

De todas las causas de exoneración de responsabilidad civil de los organizadores y detallistas en el contrato de viaje combinado con actividades deportivas, la más significativa es la que por acción u omisión le sea imputable al consumidor, turista o deportista. Porque en el caso de que en el contrato de viaje combinado se contrate la realización de una actividad deportiva o de riesgo, el turista o consumidor asume el riesgo normal de la práctica de algún deporte, por lo que no responderán las agencias ni los prestadores de servicios deportivos por los daños y perjuicios que llegase a sufrir el deportista.

Además, es de relevancia la causa de exoneración por la acción u omisión de un tercero ajeno a la ejecución de las prestaciones, como puede ser el caso de que en la práctica del esquí, el consumidor o turista sufra daños o lesiones causadas por un tercero u otro esquiador ajeno al contrato de viaje combinado, de lo cual no tendrá responsabilidad tampoco el organizador y detallista. Sin embargo, es importante el estudio de cada caso en concreto para poder determinar si existe o no responsabilidad por lo daños sufridos.

## XII.

Todas las cláusulas que se establezcan como causas de exoneración o limitación de responsabilidad civil dentro del contrato de viaje combinado, en relación a los sujetos responsables y la obligación de responder de los daños originados por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso, serán consideradas como “cláusulas abusivas”. Pero es importante informar al turista o deportista del riesgo que se asume por la práctica de ciertas actividades de alto riesgo y que él asume la responsabilidad dentro de los parámetros normales del deporte que se practica dentro del contrato de viaje combinado.

## XIII

El contrato de prestación de actividades deportivas o de riesgo encaja en el modelo legal de arrendamiento de servicios con especialidades, de las que se deriva su consideración de contrato parcialmente atípico. Así pues, a las actividades objeto de nuestro estudio se le aplicarán, entre otras normas que veremos luego, las reglas generales que regulan el contrato de servicios.

Las obligaciones que se derivan del presente contrato pueden ser consideradas, como obligaciones de actividad, y no de resultado. Ello, claro es, determina su naturaleza jurídica y régimen aplicable.

A diferencia de lo legalmente establecido en el contrato de viaje combinado, que encaja como un contrato de servicios generados de obligaciones de resultado, en el contrato objeto de este trabajo el empresario o deudor se compromete a desarrollar una conducta adecuada para la satisfacción de las necesidades o querencias que el acreedor deportistas le pide. Pero el deudor no está obligado a garantizar al deportista que eso que demandó sea lo que él buscaba realmente o quería, ni tampoco le garantiza que le guste o satisfaga.

## XIV.

Los derechos y obligaciones en el contrato de prestación de actividades deportivas, se obtienen o se deducen conforme a lo pactado, en su defecto, a las reglas del contrato de servicios y a la teoría general de las obligaciones y contratos especialmente lo aplicables a las obligaciones de hacer. Es importante destacar las obligaciones

principales de las partes: el arrendador debe prestar el servicio deportivo de manera correcta conforme a lo estipulado en el contrato, y a su vez, la obligación principal del arrendatario es el de pagar el precio convenido por la prestación del servicio deportivo.

El deportista que contrata la prestación de un servicio deportivo, es considerado también como un consumidor o usuario, si lo contrata con una empresa especialista en las actividades deportivas. Por ello obtiene una protección adicional a sus derechos como consumidor, conforme a lo establecido y estipulado en el TRLGDCU, estos derechos son: el de recibir una información correcta antes de la celebración del contrato; el derecho de recibir el cumplimiento correcto de los servicios contratados (se satisfaga o no); recibir una copia del contrato o recibo que ampare la prestación del servicio; protección ante la posible ilegalidad de estipulación de condiciones generales y cláusulas abusivas en el contrato; por último, el derecho a recibir una protección sobre su integridad física y bienes conforme a todas las medidas de seguridad que debe proporcionar el prestador del servicio deportivo.

## XV.

El contrato de prestación de servicios deportivos puede estar integrado dentro del contrato de viaje combinado. Es posible contratar un servicio deportivo por medio de un viaje combinado. Esto se debe a que uno de los elementos que pueden integrar el viaje son los denominados “otros servicios”, y dentro del gran abanico de posibles servicios lícitos se encuentran los deportivos. Ante esta posibilidad, se presenta una pluralidad de sujetos o partes que intervienen en el contrato, que serían en primer lugar el consumidor, viajero o deportista, en segundo término la agencia de viajes con la que se contrata el viaje combinado, y por último la empresa o empresario que va a prestar el servicio deportivo que integra el viaje combinado.

Por ello, con más razón será de aplicación el TRLGDCU y el Código civil, por lo que en consecuencia el deportista obtendrá una mejor tutela o protección a sus derechos como consumidor, además de los criterios aplicables de responsabilidad ante cualquier cumplimiento parcial o incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de viaje combinado que incluyan servicios deportivos.

## XVI.

En la práctica de algún deporte incluso los de riesgo, siempre existe la posibilidad de sufrir algún daño, por lo que en el ámbito de la responsabilidad civil en la práctica de actividades deportivas es de aplicación la teoría de la asunción del riesgo, en la que el deportista asume la imputación del daño por el riesgo común o normal la práctica deportiva. Sin embargo, cuando los daños sufridos exceden de los límites o parámetros normales de la práctica deportiva, se podrá exigir responsabilidad civil al culpable. En este sentido, quien preste el servicio de la práctica deportiva es responsable de unas adecuadas instalaciones deportivas, de tener correctamente medidas de seguridad, de cumplir conforme a lo pactado la organización de la actividad deportiva, de informar sobre los riesgos que conlleva la práctica de actividades deportivas consideradas de alto riesgo, etc. Por lo tanto, los daños y perjuicios que sufra el deportista a causa de una negligencia o incumplimiento de las obligaciones principales y accesorias del prestador del servicio deportivo, se podrá imputar a éste último de responsabilidad civil contractual.

En la mayoría de los casos, se exige o reclama responsabilidad civil por la práctica de algún deporte por vía extracontractual. Sin embargo, como en el objeto de estudio de la investigación, es la práctica de alguna actividad deportiva deporte que se formaliza a través de un contrato de viaje combinado, se puede reclamar responsabilidad civil al organizador, detallistas y terceros que presten otros servicios turísticos (en este caso la empresa que da el servicio de la práctica deportiva) vía contractual, ante cualquier incumplimiento o cumplimiento parcial de las prestaciones contraídas en el contrato de viaje combinado y en el contrato de prestación de servicios deportivos que se encuentra integrado dentro del mismo contrato de viaje combinado. Sin olvidar, que el turista o deportista puede reclamar responsabilidad civil directamente al organizador, al detallista o al prestador del servicio deportivo, sin perjuicio que entre estos últimos ejerzan del derecho de repetición al imputable del daño.

## **BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.**

### **1. Libros:**

- ALBALADEJO, Manuel: *Derecho Civil, Vol. I, Parte General*, Edisofer S.L, Madrid, 2009.  
+ *Derecho Civil, Vol. II, Derecho de Obligaciones*, Edisofer S.L, Madrid, 2009.
- ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco: *La Europa que viene: El Tratado de Lisboa*, Marcial Pons, 2ª Ed., Madrid, 2010.
- ALONSO GARCÍA, Ricardo: *Sistema jurídico de la Unión Europea*, Thomson-Civitas, 2ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2010.
- ÁLVAREZ LATA, Natalia / BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María / BUSTO LAGO, José Manuel / y otros: *Contrato de prestación de servicios y realización de obras*, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.): *Tratado de Contratos, Tomo III*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, paginas 2873-3646.
- ALVAREZ VIGARAY, Rafael: "Comentario al artículo 1.124 del Código Civil" en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 96-100.  
+ "Comentario del artículo 1.113 de Código Civil", en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, paginas 74-76.
- AMAT LLOMBART, Pablo: *La contratación en el sector turístico: A partir de las nociones del Derecho civil, personal y patrimonial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
- AMORÓS GUARDIOLA, Manuel: "Comentario al artículo 1.274 y 1.275 del Código Civil" en *Comentarios del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 478-485.
- ASPAS Y ASPAS, José Manuel: "Los deportes de aventura ¿deporte o turismo?", en MELGOSA, Javier, *Derecho y Turismo*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, páginas 289-326.
- AURIOLES MARTÍN, Adolfo: *Introducción al derecho turístico: derecho privado del turismo*, Tecnos, 2ª Ed., Madrid, 2005.
- BADENAS CARPIO, Juan Manuel: "El contrato de hospedaje", en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Drs.), *Lecciones de Derecho de turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 283-300.
- BADOSA COLL, Férran: "Comentario al artículo 1.184 de Código Civil", en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 259-260.
- BALLESTEROS DE LOS RÍOS, María: "Contratos turísticos, de alojamiento de personas y avituallamiento", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo

(Dir.), *Tratado de contratos*, IV, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, páginas 4751-4852.

- BARBA DE VEGA, José / CALZADA CONDE, María: *Introducción al Derecho privado del turismo*, Thomson Aranzadi, 4ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2010.
- BENZO SAINZ, Isabel: *Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo*, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1992.
- BOLDO RODA, Carmen: “El contrato de viaje combinado” en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dir.), *Lecciones de Derecho de turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
- BLANQUER CRIADO, David: *El derecho del turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- BOTANA GARCÍA, Gema y RUIZ MUÑOZ, Miguel: *Curso sobre protección jurídica de los consumidores*, MacGrawHill, Madrid, 1999.
- BUSTO LAGO, José Manuel / ÁLVAREZ LATA, Natalia / PEÑA LÓPEZ, Fernando: *Reclamaciones de consumo: Derecho de consumo desde la perspectiva del consumidor*, Thomson-Aranzadi, 2ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2008.
- CABANILLAS SANCHEZ, Antonio: *Las obligaciones de actividad y resultado*, Bosch, Barcelona, 1993.
- CALVO ARAVACA, Alfonso Luis / CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier (Dir.): *Derecho internacional privado*, Comares, 11ª Ed., Granada, 2010.
- CAPILLA RONCERO, Francisco: “Contratos de servicios (I): Prestación de servicios y ejecución de obra”, en LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel (Dir y otros.), *Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, páginas 461-476.
- CASTAN TOBEÑAS, José: *Derecho civil común y foral, Tomo I, Introducción y parte general, Vol. 2*, Reus, 15ª Ed., Madrid 2007.
- CAVANILLAS MÚGICA, Santiago / TUR FÁUNDEZ, María Nélida / BENITO ROSER, María Teresa / SUINAGA ROMERO DE TERRERO, Columba: *Turismo y comercio electrónico. La promoción y contratación on line de servicios turísticos*, Editorial Comares, Granada, 2001.
- CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PÉREZ GUERRA, Raúl: *El contrato turístico de alojamiento hotelero*, Comares, Granada, 2001.
- CERVILLA GARZÓN, María Dolores: *La prestación de servicios profesionales*, Tirant lo Blanch, Valencia 2001.



- CORCHERO, Miguel: *Derecho del turismo, conceptos fundamentales*, Iustel, Madrid, 2008.
- DE LA PLATA CABALLERO, Nicolás (Dir.): *El entorno jurídico de las nuevas tendencias deportivas: deporte de aventura, animación deportiva y ocio activo*, Dykinson, Madrid, 2006.
- DE LA HAZA DÍAZ, Pilar: *El contrato de viaje combinado: La responsabilidad de las agencias de viajes*, Marcial Pons, Madrid, 1997.
- DE LEÓN ARCE, Alicia: *Contratos de consumo intracomunitarios: (adquisición de vivienda y viajes combinados)*, prólogo Luis Díez-Picazo, Euro-Lex, Madrid, 1995.
- + *Derecho de los Consumidores y Usuarios*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.
- DÍEZ MORENO, Fernando: *Manual de Derecho de la Unión Europea*, Thomson-Civitas, 5ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2009.
- DÍEZ PICAZO, Luis: *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Tomo I, Introducción, Teoría del contrato*, Thomson-Civitas, 6ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2007.
- + *Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Tomo IV, Las particulares relaciones obligatorias*, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2010.
- + “Comentario al artículo 1.258 del Código Civil” en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 436-438.
- + “Comentario al artículo 1.255 del Código Civil”, en *Comentario de Código civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 430-432.
- DÍEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: *Sistema de Derecho Civil, Vol. I*, Tecnos, 11ª Ed., Madrid, 2003.
- + *Sistema de Derecho Civil, Vol. II*, Tecnos, 9ª Ed., Madrid, 2005.
- + *Sistema de Derecho Civil, Vol. III*, Tecnos, 7ª Ed., Madrid, 2005.
- FERNANDEZ ORTEGA, Ángel: *Introducción al derecho para el sector turístico*, Thomson D.L., Madrid, 2005.
- FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Carmen: *Derecho administrativo del turismo*, Marcial Pons, 4ª Ed., Madrid, 2007.
- FERNANDEZ ROZAS, José / SÁNCHEZ LORENZO, Sixto: *Derecho internacional privado*, Thomson-Civitas, 5ª Ed., Madrid, 2009.
- GALÁN AGUADO, Alejandro, “La regulación del turismo activo en Castilla y León. Estado de la Cuestión”, en *Derecho y Turismo (Estudio Colectivo)*, Universidad de Málaga, 2004, páginas 327-328.

- GALLEGO PÉREZ, Nidia del Carmen: *La responsabilidad civil de la agencias de viajes en el contrato de viaje combinado*; RAMS ALBESA, Joaquín (Dir.), Tesis, Madrid, 2002.
- GARCÍA MACHO, Ricardo: “La legislación turística: naturaleza jurídica; relaciones entre Derecho estatal, autonómico y local”, en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dir.), *Lecciones de Derecho de turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 19-40.
- GARCÍA RUBIO, María paz: *La responsabilidad contractual de las agencias de viaje, en el contrato de viajes combinados*; Montecorvo, Madrid, 1999.
- GARCÍA VICENTE, José Ramón: “La contratación con consumidores” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.) *Tratado de contratos, Tomo II*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, páginas 1443-1582.
- + “Comentario al artículo 76. Devolución de sumas percibidas por el empresario” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentario del Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras leyes complementarias*, Aranzadi, Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009, páginas 845-881.
- GETE-ALONSO Y CALERA, María Del Carmen: “Comentario al artículo 1.271 del Código civil”, en *Comentario del Código civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, paginas 473-475.
- GONZÁLEZ PACANOWSKA, Isabel: “Comentario al artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.): *Comentario del Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras leyes complementarias*, Aranzadi, Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009, páginas 955-1152.
- GÓMEZ CALERO, Juan: *Régimen jurídico del contrato de viaje combinado*; Dykinson, Madrid, 1997.
- GÓMEZ CALLE, Esther: *El contrato de viaje combinado*; Civitas, Madrid, 1998.
- GÓMEZ LOZANO, María del Mar: “El contrato de viaje combinado”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Contratos mercantiles, Tomo III*, Thomson- Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, páginas 627-685.
- HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, María Dolores: “Viajes combinados” en DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ, María Dolores (Dir.), *Derecho civil de la Unión Europea*, Colex, 4ª Ed., Madrid, 2010, páginas 396-413.
- JAIMEZ TRASIERRA, María del Carmen: “La protección de los consumidores y usuarios y su aplicación en materia turística”, en MORENO QUESADA, Bernardo y otros, *Derecho y legislación civil para estudios de turismo*, Editorial Comares, 2ª Ed., Granada, 2006, páginas 295-305.

- JANER TORRENS, Joan David “La protección del turista como consumidor en el marco del Derecho de la UE”, en TORRES LANA, José Antonio y otros, *La protección del turista como consumidor*, Tirant lo Blanch, Valencia 2003, páginas 15-53.
- JORDANO, Juan-Bautista: *Los contratos atípicos*, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1953.
- LACRUZ BERDEJO, José Luis: *Elementos de Derecho Civil. I Parte General*, Vol. II., Dykinson, 4ª Ed., Madrid, 2004.  
 + *Elementos de Derecho Civil. II Derecho de Obligaciones, Vol. I*, Dykinson, 3ª Ed., Madrid, 2003.  
 + *Elementos de Derecho Civil. II Derecho de Obligaciones, Vol. II*, Dykinson, 3ª Ed., Madrid, 2005.
- LÓPEZ BUSTOS, Francisco / MAYORGA, Juan / DE LA PLATA, Nicolás: *El entorno jurídico de las nuevas tendencias: deporte de aventura, animación deportiva y ocio activo*, Dykinson, Madrid, 2006.
- LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel: “Comentario al artículo 1.278 de Código Civil” en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 502-503.
- LÓPEZ SANTANA, Nieves: *El incumplimiento del contrato de viaje combinado por causa de huelga: la protección al turista*; Comares, Granada, 2003.
- LUCAS FERNANDEZ, Francisco: “Comentario al artículo 1.544 del Código Civil” en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 1058-1060.
- MARÍIN LOPEZ, Manuel Jesús: “Requisitos esenciales del contrato. Elementos accidentales del contrato” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.), *Tratado de contratos, Tomo I*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, páginas 533-660.
- MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: *El contrato de viaje combinado: antecedentes, derecho comparado, estudio normativo y jurisprudencial*; Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 1999.
- MARTINEZ SANZ, Fernando: “El seguro de asistencia en viaje”, en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dir.), *Lecciones de Derecho de turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas.
- MEDINA ALCOZ, María: *La asunción del riesgo por parte de la víctima. Riesgo taurinos y deportivos*, Dykinson, Madrid, 2004.
- MORALES MORENO, Antonio: “Comentario al artículo 1.261 de Código Civil” en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 442-446.

- MORALEJO IMBERNÓN, Nieves: “Comentarios a los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168 del TRLDCU” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.), *Comentario del Texto Refundido para la Defensa de los Consumidores y Usuario y otras leyes complementarias*, Aranzadi, Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009, páginas 1765-1952.
- MORENO-LUQUE CASARIEGO, Carmen: “Protección previa a la contratación de bienes y servicios”, en DE LEÓN ARCE, Alicia / GARCÍA GARCÍA, Luz María (Coord.), *Derecho de los consumidores y usuario (Doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios)*, Tomo I, 2ª Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2007 páginas. 195-226.
- MORENO QUESADA, Bernardo / TRUJILLO CALZADO, María Isabel / BUSTOS VALDIVIA, Ceferino / JAIMEZ TRASSIERRA, María del Carmen: *Derecho y legislación civil para estudios de turismo*, Editorial Comares, 2ª Ed., Granada, 2006.
- MUNAR BERNAT, Pedro A. (Coord.): *Derecho privado del turismo. Estudio jurisprudencia*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008.
  - + “La responsabilidad civil en la explotación y practica de actividades de ocio y peligrosas” en REGLERO CAMPOS, L. Fernando (Dir.), *Tratado de responsabilidad civil, Tomo III, Parte especial segunda*, Thomson-Aranzadi, 4ª Ed., Cizur Menor (Navarra), 2008, páginas 477-527.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio: *Los contratos celebrados con las agencias de viaje (ensayo para un estudio de su régimen jurídico)*, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Málaga, 1975.
  - + “Los contratos turísticos” en URÍA, Rodrigo (Est. Col.): *Curso de Derecho mercantil, Vol. II*, Thomson-Civitas, 2ª Ed., Madrid, 2001, páginas 276-296.
- PÉREZ FERNANDEZ, José Manuel (Dir.): *Derecho público del turismo*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2004.
- PÉREZ MORIONES, Aránzazu: *El contrato de gestión hotelera*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.
- PERTIÑEZ VILCHEZ, Francisco: “Los contratos de adhesión y la contratación electrónica”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Dir.), *Tratado de contratos, Tomo II*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009 páginas 1583-1760.
  - + “La responsabilidad civil del prestador de servicios deportivos” en ORTÍ VALLEJO, Antonio (Dir.), *La responsabilidad civil por daños causados por servicios defectuosos: Daños a la salud y seguridad de las personas*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, páginas 517-579.
- PIÑEIRO SALGUERO, José: *Responsabilidad civil. Práctica deportiva y asunción de riesgo*, Aranzadi, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009.

- PUERTAS, Xavier: *Gestión del ocio en el ámbito turístico*, Síntesis, Madrid, 2007.
- RECALDE CASTELLS, Andrés: “Las agencias de viajes” en GARCÍA MACHO, Ricardo / RECALDE CASTELLS, Andrés (Dir.), *Lecciones de Derecho de turismo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, páginas 157-182.
- ROCA ROCA, Eduardo / CEBALLOS MARTÍN, María Matilde / PÉREZ GUERRA, Raúl, *La regulación jurídica del turismo en España*, Universidad de Almería, Almería, 1998.
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ, María Paz: *Bases de las obligaciones contractuales en la Constitución: artículo 149.1.8*, Trivium, Madrid, 1991.
- SALVADOR CODERCH, Pablo: “Comentario al artículo 1.588 de Código Civil” en *Comentarios del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 1175-1182.
- SEOANE SPIEGELBERG, José Luis: “La responsabilidad civil derivada del deporte”, en SEIJAS QUINTANA, José Antonio (Coord.), *Responsabilidad civil aspectos importantes*, Sepin, Las Rozas (Madrid), 2007, páginas 449-539.
- SOLER VÁLDES-BANGO, Alfredo: *El contrato de viaje combinado*; Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005.
- TORRES LANA, José Antonio: “La protección del turista en el ámbito jurídico privado” en TUR FAÚNDEZ, María Nélida y otros, *La protección del turista como consumidor*, Tirant lo Blanch, Valencia 2003, páginas 55-23.  
+ “Comentario al artículo 1.583 del Código Civil” en *Comentario del Código Civil, Tomo II*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, páginas 1170-1171.
- VAQUERO PINTO, María José: *El arrendamiento de servicios, propuesta de modelo general para la contratación de servicios*, Comares, Granada, 2005.
- VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen: *El servicio como objeto de tráfico jurídico*, Ed. La Ley, Madrid, 2009.  
+ *Los contratos de servicios*, Ed. La Ley, Madrid, 2009.
- VINAIXA HUESCA, Rosario (Coord.): *Instituciones de Derecho comunitario*, Tirant lo Blanch, 2ª Ed., Valencia, 2001.
- YZQUIERDO TOLSADA, Mariano: *Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2001.  
+ “El deporte y los espectáculos deportivos en el contexto general de la responsabilidad civil”, en GÓMEZ GÁLLIGO, Francisco Javier (Coord.), *Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias, Vol. 2*, Civitas, Madrid, páginas 1819-1845.

## 2. Artículos de revistas:

- ALCAÍN MARTÍNEZ, Esperanza: "Análisis jurisprudencial de la responsabilidad civil en el ámbito de la actividad deportiva", *Revista jurídica del deporte*, Aranzadi, núm. 12, 2004, páginas 169-188.
- ALGABA ROS, Silvia: "La responsabilidad solidaria de organizadores y detallista frente al consumidor en el contrato de viaje combinado: Comentario de la STS de 20 de enero de 2010 (RJ 2010,158)", *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 25, 2010, páginas 237-248.
- BECH SERRAT, Josep María: "Responsabilidad contractual del organizador de viajes combinados por accidentes en excursiones facultativas", *La Ley: Revista jurídica española de doctrina jurisprudencia y bibliografía*, núm. 2, 2002, páginas 1841-1848.
- BOTANA GARCÍA, Gema Alejandra: "Contratos con consumidores y usuarios: Viajes combinados", *Diario La Ley*, núm. 6990-6991, 2008, [www.laley.net](http://www.laley.net).  
+ "Viajes combinados", *Actualidad Civil*, núm. 3, Sección Estudios de Jurisprudencia, Tomo 1, Editorial LA LEY 3670/2010, [www.laley.net](http://www.laley.net).
- DE LA TORRE OLID, Francisco: "Derecho y deporte. Particular referencia a los accidentes deportivos. Responsabilidad civil y riesgos en el deporte", *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes de azar, entretenimiento y música*, núm. 24, 2008, páginas 17-31.
- DEL TORO VEGA, Gabriel / GONZÁLEZ ROMERO, Francisco / HERNÁNDEZ MORENO, José: "Catalogación de las praxis motrices de turismo activo en entornos naturales", *Cuadernos de Psicología del Deporte*, Vol. 10, núm. Supletorio, 2010, páginas 93-98.
- DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Pilar: "Información y asunción del riesgo en la práctica del esquí", *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 19, 2009, páginas 2779-2794.
- GARCÍA LÓPEZ, Petronila: "Daños causados en viajes turísticos", *Práctica Derecho de daños, Revista especializada en responsabilidad civil y seguros*, núm. 83, junio 2010, páginas 41-64.
- GARCÍA SAURA, Pilar Juana: "Turismo activo y medio ambiente: una implicación necesaria. Aspectos jurídicos", *Cuadernos turísticos*, núm. 26, 2010, páginas 153-176.
- GÁZQUEZ SERRANO, Laura / MÉNDEZ SERRANO, María del Mar: "Responsabilidad civil en los deportes de riesgo", *Revista española de Derecho deportivo*, núm. 13, 2001, páginas 5-18.
- GRANERO GALLEGU, Antonio: "Las actividades físico-deportivas en la naturaleza y la industria turística", *Revista internacional de medicina y ciencias de la actividad física y el deporte*, Vol. 7, núm. 26, 2007.

- GONZÁLEZ FERNANDEZ, María Belén: “¿Nueva regulación de los viajes combinados?”, *Revista de Derecho mercantil*, núm. 269, 2008, Páginas: 1063-1075.
  - GONZÁLEZ CABRERA, Inmaculada: “La liberalización de los servicios en el mercado interior y su incidencia en la actividad de las agencias de viajes”, *Revista Aranzadi Civil*, núm. 4, 2010, páginas 49-82.
  - HIDALGO GARCÍA, Santiago: “La responsabilidad civil derivada de los accidentes de esquí”, *Practica Derecho de daños: Revista especializada en responsabilidad civil y seguros*, núm. 98, Año 9, Noviembre de 2001, páginas 6-17.
  - LACOSTA ARAGÜÉS, Antonio: “La configuración de nuevos destinos turísticos de interior en España a partir del turismo activo y de aventura (1992-2001)”, *Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada*, núm. 34, 2004, páginas 11-32.
  - LUQUE GIL, Ana María: “La evolución del medio para la práctica de actividades deportivas en la naturaleza”, *Cuaderno de Turismo*, núm. 13, 2003, páginas 131-150.
  - MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús: “La causa del contrato”, *Aranzadi Civil Revista Doctrinal*, núm. 3, 2007, páginas 2649-2672.
  - MARTÍN OSANTE, José Manuel: “Contrato de viaje combinado: resolución y responsabilidades”, *Revistas de Derecho mercantil*, núm. 273, 2009, páginas 1041-1067.
- + “Información, contenido y modificación de los contratos de servicios turísticos”, *Diario la Ley*, núm. 7315, Sección Doctrina, 7 de enero 2010, Año XXXI.
- MARTÍN ROJO, Inmaculada / PELÁEZ VERDET, Antonio: “Nuevos productos turísticos: el turismo activo”, *Diagnostico empresarial en la provincia de Málaga, Estudios Turísticos*, 2006, números. 169-170, páginas 145-164.
  - MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual: “Comentario de la Sentencia de 11 de octubre de 2005 y 2 de febrero de 2006”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 73, 2007, páginas 57-88.
  - MALDONADO RAMOS, Jaime: “Responsabilidad por la práctica de deportes de riesgo”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes de azar, entretenimiento y música*, núm. 12, 2004, páginas 227-246.
- + “Jurisprudencia reciente de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre responsabilidad civil por causa de la práctica deportiva”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, núm. 26, 2009, páginas 77-94.



- MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia: “El consumidor en la contratación electrónica de servicios turísticos”, *Revista de Derecho Mercantil*, Número 282, 2011, páginas 209-242.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, María del Pilar: “Orientaciones jurisprudenciales sobre la responsabilidad de organizadores y detallistas en los viajes combinados”, *Práctica de tribunales, Revista especializada en Derecho procesal civil y mercantil*, núm. 63, septiembre 2009, páginas 32-41.
- ORDUÑA MORENO, Francisco Javier: “Derecho de la contratación y condiciones generales (I)”, *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 4, 2000, páginas 21-58.
- ORTI VALLEJO, Antonio: “La jurisprudencia sobre responsabilidad civil deportiva”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes de azar, entretenimiento y música*, núm. 4, 2000, páginas 37-48.
- ORTUÑO BAEZA, María Teresa, “La regulación de los viajes combinados por el TRLGDCU: Novedades más significativas en la protección del consumidor turístico”, *Práctica de tribunales, Revista especializada en Derecho procesal civil y mercantil*, núm. 63, septiembre 2009, páginas 8-23.
- PANIZA-FULLANA, Antonia: “El derecho del turismo en la unión europea: Regulación actual, novedades normativas y propuestas de futuro”, *Estudios Turísticos, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio*, núm. 184, 2010, páginas 99-135.  
+ “La protección del adquirente a distancia de servicios turísticos”, *Revista de Derecho Privado*, Año nº 96, Número 3-4, 2012, páginas 7-24.
- PÉREZ MONGUIÓ, José María: “El régimen del turismo activo en España desde la perspectiva andaluza”, *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núm. 33, 2008, páginas 281-348.
- PEÑALVER TORRES, María Teresa: “El turismo activo como alternativa y complemento al modelo turístico en la región de Murcia”, *Cuaderno de Turismo*, núm. 14, 2004, páginas 179-215.
- PIÑEIRO SALGUERO, José: “Accidentes deportivos: lesiones consentidas”, *Indret Revista para el análisis del Derecho*, Barcelona, 2005, [www.indret.com](http://www.indret.com).
- QUESADA SÁNCHEZ, Antonio José: “Daños sufridos durante sesiones de aprendizaje deportivo: recorrido jurisprudencial”, *Diario La Ley*, Número 7417, 2010, [www.laley.net](http://www.laley.net).
- REBOLLO GONZÁLEZ, Juan Carlos: “Responsabilidad civil en la práctica deportiva de riesgo: análisis de la respuesta legal y jurisprudencial”, *Revista española de Derecho deportivo*, núm. 13, Enero/Junio 2001, páginas 19-39.



- RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo: “Viajes combinados: Solidaridad de los organizadores tras el Texto Refundido de la LGDCU”, *Repertorio de jurisprudencia Aranzadi*, núm. 9, 2008, páginas 17-22.
- ROYO GRACIA, Juan Félix: “Turismo deportivo en la provincia de Teruel”, *Revista de humanidades*, núm.13, 2007, páginas 229-255.
- SANTOS ARREBOLA, José Luis: “Las nuevas tendencias de los consumidores-turistas”, *Estudios sobre consumo*, núm. 23, 1992, páginas 33-44.
- SOLERNOU SANZ, Stella: “El régimen de las Agencias de Viajes”, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 248, 2003, páginas 719-751.
- VERDERA SEVER, Rafael: “Una aproximación a los riesgos del deporte”, *Indret, Working Paper*, núm. 116, 2003, [www.indret.com](http://www.indret.com).
- YÁÑEZ VIVERO, Fátima (Coord.): “La contratación electrónica de servicios turísticos tras la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico”, *Instituto de Empresa, Working Paper*, 2003, [www.estig.ipedja.pt/~ac\\_direito/fyañez.pdf](http://www.estig.ipedja.pt/~ac_direito/fyañez.pdf). .



## **JURISPRUDENCIA CONSULTADA.**

### **1. Tribunal constitucional:**

- STC. (Pleno), núm. 1/1982, de 28 de enero (Ref. Ref. Westlaw RTC 1982\1).
- STC. (Pleno), núm. 71/1982, de 30 de noviembre (Ref. Westlaw RTC 1982\71).
- STC. (Pleno), núm. 125/1984, de 20 de diciembre (Ref. Westlaw 1984\125).
- STC. (Pleno), núm. 88/1986, de 1 de julio (Ref. Westlaw RTC 1986\88).
- STC. (Pleno), núm. 227/1988, de 9 de noviembre (Ref. Westlaw RTC 1988\227).
- STC. (Pleno), núm. 75/1989, de 24 de abril (Ref. Westlaw RTC 1989\75).
- STC. (Pleno), núm. 284/1993, de 30 de septiembre (Ref. Westlaw RTC 1993\284).
- STC. (Pleno), núm. 175/1995, de 5 de diciembre (Ref. Westlaw RTC 1995\175).
- STC. (Sala Segunda), núm. 207/1999, de 11 de noviembre (Ref. Westlaw RTC 1999\207).
- STC. (Pleno), núm. 206/2001, de 22 de octubre (Ref. Westlaw RTC2001\126).
- STC. (Pleno), núm. 10/2002, de 17 de enero (Ref. Westlaw RTC 2002\10).
- STC. (Pleno), núm. 157/2004, de 21 de septiembre (Ref. Westlaw RTC 2004\157).
- STC. (Pleno), núm. 341/2005, de 21 de diciembre (Ref. Westlaw RTC 2005\341).

- STC. (Pleno), núm. 209/2007, de 24 de septiembre (Ref. Westlaw RTC 2007\209).

## **2. Tribunal supremo:**

- STS. (Sala de lo Civil), de 23 de marzo de 1988 (Ref. Westlaw RJ 1988\2226).
- STS. (Pleno), núm. 62/1991, de 22 de marzo (Ref. Westlaw RTC 1991\62).
- STS. (Sala de lo Civil), de 22 de octubre de 1992 (Ref. Westlaw RJ 1992\8399).
- STS. (Pleno), núm. 264/1993, de 22 de julio (Ref. Westlaw RTC 1993\264).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 394/1994, de 25 de abril (Ref. Westlaw RJ 1994\3073).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 1/79, de 24 de diciembre (Ref. Westlaw RJ 1994\9779).
- STS. (Sala de lo Civil), de 20 de marzo 1996 (Ref. Westlaw RJ 1996\2244).
- STS. (Sala de lo Civil), núm. 867/1996, de 21 de octubre (Ref. Westlaw RJ 1996\7235).
- STS. (Sala de lo Civil), núm. 748/2001, de 23 de julio (Ref. Westlaw RJ 2001\8411).
- STS. (Sala de lo Civil), núm. 931/2001, de 17 de octubre (Ref. Westlaw RJ 2001\8639).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 364/2004, de 6 de mayo (Ref. Westlaw RJ 2004\2099).
- STS. (Sala de civil, Sección 1ª), núm. 748/2005, de 11 de octubre (Ref. Westlaw RJ 2005\8769).

- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 19/2005, de 19 de enero (Ref. Westlaw RJ 2005\518).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 796/2005, de 24 de octubre (Ref. Westlaw RJ 2005\8549).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 830/2005, de 28 de octubre (Ref. Westlaw RJ 2005\8558).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 298/2006, de 21 de marzo (Ref. Westlaw RJ 2006\1593).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 660/2006, de 27 de junio (Ref. Westlaw RJ 2006\5400).
- STS. (Sala de lo Civil), núm. 145/2007, de 15 de febrero de 2007 (Ref. Westlaw RJ 2007\1452).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 870/2009, de 20 de enero (Ref. Westlaw RJ 2010\158).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 426/2009, de 19 de junio (Ref. Westlaw RJ 2009\449).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 719/2009, de 16 de noviembre (Ref. Westlaw RJ 2010\660).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 857/2009, de 22 de diciembre (Ref. Westlaw RJ 2010\866).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 64/2011, de 9 de febrero (Ref. Westlaw RJ 2011\1811).
- STS. (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 190/2011, de 17 de marzo (Ref. Westlaw RJ 2011\2881).

### **3. Audiencias provinciales:**

- St. Aud. Prov. Madrid, de 8 de febrero de 1993 (Ref. Westlaw AC 1993\125).
- St. Aud. Prov. Vizcaya (Sección 4ª), núm. 217/1998, de 6 de abril (Ref. Westlaw AC 1998\5335).
- St. Aud. Prov. Castellón (Sección 1ª), núm. 425/1998, de 19 de septiembre (Ref. Westlaw AC 1998\1658).
- St. Aud. Prov. Tarragona (Sección 3ª), núm. 515/1998, de 23 de octubre (Ref. Westlaw AC 1998\2255).
- St. Aud. Pro. Asturias (Sección 5ª), núm. 640/1998, de 11 de diciembre (Ref. Westlaw AC 1998\2365).
- St. Aud. Prov. Granada (Sección 3ª), núm. 203/1999, de 23 de marzo (Ref. Westlaw AC 1999\739).
- St. Aud. Prov. Alicante (Sección 5ª), núm. 785/1999, de 4 de mayo (Ref. Westlaw AC 1999\5097).
- St. Aud. Prov. Asturias (Sección 1ª), núm. 389/1999, de 21 de junio (Ref. Westlaw AC 1999\1426).
- St. Aud. Prov. Navarra (Sección 2ª), núm. 196/1999, de 29 de julio (Ref. Westlaw 1999\6527).
- St. Aud. Prov. Cantabria (Sección 3ª), núm. 98/2000, de 9 de marzo (Ref. Westlaw AC 2000\4088).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 17ª), de 14 de marzo, (Ref. Westlaw AC 2000\1483).
- St. Aud. Prov. Burgos (Sección 3ª), núm. 180/2000, de 20 de marzo (Ref. Westlaw JUR 2000\127196).

- St. Aud. Prov. Jaén (Sección 2ª), núm. 217/2000, de 25 de abril (Ref. Westlaw JUR 2000/192418).
- St. Aud. Prov. Valencia (Sección 6ª), núm. 477/2000, de 19 de mayo (Ref. Westlaw AC 2000\4309).
- St. Aud. Prov. Vizcaya (Sección 3ª), núm. 402/2001, de 25 de abril (Ref. Westlaw JUR 2001\211098).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 1ª), de 1 de marzo de 2001 (Ref. Westlaw JUR 2001\156408).
- St. Aud. Prov. Sevilla (Sección 8ª), núm. 523/2001, de 5 de octubre (Ref. Westlaw JUR 2002\92087).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 16ª), de 29 de mayo (Ref. Westlaw AC 2002\1244).
- St. Aud. Prov. Burgos (Sección 3ª), núm. 540/2002, de 16 de octubre (Ref. Westlaw JUR 2003\17739).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 4ª), de 28 de febrero, (Ref. Westlaw AC 2003\959).
- St. Aud. Prov. Alicante (Sección 5ª), núm. 464/2003, de 18 de septiembre (Ref. Westlaw JUR2003/263907).
- St. Aud. Prov. Islas Baleares (Sección 3ª), núm. 483/2003, de 25 de septiembre (Ref. Westlaw JUR 2004/74599).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 14ª), de 5 de febrero, (Ref. Westlaw JUR 2004\97946).
- St. Aud. Prov. Málaga (Sección 4ª), núm. 686/2004, de 20 de septiembre (Ref. Westlaw JUR 2004\292298).

- St. Aud. Prov. Badajoz (Sección 5ª), núm. 280/2004, de 25 de octubre (Ref. Westlaw AC 2004\1858).
- St. Aud. Prov. Castellón (Sección 1ª), núm. 366/2004, de 4 de noviembre (Ref. Westlaw JUR 2005/2262).
- St. Aud. Prov. Granada (Sección 3ª), núm. 207/2005, de 16 de marzo (Ref. Westlaw JUR 2005\138862).
- St. Aud. Prov. Zaragoza (Sección 5ª), núm. 183/2005, de 1 de abril (Ref. Westlaw AC2005\665).
- St. Aud. Prov. Málaga (Sección 4ª), núm. 463/2005, de 30 de mayo (Ref. Westlaw JUR 2005\1288).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 14ª), núm. 388/2005, de 20 de junio (Ref. Westlaw JUR 2005\180809).
- St. Aud. Prov. Álava (Sección 1ª), núm. 177/2005, de 16 de septiembre (Ref. Westlaw JUR 2006\3594).
- St. Aud. Prov. Lleida (Sección 2ª), núm. 413/2005, de 8 de noviembre (Ref. Westlaw JUR 2006\83098).
- St. Aud. Prov. Navarra (Sección 3ª), núm. 124/2006, de 27 de julio (Ref. Westlaw JUR 2007\91621).
- St. Aud. Prov. Cáceres (Sección 1ª), núm. 384/2006, de 2 de octubre (Ref. Westlaw JUR 2006\257252).
- St. Aud. Prov. Álava (Sección 2ª), núm. 181/2006, de 20 de octubre (Ref. Westlaw JUR 2007\95174).
- St. Aud. Prov. Madrid (Sección 11ª), núm. 420/2006, de 24 de noviembre (Ref. Westlaw AC 2007\305).



- St. Aud. Prov. Lleida (Sección 2ª), núm. 55/2007, de 9 de febrero (Ref. Westlaw JUR 2007\1517).
- St. Aud. Prov. Salamanca (Sección 1ª), núm. 118/2007, de 21 de marzo (Ref. Westlaw AC 2007\1556).
- St. Aud. Prov. La Rioja (Sección 1ª), núm. 179/2007, de 12 de junio (Ref. Westlaw JUR 2007\301208).
- St. Aud. Prov. Valladolid (Sección 3ª), núm. 221/2007, de 11 de julio (Ref. Westlaw 2008\43198).
- St. Aud. Prov. Vizcaya (Sección 3ª), núm. 434/2007, de 23 de julio (Ref. Westlaw AC 2007\2374).
- St. Aud. Prov. Vizcaya (Sección 5ª), núm. 567/2007, de 22 de noviembre (Ref. Westlaw JUR 2008\29898).
- St. Aud. Prov. Valencia (Sección 9ª), núm. 294/2007, de 13 de noviembre (Ref. Westlaw AC 2008\1176).
- St. Aud. Prov. Santa Cruz de Tenerife, núm. 138/2008, de 24 de marzo (Ref. Westlaw JUR 2008\163636).
- St. Aud. Prov. Madrid (Sección 28ª), núm. 195/2008, de 17 de julio (Ref. Westlaw JUR 2008\321002).
- St. Aud. Prov. Huesca (Sección 1ª), núm. 175/2008, de 28 de julio (Ref. Westlaw JUR 2008\353257).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 14ª), núm. 534/2008, de 20 de octubre (Ref. Westlaw AC 2009\89).
- St. Aud. Prov. La Rioja (Sección 1ª), núm. 187/2009, de 4 de junio (Ref. Westlaw 2009\28993).

- St. Aud. Prov. León (Sección 1ª), núm. 351/2009, de 17 de junio (Ref. Westlaw AC2009\1657).
- St. Aud. Prov. Isla Baleares (Sección 5ª), núm. 377/2009, de 9 de noviembre (Ref. Westlaw JUR 2010\8687).
- St. Aud. Prov. Asturias (Sección 1ª), núm. 296/2009, de 7 de septiembre (Ref. Westlaw JUR 2009\407095).
- St. Aud. Prov. Barcelona (Sección 16ª), núm. 469/2009, de 30 de septiembre (Ref. Westlaw JUR 2009\460184).
- St. Aud. Prov. Valencia (Sección 9ª), núm. 102/2010, de 30 de marzo (Ref. Westlaw AC 2010\995).
- St. Aud. Prov. Palencia (Sección 1ª), núm. 163/2010, de 17 de junio (Ref. Westlaw AC 2010\1069).
- St. Aud. Prov. Granada (Sección 5ª), núm. 401/2010, de 8 de octubre (Ref. Westlaw JUR 2011\71708).
- St. Aud. Prov. La Rioja (Sección 1ª), núm. 282/2010, de 3 de diciembre (Ref. Westlaw AC 2011\8).

